

COTOPAXI: ESPACIO SOCIAL Y CAMBIO POLÍTICO

Eloy Alfaro, Ana María Larrea Maldonado
Galo Ramón Valarezo, María Fernanda Vallejo,
Marjorie Viera



© CAMAREN - IEE, QUITO · ECUADOR, 2007

Título: Cotopaxi: espacio social y cambio político

Autores: Eloy Alfaro, Ana María Larrea Maldonado, Galo Ramón Valarezo, María Fernanda Vallejo, Marjorie Viera

Eje temático: Desarrollo local con énfasis en la gestión integrada de los recursos naturales

Institución coordinadora: Instituto de Estudios Ecuatorianos -IEE-

Coordinación de eje: Antonio Gaybor

Edición: Angel Bonilla, Pablo Ospina

Diseño Gráfico: Verónica Avila / Activa Diseño Editorial

Fotos: Dennis García (retiro portada). Archivo IEE.

Impresión: Activa Diseño Editorial

Auspiciantes: COSUDE, Embajada Real de los Países Bajos

Organismo internacional asesor: INTERCOOPERATION

CAMAREN: administracion@camaren.org / sicam@camaren.org

Ave. Amazonas y Eloy Alfaro Edif. MAG 7mo piso, Quito, Ecuador. telf (593-2) 2563 419 / 2563 485

IEE: iee@iee.org.ec

San Ignacio 134 y 6 de Diciembre

INTRODUCCIÓN

UNIDAD 1

COTOPAXI AL DEBATE: 1740-2001

GALO RAMÓN

9

INTRODUCCIÓN

10

CAPÍTULO 1

EL CORREGIMIENTO DE LA TACUNGA ENTRE 1740-1910

12

Ubicación y ambiente

12

Administración y pueblos del Corregimiento

15

De la crisis textil a los complejos "obraje-hacienda"

16

Los señoríos y parcialidades indígenas

20

El sistema hacendario en el siglo XIX

22

CAPÍTULO 2

LA MODERNIZACIÓN AGRARIA: 1910-1990

27

La diferenciación campesina

32

CAPÍTULO 3

EL COMPORTAMIENTO POLÍTICO INDÍGENA

36

Indios sueltos e indios de hacienda y poder local

37

La organización de los indios de hacienda, la comuna y las organizaciones actuales

38

El avance sobre los gobiernos seccionales

41

CONCLUSIONES

42

BIBLIOGRAFÍA

44

COTOPAXI: BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 1740-2001

47

ANEXO: PAUTAS PARA ESCRIBIR MONOGRAFÍAS LOCALES

51

UNIDAD 2

ESPACIO Y PODER EN TRES ORGANIZACIONES DE LOS ANDES DE COTOPAXI

59

MARÍA FERNANDA VALLEJO

INTRODUCCIÓN

60

CAPÍTULO 1

ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL ESPACIO EN EL COTOPAXI ANDINO (O LA MISMA HISTORIA MIRADA DESDE COTOPAXI)

64

CAPÍTULO 2

ESTRUCTURAS Y ARTICULACIONES DE PODER FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: UNA MIRADA DE LA HACIENDA A LOS PODERES LOCALES (O LA HISTORIA DEL ESPACIO DESDE LA RESISTENCIA)

69

El continuum obraje/hacienda como espacio para la persistencia de la indianidad

69

La "campesinidad" de la resistencia

70

La construcción del sujeto político a partir de la emergencia y acumulación de los sujetos colectivos

72

CAPÍTULO 3	
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESPACIO LOCAL A PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA	75
“Lo andino, la hacienda y el desarrollo local” en la construcción de imaginarios y espacios	76
BIBLIOGRAFÍA	
	89
UNIDAD 3	
PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y LINEAMIENTOS DE GESTIÓN EN EL PÁRAMO DEL CANTÓN SAQUISILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI	93
MARJORIE VIERA	
CAPÍTULO 1	
EL PÁRAMO	94
Caracterización general del páramo	94
Consideraciones generales del páramo	94
Recursos del páramo	95
Beneficios del páramo	95
Importancia ecológica del páramo	96
CAPÍTULO 2	
PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO CON ÉNFASIS EN EL ESPACIO - PÁRAMO	97
Antecedentes	97
Las haciendas serranas a comienzos de la década de 1960	98
Ubicación del área de influencia dentro del contexto local	101
CAPÍTULO 3	
EL PÁRAMO EN LA ÉPOCA DE HACIENDA	103
Ocupación del páramo por poblaciones libres	104
Ocupación productiva del páramo en la época de hacienda	105
CAPÍTULO 4	
EL PÁRAMO A PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA	106
CAPÍTULO 5	
EL PÁRAMO EN LA COMUNIDAD	109
Control del territorio en la comunidad	109
Crisis de fertilidad. Parcelación de tierra	109
Nueva noción del hábitat	112
Recuperación del ejercicio del poder	113
CAPÍTULO 6	
EL PÁRAMO COMO PARTE DE UNA GESTIÓN LOCAL	115
CAPÍTULO 7	
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL PÁRAMO	116
Uso actual del páramo	116
Estrategias de manejo sostenible del páramo	118



UNIDAD 4	
LOS PÁRAMOS OCCIDENTALES DE COTOPAXI: DINÁMICAS SOCIALES, HISTORIA AGRARIA Y CONSERVACIÓN	123
ELOY ALFARO	
INTRODUCCIÓN	
Definiciones previas	124
Corolario	126
CAPÍTULO 1	
CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE PRODUCTIVO Y DEL ENTORNO NATURAL DE LA ZONA DE ESTUDIO	129
Los páramos occidentales de Cotopaxi	129
CAPÍTULO 2	
DETERMINACIONES SOCIALES EN EL PAISAJE DE LAS ZONAS DE ALTURA DE COTOPAXI	135
Elementos para una discusión: etapas de ocupación de las zonas de altura de Cotopaxi	135
CAPÍTULO 3	
EL PÁRAMO UN ESPACIO SOCIO-AMBIENTAL DE VIDA	151
Páramos: Mitos, Biodiversidad e Historia	153
BIBLIOGRAFÍA	
	163
UNIDAD 5	
LOS DESAFÍOS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN COTOPAXI	167
ANA MARÍA LARREA	
INTRODUCCIÓN	
	168
CAPÍTULO 1	
DEMOCRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL	171
Las democracias latinoamericanas	174
¿Otra democracia ...es posible?	175
Ciudadanía y participación	179
Democracia y ámbitos locales	181
CAPÍTULO 2	
LA PROVINCIA DE COTOPAXI	183
CAPÍTULO 3	
LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN EN COTOPAXI	187
La construcción de un nuevo gobierno local	188
La Democratización	189
Gestión para el desarrollo local	190
CAPÍTULO 4	
LOS DESAFÍOS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI	
LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO LOCAL	192
El desafío de la escala	192
El desafío de la participación	198
El desafío de la institucionalidad	203
El desafío de la eficacia	206
CONCLUSIONES	
	209
BIBLIOGRAFÍA	
	212

Presentación

Cotopaxi: espacio social y cambio político

¿Quién diría que desde los cerros helados del páramo occidental de la provincia de Cotopaxi, desde las laderas húmedas y escarpadas de los Illiniza, desde aquellos rincones áridos, empobrecidos y escondidos donde se ocultan los damnificados del proceso de modernización, nacerían fuerzas sociales renovadoras de la política y la sociedad? ¿Quién hubiera apostado hace treinta años, cuando nacía el Movimiento Indígena de Cotopaxi en reuniones convocadas en casas destartadas de Pujilí, que se convertiría en el cambio de siglo en el movimiento social más organizado y poderoso de la provincia?

Este libro aborda esa historia notable sin hacerse ilusiones falsas, sin idealizaciones ingenuas, sin hacer concesiones a los compromisos del momento. Es un libro que recorre el proceso histórico y político de los pueblos indígenas con los ojos abiertos. Pero tampoco está dispuesto a minimizar su significado ni a descalificarlo como un error o como un fracaso. Es un libro políticamente comprometido, moralmente alineado y críticamente organizado.

Para evaluar mejor el alcance, los límites y los obstáculos que se interponen entre los propósitos que se plantearon los actores sociales indígenas y su cumplimiento en la práctica de la política; es decir, entre el proyecto político tal como se lo imagina, y el proyecto político tal como se perfila en medio de los cambiantes balances de fuerzas sociales; hay que salir de las oficinas, del estudio de las normativas y los reglamentos para volver la mirada a los cambios sociales que experimenta el mundo rural. No es la única perspectiva posible ni el único camino necesario. Pero es una vía privilegiada para entender las promesas y los desvaríos de la oportunidad que el movimiento indígena dejó abierta para construir una sociedad mejor.

Este libro puede entenderse como una apuesta intelectual por un análisis que liga indisolublemente lo político a lo social. Las dinámicas políticas tienen su autonomía, pero no son independientes. Hace falta mostrar los cordones umbilicales que las unen a los procesos sociales, culturales y económicos que viven los actores y que marcan su forma de ver el mundo, de entender los desafíos que le plantea su época, de situarse en las disyuntivas de cada coyuntura y de pesar las fuerzas y presiones que intervienen en cada decisión. El análisis se concentra sobre todo en el mundo rural de las comunidades andinas del occidente de la provincia. Examina la historia agraria, identitaria y espacial de largo plazo; los universos simbólicos asociados a los páramos; las variadas formas del uso social de los entornos; las transformaciones ocurridas en la organización comunitaria y, finalmente, las apuestas políticas en el gobierno provincial comandado desde el año 2000 por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

La mayoría de textos fue escrita con ocasión de un proceso de formación local de dirigentes sociales y técnicos llevado a cabo en el año 2005; otros son producto de una colaboración especial de los autores. Fueron el resultado de una reflexión colectiva y de un esfuerzo por sistematizar aprendizajes, analizar críticamente la propia vivencia y confirmar un compromiso político y personal. Los presentamos con modestia pero también con orgullo.

Pablo Ospina Peralta
Director del Instituto de Estudios Ecuatorianos

UNIDAD UNO

Cotopaxi al debate: 1740-2001

Galo Ramón Valarezo*

*Documento elaborado originalmente para el Programa de Conservación de la Biodiversidad, de los Páramos y otros ecosistemas frágiles del Ecuador - Cotopaxi, efectuado en convenio entre IEE y ECOCIENCIA.
Noviembre de 2004

INTRODUCCIÓN

La presente es una reflexión sobre la historia de Cotopaxi, que busca dialogar libremente con el pasado desde preguntas que nos inquietan en la actualidad, para intentar una comprensión más profunda de los problemas. La táctica histórica puede mostrarnos el origen, la continuidad o el cambio de varios procesos que en la zona se discuten desde varias disciplinas científicas.

Un taller realizado con el equipo del IEE¹ que trabaja en la zona, identificó cuatro temas que merecen una indagación histórica:

El primero, es el problema de la gran desertización y erosión que soporta la cordillera occidental en la que se ubican muchas de las actuales comunidades indígenas. El problema es tan grave que ha puesto en serio riesgo la viabilidad y sobrevivencia de las comunidades en ese ecosistema. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Qué razones lo explican? ¿Qué papel juega el reordenamiento producido con la modernización agraria? ¿Qué prácticas lo han acelerado?, en fin, ¿cual ha sido la actitud de las comunidades indígenas frente al tema? Junto al tema de la desertización aparece el tema del agua: ¿Cuándo comenzaron los problemas de apropiación y disputa del agua? ¿Cómo este tema es enfrentado en los procesos de reforma agraria? ¿Cuáles son las experiencias recientes de organización para el control, mejoramiento y la distribución?

Un segundo problema tiene relación con la identidad local. Si partimos de la idea de que lo local tiene como espacio de referencia un territorio más o menos cohesionado por factores económicos, sociales y culturales; que generalmente tiene un sistema de dominación local, con una clase dominante identificable; que sus habitantes tienen sentido de pertenencia e identidad con ese territorio; que tienen una economía local y elementos culturales que los distinguen de otros espacios, entonces nos preguntamos: ¿cuál es la clase dominante de este territorio, si al parecer es una clase deslocalizada que reside en Quito? ¿Tiene el espacio algún grado de cohesión social e identidad, si son visibles profundas grietas étnicas y diferencias entre las pequeñas localidades y entre los clanes indígenas? ¿La propuesta de la reconstrucción de la “identidad panzalea” tiene algún afincamiento real o es una construcción reciente que no tiene capacidad de arrastre del mundo indígena, menos de los no indígenas? ¿Cómo romper ese mundo dualista y construir la interculturalidad?

El tercer problema tiene relación con la potencialidad de la propuesta indígena para comandar el desarrollo local. La actual propuesta indígena se basa en una convocatoria étnica dualista que enfatiza la unidad indígena frente a lo mestizo; se articula sobre la estructura corporativa de las comunidades que controlan desde esa estructura al brazo político (Pachakutik) y procesan de esa forma la alianza con otras fuerzas sociales; y se maneja en medio de una negociación y conflicto de los clanes familiares que actúan como redes locales. ¿Qué potencialidad y alcance tiene el procesamiento

1 El taller realizado el 5 de octubre del 2004, estuvo integrado por Ángel Bonilla, María Belén Cevallos, Ana María Larrea, Antonio Gaybor y Galo Ramón

corporativo de la sociedad indígena y de la mestiza? ¿Cómo se trabajará la interculturalidad en medio de un discurso dualista? ¿Es posible y deseable pasar a nuevas formas de democracia basadas en los individuos y no en las redes únicamente?

El cuarto problema tiene relación con la viabilidad de ese espacio económico. Al momento, las propuestas que se desarrollan desde los gobiernos locales buscan administrar la renta estatal (el 15% asignado), pero no tienen capacidad para levantar más recursos locales, pero sobre todo para provocar cambios estructurales, sobre todo en la tenencia de las tierras planas, del riego, las finanzas, el gran comercio, la industria o la minería, entre otros. Por otro lado, Cotopaxi deja escapar demasiados excedentes hacia otros espacios, especialmente a Quito. Entonces cabe preguntarse: ¿Tiene viabilidad económica el espacio de Cotopaxi o es un proyecto por construir? ¿Es posible ir más allá de la administración de la pobreza, es decir de las rentas estatales que tienen los gobiernos locales, para intentar reformas estructurales que afecten a la actual inequidad económica? ¿Es posible juntar la lucha por una equidad territorial, con la equidad con los pobres, las mujeres, las generaciones de jóvenes y niños, con los indios y buscar al mismo tiempo un desarrollo sostenible en un espacio tan colapsado, que de otra parte tiene tal fuerza organizada indígena, como en ninguna otra provincia del país?

Sin duda alguna, las preguntas realizadas por ese equipo de reflexión y otras que seguirán surgiendo, exceden de largo las posibilidades de estas páginas. Muchas de ellas tienen una génesis más bien coyuntural, en la que otros estudios pueden aportar con mayor propiedad. Sin embargo, este diálogo con el pasado intentará discutir varias de las preguntas, sobre todo aquellas que tuvieron su origen entre 1740 y 1970, espacio temporal privilegiado por esta reflexión.

En esos 230 años, Cotopaxi atravesó por dos períodos sobresalientes: (i) la crisis de la producción textil iniciada en 1740, que se profundizó paulatinamente y sin desaparecer del todo, dio paso al sistema hacendario que se mantuvo boyante hasta 1910; y (ii) una etapa de modernización agraria que arrancó con la instalación del ferrocarril en 1910, para ir ganando terreno de manera tortuosa mientras se mantenía el sistema hacendario, hasta lograr una recomposición con la producción lechera en la década del 70. Los ajustes estructurales del 90 y los procesos de desarrollo local comandados por el movimiento indígena, matizarán este proceso, que aún no presenta rupturas agudas. La situación actual es como la de un huevo empollado a punto de reventar: la administración indígena del territorio puede abrir un cambio sustantivo, al que estas páginas buscan apuntalar.



CAPÍTULO I

EL CORREGIMIENTO DE LA TACUNGA ENTRE 1740-1910

Ubicación y ambiente

En el siglo XVIII, lo que ahora es la provincia de Cotopaxi, se conocía como el Corregimiento de la Tacunga. La demarcación territorial que ahora conocemos data de 1770, cuando se crea el Corregimiento de Ambato como parte de las reformas territoriales que los Borbones impulsaron para hacer más eficiente su administración. Con la creación de Ambato, el Corregimiento de Latacunga limitaba, para utilizar una demarcación de la época, por el norte con Quito en el nudo de Tiupullo; al sur con el Corregimiento de Ambato, en el lugar llamado puca-rumi; por el oriente con el de Quijos; y por el occidente con los llamados Colorados (Cicala, 1771:323).

Desde el punto de vista ecológico está situado en una típica hoya interandina, que según un agudo observador del siglo XVIII, “es un territorio que comprende y abraza las dos famosísimas y altísimas cordilleras... Dichas cordilleras de altísimos montes contienen una extensión increíble de tierra, en sus inmensas faldas y explanadas. Por ello, la extensión del territorio de la Tacunga, desde Oriente a Poniente (occidente) en línea recta y altura también recta, no pasa de sesenta leguas... De igual manera, la extensión de dicho territorio desde el Aquilón (norte) al Austro (sur), no va más de dieciséis leguas y media” (Cicala:323). La zona está situada en una doble transición, cuyas diferencias, después de 1850, se han ido acentuando: (i) en el tránsito entre la

sierra norte húmeda y la sierra central más seca, debido a que, a la altura del paralelo uno de latitud sur, en Latacunga, se debilita la influencia de los dos dominios lluviosos, la cuenca amazónica y la selva del Chocó; y (ii) en una transición transversal entre la cordillera central alta, húmeda y nubosa, y la cordillera occidental menos húmeda, también alta, pero con menor nubosidad, que al bajar a su flanco occidental, otra vez se vuelve muy lluviosa. Esta doble transición fue captada por los observadores de la época, como el padre Mario Cicala, un jesuita italiano que caminó la zona de norte a sur, que notó adicionalmente un cambio del tipo de suelos, el impacto de las erupciones del Cotopaxi, los cambios de la topografía y el poderoso influjo del viento, que son variables específicas de ese paisaje:

A la altura de Tiupullo, Cicala destaca que al caminar por el camino real pudo distinguir “*bosquecillos y matorrales espesísimos... se camina (desde Machachi) como si se bordearan aquellas anchísimas faldas, muchísimas en número, una pegada a la otra, que corren por un pésimo y fragoso paso llamado El Excomulgado hasta encontrarse con la bajada, de poco menos de tres leguas y media. Cuanto más se adentra el viajero por aquellas faldas tanto más va sintiendo la rigidez del frío y la molestia de los fuertes vientos, pues poco a poco va acercándose y al mismo tiempo descubriendo el gran monte nevado Cotopaxi, que se encuentra situado de tal manera que domina todas aquellas comarcas*

y faldas... Una vez que se llega al borde donde empieza la larga bajada de cerca de dos leguas, de pronto se presenta a la vista un ancho y dilatado valle de ocho leguas de longitud y más de diez, en algunos sitios, de anchura, muy ameno y delicioso. Por todas partes vense lugares y comarcas esparcidas acá y allá entre verdes florestas, algunas plantadas en las orillas de los ríos, que se ven serpentear por aquellas llanuras, con especial deleite de la vista”.

Luego describe su paso por el centro del valle en el que ve “*innumerables huertos de manzanas, de amenos jardines y deliciosas haciendas*”, hasta llegar a la población de San Felipe (hoy Salcedo) “*muy fértil y bien cultivada, con hermosas fincas, huertas y jardines. Se dan abundantes cosechas de trigo, cebada, maíz y habichuelas de toda clase*”. Al pasar el río de San Felipe, comienza a notar la transición. Destaca que “*desde la citada comarca sigue una cadena de pendientes faldas estériles, formadas por varias colinas altas, que corren a lo largo de dos leguas y media. Al pie o base de estas pendientes y colinas se extiende una gran llanura de la misma longitud que las colinas, en cambio su anchura es diversa: en unas partes es más de una legua; en otras partes menos, en otras es de media milla. Toda la llanura es arenosa, pero también hay diversidad de arenas: en algunos sitios la arena es gruesa, en otros menuda, en unos pocos es arena fina y en muchos lugares es pedregosa, a causa de las grandes correntadas del río San Felipe en todas la erupciones del monte Cotopaxi, las que siempre han inundado casi la totalidad de aquella llanura, por lo menos en la anchura de una buena milla: se han llevado toda la tierra buena y fecunda dejando solamente la arena y las piedras...*” (Cicala, 1771:332). Al llegar a San Miguel señala que “*esta llanura*

es muy seca por carecer totalmente de agua” (Ibid:335)

La transición transversal también es observada por el jesuita caminante. Nos señala que desde Tacunga hacia la cordillera occidental están situados los principales pueblos de Saquisilí, Pujilí, Tanicuchí, la poderosa hacienda de La Ciénega y Cusubamba. En todas ellas destaca la feracidad y fertilidad de esas tierras “*para sembrar toda clase de granos y legumbres*”. Continuando hacia el occidente, a 14 leguas está Sigchos, que “*es tierra cálida y muy húmeda por las abundante lluvias. Abunda en maíz y otros granos, y habichuelas*”. Es una tierra caliente en la que viven los indios “*llamados Colorados*”. Añade que “*el camino hacia aquellas montañas y selvas es sobremanera difícil, fragoso, lleno de todo y peligroso por la gran cantidad de víboras, serpientes y tigres: solo viajan por él algunos mestizos e indios de la Tacunga y de su territorio, tres meses al año: en abril, mayo y junio; a veces en mayo, junio y julio, según que la estación veraniega un año se atrasa, otro se adelanta*” reconociendo la influencia de la corriente del El Niño en la variación de lluvias, señalando que lo hacen “*con el fin de comerciar con los indios medio salvajes e incivilizados, en algodón, pimienta seca, sal, arroz, bananos homeados, achiote y otros productos de clima caliente*” (Ibid: 329). Señala que más abajo se ubica Angamarca que “*siempre está cubierta de niebla espesa, y rara la vez se ve claro el sol*” (Ibid:330).

La influencia del volcán Cotopaxi es tan gravitante, que bien puede definirse a la zona como una región bajo el volcán. Otro jesuita, el padre Juan de Velasco, es particularmente prolijo en mostrarnos la influencia del coloso, sobre todo en el siglo XVIII.

Velasco da cuenta de ocho erupciones entre 1532 y 1768, a las cuales debe sumarse la erupción de 1783, siete de ellas se dieron en el siglo XVIII. De sus efectos destaca tres aspectos centrales: (i) los flujos de agua, cuyas inundaciones en algunas oportunidades llegaron “hasta la plaza mayor de Latacunga, y tuvo rodeado todos los cuarteles de las casas, entrándose a ellas por las puertas, y las rendijas, dejando en las calles grandes pedrones de hielo, arrancados al bajar por el cauce”, que destruyeron haciendas, ganados, molinos y las casas; (ii) la caída de cenizas, arena y piedra grande y menuda a centenares de leguas a la redonda que destruyeron los cultivos, los árboles y las casas “quedando sepultados profundamente los sembrados, y esterilizándose la tierra por mucho tiempo”; y (iii) los terremotos asociados, como aquel de 1768, que llegó a sentirse incluso en Quito (Velasco, To.III:161). A estos estragos del volcán, debe sumarse el gran terremoto de 1797 que asoló a la sierra central². Según Cicala, los terremotos se anunciaban en Tacunga con señales inequívocas: “la primera es el humo del Cotopaxi, esto es cuando lanza humo más de lo ordinario: la segunda es cuando por la noche estando el cielo sereno se oyen truenos profundos como de cañonazos pero muy lejanos: la tercera y más segura es cuando dos o tres días antes se ven crecer los pequeños pozos de agua que tienen en sus casas, con agua turbia y hasta el borde: de ordinario el agua turbia rebosa el borde del pozo, y la experiencia les ha enseñado que entonces el terremoto ha de ser extraordinariamente fuerte y violento (Cicala,

341): Más allá de la veracidad de los signos, es notable la relación entre el volcán y su gente, determinando el imaginario, la vida cotidiana, las decisiones de futuro y los ciclos de crisis de la zona.

La presencia del viento es otra de las grandes variables duras de la ecología de la zona. Cicala señala que “*la ciudad de la Tacunga y todo su territorio se halla excepcionalmente dominado por torbellinos y violentísimos vientos durante todo el año, un tanto menos fuerte en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, a los que les llaman vientos de San Juan. Son tan violentos e impetuosos (pues yo mismo los he experimentado por varias veces), que además de levantar nubarrones de polvo y de arena arrastran de los barrancos y llanuras de arena gruesa como balines y balas de escopetas y los lanzan por los aires a manera de una copiosa granizada, por lo que es necesario viajar con mascarillas*”. Aquí aporta un dato adicional: considera que los peores vientos se dan en la parte alta de la cordillera occidental en el camino a Sigchos. Relata varios episodios de personas que fueron arrebatadas con mula y todo, en esas alturas (Ibid:342). La presencia de grandes nubarrones de tierras muestran una activa erosión eólica, ocasionada por la introducción del barbecho (tiempo de descanso de la tierra), que incorporó la agricultura traída por los españoles desde su lógica de estaciones marcadas, cuestión que dejó desprotegido al suelo, contrariando uno de los principios de la agricultura andina, la de mantener siempre el suelo cubierto.

2 Stevenson que pasó 11 años después por Tacunga señala que “quedamos asombrados al ver los escombros causados por el terremoto de 1797; la iglesia y los conventos habían sido demolidos por completo, y sus restos estaban aún en el mismo estado al que habían sido reducidos por esta terrible convulsión de la tierra” (Stevenson, 1994:402)

Sintetizando, Cicala señala que, con todas estas influencias, el clima “es variado de acuerdo con la situación de las tierras y lugares: así, hay climas de pronto frigidísimos, como Tiupullu, Cotopilaló, Callo..., y otros menos fríos y más suaves como: la Ciénega, San Felipe, Cusubamba, etc. Otros climas son templados y tibios como: Molleambato, Nagsiche, Tiubamba, San Miguel (en el actual Ambato), otros finalmente son calurosos, como: Sigchos y Angamarca”. Muestra los impactos del viento y de las erupciones sobre un territorio que todavía se deja ver fértil, húmedo, pero frágil, sometido a una intensa erosión eólica. Ese equilibrio precario fue dramáticamente roto más adelante, por la modernización agrícola. En el siglo XIX, nuevos terremotos asolaron el área, el de 1802 que fue pequeño, y el de 1877 que golpeó los intentos de modernización. En el siglo XX, la cordillera occidental que albergaba a la mayor cantidad de gente ha sido deforestada y las bases productivas casi han colapsado. La pérdida de humedad es alarmante, hasta los glaciares pierden 50 centímetros por año: la situación actual es realmente dramática.

Administración y pueblos del Corregimiento

De acuerdo al manejo administrativo de la Audiencia de Quito, el territorio de la Tacunga tenía hasta 1770 un Corregidor, un Escribano Público y un Alguacil Mayor. No tenía Cabildo, como Riobamba por ejemplo, es decir, no tuvo durante casi todo el siglo XVIII una élite unificada que creara una “identidad local”, dejando este aspecto a lo que podían hacer las haciendas, los pequeños sistemas de dominación local y los señorios

étnicos. En lo espiritual dependía del Vicario del Obispo de Quito y de tres párrocos: uno de indios, otro de mestizos y otro de españoles, que nos muestran el crudo dualismo étnico, con el que manejaban una realidad fuertemente polarizada. Tenía como su ciudad principal el asiento de blancos de Tacunga en el que vivían hacia 1790 unos cuatro mil blancos. Es una ciudad grande “con las calles simétricamente distribuidas y divididas, anchas, largas y empedradas”. Junto a la ciudad habían dos subvurvios, el de los indígenas “los mítimas de San Sebastián” y el Barrio Caliente (de indios y mestizos) que fue duramente golpeado por las erupciones del Cotopaxi. Juntos sumaban otros cuatro mil habitantes. Esta relación entre ciudad blanca y pueblo indio adjunto, servía en la colonia para que el asiento criollo tuviera la fuerza de trabajo necesaria para mantener las vías y las edificaciones públicas, pero al mismo tiempo, era el espacio de mayor contacto interétnico, entre los indios libres (no sujetos a las haciendas) y el pueblo de criollos.

Los principales pueblos indígenas se ubicaban a lo largo del Camino Real y hacia la zona occidental. Este doble eje, norte-sur y centro-oeste, tenía una profunda raigambre histórica, y obedecía a las condiciones políticas de una parte y ecológicas de otra. Desde el punto de vista político, los incas introdujeron un ordenamiento de los pueblos al rededor del Camino Real que pasaba a Quito, en tanto, la ecología favorecía los asentamientos en las cordillera occidental, un poco más alejados del volcán y en la cordillera menos nubosa y húmeda.

La lógica de ordenamiento territorial incaica, no varió sustantivamente con la hacienda tradicional, hasta los procesos de modernización que se iniciaron

en el siglo XIX. Por esta razón, en el Camino Real o cerca de él, se ubicaban nueve pueblos: Saquisilí, Pujilí y San Miguel con alrededor de cuatro mil habitantes cada uno; Cusubamba y San Felipe con unos dos mil setecientos cada uno; y Toacaso, Alaquez y Tanicuchí, con mil cuatrocientos cada uno. En los flancos occidentales se situaban Isinlibí con unos dos mil setecientos, Chugchilán y Sigchos con unos mil cuatrocientos cada uno; y en la parte más occidental, en la zona caliente y lluviosa, lindando con los “Colorados” se situaba Angamarca con unos mil cuatrocientos. La población del Corregimiento era de 50.280 personas, de los cuales, el 75,63% eran indígenas, el 23,65% blancos, el 0,69% libres de varios colores y el 0,03% esclavos negros³ a finales del siglo XVIII.

La economía del Corregimiento se basaba en la producción textil, la actividad agropecuaria y la producción artesanal, reconociendo cierta especialidad por pueblo. Los obrajes ubicados en el valle central producían telas, paños de lana y algodón, sombreros, tapetes, pellones y mantas. En Pujilí y en el Colegio de la Compañía de Jesús se producían objetos de cerámica (vasos, jarras, cubetas, copas, tazones y jofainas) que gozaban de mucha aceptación en toda la Real Audiencia. También habían fábricas de cal que se vendía en Quito. En Saquisilí hay algunos molinos de semilla de nabo, cuyo aceite sirve para cardar e hilar lanas para tejer paños, bayetas, jergas y telas de lana, que tiene gran demanda y buen precio (tres escudos el jarro). En la zona caliente de occidente comenzaron a montarse trapiches para la producción de aguardiente de caña.

El estado colonial construyó una fábrica de pólvora en Latacunga, y en el Barrio Caliente los mestizos producían camaretas para las numerosas fiestas indígenas. En los diversos pueblos se producía *“trigo, cebada, maíz, papas, quinua, habichuelas y frutales, ganado ovino y bovino”* de cuya leche se fabricaba quesos. Stevenson, otro acucioso viajero anota que *“casi todas las frutas que existen son una variedad de cerezas silvestres llamada capulí, la cual crece en abundancia y constituye el principal alimento de los indios cuando está madura; existen además una pocas manzanas y algunos duraznos. El nítro se encuentra en algunas partes de la provincia y se manufactura una considerable cantidad”* (Stevenson, (1808-28). 1994: 403)

En 1824 se creó el cabildo de Latacunga como un cantón de Pichincha con la Ley de División Territorial de la Gran Colombia. Con la nueva ley de División Territorial de 1851 junto con Ambato conformaron la provincia de León. En 1860 se crea la provincia de Tungurahua, de manera que, en esa época se define el territorio actual, pero todavía con el nombre de provincia de León. Recién en 1938, se denomina provincia de Cotopaxi (Enoch, 1981:299) en homenaje al volcán que ha pautado tanto la vida de sus pobladores.

De la crisis textil a los complejos “obraje-hacienda”

La crisis del sector textil que dinamizaba a la economía de la región centro norte de la Audiencia de Quito,

3 ANH, Q, Empadronamientos, Numeración de Corral y Narrío, 1783

comenzó a manifestarse en las décadas finales del siglo XVII. Se trataba de una crisis de demanda del sector externo, que se complicó con factores internos. El factor externo más importante y decisivo, fue el decrecimiento de la producción de plata en Potosí que al contraerse drásticamente entre 1701 y 1750⁴, redujo la demanda textil. Entre los factores internos se considera que los terremotos y epidemias que disminuyeron la disponibilidad de fuerza de trabajo y golpearon la infraestructura productiva, ayudaron a profundizar la crisis. En la zona, las erupciones del Cotopaxi y los terremotos dejaron una inmensa destrucción; que adicionalmente ocasionaron epidemias y hambrunas.

Frente a la crisis, muchos obrajeros lograron rearticular su mercado hacia los centros mineros de Nueva Granada que se encontraban en plena expansión productiva (Melo:1979). C. Borchart establece que las Guías de comercio despachadas desde Quito a la Nueva Granada aumentaron progresivamente del 42,2% en 1787 al 57,5% en 1795 y al 76% en 1818; en tanto, las guías que van al sur decrecieron del 3,7% en 1787 al 2,5% en 1795 hasta prácticamente desaparecer en 1819 (Borchart, 1988:292).

Sin embargo, ello ocurrió solo con parte de los productos: Cicala señala que luego que languideció el comercio, *“al presente se trafica en la Tacunga con pocas telas y paños de lana y*

algodón, con sombreros, aunque muy escasamente. Solamente se mantiene vivo el comercio de tapetes, pellones y mantas” (Cicala:323). Otro efecto de la crisis fue la migración de importantes contingentes de indígenas de la región central a la sierra norte. De hecho, el 36% de los habitantes del Corregimiento de Otavalo en 1720, provenían de Riobamba, Ambato y Latacunga⁵ (ANH,Q, Indígenas, C.37 y 38). Se cerraron varios obrajes particulares y de comunidad (Browne, 1984; Alchon, 1991; Tyrer, 1988; Ortiz de la Tabla, 1977). Los únicos obrajes que pudieron sobrevivir fueron aquellos que pertenecían a grandes complejos hacendarios, que pudieron financiar su desplazamiento regional o competir con precios bajos.

Muchos obrajeros y hacendados vendieron sus propiedades, acosados por la estrechez del mercado y por las deudas. Las evidencias nos llevan a la conclusión de que en el siglo XVIII, como consecuencia de la crisis se produjo una mayor concentración de tierra en la sierra centro norte, especialmente en favor de las órdenes religiosas y grandes propietarios que manejaban complejos hacendarios (diversas haciendas con producciones distintas y complementarias) y complejos obrajeros que estaban articulados a haciendas agrícolas que les daban soporte. Los catastros que se realizaron para el cobro de alcabalas nos confirman la mayor concentración de tierras⁶. En

4 En la década 1641 a 1650 se produjeron 589.824 pesos, producción que fue bajando hasta que en la década 1691 a 1700 sólo se produjeron 303.017 pesos (Assadourian, 1982:121)

5 El Corregimiento de Otavalo tenía 4.182 tributarios, de los cuales 1.517 eran forasteros (ANH, Indígenas, 37, 1720)

6 Hemos evaluado siete tipos de fuentes: Alcabalas, Visitas, Guías Comerciales, Relaciones Geográficas, Notarías, Libros de Haciendas e Informes de autoridades locales, de las cuales, el avalúo catastral para el pago de la Alcabalas, es la fuente más prometedora, porque permite conocer los propietarios y definir estratos por avalúo, que muestran los diversos tamaños e inversiones de una propiedad.

1756 se contabilizaron en Latacunga 296 haciendas (Tyrer, 1976:432-33), cuarenta y ocho años más tarde, solo se contabilizaron 242 haciendas, cuestión que muestra el proceso de concentración de la propiedad.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sin que la sierra central se haya logrado recuperar de su crisis, el estado colonial introdujo nuevas medidas fiscales, en el marco de las denominadas “reformas borbónicas”⁷ que profundizaron la crisis de ese espacio. Las reformas iniciales tuvieron el propósito de elevar las recaudaciones fiscales de la Audiencia, a través del monopolio de los estancos de aguardiente, pólvora y de tabaco, un ensanchamiento del número de tributarios y una mejor recolección del tributo, y la imposición de alcabalas a los productos y propiedades. El impacto en la Tacunga fue directo: el estado instaló fábricas de aguardiente en la zona caliente, tratando de monopolizar la producción, obligando a los productores locales a entregarle miel y raspaduras. También el estado instaló la Real Fábrica de Pólvora en Latacunga que obligó a los indios de Tanicuchí, Saquisilí y Cusubamba a trabajar en ella y compitió de manera desleal con las pequeñas “fábricas de cohetería y fuegos artificiales”, que debieron cerrar en 1791, y a los artesanos se les obligó a comprar la pólvora para su trabajo. Los datos de la Real Caja de Quito, permiten concluir

que las reformas tributarias tuvieron éxito: el cómputo en quinquenios muestra que a partir de 1774, hay un incremento del 154%, de los ingresos anuales que llegan a su máximo tope en el quinquenio 1794-99 (Borchart, 1988:299-311).

Para la imposición de estas nuevas medidas tributarias se debieron hacer censos de población más prolijos; se redefinieron las categorías de indígenas, incluyendo a muchos que se consideraban mestizos en la población tributaria; se cambió la burocracia local que comenzó a cobrar directamente los tributos que en el pasado se arrendaban; se reevaluaron las propiedades agrarias y se aumentó el número de los pequeños contribuyentes. Las nuevas imposiciones fueron resistidas con un verdadero ciclo de levantamientos. Entre 1700 y 1760 solo se registraron trece sublevaciones importantes; en tanto, entre 1761 y 1803 se registró un verdadero reguero de 32 revueltas en la Real Audiencia⁸. Aunque los motivos de las sublevaciones fueron diversos, y en ocasiones muy acotados a circunstancias locales, la mayoría de ellas tuvieron una clara motivación fiscal. En unos casos, los indígenas se sublevaron contra las numeraciones que buscaban elaborar una nueva base de tributarios y contra los tributos; en otras se levantaron contra los diezmos, curas, minas y hacendados; y otras sublevaciones repudiaron las alcabalas y el monopolio estatal de los

7 Los Borbones accedieron a la Corona en 1713. Implantaron una serie de medidas administrativas y políticas para aumentar los ingresos a la Corona y contrarestar el declive económico de España: crearon nuevos virreynatos, introdujeron las intendencias en lugar de los Corregimientos, favorecieron una administración controlada más directamente por españoles cuestión que desplazó a muchos criollos, expulsaron a los jesuitas para tener mayor control de la iglesia, crearon milicias coloniales para controlar cualquier desorden y decretaron el libre comercio que produjo el despegue de varios puertos.

8 “27 en la Sierra Centro Norte 27, en la Sierra Sur 4 y una en el oriente. Ver una lista de sublevaciones en mi artículo “Los indios y la constitución del Estado Nacional” en “Los Andes en la Encrucijada, FLACSO, 1991:419-456

estancos. La mayoría de los idearios de las sublevaciones en la Audiencia de Quito intentaron recuperar los señoríos étnicos que constituían su mayor experiencia histórica (Ramón, 1989; Moreno, 1995); otros buscaron recomponer “pactos” con el estado colonial y las haciendas; algunas solamente rechazaron los excesos sin desarrollar propuestas visibles, y otras incluso llegaron a la autoliquidación étnica como medida extrema, sobre todo en las zonas marginales⁹. En la zona de Cotopaxi se produjeron cinco sublevaciones, una de ellas de gran envergadura: una pequeña en 1746 en Sigchos y Toacazo protagonizada por los mitmajkuna, secundando el alzamiento de Juan Santos Atahualpa realizado en el Perú; otra en 1766 en Molleambato, San Miguel y Cusubamba, “contra el cobro de tributos adelantados” que rompía el ciclo de la economía étnica. En aquella ocasión se planteó la autonomía del Señorío y se proclamó a un Hati; en 1771 se produjo la mayor sublevación en San Felipe contra la numeración; en 1778 los indígenas urbanos de San Sebastián en Latacunga protagonizaron una pequeña escaramuza oponiéndose al traslado de un cura amigo; y en 1797, con ocasión del terremoto, muchos indios de Cotopaxi se unieron a la rebelión contra las aduanas y por la autonomía de los señoríos dirigida por los indios de Riobamba¹⁰.

El levantamiento de 1771 de San Felipe muestra comportamientos análogos de los indios a otros observados en la Audiencia: es un levantamiento, en principio antifiscal, en contra de

la “numeración” que les impondría nuevos impuestos. Sin embargo, tiene varios ingredientes particulares: se levantan contra un eventual reasentamiento a Logroño, especialmente de los jóvenes, cuestión que provocó la activa participación de las mujeres. Se levantaron en defensa de sus ganados y de sus pequeñas chacras, que según se creyó serían confiscadas. Ello muestra la existencia de una pequeña economía familiar, tanto de indios sueltos, como de aquellos que trabajaban en los obrajes, a las que estaban dispuestos a defender hasta la muerte. La sublevación muestra una importante participación de mujeres mulatas que trabajaban en los obrajes. Tal alianza entre subalternos es novedosa, puesto que en otros sitios, mas bien los negros y mulatos habían sido utilizados para reprimir a los indios. También se destaca el liderazgo de los mandos medios (un alguacil y alcaldes de comunidad) que lideran a los indios sueltos y a los trabajadores del obraje estatal de La Calera que fuera de los jesuitas, antes de su expulsión. El cacique, un Sancho Hacho Pullupagsig, se mantiene alejado de los acontecimientos, cuestión que muestra que el papel y la actitud de los caciques del área se mantenía cercano a los españoles. De otra parte, es impresionante el coraje y valentía de un indio joven, Lucas Guamán, que llegó a batirse hasta con diez españoles, llamados en la zona “chapetones”. La violencia de los acontecimientos en los que fueron masacrados, golpeados y lisiados varios indios, entre ellos, varias mujeres, denota un dualismo étnico muy rígido¹¹.

9 Salomon, Frank, El shamanismo y la resistencia indígena en el Ecuador, Cultura 21, BCE, 1985, Quito.

10 Ramón, Galo, Los indios y la constitución del Estado Nacional, en Los Andes en la Encrucijada, 1991: 451-455

11 Para una descripción más pormenorizada de los eventos, ver, Moreno, Segundo, Sublevaciones Indígenas de la Audiencia de Quito, 1995: 131-151

Para inicios del siglo XIX, en 1804, el 54% de los indios (4.515 de 8.282 contabilizados) habían sido incorporados por las 242 haciendas de Latacunga, para un promedio de 18,7/hacienda. El porcentaje más alto de “indios sujetos”, estaba en Cusubamba (76%), Pujilí (73%) y San Sebastián (60%); en tanto los más bajos en Toacaso (36%), Isinliví (33%) y Sigchos (28%)¹², lo cual muestra que el avance de la hacienda sobre los indios se produjo en la zona central del valle, tendiendo a desplazar a los indios sueltos a las zonas más remotas y menos fértiles. Ello agrega otra explicación a la degradación ecológica de la cordillera occidental. Por su parte, también para ese año, 1804, se contabilizan 27 obrajes en Latacunga (uno en Alaquez, siete en Saquisilí, seis en Pujilí, dos en Cusubamba, uno en San Miguel y siete en San Sebastián) que en general siguen el patrón de distribución hacendaria, es decir que, funcionaba allí la ecuación obraje-hacienda, que constituye una particularidad de Cotopaxi. El elevado número de obrajes, (más que en Riobamba que en ese año tenía solo once, que Ambato que solo tenía tres y que Quito que tenía 12 chorrillos), muestra que, por su cercanía a Quito y a Nueva Granada, la producción obrajera de Latacunga sobrevivió a la crisis, por tener mano de obra barata y un mercado cercano.

Los señoríos y parcialidades indígenas

Cotopaxi fue en el incario una zona importante, por situarse, como hemos dicho, en el eje longitudinal del Camino Real que conducía a Quito

y en el eje transversal que unía Quijos en la amazonía con los flancos costeros de los pueblos yungas (tsáchilas y otros). Por esta razón, la zona fue intensamente kichuizada, se colocaron mitmajkuna de alto rango, grupos de control militar y camayos que producían bajo el esquema de “archipiélagos verticales”. De esa estructura antigua, quedaban fuertes vestigios en el siglo XVIII: (i) habían mitmas “ingas chinchaysuyos” y “cañares” de elevado rango en Pujilí y Angamarca; (ii) mitmas comunes en San Sebastián, Saquisilí y Alaquez (Guamán marca y Chuquimarca); así como yanaconas en Alaquez y Angamarca (iii) camayos en San Felipe y varios grupos pertenecientes a Angamarca destacados a zonas como Ambato y Salinas; de Alaquez destacados a Pusuquí y Pomasque en Quito; y de Cuzubamba a Pillaro, en el típico modelo de colonias a distancia; (iv) todavía era perceptible la organización tripartita incaica (collana, payan y cayao): habían grupos collana en Cuzubamba, Isinliví y Angamarca; grupos Urinsaya en Cuzubamba, Atunsigchos en Sigchos y (v) habían grupos, al parecer puruhaes, cuyos nombres se parecen mucho a los que estaban en San Andrés de Chunchi, (Tuguán y Patulán) que probablemente fueron movilizados también por los incas (ANH, Q, Cacicazgos).

En la colonia temprana, los caciques de Cotopaxi habían establecido fuertes relaciones de alianza con los españoles (el poderoso clan de los Sancho Hacho), que les habría permitido mantener algunos de sus privilegios. Ello explica que hayan grupos de Vagabundos y Forasteros en Pujilí e Isinliví al mando de señores étnicos locales; también indios de la

12 Udo Oberem: “Indios libres e indios sujetos a haciendas...”, 1804-05, Pendoneros 20, 1981

Real Corona (es decir que tributaban directamente al Rey) en San Felipe; y el hecho de que los “yungas Colorados”, es decir los actuales tsáchilas, habían sido colocados bajo la jurisdicción de los caciques de Sigchos. Sintetizando, para el siglo XVIII, la zona tenía indígenas de siete procedencias distintas (mitmas de elevado rango y mitmas comunes de origen sureño), indios puruhaes y quiteños, indios “vagabundos y forasteros” de diverso origen, los yungas colorados y los indios locales fuertemente kichuizados, lo cual cuestiona una eventual identidad panzaleo, que de otra parte resulta de un equívoco de los arqueólogos¹³. Lo cierto era que, allí se estaba amasando una identidad kichwa sobre la base de clanes familiares, que incluso intentaron captar, sin conseguirlo, a los llamados Colorados.

En el siglo XVIII, funcionaban aún las redes de los antiguos señoríos. De hecho, cada cacique tenía asiento en una jurisdicción (en uno de los trece pueblos) y cobraba los tributos de “sus indios sujetos” que estaban ubicados en el núcleo central y en diversos pueblos. Los ejemplos más extendidos de este tipo de redes los podemos encontrar en los caciques de Alaquez y Angamarca. Los caciques de Alaquez cobraban sus tributos en las siguientes parcialidades: Narváez, Guamán Marca, Ylata, Yanaconas, Sagra, Alón, Choasua, Chuquimarca, Yanque, Collagua, Alaquez, Unache, Pusuquí y Pomazque) situados en diversos sitios del territorio local y extralocal. Lo mismo puede decirse de los caciques de Angamarca, que cobraban los tributos de las parcialidades: Munduquí

o Munduquín, Yanacona, Guallasillí o Gualasí, Collana, Sicoto Cañar, Ipigua, Paliado, Ambato, Pujilí y Salinas. Ello es importante, porque, las identidades de estos cacicazgos poscoloniales tenían dos vertientes: la vertiente territorial (residencia en uno de los trece pueblos) y la vertiente “red de parcialidades”, de manera que, no se adscribían a determinado pueblo, sino a un territorio extenso compartido. Ello ayudó a crear, en nuestra opinión, una fuerte unidad del territorio kichwa de Cotopaxi.

Entre 1700 y 1826, hay cuatro grandes familias que controlan las gobernaciones de los diversos pueblos: los Sancho Hacho (en su variantes Pullupagsig, Zamora, Espinar, Márquez o Narváez) que manejan los cinco pueblos (San Miguel, Pujilí, Saquisilí, Alaquez y San Felipe); los Hati (en sus versiones Aja, Cañar) que manejan San Miguel, Isinliví, Tigualó, Toacaso y Sigchos; los Cando que controlan Saquisilí, Mulaló y Angamarca; y los Chicaiza que se mueven en Angamarca y Pujilí. Junto a ellos, un conjunto de caciques menores como: los Poinluisa, Tobanda de Angamarca; los Bastidas, Saragosín, Ruiz, Calahorrano, Suárez de Latacunga; Cáceres de Tanicuchí; Ambumala de Cusubamba; Moncayo de Atunsigchos, Toacazos y Colorados; Tandalla de Alaquez; Caizatoa de San Sebastián; Salazar Cordones Betanzos Inga de Pujilí (ANH; Q, Cacicazgos).

Con el ciclo de rebeliones del siglo XVIII, muchos “caciques de sangre” que habían liderado rebeliones en los Andes perdieron el mando, cuestión que se complementó con el proceso de elecciones democráticas

13 Hace cuarenta años, en los 60s se debatió duramente sobre la ubicación de la etnia “panzaleo” a inicios de la colonia. Las investigaciones mostraron consistentemente que ella se ubicó al sur de Quito, en Machali, Aloag, Aloassí y Panzaleo, antes del nudo de Tiupullo.

impulsadas por las reformas gaditanas de 1809-1812. Sin embargo, en Cotopaxi, los registros históricos muestran que hacia 1810-20 son las mismas familias las que mantienen el control, lo cual ratifica nuestra anotación de que se mantenía la alianza con los españoles. También es muy significativa la presencia de cacicas mujeres que litigan por mantener a sus hijos en las direcciones caciquiles: las cacicas Chicaiza de Angamarca, Cando Lazo de la Vega de Mulaló, Márquez Narváez Sancho Hacho de los cinco pueblos, Hati de San Miguel y Titusunta Llamoca de Pujilí y Saquisilí. Estas últimas son parte de poderosas familias regionales que también manejaban la zona de los puruhaes. En verdad, las mujeres eran la base de estos poderosos clanes familiares locales y regionales.

Los señoríos étnicos perderán funcionalidad con la sostenida baja del peso del tributo en las rentas fiscales entre 1830 y su abolición en 1857. La nueva composición de los ingresos del presupuesto estatal de 1858 recogida por Manuel Villavicencio, muestran importantes cambios: el ingreso por las aduanas de Guayaquil y Manta constituyen el 36,26% del ingreso total, generados en su mayoría por las exportaciones de cacao, tabaco y balsa de la costa, complementadas con la exportación de cascarilla, sombreros y ropa de la sierra; los impuestos internos a la producción como los diezmos, la sal, el aguardiente y las alcabalas, pagados especialmente en la sierra constituían el 20,54%; la contribución indígena, que anteriormente financiaba la mayor parte del

presupuesto ha bajado al 12,85%, con lo cual los indios pierden peso económico y político; el empréstito público constituye un 13%, cuya presencia nos acompañará en toda la era republicana hasta el presente en el que es un verdadero dogal; y el 16% restante de varios ingresos burocráticos: papel sellado, pólvora, ramos atrasados, temporalidades, entre otros, de un total de 1'372.800 pesos¹⁴. Los señoríos se disuelven en pequeñas parcialidades y muchos jefes étnicos se mestizan. Este mestizaje de los caciques locales, si creemos en el increíblemente desordenado trabajo de Fernando Jurado, comenzó muy tempranamente en el siglo XVII¹⁵.

El sistema hacendario en el siglo XIX

Una impresionante y voluminosa información recogida por Carlos Marchán sobre 131 haciendas de la zona, que resulta una muestra muy representativa, nos permite seguir la evolución de la hacienda cotopaxeña entre 1818 y 1930¹⁶.

La hacienda predominante es la dedicada a la actividad agropecuaria, también existen algunas haciendas trapi-cheras, como la denominada "Malqui" en Chugchilán de Juan Manuel Lasso ubicada en la zona subtropical, y aún logran mantenerse en pie algunos complejos de "obrajes-haciendas" como el "Tilipulo" de José Modesto Larrea, el "Obraje" del General Isidoro Barriga, el "Guaytacama" de Aparicio Rivadeneira y Tobar, entre otros, que

14 Villavicencio, Manuel, Geografía de la República del Ecuador, CEN, 1984.

15 Ver, Jurado, Fernando, Sancho Hacho: orígenes de la formación mestiza ecuatoriana, s/f. ABYA YALA-CEDECO.

16 Ver, Marchán, Carlos, La estructura agraria de la Sierra Centro-Nore, T.II, 1985

producen para el mercado de Quito y el de Colombia. Alejandra Kennedy y Carmen Fauria estudian uno de los importantes complejos “obraje-haciendas” de la zona, que en silgo XIX comprende: el obraje de Tilipulo, las haciendas “La Compañía o Saquisilí, Guaytacama, las dos Cunchibambas (estas dos en Ambato). También se conectaban las haciendas ganaderas San Juan, Mulaló, Pasanche, La Calera y Churupinto. La producción del obraje se orientaba en el siglo XIX a Popayán, producía artículos de lana hasta mediados del XIX, para lo cual importó maquinaria en 1853. El obraje aún subsistía en 1884, en que sucumbe a la competencia extranjera y se convierte en hacienda agropecuaria (Kennedy y Fauria: 1988:141-220).

Por su parte, las haciendas agropecuarias podían subdividirse entre aquellas que producían básicamente cereales y las que producían principalmente ganado y quesos, división que será importante en los posteriores procesos de modernización. Esta última actividad resulta la más rentable, de acuerdo a una estimación realizada por un embajador francés. la actividad lechera (leche fresca y quesos) lograba un 14% de rentabilidad sobre el capital invertido; le seguía la producción de carne de vacuno que lograba una utilidad neta del 6,9% del capital; y luego la producción agrícola de cebada, maíz, trigo y papa que obtenía una utilidad neta del 5% del capital (Saint Geuors, 1994: 160). La rentabilidad de las haciendas queseras resultaba de lejos la mejor opción, en una época en la que las haciendas han perdido sus mercados

a distancia y solo tienen los mercados domésticos. Ello explicará el surgimiento de un sector modernizante de terratenientes en la sierra, dispuestos a introducir cambios en las relaciones de servidumbre al interior de la hacienda.

La hacienda se ha expandido a toda la zona occidental, incorporando las zonas altas y subtropicales. La información no es explícita en el caso de la cordillera central, aunque por el aumento de propiedades, cabe imaginarse que su “conquista” era agresiva. En las zonas altas de la cordillera occidental, están registradas las haciendas de Guangaje de José Álvarez y Torres, la de Tigua de los Herederos de Juan Pío Escudero, Salamalag del General Manuel Matheu y Herrera, hoy territorios muy degradados; en el flanco externo, haciendas como La Provincia; en Sigchos haciendas como Silajo, Chinalo, Guayama y Magdalena, para mencionar las principales. El número de propietarios también ha crecido, para 1871, en la provincia de León hay 1.433 propiedades avaluadas en más de 200 pesos¹⁷. Ese crecimiento no se debe a la existencia de un activo mercado de tierras, sino a formas tradicionales de traspaso de la propiedad. De la documentación referida, en los 112 años, apenas se registran 118 compraventas directas (1,05/año), predominando las divisiones por herencia (77 testamentos) y 47 juicios de partición de bienes. La figura más socorrida es el arrendamiento: en esos mismos años se registra 175 contratos de arrendamiento (1,56/año), lo que muestra que la clase dominante “local” no residía en sus predios, ni siquiera en

17 La provincia de León tenía dos cantones, el de Tacunga y Ambato, de manera que a este número de propiedades debe restarse las que pertenecen a Ambato. En todo caso, crecieron con relación a las 212 registradas a inicios del siglo.

Cotopaxi. Tampoco la figura del arrendamiento jugaba un papel modernizador de la propiedad, porque los arrendatarios no realizaban ninguna inversión, todo lo contrario, sobreexplotaban los predios y la fuerza de trabajo, cuestión que se añade a las razones de deforestación de la zona. Las localidades estaban controladas por poderes locales integrados por pequeños terratenientes, arrendatarios de haciendas, los curas, los tenientes políticos y los quilcas.

Como hemos señalado, los propietarios de las haciendas de Cotopaxi, no crearon una verdadera clase dominante local de carácter regional, sino pequeños sistemas de dominación local. En ello incidieron varios hechos notables: la cercanía a Quito, que permitía que muchos integrantes de la élite quiteña tengan haciendas en Latacunga, o la posibilidad de que los grandes hacendados locales se trasladasen a Quito, sin perder la propiedad de esas unidades. Los estragos producidos por las erupciones y los terremotos del siglo XVIII, alentaron este tipo de proyectos. Cicala relata que varias Ordenes Religiosas evitaron construir sus escuelas de formación o levantar grandes edificios en una zona tan inestable desde el punto de vista telúrico. Igual estrategia tuvieron varios hacendados. Por ejemplo, el hijo del Marqués de Maenza, que era dueño de dos grandes haciendas y un obraje, jamás residió en la zona. Otro ejemplo es el del Marqués de Miraflores que se trasladó a Quito en 1751 (Jurado, s/f:288). Pero no solo los marqueses, también los hacendados menos encopetados: doña Rosa Carrión Velasco se trasladó a Quito en 1781, también Miguel Carrión Quiñónez que vivía en Quito en 1840, pero que fue incluso Corregidor de Latacunga (ibid: 331). Gente de la élite quiteña adquirió propiedades

en Latacunga. La lista es muy larga, mencionemos a Manuel Larrea Jijón que adquirió Mulinlibí en Cotopaxi en 1796, José Carrión Velasco que compró la hacienda Alaquez en 1804... Este comportamiento es generalizable a buena parte de propietarios, razón por la cual la figura precapitalista del arrendamiento fue la principal forma de manejo de esas unidades. Ello explica que no haya habido una real presión por crear un Cabildo local, que mas bien surgió tardíamente impulsado por la racionalidad estatal que creó este cuerpo intermedio a inicios del XIX, para administrar ese territorio con mayor fuerza.

Otra forma de ver esta conformación local de los pequeños sistema de dominación, es analizar las fiestas y los íconos religiosos. Los diversos pueblos tienen iconos religiosos de carácter local: el Niño de Isinche, que está en la iglesia de la Hacienda de Isigche cerca de Pujilí; el señor de Cuicuno, que se encuentra en el Santuario de Cuicuno y tiene devotos de varios sitios; el señor de Macas o Maquitas, que está en la iglesia de Poaló (pueblo de mestizos); el Corazón de Jesús del Arbol, que está en una casa particular de Saquisilí; el señor de la Calera en Latacunga que tiene devotos de su localidad, así como la Virgen de la Merced llamada La Peregrina, alrededor de la cual se organiza la fiesta de la Mama Negra que hoy en día es divulgada como la fiesta general de la zona; en Angamarca existen tres imágenes del Niño Jesús que cuentan con devotos particulares; la Mamá Natividad que está en una comuna de Saquisilí, y luego pasó a la Casa Campesina; San Francisco o Taita Pancho que tiene gran popularidad entre los indígenas; y en las comunidades indígenas de Guangaje, Tigua y Zumbahua se hace culto a la Rumi Cruz. Todos ellos son

íconos locales, que dieron lugar a fiestas locales.

Una coyuntura particularmente difícil que vivieron las haciendas y que refleja su grado de vulnerabilidad, fue aquella producida entre 1818 y 1830, ocasionada por los combates de la independencia. La economía se desorganizó, el cambio del aparato burocrático central, las reclutas forzadas de ambos bandos, las requisiciones de vituallas y animales, las deudas que tenían las haciendas (denominadas “censos” en la época) y hasta la activa militancia en el bando independentista de muchos de los hacendados quiteños que tenían propiedades en la zona, conspiraron contra la economía hacendaria. Los hacendados de Cotopaxi pidieron una rebaja del interés de los censos del 5 al 3%, porque según decían que el gobierno español

“ha procurado destruirlos y sepultarlos (a los pueblos) en la más espantosa miseria (y) que las grandes haciendas que contiene este cantón se hallan, como sucede en lo general en la provincia, tan recargadas de principales acensuados que no conocen propietarios, sino unos inquilinos que sacrifican su sudor y sus desvelos en benéfico de los censuallistas” (ANH,Q, Censos y Capellanías, C.76:1821-23)

Muchas de las haciendas no podían pagar las deudas de los tributos de sus conciertos y aquellos que compraron a crédito los bienes de temporalidades (expropiados a los jesuitas en 1767) tenían dificultades en pagarlos. En 1818 tres haciendas debían los tributos de sus conciertos, en 1819 otras tres, en 1820 subieron a 8, igual número en 1821, llegando a 20 en 1822 y a 38 en 1823, para descender a 26 en 1824 (Marchán, 1985). Varias haciendas fueron rematadas

y tan temprano como 1833 debieron acudir al naciente capital financiero bancario, para hipotecar sus predios. En la documentación revisada hemos contabilizado 93 hipotecas para el período mencionado, lo cual muestra que los terratenientes vivían endeudados hasta los huesos. En este caso, también el capital financiero jugó un papel parasitario que succionaba los ingresos de los terratenientes que usaban esos dineros para financiar otras actividades económicas o sus gastos personales, sin desarrollar procesos de modernización.

El aspecto más significativo que revela la documentación que comentamos, es la importancia que va adquiriendo el acceso, manejo y posesión del agua. Este recurso que parecía sobrar en el siglo XVIII, comienza a escasear a partir de 1832, cuando aparecen los cuatro primeros contratos de uso de agua. Caldas en 1804-05, a diferencia de las impresiones de Cicala que estuvo treinta años antes, habla de un valle árido que se mantiene mas bien de los obrajes:

“este pueblo (de Saquisilí) situado en medio de un arenal estéril, mantiene muchos indios, lo que le hace uno de los mejores beneficios del obispado. No ocupar estas manos la labranza, sería luchar contra un suelo ingrato; pero la industria le trae de todas partes la abundancia y las riquezas. Ocupados en los obrajes de Tilipulo, labran la lana de todos los partidos, y ricos, hacen ver que un poco de industria puede mantener millares de hombres sobre el suelo más árido e ingrato” (Caldas, en Manuel Miño, 1984:177).

Los juicios de agua crecen en el transcurso del siglo. También aparecen contratos de apertura de acequias, y contratos de servidumbre de aguas: entre 1832 y 1930 hemos contabilizado

43 juicios de este tipo, a un promedio de 0,43/por año, que revela una alta conflictividad. Aunque no tenemos una explicación exhaustiva del problema, la falta de agua e interés por su acceso, es un claro indicador de una disminución producida por la expansión de las haciendas a la altura, que habrá disminuido la

capacidad de retención de agua en esos suelos. También puede deberse a un crecimiento de la demanda por el crecimiento del número de propiedades y de su uso irracional, tema que debe ser profundizado¹⁸. Tanto los obrajes como las haciendas demandaban agua.

18 Algunos estudiosos del clima han hecho notar que desde 1850 comienza un proceso de disminución de la humedad en los páramos ecuatorianos.

CAPÍTULO 2

LA MODERNIZACIÓN AGRARIA:

1910-1990

Los intentos más tempranos de modernización en la zona, fueron protagonizados por los dueños de los obrajes. En 1833, José Modesto Larrea firmó un contrato de “compañía” con Esteban Joleaud para *“mejorar, adelantar y perfeccionar las manufacturas del obraje de Tilipulo”*, incorporando las máquinas necesarias que serían importadas de Chile. El proyecto fracasó. Años más tarde, en 1853 se logró la mecanización parcial del obraje. Ello suscitó una fuerte impresión de un observador de la época que comentó que

“Hay dos de ellas –se refería a dos fábricas– montadas en grande con máquinas traídas de Europa, una en el valle de los Chillos –de Jijón– ...de algodón y otra en Tilipulo... de lana. Todas las demás –añadía– son montadas en pequeño y por así decir domésticas... (Lisbo, Miguel, En Kennedy, et. al, 1988:205).

Sin embargo, el esfuerzo de convertir a los obrajes en fábricas resultó modesto: debía enfrentarse a una competencia cerrada con los productos extranjeros, en condiciones de un mercado pequeño. El principal incentivo de la modernización provenía de la demanda de textiles del sur de Colombia que estaba expandiendo su economía, pero sus demandas fueron finalmente cubiertas por los textiles europeos: la golondrina de Tilipulo no hizo un verano modernizador. Como por obra de un dios reaccionario de las profundidades, un nuevo terremoto, el de 1877, puso fin a los

intentos modernizadores: *“los últimos obrajes de los alrededores de Latacunga se cerraron y su expansión prácticamente terminó”* según lo destacó Saint Geours (1994,141)

La modernización de las haciendas serranas se volvió a plantear en tiempos del boom cacaotero, entre 1875-1930. Se lograron con mucho esfuerzo crear ciertas condiciones favorables: un sector modernizante de la clase terrateniente serrana dispuesto a sustituir importaciones para abastecer con alimentos a la costa; un presidente de la República, Eloy Alfaro, decidido a vencer los Andes con la construcción del ferrocarril en la zona más escabrosa del mundo. Por fin el sueño se cumplió, el ferrocarril Quito-Guayaquil se terminó de instalar en 1908. Empero, se demostró que ello no era todo lo que se necesitaba: poderosas fuerzas políticas acechaban contra el proyecto modernizador.

En la sierra, el sector tradicionalista de la clase terrateniente, no tenía interés alguno ni en el ferrocarril, menos en la posibilidad de sustituir importaciones para abastecer a la demanda costeña y a la ciudad de Quito que experimentaba una ligera expansión. Se aferraban a la comodidad de mantener el statu quo, la servidumbre en las haciendas, pero sobre todo, el control de los poderes locales, en los que la hacienda ocupaba el papel central. Tampoco los grandes plantadores costeños tenían interés en la modernización, ni siquiera en el

ferrocarril. No tenían nada que vender a la sierra, sus ganancias no habían sido invertidas en ninguna industria, preferían importarlo todo bajo el cómodo discurso del libre comercio. Apoyar el proteccionismo que reclamaban los modernizadores serranos, les habría significado elevar el costo de los bienes que importaban (harinas, textiles, zapatos, machetes, etc), lo cual habría presionado por unos salarios que no estaban dispuestos a elevar (ibid:148).

Con todo, el ferrocarril comenzó a funcionar y varios hacendados comenzaron a transportar, desde 1910, leche fresca, quesos y ganado en pie a Quito y a la costa. Esas propiedades en capacidad de articularse a esta coyuntura modernizadora, debían reunir varios atributos: pertenecer a hacendados modernizantes productores de ganado y leche, estar cercanos al ferrocarril para bajar costos de transporte, tener en sus haciendas condiciones ecológicas favorables. Pero sobre todo, debían estar dispuestos a introducir una reforma crucial en sus relaciones con los conciertos y huasipungueros: desprenderse de la mayor parte de ellos para ampliar el área de pastizales. El estudio de Arcos y Marchán en la zona de Guaytacama, muestra que algo de esto comenzó a producirse en esa parroquia desde 1910, pero el grueso de haciendas no reunía condiciones como las señaladas. Más aún, el asesinato de Alfaro en 1912 desbalanceó el precario empuje a favor de los tradicionalistas. La crisis de la exportación cacaotera, que comenzó a declinar desde 1914 y que se profundizó en 1925, desaceleraron el proyecto: la modernización del agro serrano,

tampoco fue posible con el boom cacaotero, que pasó como los cien años de soledad de García Márquez, sin dejar rastro alguno.

Entre 1925 y 1948, el Ecuador buscaba desesperadamente un nuevo producto de exportación que lo colocara nuevamente en los mercados, ya que la alternativa industrializadora que tomaron otros países de la región les resultaba muy lejana. Las veleidades modernizadoras, solo habían sido eso, pequeños fogonazos que no lograron superar el carácter primario de la economía, de las mentes y de los intereses de los exportadores. Como por obra del mismo diablo, el nuevo producto apareció: el boom bananero, que se expandió entre 1948 y 1965. Con él se produjo una nueva oportunidad para modernizar a la producción de la hacienda serrana. La demanda de leche se amplió en los mercados y comenzó a incentivar la producción hacendaria. Los terratenientes coto-paxeños, sin embargo, tampoco respondieron a esa demanda, o lo hicieron muy tímidamente¹⁹. Un balance del número de propiedades que se habían desprendido de sus huasipungueros entregándoles tierras hasta 1959, máximo indicador de un cambio en las relaciones internas, mostró que ello fue muy modesto en Latacunga.

Veamos los datos de entrega de huasipungos hasta 1959.

PROVINCIA	% HUASIPUNGOS	% SUPERFICIE
Carchi	92,1	41,4
Imbabura	24,3	23,9
Pichincha	26,9	27,3
Cotopaxi	4,3	6,6
TOTAL		100

Fuente: Barsky, et.al:174-175

19 Guaytama comenzó a vender leche fresca en cantidades apreciables desde 1936.

Más bien fue la zona del Carchi y de Pichincha las que tuvieron un mayor empuje para hacerlo: tampoco el boom bananero obró el milagro, a pesar de que el gobierno de entonces, de Galo Plaza, un prominente terrateniente modernizador propagandizó la leche como el símbolo de la alimentación de un pueblo desarrollado.

Sin embargo, por fin el cambio se produjo. Este llegó por la combinación de un poderoso impulso estatal y de la mano de producción de leche, que se expandió desde el norte hasta Latacunga. La presión estatal se canalizó a través de la Reforma Agraria de 1964, que tuvo un efecto muy significativo en la supresión de las relaciones precarias (huasipungaje, yanapería y sistema de partidos). Esta vez, la presión sobre la tenencia de la tierra obligó a los terratenientes a modernizarse, so pena de perder sus propiedades. Al mismo tiempo, los terratenientes tradicionales, especialmente los cerealeros y paperos, aprendieron de los modernizadores que era posible separar las tierras marginales, especialmente los páramos, para entregarles a los huasipungueros y liberarse de una presión interna que los acosaba. Ello les permitió intensificar la producción en las mejores tierras: planas, estables, fértiles, regables y manejables: era la llamada vía junker o modernización terrateniente. De hecho, el gobierno de las Fuerzas Armadas acompañó a la Reforma Agraria con grandes incentivos para la modernización: lo que no pudieron los dos booms en Cotopaxi, lo logró el nuevo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que de manera tardía se implementó en el país.

A nivel de la unidad productiva, el desplazamiento de los cultivos tradicionales por los forrajes se operó por dos vías: la expansión de las superficies dedicadas a los pastos y con la siembra de alfalfa, producto que requiere abundante riego (Breuer, 1993:8). También las grandes fincas realizaron una importante mejora genética del ganado e introdujeron nuevas prácticas: inseminación artificial, control veterinario, adición de alimentos minerales concentrados. Para 1978 ya se había producido la modernización. Quintero señala que ella se produjo bajo los siguientes elementos: (i) en muchos casos terratenientes regionales fueron desplazados por terratenientes de origen comercial; (ii) se redujo la superficie de las haciendas; (iii) disminuyeron la fuerza de trabajo interna; (iv) aumentaron la superficie de pastos para la producción lechera, disminuyendo la producción de artículos tradicionales; y (v) mejoró la gestión y la tecnificación de la empresa lechera. Al mismo tiempo se produjo un acelerado crecimiento urbano, una mayor diferenciación campesina, el surgimiento de nuevos tipos de población rural y un mayor rol de las unidades domésticas. De acuerdo a PRONAREG-ORSTOM (1980:112), las parroquias dedicadas a la producción lechera eran: casi todas las de Latacunga y las parroquias de Pujilí, Salcedo, Mulliquindil, Saquisilí, Canitilín y la parte baja de Canchagua.

No solo las grandes haciendas se dedicaron a la producción lechera, también las medianas e incluso los campesinos, que mejoraron su ganado criollo a través de cruces e incorporaron algunos cambios en su manejo:

20 Para 1978, en Pichincha y Cotopaxi se asentaban 28 de las 65 plantas procesadoras de Leche. El complejo Avelina-ILESA y la fábrica INDULAC, de acuerdo a Arcos y Merchán no vienen de capitalistas que acumularon en la agricultura

sogueo, producción de forrajes. En la zona, la principal empresa pasteurizadora que se instaló fue INDULAC²⁰, que procesaba leche líquida hacia 1987 el 28% de la producción del mercado. Sus principales proveedoras eran las grandes haciendas, que entregaban diariamente más de 500 litros, es decir, tenían hatos superiores a las 70 vacas lecheras. Como señala Breuer, es muy significativo que los proveedores, en el caso de Indulac, son siempre los mismos en los 20 años que él investiga, es decir tienen un carácter territorial. Este inmovilismo de la relación oferta-demanda, no promovió ningún cambio adicional del inicial proceso de modernización, es decir, el proceso se estancó. Es posible que los vínculos personales entre la clase terrateniente, justifique este comportamiento. En todo caso, la modernización inicial provocó cuatro efectos devastadores: la ruptura de las complementariedades productivas entre las zonas altas y bajas al separar el páramo del valle; la minifundización de los campesinos, que eran necesarios como fuerza de trabajo barata; un empleo relativamente bajo de fuerza de trabajo, que adicionalmente no podía competir con los grandes abastecedores y la degradación más acelerada del páramo, sometido a procesos de producción tradicionales. El estancamiento de la modernización por el inmovilismo de los abastecedores de leche, no jugó ningún papel dinamizador para corregir estas iniquidades.

De todas maneras, la modernización producida por la producción lechera, cambió la estructura de Cotopaxi. Una investigación realizada por el equipo de Marcelo Naranjo en 1983, elabora

una nueva zonificación de la provincia en la que se conjugan variables como: el grado de desarrollo capitalista, la disposición de infraestructura productiva (riego, vías, electricidad, parque industrial), el peso de la economía campesina y de la etnicidad, la presencia de relaciones salariales, las características ambientales y grado de urbanización. Ellos distinguen seis zonas²¹:

- **Zona de mayor desarrollo capitalista (A):** integrada por el valle interandino norte (parroquias Guaytacama, Tanicuchi, Pastocalle y Mulaló). Su producción dominante es la lechera y las agroindustrias. Tiene riego de ríos Punacunchi y Cutuchi; dispone de vías de comunicación (carretera panamericana y ferrocarril; y una copiosa red de caminos vecinales); tiene electricidad; parque industrial (tuercas, Ecuatubex, Compac, Necchi) y empresas de madera. Junto a ellos hay un sector de campesinos minifundistas que ofrecen mano de obra barata a las empresas, pero no todos encuentran trabajo en la zona, deben migrar. Predominan las relaciones salariales; casi no se habla kichwa, es zona de fuerte mestización.

- **Zona de mayor desarrollo artesanal (B):** comprende el occidente del valle interandino. Es una zona quebrada, tiene poco riego y los terrenos son arenosos. Producen cabuya y una zona de gran minifundización. Tiene muchos caminos vecinales (segundo y tercer orden) que se comunican con la Panamericana. Se ha desarrollado la artesanía que se combina con la agricultura familiar. La producción artesanal explora ramas como: la alfarería en El Tejar, La Victoria y El Calvario;

21 Hemos modificado el nombre de la zona D, llamada de enclaves, por "zonas precapitalistas, por corresponder mejor a la definición que se propone.

tatora (cestas, esteras) en Papana Sur; de reutilización del caucho en Chan cerca de Latacunga y de artículos elaborados de cabuya. La producción agro-artesanal tiene una fuerte vinculación al capital comercial. Se mantienen las mingas, las fiestas, la religiosidad popular, el vestido local y el kichwa. Empero hay procesos de diferenciación y un acelerado cambio cultural, por la vía de la influencia del comercio.

- **Zonas de mayor influencia indígena (C):** está integrada por varios sitios que difieren en condiciones ecológicas, altura y calidad del suelo. No hay un proyecto exógeno de manera que las comunas se han rearticulado sobre sus propias formas organizativas y por tanto hay cierta separación de los factores estructurales de la zona (CAAP, 1981:11). Predomina la presencia indígena en: Tigua-Guangaje, Zumbahua y los Páramos de Sigchos que fueron latifundios de la iglesia que pasaron al estado, arrendadas a particulares y que mediante intensas luchas campesinas lograron obtener la tierra en tiempos de la reforma agraria; las estribaciones de la cordillera cercanas al valle interandino (Jachahuango, Jatun Tigua, Allpamalag) que obtuvieron la tierra con enfrentamientos violentos, registra una menor minifundización, es una zona indígena en la que se habla kichwa; y la zona de Cusubamba, donde las haciendas iniciaron una incipiente modernización, se produjo una minifundización tardía y predominan las relaciones salariales con la aplicación de la reforma agraria. Algunos campesinos tienen posibilidades de cierta acumulación, se habla kichwa y se mantienen muchos elementos culturales indígenas.

- **Zona con relaciones precapitalistas (D):** son zonas marginales en las que subsisten relaciones precapitalistas que mantienen sometida a una población indígena por parte de sectores mestizos que controlan el poder, a través de relaciones tradicionales. En ella se incluyen a Sigchos y Angamarca. Aquí se mantienen relaciones de aparcería entre 700 blancos y mestizos con unos cinco mil indígenas.

- **Zona de colonización (E):** Se localiza en la ceja occidental de la montaña. Es una zona subtropical de reciente colonización. Se produce caña de azúcar, café y cítricos. No hay grandes latifundios, predominan las fincas de tamaño mediano. Hay una vía, la Latacunga-Quevedo, que sin embargo sirve a un pequeño sector (La Maná, la Esperanza, Pilaló); en el resto hay caminos de segundo y tercer orden. La mayoría de habitantes proviene de la región interandina y de algunas provincias de la costa. En Pangua se produce aguardiente, elaborado por pequeñas empresas familiares. Solo en Ramón Campaña existen 2.000 trapiches ilegales. Funcionan complejas redes de comercialización, en donde la pequeña burguesía de la zona urbana desempeña un importante papel. También se produce naranja, café y cacao, que venden a comerciantes que recorren los caminos para comprar la producción.

- **Zona Urbana (F):** Corresponde a las zonas urbanas de Latacunga, Pujilí, Saquisilí y Salcedo. En estas zonas se concentran las actividades burocráticas-administrativas y las actividades comerciales. Ello las relaciona de manera muy dinámica con Quito. Las zonas de Pujilí, Saquisilí y

Salcedo son lugares de ferias semanales y están articuladas por el capital comercial. También se realizan actividades artesanales a tiempo completo, sobre todo cerámica en Pujilí²².

¿Qué pasó luego de esta primera gran modernización de la zona entre 1987 y el 2001? ¿Se produjo una nueva modernización en Cotopaxi, como ha acontecido en la Sierra Norte de Pichincha e Imbabura? Los datos del último censo del 2001, nos plantean algunas respuestas: se produjo una ampliación del 40% de la superficie bajo UPA, de 324.947 has a 457.199, es decir se “colonizó” nuevos territorios del flanco occidental; en la sierra los cultivos de pastos y papa crecieron muy poco, en cambio se abandonó el trigo y aparecieron de manera muy modesta nuevos productos como el tomate de árbol y las flores; la verdadera ampliación se produjo en la zona litoral, pero fue un cambio de expansión, más que de transformación: creció en 8,4 veces la producción de fréjol, en 4,8 veces la de cacao, en 3,4 veces la de café, en 2,7 veces la de maíz duro y en 1,5 veces de la banano. La producción de caña bajó en un 11% y apareció una modesta producción de palma africana y de maracuyá. Con esta ampliación, el balance general en la provincia entre pastos cultivados (77.127 has) y cultivos (89.652 has) se modificó ligeramente a favor de los cultivos. A nivel de la producción pecuaria, los cambios no fueron significativos: el número de vacunos creció 1,7 veces, el de porcinos, 1,97 veces, el de ovinos se mantuvo casi igual, apareciendo una importante producción de gallinas (Censo Agropecuario, 2001).

Nuestra conclusión es que no se produjo realmente una nueva modernización de la actividad agropecuaria en estos últimos años veinte en

Cotopaxi, se trató de un crecimiento de la región litoral con nuevos artículos primarios, un tímido apareamiento de nuevos productos en la sierra que no lograron masificarse y un pequeño crecimiento de la actividad porcina y avícola, que sin embargo, no lograron cambiar el modelo lechero. En este sentido, se cumplió el vaticino de Breuer de que, el modelo de oferta y demanda lechera por su inmovilismo, no otorgaban dinamia al modelo. Sin embargo, además de la ampliación de la “Zona de Colonización” se modificaron las relaciones precapitalistas que existían en la zona D, de manera que cambió moderadamente el Mapa trazado por el equipo de Naranjo en 1983.

La diferenciación campesina

Hacia 1920, cuando aún funcionaba el concertaje, comenzó una diferenciación incipiente de los campesinos. Aquellos conciertos que lograban buena producción y precios altos de sus productos, podían pagar al patrón sus obligaciones con dinero y dedicarse más a sus parcelas. También pudieron comprar tierras al hacendado (Arcos y Merchán, 1978:23) Es posible como argumenta Quintero, recogiendo a Paola Silva, que estos gérmenes de diferenciación campesina se daban, puesto que el huasipunguero titular era una especie de “centro” sobre el que se agrupaban: yanaperos, arimados, arrendatarios, partidarios y peones libres (Silva, 1978:33-34).

Sin embargo, los verdaderos procesos de diferenciación debían darse después de la reforma agraria, cuando los campesinos recibieron, también de manera diferencial,

tierras. La tradición interpretativa esperaba dos posibilidades: una diferenciación por la vía *junker* que al privilegiar la modernización de las grandes unidades, terminara proletarizando y disolviendo a las comunidades. La otra posibilidad era la vía campesina de modernización, por la cual, los campesinos lograran convertirse en *farmer*. Sorprendentemente, ni lo uno, ni lo otro se dio: otra vez, la experiencia europea, de la que se extraían estas posibilidades, servía muy poco para interpretar a los países andinos. Se trataba, sin duda, de un proceso muy complejo. La realidad se mostraba esquiva para las interpretaciones: si bien, era cierto que las diversas investigaciones encontraban importantes diferencias territoriales, procesos de proletarización incompleta denominados “sub o semi proletarización”, grandes migraciones estacionales que producían cambios culturales en las personas y una combinación muy amplia de estrategias de reproducción social, también era cierto que, a pesar de todos estos procesos, los indígenas buscaban, sobre todo, reconstruir sus comunidades.

La reforma agraria consolidó una clara diferencia territorial entre lo que Chiriboga llama Sierra Norte Empresarial (cuenca lechera entre Carchi y Latacunga) y sierra campesina (desde Latacunga al Sur del Ecuador); a tiempo que, remarcó la diferencia entre un campesinado mediano situado en la cordillera central húmeda y comunidades indígenas pobres ubicados en la cordillera occidental seca. Por ejemplo, Chiriboga encuentra que en 1985, los campesinos de Salcedo, uno de los importantes cantones de Cotopaxi, se habían diferenciado territorialmente: Salcedo Central y Occidental en que eran minifundistas el 97,15%

de las familias y tenían menos de 3 has. y el Salcedo Oriental que tenían mayor cantidad de tierras y lograban “altos rendimientos en el cultivo de papa, ajo, hortalizas e incluso ganadería” (Chiriboga, 1985:103-104). En el Salcedo Central y Occidental encuentra un importante proceso de “semiproletarización”: *una de cada cuatro personas en edad de trabajar debe salir de la zona*. Entre los migrantes temporales, anota que, *“el 78,2% de los que venden fuerza de trabajo son jefes de familia”*, pero ello, curiosamente, les permitía que *“una gran masa de campesinos pueda permanecer en el campo”* (Chiriboga, 1985:104). Esta diferenciación entre zona oriental y zona occidental era extensible a toda la zona serrana de Cotopaxi, seguía las condiciones ecológicas previas y configuraba una división perversa del espacio. Otra investigación mostró que los campesinos pobres debían combinar una serie de estrategias para poder sobrevivir: de 111 familias investigadas en Guaytacama por Arcos y Marchán, solo nueve vivían exclusivamente de la producción agropecuaria, en tanto las 97 combinaban la agricultura, la artesanía, el comercio y la venta de la fuerza de trabajo en las empresas agrícolas de la zona y fuera de ellas (Arcos y Marchán:33). Familias con menos tierra, combinaban también sus estrategias acentuando la migración: en la comuna de Pilacumbí, que es una comunidad históricamente de indios libres, frente a la escasez de tierra en 1984, se vieron obligados a migrar a Quito: el 42% de los jefes de familia migran regularmente, lo cual ha reorganizado la división del trabajo al interno de la familia (el 81,9% de las mujeres se dedican a la agricultura y sólo el 36,8% de los hombres se dedican a esta actividad). Una buena parte de los migrantes, el 45,7% se dedican a la construcción.

Otros venden su fuerza de trabajo en las empresas locales. Es decir, la modernización creó un amplio sector de oferentes estacionales de trabajo para Quito.

Sin embargo, también hubo campesinos que disponiendo de más tierra, pudieron emprender procesos más campesinos: Martínez en un estudio de los años 80 en la cooperativa de Cotopilaló, formada por 70 familias exhuasipungueros y exarrimados, encuentra dos cosas importantes, una fuerte vinculación al mercado a través de la venta de papas que ha dado lugar al apareamiento de un grupo de comerciantes campesinos, pero al mismo tiempo una baja proletarización: el 94,3% de los hombres y el 97,1% de las mujeres se dedica exclusivamente a la agricultura, aunque un 20,9% de ellos vende su fuerza de trabajo a los otros. Solo el 5,7% se dedican a la industria, construcción y artesanía y apenas un 4% de ellos son proletarios (Martínez, 1984:154). Martínez considera que allí se estaba produciendo una vía campesina de desarrollo, *“cuyo primer éxito puede resumirse en: aumento de la producción sin expulsión de fuerza de trabajo* (ibid:171).

Tomando en cuenta todos estos estudios, habrían cinco factores de diferenciación campesina: (i) una previa a la modernización, dada por las condiciones heterogéneas de los huasipungueros (Buitrón establece que habían huasipungueros con una y media cuerdas de extensión e ingresos de 966,25 sucres y otros que tenían 6 a 7 has que satisfacían sus necesidades, generaban excedentes y contaban hasta con 5 cabezas de ganado (Buitrón:35); (ii) la inserción al mercado de ciertos huasipungueros, tal como los de Guaytacama; (iii) la presencia, desde la reforma agraria,

de relaciones salariales. También puede deberse a un acceso diferencial a tierras en el momento de la Reforma Agraria, como el caso de Cotopilaló estudiado por Martínez: el 68,4% de los huasipungueros tenía entre 5 y 18 has., o la diferencia entre arrimados que no recibieron tierra y los huasipungueros que sí accedieron a ella; (iv) el acceso al riego, el acceso a fuerza de trabajo (contratación o movilización a través de mecanismos de reciprocidad cuando se tiene más tierras o grandes parentelas) y el modo de cultivo (arado a bueyes). En la zona también ha sido importante el modo de vida (ahorro personal, religión evangélica, eliminación del licor y del priestazgo); y (v) una diferenciación por comunas (entre aquellas que tenían tierras comunales y la que no las tenían). De 7 comunas de Guaytacama, a mediados de los 70, tres poseían tierras comunales y las otras cuatro no. Una tenía riego y las otras seis no (la comuna Pupuna Norte del río Puman-cuchi). También accedían al crédito del Banco de Fomento para comprar abono químico, utilizaban tractores alquilados y poseían ganado vacuno. Ellos producían leche que la entregaban a la pasteurizadora: empero, apenas representaba el 1% de la leche que allí se procesaba). Muchos extendieron sus propiedades a merced de campesinos arruinados que abandonaban el campo; accedían a fuerza de trabajo asalariada y habían convertido en aparceros a muchos campesinos (Arcos y Marchán).

Sin embargo, estos estudios que recogen un proceso de diferenciación real, olvidaban un importante detalle: estos procesos se daban en medio de familias indígenas que eran portadoras de elementos comunitarios andinos y que su estrategia

principal era la reconstrucción de la comunidad, por lo que en verdad, las estrategias de diferenciación estaban atravesadas por el comunitarismo, lo cual nos permite hablar de “una vía comunitaria andina de sobrevivencia y diferenciación campesina”²³. Los elementos de esa “vía comunitaria” son bastantes claros: funcionan mecanismos de reciprocidad comunitaria para el acceso a la tierra. Sánchez Parga, mostró para el caso de Salamag Chico, toda una estrategia de parentesco para acceder y controlar franjas de tierra por casamientos, compadrazgos y por formas de reciprocidad muy variados²⁴. También el acceso a la fuerza de trabajo apela a instituciones comunitarias (maquitamañachic, randimpak), al reparto de la producción (chucchir o ración), que bien pueden incluir algún tipo de salario y comida, así como otras prestaciones (de animales de tiro, reproductores e incluso préstamos económicos), que muestran una “vía

comunera” no tanto de desarrollo, sino de sobrevivencia. Tampoco se trata de una comunidad homogénea. Sin duda, estas formas comunitarias, incluyen también procesos asimétricos y permiten procesos de diferenciación. Sin embargo, al inscribirse dentro de una lógica comunitaria, los procesos de diferenciación son matizados. La comunidad aparece, como ese espacio territorial de pertenencia e identidad, en el que conviven familias de diverso nivel económico formando pequeñas redes de afinidad y parentesco, que tienen relaciones jerárquicas atravesadas por un discurso comunitario. Debe reconocerse que, en la zona, las comunidades mantienen un fuerte control de estos procesos, y que ellos constituyen la base de su comportamiento corporativo, que dio origen al proceso de revitalización y organización étnica que es ahora perceptible, a pesar de la diferenciación y pauperización que vive la zona.

23 Este tema lo desarrollé ampliamente en: Ramón, Galo, et.al, Comunidad andina y desarrollo endógeno, 1982, CAAP.

24 Sánchez, Parga, Estructuras de Parentesco e los Andes, Salamag Chico, 1984: 154-216

CAPÍTULO 3

EL COMPORTAMIENTO POLÍTICO INDÍGENA

El comportamiento político indígena y su capacidad de incidir en el rumbo de los acontecimientos depende de dos factores: de su peso cuantitativo y de su capacidad cualitativa, es decir, su organización, su capacidad de movilización, generación de propuestas, establecimiento de alianzas y de negociación. Desde el punto de vista cuantitativo, la población indígena de Cotopaxi que fue mayoritaria hasta finales del siglo XVIII, había ido descendiendo paulatinamente hasta 1830 cuando se creó el estado nacional. Entre 1830 y 1950 se produjo un descenso significativo. Lamentablemente, no hay información disponible de la población en el período intermedio de esas dos fechas. Demasiado tiempo en que ocurrieron muchos cambios: la movilización compulsiva de población indígena para construir las obras nacionales, realizada por García Moreno entre 1860-70 y el pago en trabajo o “contribución subsidiaria” que cobraban los municipios locales a los indios hasta 1895; la pérdida de la capacidad de la hacienda serrana de su capacidad de adscribir a los indios a sus predios y las migraciones masivas a la costa entre 1870 y 1930 en medio del boom cacaotero; y el ataque a la servidumbre realizado por la revolución liberal para liberar a la fuerza de trabajo, entre 1916 y 1950. No es posible calibrar el impacto de cada una de estas grandes coyunturas, pero juntas promovieron una amplia movilización indígena fuera de sus comunidades que produjeron en común, aculturación y mestizaje. Para 1950, la población

indígena de Cotopaxi cayó drásticamente al 38,3% y es minoritaria en la provincia. Desde esa fecha, hay un lento descenso hasta que en el 2001, significa el 24,8%. Este descenso lento tiene que ver con la poderosa revitalización étnica que vivió la zona a partir de 1970, que sin embargo, no ha sido suficiente para detener los procesos de aculturación.

Sin embargo, la presencia indígena es importante en la zona, de manera que ha jugado y continuará jugando un papel central en los procesos hacia el futuro.

Veamos los datos de población, antes de examinar el comportamiento político:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN COTOPAXI:

1783-2001

Años	Total	Indígena	%	Fuentes
1783	50.280	38.027	75,6	ANH,Q.Numeración Corral y Narrío
1825	67.856	55.814	82,3	Empadronamientos; Enumeración de Villalengua, AGI, Q381 o 412
1950	165.602	63.426	38,3	INEC, Censo 1950
1962	192.633	68.259	35,4	INEC, Censo 1962 y Estimaciones Galo Ramón
1974	236.313	72.460	30,7	INEC, Censo 1974 y Estimaciones Galo Ramón
1982	273.575	77.145	28,2	INEC, Censo de 1982 y Estimaciones Galo Ramón
1990	286.926	81.016	28,2	INEC, Censo 1990 y Estimaciones Galo Ramón
1995	331.860	83.534	25,2	Estimaciones Galo Ramón
2001	349.540	86.658	24,8	INEC, Censo 2001 y Estimaciones Galo Ramón

Indios sueltos e indios de hacienda y poder local

La diferencia entre indios sueltos e indios de hacienda, clasificación que comenzó a usarse profusamente desde inicios del siglo XIX, no era una división formal, sino que tocaba profundamente a los comportamientos políticos, sobre todo, después de la supresión del tributo y de los grandes caciques. Los indios sueltos vivían en pequeñas parcialidades que debían relacionarse directamente con los poderes locales parroquiales: los tenientes políticos, registradores oficiales y los tinterillos, los comerciantes y chicheros, los curas, los hacendados, mayordomos y arrendatarios de haciendas tomados como un conjunto, los rematadores de diezmos y en general todos los blancos de los pueblos. Los “indios sueltos” estaban sometidos a un conjunto de relaciones inequitativas y de abusos: debían pagar el trabajo subsidiario en dinero o fuerza de trabajo, eran reclutados forzosamente para realizar obras públicas; debían pagar los diezmos y arreglar las iglesias y cementerios; debían construir los “embarrerados” para los juegos de toros en las fiestas de los pueblos; debían pagar coimas y multas a los tenientes políticos y registradores públicos; entre otras. Al perder a sus grandes caciques, las parcialidades debieron, como bien lo destaca Kim Clark, atraer al estado liberal como estrategia para manejar los abusos del poder local. En muchos casos se apropiaron de ese discurso, lo combinaron con aquello de ser “pobrecitos e ignorantes”, logrando en algunos casos frenar los reclutamientos forzados y otras exacciones (Clark, 2004: 120). En otras ocasiones, lograron negociar con los municipios locales el pago del trabajo subsidiario en fuerza de trabajo a cambio de mantener el

acceso a tierras comunales o a cierta autonomía interna. Lo interesante de las parcialidades, es que, a pesar de la brutal dominación en la que vivían, fueron las que mantuvieron la idea de “comuna” que sirvió luego como modelo de vida a los indios que rompían con la hacienda.

Por su parte, los indios sujetos a la hacienda, tenían una relación “mediatizada” con el conjunto del poder local, por su relación directa con el patrón. Los estudios de diversas haciendas nos muestran que, en el espacio hacendario se producían relaciones de explotación y violencia, matizados por complejas relaciones rituales que buscaban establecer “pactos” de convivencia entre indios y hacendados (Ramón, 1987, Guerrero, 1991). Sin embargo, en el caso de Cotopaxi, una buena parte de las haciendas eran manejadas por arrendatarios interesados en maximizar los coeficientes de explotación de sus trabajadores, antes que reeditar pactos de continuidad, razón por la cual, estas relaciones adquirieron mayor dureza y violencia. La documentación recogida por Marchán, a la que ya nos hemos referido anteriormente, muestra una serie de conflictos de “baja intensidad”: siete juicios de cuentas entre indígenas y arrendatarios, uno de ellos con maltratos físicos. También se constatan otros seis juicios entre propietarios y arrendatarios; un despojo de tierra de un arrendatario de la hacienda Cusigpe contra la comunidad, otro a los indígenas de Guangaje y otro más en Suritambo (Marchán, 1986).

Aparecen en la documentación referida una serie de nuevos conflictos: cuatro juicios por abigeato entre 1856 y 1884, atribuidos generalmente a indígenas, cuestión que puede encubrir problemas entre las haciendas y

los indios sueltos. También dos juicios de servidumbre de tránsito, uno en 1888 y el otro en 1907, que revelan el control territorial y la presión hacendaria contra los indios sueltos. También son reveladores cinco juicios de aguas entre la hacienda y los pobladores de San Miguel, Guaytacama y Mulaló. En el caso de Guaytacama deben convenir en sacar una acequia que sirva tanto al pueblo, como a la hacienda: estos problemas serán un típico tema de la modernidad.

La organización de los indios de hacienda, la comuna y las organizaciones actuales

Los indios sujetos a las haciendas comenzaron a tener problemas agudos en los años 1930-40, especialmente en las haciendas arrendadas. Es probable que estos problemas ya existieran antes, pero que se expresaran como conflicto público en esa década, por el apoyo que el partido comunista y la FEI les otorgaron. Celso Fiallos, un antiguo militante comunista me refirió su estancia en las haciendas de la Universidad Central, en Salamalag Chico, Guangaje y La Provincia apoyando las luchas. Lo más notable, más allá del apoyo a las reivindicaciones indígenas, fue el notorio desencuentro entre los sueños de uno y de otro: *“éramos personas acostados en la misma cama, pero con distintos sueños”*, acota Celso. En efecto, los indios pedían en esos años “la entrega de nuevos husipungos” a los hijos y arrimados, en tanto los comunistas planteaban la subida de los salarios y la formación de “koljoses” (cooperativas rusas) para la producción de la tierra.

El salto entre una conciencia por reclamar la vigencia del antiguo pacto entre hacienda/trabajadores y el reclamo de la tierra, tuvo varios caminos. El pacto se rompió más fácilmente cuando la relación enfrentaba a trabajadores con arrendatarios, porque estos últimos no tenían la legitimidad del patrón y además al sobreexplotar a los trabajadores rompían toda posibilidad de pacto aceptable. Sobre esa ilegitimidad pudo trabajar la izquierda para encontrarse con el pensamiento campesino. Por ejemplo, en la década de los 40, los campesinos de las haciendas de Cotopilaló y Razuyacu” relataron a los de CESA que estas haciendas de la Curia Metropolitana de Quito

“eran arrendadas por el terrateniente Tapia Vargas, éste explotaba inmisericordemente a los huasipungueros; éstos inclusive recibían castigos y maltratos físicos... había implementado un sistema de represión y terror con el objeto de mantener sumisos a sus trabajadores y extraer mayor cantidad de renta de trabajo y productos. Ante esta situación, los huasipungueros empiezan a organizarse para “ver qué hacer ante los maltratos del patrón”; se reúnen por primera vez en la casa del huasipunguero Antonio Corrales (Cotopilaló) y tras esta primera experiencia logran realizar cada vez más reuniones. A estas reuniones las denominan “juntas” y son el primer germen de las actuales organizaciones campesinas del área... Los representantes de las “juntas” luego de la muerte violenta del huasipunguero Manuel Herrera en 1949 (muerte causada por maltratos físicos por parte del terrateniente) viajan a Quito y se contactan con la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) ligada al partido Comunista del Ecuador. La FEI se transforma en la asesora de las juntas para lograr algunas reivindicaciones de los huasipungueros (fundamentalmente mejores condiciones

de trabajo). Este proceso Juntas / FEI, dura hasta 1966 aproximadamente, año que los huasipungueros acceden a la tierra y se empieza a constituir las actuales formas organizativas, las comunidades. Posteriormente, en la década de 1970 con la presencia de CESA y de otros agentes externos (principalmente partidos políticos de izquierda), se gesta la primera organización de segundo grado que aglutina a las comunidades de base: Mushuc Patria (Patria Nueva); esta organización es atacada por el Estado y sus instituciones, por los partidos políticos de derecha, por el poder local representado por los nuevos terratenientes ("cholocracia") y por el párroco de Toacazo; la principal acusación que se hace a Mushuc Patria es de comunistas y revolucionarios. A finales de la década de 1970, los campesinos organizados alrededor de Mushuc Patria, deciden cambiar de nombre y, se constituye la actual Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, UNOCANC" (CESA, 1987:25-26).

Otro camino, fue el explorado por la iglesia progresista, que en Cotopaxi, tomó como bandera la educación. En palabras de sus autores, el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi, SEIC,

"la experiencia nace en la zona de Quilotoa, en el páramo talvez más alto de la provincia de Cotopaxi... Por los años 70 frente a un analfabetismo casi absoluto, cerca del 80% de esta zona, la educación nace para dar respuesta a los procesos de desarrollo y liberación necesarios en un pueblo que se enfrentaba a la lucha por la tierra, por un comercio justo y por la educación. En 1976 en la comuna de Guayuma existía un centro de alfabetización bilingüe y luego en un punto importante en la batalla por la tierra. Era una escuela diferente a las escuelas hispano hablantes, valoraba la cultura, el idioma materno, los valores y decisiones eran comunitarios,

tenían educadores del lugar, y era vigilada por la misma comunidad... En el año 1977 la experiencia de esta comuna se traslada a la parroquia Zumbahua, y nace la primera escuela en la comuna de Sarahusha, y aquí la escuela también tiene su génesis para contrarrestar el poder de los cabecillas que habían surgido como herencia de los tiempos de la hacienda" (Farfán y Martínez, 1993:134).

El encuentro entre el pensamiento progresista de la iglesia y el campesinado se da en nivel de la cultura y en el propio idioma, lo cual permitía otra lectura del problema de la tierra: hacerlo desde la conciencia étnica. Pero adicionalmente, la iglesia progresista buscaba romper la estructura de "cabecillas" que enfrentó a la hacienda, así como, unir el tema de la tierra con el "comercio justo" y desarrollo", dimensiones que no estuvieron en la óptica de la izquierda comunista. Era un camino difícil de recorrer por los cambios que ello implicaba. No obstante, por la tenacidad de los activistas de la iglesia, el proceso logró formar educadores comunitarios bilingües reconocidos y crear el centro de educación media "Jatari Unancha", en 1989. Esta experiencia influirá en el proceso nacional de construcción de la educación bilingüe, pero tendrá dificultades para lograr los otros propósitos.

El camino para el salto de la lucha por la tierra a la conciencia étnica, fue mejor interpretado por las organizaciones de segundo grado apoyadas por "algunas instituciones privadas" que crearon el Movimiento Indígena de Cotopaxi", MIC. La reivindicación del kichwa fue la base de la afirmación étnica, tal como lo escribe Jorge Guamán

"estuvo por desaparecer el quichua, y los indígenas mas bien tenían recelo

de hablar el quichua en los vehículos, no poder interpretar, peor en las oficinas”, entonces “el 8 de diciembre de 1981 nace la radio para el trabajo con la población indígena” (Guamán, 1993:199).

Obviamente, no solo fue radio Latacunga la que aportó al proceso de revalorización del kichwa, también lo hizo la educación bilingüe y los propios evangélicos. La diferencia del MICC es que, a la par fue creando estructuras organizativas de segundo grado que ofrecieron una nueva proyección a las organizaciones comunales y trabajó con los clanes familiares que se incorporan al proceso con todas sus redes. Se juntaron entonces, estructuras modernas como las organizaciones de segundo grado, con comportamientos corporativos comunales y clanes familiares de antigua data: tal el encuentro que hizo posible el surgimiento de un movimiento indígena en una zona colapsada, que parecía destinada a la proletarización y migración definitivas.

El avance sobre los gobiernos seccionales

El siguiente reto del movimiento indígena fue pasar de la conciencia étnica a los temas del desarrollo y el poder local. El reto ha sido asumido a través de la participación política formal en las elecciones para disputarse los poderes seccionales. Para ello, el MICC negocia con sus OSGs y con los clanes familiares las candidaturas, buscando polarizar la contradicción étnica (indios-mestizos), promoviendo un voto corporativo (resoluciones comunales que deben

ser observadas por todos los miembros) y con alianzas corporativas (con las organizaciones campesinas de La Maná, a las que se les pide un comportamiento similar a las comunidades indígenas). Es decir que, la frontera étnica se une, en cierta manera con el corte rural/urbano, para lograr resultados positivos. Los líderes educados en el sistema de educación bilingüe y otros, en el aparato formal, encabezan estos procesos, logrando controlar algunos gobiernos locales frente a la atomización del mundo mestizo, que por carecer de una clase dominante unificada, no logran presentar un bloque unitario. Desde el punto de vista de la táctica, la combinación de las contradicciones clasista, rural/urbanas, comportamiento corporativo y liderazgo escolarizado, se ha mostrado eficaz hasta el momento, pero tiene limitaciones

El problema más duro, es plantearse el problema del desarrollo local. Por el momento, el movimiento indígena apuesta a una administración más equitativa y racional de las rentas estatales (el 15% que se entrega a los gobiernos seccionales). El planeamiento participativo (provincial, cantonal y parroquial) busca una inversión más equitativa en líneas como: educación, salud y saneamiento, fortalecimiento socio-organizativo, desarrollo urbano, agropecuaria, comercialización, turismo, artesanía y en la dimensión ambiental como campo transversal²⁵. El consenso de los gobiernos locales, las organizaciones sociales y los comités interinstitucionales, buscan ser la clave de la coordinación, implementación, movilización de recursos y vigilancia del proceso (ibid:13).

La propuesta ha logrado movilizar, en el proceso de planeamiento provincial a cerca de cuatro mil personas, que representan a numerosos actores locales y de apoyo externo. El proceso ha permitido identificar áreas estratégicas, políticas y un conjunto de programas y proyectos. También se han formado técnicos locales y se ha consolidado el apoyo de los agentes de desarrollo que están dispuestos a mantener su trabajo en el área. Es decir, se están creando condiciones para una nueva “gobernalidad local”. Sin embargo, aunque ya se cumplieron los primeros cuatro años de gobierno provincial, no disponemos de datos duros que muestren que la administración de los gobiernos ha logrado mayor equidad y eficacia.

La posibilidad de ir más allá de la buena administración del 15% de las rentas estatales, plantea una serie de nuevos retos. De ellos resultan estratégicos cuatro: primero, un nuevo

ordenamiento territorial que permita reconstruir las bases productivas (manejo de suelo, cubierta vegetal y agua) de la zona central y occidental; segundo, una nueva propuesta de modernización que busque un pacto con los empresarios, sobre todo de la sierra, para promover líneas que generen mayor empleo local, para, por esa vía y la de los impuestos locales, redistribuir los beneficios; tercero, una combinación de los métodos de participación corporativa, con formas ciudadanas modernas, que adicionalmente, posibiliten pasar a un discurso de la interculturalidad, más que las opciones dualistas y las prácticas corporativas; y cuarto, la posibilidad de desarrollar un pacto de reinversión local con todas las fuerzas económicas que actúan en la zona, para crear una economía local. El procesamiento de la producción primaria, especialmente costeña, parece una alternativa potente. Tal las expectativas para un cambio profundo.

25 Ver, Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi, Consejo Provincial, et.all, 2004

CONCLUSIONES

Entre 1740 y la actualidad, Cotopaxi ha atravesado por dos grandes períodos: el de la hacienda-obraje que se consolidó tras la crisis del sector textil entre 1740 y 1910; y un segundo período de modernización agraria, de la mano de la producción lechera hasta 1980 y a través de la expansión a la zona subtropical occidental, desde entonces. En la actualidad se preanuncia un posible nuevo período, que provisionalmente lo denominaríamos de “redistribución indígena”, que ha comenzado, pero aún no tiene el suficiente tiempo histórico para su evaluación.

En cada uno de estos períodos es posible reconocer algunos subperíodos. En el período de la hacienda-obraje, podemos identificar tres subperíodos: el del predominio del obraje sobre la hacienda entre 1740 y 1790; el del predominio de la hacienda sobre la producción obrajera entre 1790 y 1870; y la consolidación de la hacienda entre 1870 y 1910, en la que prácticamente desaparecen todos los obrajes de la zona. En todos estos subperíodos, jugó un papel notable la influencia positiva o negativa del mercado externo que fue el que definió los períodos de auge o crisis del obraje, su rearticulación al mercado colombiano, la consolidación de la hacienda lechera y cerealera y su escasa articulación al auge cacaotero. Sin embargo, también tuvo importancia central en la zona el factor telúrico, sobre todo las erupciones del volcán Cotopaxi que ayudaron a sepultar bajo sus ruinas los procesos de crisis provocados por el mercado. En todo este período, fue notable la existencia

de una clase dominante extralocal, generalmente ubicada en Quito, pero representada por arrendatarios que tenían escaso compromiso con el desarrollo de la zona, por esta razón, funcionaba un conjunto de poderes locales pequeños, que tampoco lograron una propuesta hegemónica para Cotopaxi. Por su parte, el mundo indígena, tras la crisis de sus cacicazgos y la consolidación de la hacienda-obraje, debió luchar o negociar en dos frentes: el de los indios libres con los sistemas de dominación local; y el de los indios sujetos con sus respectivos hacendados. Fue sin duda una lucha por la resistencia, que aunque costó una importante mestización, permitió el mantenimiento del referente comunal, posibilitó acumular experiencia en la relación con el estado y el discurso liberal para usarlo a su favor y convertir a la hacienda en un espacio de reproducción étnica.

El segundo período fue más activo. Registró un subperíodo entre 1910 y 1960 de tímida modernización de la hacienda, que buscaba el cambio entre salidas tradicionales y de modernización. El cambio se precipitó de manera rápida, entre 1960 y 1980, en el que la hacienda se modernizó masivamente, adoptando, todas aquellas que pudieron hacerlo, la estrategia de producción lechera, por la vía “junkner”. El proceso de modernización se estancó literalmente en 1980, en estos últimos veinte años asistimos a una ampliación de la colonización e incorporación de la zona subtropical y al abatimiento de las relaciones precapitalistas, proceso que no representa, en nuestra

opinión, una nueva modernización, sino una mera ampliación de las tendencias anteriores. La modernización que se produjo en la zona fue absolutamente inequitativa para los indígenas que debieron agruparse en la cordillera occidental, sometida a prácticas intensivas e inapropiadas (quema del páramo, ampliación de la frontera agrícola a la altura, acciones mecánicas contra la pendiente, cosecha del abono orgánico animal para venderlo fuera del ecosistema, monocultivos de cereales por migración) se desertizaron rápidamente, sucumbiendo a la intensa erosión eólica e hídrica que siempre azotó a los suelos. Por su inmovilismo, el proceso de modernización tendió a consolidar la inequidad, no abrió oportunidades de empleo masivo, tampoco dinamizó a su propio desarrollo, de manera que se concentró en el valle regado, con estrategias productivas que hoy resultan cuestionables. El proceso de modernización creó un nuevo mapa de distribución del desarrollo capitalista, desigual y heterogéneo, con

zonas precapitalistas, artesanales y de resistencia étnica.

Lo más significativo del proceso fue el surgimiento del movimiento indígena por diversos caminos, que permitieron pasar de una lucha por pactos justos con la hacienda a la reivindicación de la tierra, y de ésta a una conciencia étnica. La formación de organizaciones de segundo grado de carácter local, llevó a una disputa de los gobiernos locales, en los que han tenido cierto éxito al movilizar alianzas étnicas y corporativas. En este punto, el movimiento indígena se enfrenta al verdadero reto de lograr alianzas interculturales de mayor envergadura y de una ciudadanía más democrática, buscar el desarrollo sostenible, afectar la estructura inequitativa de la provincia y recuperar masivamente los ecosistemas afectados. ¿Será posible que este nuevo proceso nos lleve a un período de crecimiento más racional, equitativo y sostenido de la zona de la mano de los indígenas? Tal es el reto.

BIBLIOGRAFÍA

Archivos

ANH, Indígenas, 37, 1720
ANH, Q, Cacicazgos
ANH, Q, Empadronamientos, Numeración de Corral y Narrio, 1783;
Empadronamientos; Enumeración de Villalengua, 1825
ANH, Q, Censos y Capellanías, C.76:1821-23
ANH, Q, Numeración Corral y Narrio

Libros, revistas y artículos

- Arcos, Carlos
1984 Espíritu de Progreso: los hacendados en el Ecuador del 900,
Revista Cultura, BCE, Vol. VII, 19: 107-134, Quito.
- Arcos, Carlos y Carlos Marchán
1978 Guaytacama y Cusubamba: Dos modalidades de Desarrollo de la
Agricultura Serrana, Revista de Ciencias sociales, Vol.II, 5: 13-51,
Quito.
- Assadourian, Carlos
1982:121 El espacio peruano, IEP, 1982, Lima
- Barsky, Oswaldo
1984 Reforma Agraria Ecuatoriana, CEN, FLACSO, Quito
- Barsky, Oswaldo y Gustavo Cosse
1981 Tecnología y cambio social. Las haciendas lecheras en el Ecuador,
FLACSO, Quito
- Borchart, Cristiana,
1988 La Audiencia de Quito, Aspectos económicos y sociales,
Pendoneres 23, IOA, 1998, Otavalo
- Breuer, Toni,
1993 ¿“Agribusiness” estímulo al desarrollo?: el caso de la economía
lechera en los Andes ecuatorianos, en Geografía Agraria, Vol 5,
CEN,
- CESA,
1987 Proyecto T:T:P: una experiencia de participación campesina,
CESA-UNOCANC, 1987, Quito
- Chiriboga, Manuel
1984 “La crisis agraria en el Ecuador: Tendencias y Contradicciones
del Reciente Proceso”, en Louis Lefebvre (Ed.) Economía Política
del Ecuador, CEN, Quito: 91-132.

Cicala, Mario 1994 (1771)	Descripción histórico-topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús, IGM, Aurelio Espinosa Pólit, 1994, Quito
Clark, Kim 2003	La formación del Estado ecuatoriano en el campo y la ciudad, 1895-1925, en Procesos 19, 2003, UASB, TEHIS, CEN, Quito
Guamán, Jorge 1993	La comunicación y la educación no formal, en Interculturalidad y Educación Bilingüe, COMUNIDEC, FIA, 1993, Quito
Guerrero, Andrés 1991	La Semántica de la dominación. Libri Mundi, Quito
INEC,	Censo 1950; 1962; 1974; 1982; 1990; 2001
Jurado, Fernando, S/f	Sancho Hacho: orígenes de la formación mestiza ecuatoriana, s/f. ABYA YALA-CEDECO
Kennedy, Alexandra y Carmen Fauria Roma 1988	Obrajes en la Audiencia de Quito: Tilupulo, en Revista Historia Económica Ecuatoriana, No.4, 1988, BCE, Quito
MAG-Proyecto SICA, INEC 2001	III Censo Nacional Agropecuario
Marchán, Carlos 1986	Estructura Agraria de la Sierra Centro-Norte, T.II, BCE, Quito
Martínez, Luciano 1986	Articulación Mercantil de las Comunidades Indígenas de la Sierra Ecuatoriana, en Louis Lefebvre (Ed.) Economía Política del Ecuador, CEN, Quito
Moreno, Segundo 1995	Sublevaciones Indígenas de la Audiencia de Quito, ABYA YALA, Quito
Naranjo, Marcelo (Coordinador) 1983	Cultura Popular en el Ecuador, T.II, Cotopaxi, CIDAP
Consejo Provincial de Cotopaxi 2004	Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi, Consejo Provincial, Cotopaxi
PRONAREG-ORSTOM 1980	Las Zonas Socio-Económicas Actualmente Homogéneas de la Sierra, en "Diagnóstico Socio-económico del medio rural Ecuatoriano, T.II, Quito

-
- Quintero, Rafael y Erika Silva
1991 Ecuador, una nación en ciernes, Colección Estudios, T:II y III, Quito
- Ramón, Galo, et.al,
Comunidad andina y desarrollo endógeno, CAAP, Quito.
- Ramón, Galo,
1991 Los indios y la constitución del Estado Nacional, en Los Andes en la Encrucijada, FLACSO, Quito
- Saint Geours, Yves,
1994 Economía y Sociedad. La Sierra Centro Norte, (1830-1875), en Nueva Historia, Vol.7, CEN, Grijalvo, Quito
- Salomon, Frank,
1985 El shamanismo y la resistencia indígena en el Ecuador, Cultura 21, BCE, Quito.
- Sánchez, Parga,
1984 Estructuras de Parentesco en los Andes, Salamalag Chico, 1984, CAAP, Quito
- Stevenson, William
1994 Narración histórica y descriptiva de 20 años de residencia en Sudamérica, ABYA YALA, Quito
- Sylva, Paola
1986 Gamonalismo y Lucha Campesina, ABYA YALA, Quito
- Tyrer, Robson
Udo Oberem:
1981 "Indios libres e indios sujetos a haciendas...", 1804-05, Pendoneros 20, IOA, Otavalo
- Velasco, Juan
1994 (1780) La Historia del Reino de Quito, T.III, BCE, Quito
- Villavicencio, Manuel,
1984 Geografía de la República del Ecuador, CEN, Quito

ANEXO

COTOPAXI:

Bibliografía comentada 1740-2001

Esta bibliografía ha sido preparada para los estudiantes de desarrollo local de Cotopaxi, del programa IEE-CAMAREN. Tiene como objetivo ofrecer una bibliografía comentada básica sobre los principales trabajos que se han realizado sobre el área entre 1740 y el 2001. Aunque la bibliografía podría ser extensa, debido a que, la zona de Cotopaxi o aspectos del contexto están en un considerable número de trabajos, se ha seleccionado aquella que es imprescindible en toda reflexión sobre el área. La bibliografía ayudará a los estudiantes a preparar los trabajos derivados del curso y será una ayuda permanente para su ejercicio posacadémico en el trabajo práctico. Para facilitar la revisión de la bibliografía se la ha dividido en temas que siguen un orden cronológico, según los subperíodos históricos que ha atravesado Cotopaxi en los tiempos señalados. Se proponer 21 textos. Para cada material se ofrece una breve reseña sobre aquellos aspectos que trata cada texto y que son relevantes para el área de estudio.

1. Sobre la crisis textil del siglo XVIII

- *Borchart, Cristiana, La Audiencia de Quito, Aspectos económicos y sociales, Pendoneros 23, IOA, 1998, Otavalo.* Estudia la producción textil en la Audiencia de Quito, el auge en el siglo XVII y crisis del siglo XVIII. Analiza las reformas borbónicas que impactaron en el mercado de los textiles y en la reorganización administrativa. El estudio permite analizar el

contexto general de la crisis.

- *Moreno, Segundo, Sublevaciones Indígenas de la Audiencia de Quito, ABYA YALA, 1995, Quito.* Uno de los aspectos más importantes de la crisis textil y de la imposición de las reformas borbónicas, fue el ciclo de levantamientos ocurridos en la Audiencia en el siglo XVIII. El autor ofrece una descripción detallada de cada levantamiento, proponiendo adicionalmente, causas específicas, más allá de los temas económicos. El levantamiento de 1771 de San Felipe es particularmente relevante para el área de estudio.

2. La formación de los complejos obraje-hacienda

- *Kennedy, Alexandra y Carmen Fauria Roma, Obrajes en la Audiencia de Quito: Tilupulo, en Revista Historia Económica Ecuatoriana, No.4, 1988, BCE, Quito.* A través de un estudio de caso, las autoras analizan la formación y funcionamiento de uno los complejos jesuitas más importantes del área, formado por varias haciendas agropecuarias que abastecían al obraje. Las autoras analizan sus intentos de modernización, su crisis en el siglo XIX y su transformación en una hacienda agropecuaria a finales de ese siglo.

3. La hacienda y la economía en el siglo XIX

- *Udo Oberem: "Indios libres e indios sujetos a haciendas...", 1804-05, Pendoneros 20, IOA, 1981, Otavalo.* Los indios fueron clasificados en el siglo XVIII con relación a la sujeción a la hacienda, en

“libres” es decir que no eran trabajadores de la hacienda, y en “sujetos”, que trabajaban como conciertos en ella. Esta distinción, en principio fiscal, porque estaba relacionada sobre a través de quién debía pagarse el tributo, resultó fundamental en los comportamientos políticos. Oberem hace un balance del número de indios que estaban en una u otra condición al iniciar el siglo XIX, pueblo por pueblo, lo cual nos permite calibrar la situación de la hacienda y de los señoríos étnicos tras la crisis del siglo XVIII.

- *Saint Geours, Yves, Economía y Sociedad. La Sierra Centro Norte, (1830-1875), en Nueva Historia, Vol.7, CEN, Grijalvo, 1994, Quito.* Este artículo estudia de manera específica a la región centronorte de la Audiencia de Quito (Quito-Riobamba). Analiza los aspectos clave que configuran la región, de manera que permite entender a Cotopaxi, dentro de su contexto en el siglo XIX.

4. La Formación del Estado Nacional y las localidades

- *Ramón, Galo, Estado y Localidades en el siglo XIX, en “El Desarrollo Local en el Ecuador, historia y métodos, COMUNIDEC, 2004, Quito.* El autor estudia la integración nacional en el siglo XIX, como un proceso de negociación y conflictos entre el aparato central, las regiones y las localidades. El análisis nos ofrece un contexto de los principales debates suscitados en el Ecuador alrededor tema, cuestión que permite ubicar a la localidad de Cotopaxi.
- *Clark, Kim, La formación del Estado ecuatoriano en el campo y la ciudad, 1895-1925, en Procesos 19, 2003, UASB, TEHIS, CEN, Quito.* Es un trabajo muy útil para entender la relación entre Estado Central, poderes locales

y comunidades indígenas libres en el contexto liberal. La autora muestra cómo las comunidades debieron atraer al estado e incluso apropiarse del discurso liberal para contener los abusos de los sistemas de dominación local. Un estudio similar hace falta para Cotopaxi.

5. La Modernización Agraria

- *Arcos, Carlos, Espíritu de Progreso: los hacendados en el Ecuador del 900, Revista Cultura, BCE, 1984 Vol. VII, 19: 107-134, Quito.* Analiza las mentalidades de los terratenientes modernizantes que estaban dispuestos a introducir cambios en las relaciones internas de la hacienda. Util para calibrar los debates en torno al tema.
- *Arcos, Carlos y Carlos Marchán, Guaytacama y Cusubamba: Dos modalidades de Desarrollo de la Agricultura Serrana, Revista de Ciencias sociales, 1978, Vol. II, 5: 13-51, Quito.* Estudio pionero sobre los procesos de modernización de haciendas de una localidad de la zona. Ofrece mucho material empírico básico para analizar las diversas estrategias campesinas tras los procesos de ruptura con la hacienda.
- *Barsky, Oswaldo, Reforma Agraria Ecuatoriana, CEN, FLACSO, 1984, Quito.* El autor desarrolló una tesis controvertida, según la cual, el proceso de modernización de las haciendas serranas, fue comandado por un sector modernizante de la clase terrateniente. La Reforma Agraria solo habría complementado ese proceso. Recoge mucha información estadística, útil para calibrar los cambios en el agro serrano.

-
- *Ecuador, FLACSO, 1981, Quito.* La modernización de la sierra norte del Ecuador se operó de la mano de la producción lechera. Los autores estudian los cambios tecnológicos, el papel del estado y los terratenientes modernos en estos procesos. Muy útil para analizar los cambios en la llamada “cuenca lechera” que incluye al valle central de Cotopaxi.
 - *Breuer, Toni, ¿“Agribusiness” estímulo al desarrollo?: el caso de la economía lechera en los Andes ecuatorianos, en Geografía Agraria, Vol 5, 1993, CEN.* Aunque el propósito es estudiar los “agribusiness en un país periférico, el estudio aporta con una tesis central que caracteriza la actividad lechera: un fuerte inmovilismo de la oferta y demanda lechera (relación empresas-proveedores) que explica que, el dinamismo inicial del primer momento de modernización se haya estancado. Clave para entender el carácter “inmovilista” de la producción lechera, que en nuestra opinión reclama un cambio.
 - *Chiriboga, Manuel, La crisis agraria en el Ecuador: Tendencias y Contradicciones del Reciente Proceso, en Louis Lefebvre (Ed.) Economía Política del Ecuador, CEN, 1984, Quito: 91-132.* Los procesos de modernización agraria suscitaron profundos cambios en la economía campesinas: procesos de diferenciación, empobrecimiento, migraciones, fracturas microregionales, entre otros. El estudio ofrece información empírica sobre la zona de Cotopaxi muy útiles para cotejarlos con estudios actuales.
 - *Martínez, Luciano, Articulación Mercantil de las Comunidades Indígenas de la Sierra Ecuatoriana, en Louis Lefebvre (Ed.) Economía Política del Ecuador, CEN, 1986, Quito.* Otro de los cambios suscitados con la modernización agraria, fue la vinculación más activa de las economías campesinas con los mercados locales. ¿Era posible una vía campesina de creación de pequeños farmer en Cotopaxi? Esta pregunta sigue vigente, aunque ahora sabemos que el carácter comunitario de estas economías cruza profundamente el tema, en aquel momento poco conocido.
 - *Quintero, Rafael y Erika Silva, Ecuador, una nación en ciernes, Colección Estudios, T:II y III, 1991, Quito.* Aunque el estudio es muy amplio y ofrece un análisis de la construcción nacional, nos parece muy útil para los estudiantes el Tomo II en que se evalúa el proceso de modernización. Sintetiza las diversas corrientes de interpretación (vía junker y vía campesina), que se debatieron antes de los 90, en los que poco conocíamos de las comunidades indígenas.
 - *Naranjo, Marcelo (coord.), Cultura Popular en el Ecuador, TII, Cotopaxi, CIDAP, Quito.* Es muy útil la evaluación del proceso de modernización realizado en la zona en 1983, que les permite levantar un mapa de caracteriza a las diversas microregiones, de acuerdo al grado de desarrollo, de la provincia. También realiza un estudio de las artesanías que se producen en Cotopaxi, las ferias, la arquitectura, el vestido, la cocina popular y algunas manifestaciones de la música popular.
 - *Sánchez, Parga, Estructuras de Parentesco en los Andes, Salamalag Chico, 1984, CAAP, Quito.* La antropología y la etnohistoria propusieron una lectura diferente de la diferenciación campesina. Ella se realizaba en un medio cultural andino de antiguo raigambre. De hecho, muchos de los procesos económicos y sociales se matizan por la presencia de esta milenaria cultura. El estudio de las estrategias de parentesco, muestra que comunidades como Salamalag
-

Chico, en Cotopaxi, apuntaban a reconstruir sus comunidades y a controlar la tierra desde redes parentales, generalmente ignoradas por los clásicos estudios de diferenciación social. Muy útil para matizar a los estudios económicos.

6. El comportamiento político indígena

- *Ramón, Galo, El Regreso de los runas, COMUNIDEC, 1992, Quito.* ¿Había algún proyecto político tras los procesos de reforma agraria, reconstitución de las comunidades y construcción de las organizaciones mayor grado de coalición?. El autor muestra que se buscó reconstruir un territorio étnico, al mismo tiempo que construir modernas organizaciones para participar en la vida nacional. Clave para entender la politicidad indígena, por detrás de los discursos y las acciones prácticas.
- *Ramón, Galo, Cotopaxi al debate, 1740-2001, IEE-COMUNIDEC, 2004, (doc), Quito.* ¿Por qué se desertizó la zona central y oriental de Cotopaxi en donde se asientan las comunidades indígenas?, ¿por qué no existe una clase dominante unificada en la zona?, ¿cuáles son los retos de la propuesta indígena para pasar de una conciencia étnica a comandar el desarrollo local?, son entre otras, las principales preguntas que de manera provocativa el autor lanza a los estudiosos de la región. Aporta con una importante información empírica para tratar los temas. Básico para los estudios locales de los asistentes al curso.

7. Monografías generales

- *Barriga López, Franklin, Monografía de la provincia de Cotopaxi, 8 tomos, s. f, Ambato.* Voluminosa y útil monografía sobre Cotopaxi, elaborada desde la visión tradicional de un hijo del lugar. Contiene abundante información sobre la geología, orografía, religión, idioma, vivienda y vestuario, educación, aspectos culturales, filantropía, periodismo, costumbres, deportes, pintura, escultura, música, personajes, etc de la localidad. Muy importante para tener una autovisión de las pequeñas élites locales.
- *Zúñiga, Neptalí, Significación de Latacunga en la Historia del Ecuador y de América, 2 Tomos, 1980.* Es una mirada de conjunto de la historia de Cotopaxi, en la que busca el autor enmarcarla en la vida del país. Aporta con numerosos datos de fuentes primarias y directas del autor. Es de lamentar su enorme desorden.

ANEXO

PAUTAS PARA ESCRIBIR MONOGRAFÍAS LOCALES

El propósito de las pautas que a continuación se establecen, es ofrecer a los estudiantes del Programa de Desarrollo Local del IEE-CAMAREN, algunas guías para que puedan elaborar monografías históricas sobre las localidades, o aspectos específicos de ellas, como parte de su formación. Aspiramos que estas pautas también les sirvan en su desempeño profesional para continuar profundizando el conocimiento de sus espacios de trabajo.

1. La definición del tema

Las realidades locales nos retan de mil y una maneras. El punto importante es precisar, el aspecto o los aspectos que nos interesan indagar. Ordinariamente, el aspecto que deseamos investigar se formula a través de una pregunta relevante, pertinente y precisa. Es tan importante su elección, que muchos colegas piensan que en historia, una buena pregunta constituye el 50% de un buen trabajo.

La posibilidad de que una **pregunta sea relevante** se define por su importancia, es decir, cuando la respuesta encontrada sirve para explicar temas que interesan a la comunidad política local. Por ello, se recomienda que los estudiantes, se reúnan o debatan con miembros de la comunidad política local para establecer temas que demandan una investigación. Por ejemplo, para la investigación que la hemos titulado “Cotopaxi al debate: 1740-2001”, reunimos un equipo de personas que trabajan en la zona para establecer preguntas relevantes.

Aparecieron entonces temas como: la desertización de la cordillera occidental, la identidad local, la potencialidad de la propuesta indígena y la viabilidad económica de ese espacio. Sin duda, pudieron salir más temas si ampliábamos y profundizábamos la reflexión. En tal caso, es importante priorizar los temas y preguntas.

La **pertinencia de una pregunta**, se establece con relación a los estudios ya realizados. Por ello, es importante hacer una bibliografía de los principales trabajos realizados en el área. Podemos escribir un comentario global, como el que hemos titulado “Cotopaxi: bibliografía comentada” en el que establecemos los principales avances que ya se han realizado sobre la zona de estudio. Este comentario puede profundizarse realizando fichas bibliográficas e identificando aspectos resueltos y no resueltos en la bibliografía consultada. Las fichas deben recoger párrafos literales sobre los temas que trata el autor. Los aspectos resueltos por cada autor, en cambio son aquellos puntos que han sido demostrados de manera consistente; en tanto, es posible realizar preguntas que no fueron resueltas satisfactoriamente, detectar vacíos o variaciones que conozcamos a las conclusiones que arriba el autor. Sintetizando, una pregunta pertinente, es aquella que contribuye a esclarecer temas de la comunidad académica que ha estudiado el área, o incluso la región, el país o el problema en general. Se dice entonces que estamos trabajando en la frontera del conocimiento, es decir, agregamos a lo que ya se conoce nuevos conocimientos, dudas, debates.

Muchos optan por historias desconstruccionistas, en el sentido de poner en cuestión lo dicho para explorar nuevas explicaciones. Ello es posible y deseable, porque cada generación establece sus preguntas, urgencias y tiene sus propios ojos para interrogar la realidad y el pasado.

De otra parte, la pregunta debe ser precisa, en el sentido de que su formulación sea directa, evite las ambigüedades, llegue al corazón de los problemas. Muchos colegas consideran que este es un asunto crucial. Algunas veces no investigamos lo central, sino las excepciones, los ejemplos únicos, las tendencias secundarias. Una forma de precisar la pregunta es referirla a un problema, un espacio y un tiempo determinados.

2. El espacio temporal y territorial

Toda historia tiene un espacio y un tiempo. Su definición es crucial para un historiador, es parte de la precisión que debe tener el tema y la pregunta central que realizamos. El **espacio local**, que es el tema que aquí nos preocupa, ordinariamente se define por: la jurisdicción administrativa (provincia, cantón, parroquia), el espacio que los actores definen como local (un acuerdo de los actores sobre qué entenderán por lo local, sea por la identidad, pertenencia o alianzas políticas), un ámbito económico, político y de poder (el espacio donde funciona un sistema de dominación local reconocido por quienes allí viven); un espacio que contiene uno o más elementos de identidad (una cuenca hidrográfica, un territorio étnico o pluiriétnico). El espacio seleccionado puede variar en el tiempo. Por tanto, la construcción del espacio también

puede ser histórica: en cada período de la historia debemos definir si estamos hablando del mismo espacio territorial o de otro.

El otro aspecto, **es la temporalidad**. Ordinariamente, los historiadores definimos el tiempo de inicio y del final que indaga la historia que escribimos. Sugerimos establecer grandes hitos históricos, por ejemplo “la conquista incaica”, “la independencia”, etc, que son momentos en que se acumulan y precipitan los cambios, para seleccionar estos momentos. En tratándose de estudios locales, como los que se realizarán en Cotopaxi, es bueno contar con periodizaciones previas de la región o del país. La bibliografía establece este tipo de periodizaciones que son fácilmente asequibles (Ver, por ejemplo La Nueva Historia, Vol.14). Debemos señalar que el establecimiento del período no siempre es un problema fácil: en la realidad social lo nuevo está siempre mezclado con lo viejo y las rupturas no siempre son exactas. Siempre toda periodización será convencional, pero definir desde qué fecha hasta qué otra fecha vamos a indagar la historia, siempre será necesaria. En las conclusiones del documento “Cotopaxi al debate” proponemos una periodización entre 1740-2004 que puede ser utilizada por los estudiantes. Regresaremos sobre este tema, en el momento de la periodización de la historia local.

3. El diálogo con las fuentes

A diferencia de otras disciplinas sociales, en las que se establecen a esta altura las hipótesis de trabajo, los historiadores preferimos dialogar más con nuestras fuentes. Los archivos históricos siempre guardan

un conjunto de sorpresas, evidencias, elementos nuevos, que muchas veces modifican nuestras impresiones iniciales.

Aunque el trabajo sobre las fuentes puede ser infinito y cada vez, los historiadores hacen gala de ingeniosas aproximaciones, sin embargo, sugerimos algunas ideas prácticas, para el nivel en el que podemos trabajar. Un buen truco que todos usamos, es identificar las fuentes que usaron otros autores que hicieron trabajo en la zona o en temas similares, porque ello nos permite revisarlas por nuestra cuenta, o buscar otras de igual o mayor potencialidad. Las fuentes más inmediatas son las personas de la localidad. Sus vivencias, recuerdos, sueños y versiones pueden ser recogidas a través de la historia oral. Sugerimos hacer talleres (con ancianos, con mujeres, con adultos, con historiadores locales) para tratar de indagar por lo menos los últimos ciento cincuenta años de historia: cada persona ha vivido un tiempo (digamos 50 años), ha escuchado lo que le contaron sus papás y abuelos, con lo que tenemos una historia de por lo menos un siglo y medio. Para ello debemos organizar preguntas generadoras, mejor si lo hacemos con hitos o sucesos conocidos, si examinamos fotografías, cuadernos, revistas, periódicos u objetos de cada época para avivar la memoria. Esta información oral puede ser completada, pero sobre todo ampliada en su horizonte temporal (más de ciento cincuenta años), usando otras fuentes, sobre todo fuentes escritas, mapas, evidencias arqueológicas, etc.

Las fuentes escritas que están a la mano en toda parroquia, cantón o provincia son generalmente las siguientes: (i) las actas de cabildo, que están en las alcaldías de cada

cantón; (ii) las notarías que están en los cantones y en la cabecera provincial; (iii) los registros de nacimiento, bautismo, defunción, confirmación y casamientos que están en la Curia parroquial (del cantón o la provincia); (iv) las Comisarías, Tenencias Políticas o Jefaturas Políticas; (v) los registros de la propiedad. Aquellos que quieran hacerse un viaje a la capital, los archivos guardan de manera ordenada varios repositorios que se puede consultar por provincia. Por ejemplo, el Archivo Nacional de Historia tiene series como “Indígenas”, “Cacicazgos”, “Tierras” y veinte más, que son insustituibles para el trabajo. Todas estas fuentes son públicas y es posible revisarlas. También hay fuentes privadas, que en ocasiones es posible acceder a ellas: los libros de hacienda, los libros de los conventos, los archivos particulares, las cartas y correspondencia, los periódicos locales, etc.

También es interesante revisar las monografías locales: todo un género de ellas se escribió en la primera mitad del siglo XX. En Cotopaxi, por ejemplo, las monografías de Barriga López y de Neptalí Zúñiga son de consulta obligada. Los relatos de viajeros son siempre una ayuda importante, ciertos informes de funcionarios estatales que estuvieron en la zona (recuérdese que las famosas Relaciones Geográficas son un compendio de esas informaciones). Entre los mapas importantes conviene citar aquellos que acompañan a las informaciones o relatos de viajeros, el Mapa de Maldonado del siglo XVIII es una fuente interesante, los mapas del IGM (desde 1936 hasta el presente). La hemeroteca del Banco Central guarda mapas valiosos, la biblioteca Aurelio Espinosa Pólit de Quito tiene una serie de libros únicos, sobre todo del siglo XIX.

Hay que revisar la estadística actual: los censos que se realizaron desde 1950 (de población y agropecuarios), las encuestas de hogares, la información económica del Banco Central, etc. Por fortuna, la mayoría de estas informaciones están disponibles en el internet, de manera que no hay excusa alguna para no indagarlas de manera completa. Sugerimos mirar el SISSE (Sistema de Indicadores Sociales) que ha sistematizado la información disponible en el Ecuador.

Uno de los problemas frecuentes que hemos encontrado a la hora de hacer estadística local, es el cambio frecuente de las dimensiones territoriales de los espacios cantonales y a veces provinciales. Recordemos que en 1824 solo había 32 cantones y ahora hay 220, por tanto ha habido un proceso de división intensa. Si se quiere confeccionar una serie demográfica por ejemplo, debe siempre comparar territorios similares para poder calcular tasas de crecimiento, porcentajes, comparaciones entre población urbana y rural, etc. Para ello, debe partir de la dimensión actual del cantón, parroquia y provincia y seleccionar del pasado los datos que correspondan a ese espacio. No siempre es posible hacerlo, pero generalmente, disponiendo la información desagregada a nivel de parroquias, no es difícil construir estas series. Una serie demográfica, de por lo menos los últimos 200 años, es indispensable en nuestros trabajos.

Otro problema importante de las fuentes es su veracidad. Es importante saber quién hizo la fuente, con qué propósito, cuáles fueron sus informantes y los métodos que usó para reunir la información, conocía la zona o lo hizo de paso, estuvo en el sitio o lo informaron, en fin siempre es bueno poner en duda a la fuente

para calificarla. Cuando hay oportunidad es mejor cotejar las fuentes para lograr la mayor objetividad posible, sobre todo en temas que puedan resultar controversiales, como los cálculos de la población, de la producción, o aquellos que implican cierta subjetividad. Las fuentes que hemos recomendado, tienen la particularidad de que ellas no se hicieron con el propósito de escribir historia, por ello suelen tener cierta fidelidad, aunque no olvidemos que muchas de ellas son oscuras y expresan siempre el punto de vista de los que las elaboraron, que ordinariamente tenían una visión específica sobre el mundo. Sobre todo, en un medio en el que la mayoría de indios, afrodescendientes y mestizos estuvieron excluidos de todos los sitios en que se generaba información, es muy difícil encontrar sus voces. A veces ellas están ocultas, entre líneas, en medio de la voz oficial. Por ello es tan interesante buscar fuentes nuevas, talvez declaraciones, pequeñas historias que dejaron esas voces ocultas.

Una vez que ha reunido y leído las fuentes, el diálogo que se ha producido con nosotros nos permite tener ideas distintas o más específicas de las que partimos. Es el momento de poner orden: ordenar las fuentes como ordenar nuestro pensamiento. Cada fuente debe ser recogida en fichas, en las que transcribimos con fidelidad (sin cambiar ni siquiera sus faltas de ortografía, para enfatizar la fidelidad con que debemos recogerlas), estableciendo su origen, el documento que la contiene, el archivo, la fecha, los autores. Podemos ordenarlas cronológicamente o por tema. Hoy en día los métodos de almacenar información han cambiado con las computadoras: podemos hacer una base de datos y hasta podemos aplicarle un programa para ayudarnos a

su sistematización inclusive, así se tratara de información cualitativa. Para ordenar nuestro pensamiento, es hora de establecer una subperiodización.

4. La subperiodización

El diálogo con las fuentes nos permite reconstruir el proceso cronológicamente, desde el principio al fin, como una novela lineal. El ordenamiento de los procesos nos permite encontrar subperíodos, es decir, hitos intermedios que fueron relevantes en el proceso. Por ejemplo en la historia de Cotopaxi encontramos dos grandes períodos, uno, desde la crisis textil, la sobrevivencia de un buen número de obrajes, el fortalecimiento de la hacienda hasta su crisis; y otro, desde la modernización agraria hasta nuestros días. Sin embargo, en cada período hubo subperíodos: en el primero, por ejemplo, podemos estudiar específicamente la crisis textil, en otro subperíodo el fortalecimiento de las haciendas, en otro la crisis hacendaria, y así sucesivamente.

Uno de los problemas que siempre tendremos es que, el proceso es múltiple, es decir, por ejemplo, mientras entraba en crisis la producción textil, también se producían las grandes rebeliones andinas y al mismo tiempo habían erupciones y surgía una nueva región en la costa. Ello demanda un buen esfuerzo para conectar los hechos, encontrar explicaciones, así optemos por exponerlos en subcapítulos distintos: son los límites de la narrativa, con los que todos debemos lidiar, lo cual resulta un reto por otro lado, placentero o decepcionante.

5. Hipótesis y subhipótesis

Destacamos líneas atrás que, en muchas disciplinas, las hipótesis se establecen al inicio de la investigación y se predeterminan los métodos para demostrarlas, precisarlas o negarlas. En historia ello, no siempre es posible, o mejor dicho, casi nunca. Hay un mundo que no conocemos, dependemos de las fuentes, de su potencialidad, de su homogeneidad, de tenerlas completas. Por ello, hemos preferido, establecer las hipótesis recién después de haber dialogado con las fuentes y de establecer nuestras subperiodizaciones.

En cada subperiodización podemos desarrollar preguntas específicas y ensayar hipótesis concretas que las vamos a analizar con mucho cuidado. Por ejemplo, una sorpresa que hemos tenido en la investigación de la consolidación de la hacienda en el siglo XIX en Cotopaxi es que los obrajes no desaparecieron, como casi toda la literatura historiografía ecuatoriana sostiene. Ello nos plantea una pregunta obvia: ¿Por qué se mantuvo el obraje durante todo el siglo XIX? ¿Por qué incluso hubo intentos de modernizarlos? ¿Por qué fracasaron estos intentos y se hicieron tan parcialmente?. Estas y otras preguntas solo pudieron salir en diálogo con las fuentes. Solo en este momento podemos intentar respuestas a estas subhipótesis: por ejemplo, el obraje subsistió porque siempre hubo una demanda desde Colombia y el intento de modernización respondía a la ampliación de ese mercado. Una investigación exhaustiva debería rastrear en las fuentes la demanda colombiana y el comercio para esa zona. En la pequeña monografía que escribimos no hemos ido tan lejos, aunque hemos recogido testimonios y evidencias de que ese

mercado existía, pero no lo hemos cuantificado. Allí está, desde otro punto de vista, un vacío que futuras investigaciones deben llenar, precisar e incluso matizar. Otra vez, deberíamos recordar que, establecer buenas subpreguntas permite encontrar las explicaciones adecuadas.

6. Certezas e incertidumbres

Poco a poco los historiadores hemos ido abandonando la idea ingenua de que nosotros escribimos la historia verdadera. Tal pretensión es una ingenuidad delirante o una arrogancia sin nombre. Construimos ciertas certezas en medio de una mar de incertidumbres, y así avanza el conocimiento.

Por esta razón, es aconsejable no abrir demasiadas interrogantes a las que vamos a responder, o señalar con humildad cuáles serán los temas que contestaremos y señalar los límites de nuestras propias respuestas. Un buen trabajo debería contestar de manera consistente algunas preguntas clave y dejar abiertas otras tantas para las investigaciones futuras.

7. La redacción

Una vez que tenemos armados nuestros períodos y subperíodos, las preguntas y las respuestas para cada subperíodo, es hora de hacer el índice definitivo de nuestra exposición. En ocasiones ya se ha elaborado antes un índice tentativo, pero éste es un mejor momento para hacer algo más definitivo, aunque por experiencia propia, los acontecimientos, hasta los estados de ánimo del que escribe van creando en la pantalla las cosas

que finalmente se escriben. Pienso que no hay que temerle, ni ponerle demasiadas cortapisas a la escritura. Todos quisiéramos tener un Galeano dentro para poder escribir nuestras historias, que a veces resultan unos ladrillazos en volumen y en discurso trillado y aburrido.

Creo que es bueno pensar en nuestros eventuales lectores. Buscar comunicarnos con personas que tienen poco tiempo para leer, que tienen cosas más importantes y urgentes que hacer y que el recurso de la palabra escrita tiene sus límites, pero también sus posibles encantos. Recuperar el lenguaje local, la frescura de la palabra popular, evitar llenar nuestra ignorancia con citas de otros hechas para otros contextos, ponerle pasión a las ideas manteniendo la posición crítica, buscar cierta objetividad en nuestro alineamiento con las causas, son entre otras recomendaciones necesarias.

8. Asuntos de rigor

Finalmente algunos asuntos de rigor. Primero hablemos de las citas de las fuentes. Ya dijimos que ellas deben ser transcritas tal y como ellas se produjeron. Si queremos introducir un comentario, o una aclaración, hacerlo de tal manera que se note lo que es nuestro de lo que es la cita original. En el Ecuador, generalmente usamos junto o al pie de la cita la siguiente fórmula: las siglas del archivo, por ejemplo ANH,Q (Archivo Nacional de Historia de Quito), sección (por ejemplo, Empadronamientos), legajo (nombre del legajo), años y folios o páginas. En el caso citado, se supone que hay un archivo ordenado que nos permite tal forma de consignar nuestra cita. En los casos que se encontrarán

en Cotopaxi, seguramente no habrán archivos ordenados, por lo cual es necesario nosotros introducir algún orden. Ello puede llevar incluso a pequeños proyectos, como el de montar un archivo por comuna, por parroquia, por cantón, en nuestras organizaciones, etc.

El otro problema es citar a los libros, revistas y en fin textos elaborados por otros autores. A menudo no somos rigurosos en ese punto. En Ecuador, para vergüenza de todos, muchos utilizan ideas de otros sin citarlos o lo hacen sin ninguna norma. Ello es corrupción, en el primer caso, e ignorancia en el segundo. Les proponemos una forma de cita, que se usa en estos tiempos: al lado o al pie de la cita, transcrita textualmente del autor tomado, escribir, el apellido, el año y la página en la que se encuentra el texto. Por ejemplo, *“El camino para el salto de la lucha por la tierra a la conciencia étnica, fue mejor interpretado por las organizaciones de segundo grado apoyadas por “algunas instituciones privadas” que crearon el Movimiento Indígena de Cotopaxi”*

(Ramón, 2004: 25). Si se cita más de un texto del mismo autor que ha sido elaborado ese mismo año, se sugiere usar el abecedario para ordenar los textos citados. Por ejemplo, (Ramón, 2004 a:25) si estamos citando otros textos de este mismo autor elaborados en el año 2004. En la bibliografía final, establecemos el año, el nombre completo del texto, (la letra del abecedario si la hemos usado), la editorial, el año y el país (o la ciudad) en que fue editado. Si la cita corresponde a un artículo que está en un libro, citar el libro colocando la palabra (en).

En la bibliografía es importante, comenzar por las fuentes primarias, luego por las fuentes secundarias (es decir los escritos de otros autores). En el documento “Cotopaxi al debate: 1740-2001”, podemos ver una forma de ordenar la bibliografía.

Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para realizar los trabajos monográficos y que logremos buenos resultados. Buena suerte en el trabajo.



UNIDAD DOS

Espacio y poder en tres organizaciones de Los Andes de Cotopaxi

María Fernanda Vallejo*

*Documento elaborado originalmente como tesis para el Curso "Desarrollo Local con énfasis en la
Gestión de Recursos Naturales", IEE - CAMAREN.
Diciembre, 2003

INTRODUCCIÓN

La historia política de un territorio es, en última instancia, la historia de las relaciones específicas entre espacio y poder. En este sentido, el espacio de la América hispana hasta el siglo XVIII fue el de las corporaciones y las jerarquías étnicas y sociales. La crisis de la monarquía, la irrupción del constitucionalismo moderno y la organización de las nuevas repúblicas inaugura un proceso que pertenece a la primera hornada histórica de unos nuevos Estados con vocación nacional. Lo cierto es, sin embargo, que el estudio de estos procesos se ha visto tradicionalmente arrinconado en las monografías canónicas sobre el tema.

El presente trabajo pretende abordar la problemática del espacio, entendido como una construcción social cambiante en el que se expresan permanentemente formas y relaciones de poder.

En las distintas formaciones socio-espaciales ha estado históricamente definido el papel que tienen los sujetos sociales en la construcción o apropiación de su territorio. En toda formación social, las categorías genéricas de actores (locales y externos) interactúan en el espacio según sus modalidades y en función de sus posturas, que reflejan conjuntamente su identidad propia y su posición en las relaciones de clase o de grupos.

En las sociedades modernas, los actores sociales han vivido el territorio como un producto, un campo de acción y se han situado en él, sobre todo a partir de su utilización económica; de la misma manera, los actores

sociales han identificado al territorio como substrato y regenerador de su cultura, sobre el que se insertan las dimensiones económicas y políticas de su existencia o de sus estrategias. Ahí, los actores, sobre todo los locales, no se separan jamás del espacio que les originó o al cual se encuentran arraigados; esos fuertes vínculos provienen de un proceso profundamente enlazado a través de flujos de información, que se establecen a partir del espacio social de referencia: pueblo, comunidad, barrio, ciudad, etc., además de las redes interpersonales y los lazos familiares.

De esta manera, la construcción de los territorios ha operado gracias a las interacciones entre sujetos y actividades productivas, pero sobre todo, por la puesta en práctica de estrategias operacionales que se apoyan sobre la cultura y la historia. Entre esas estrategias destacan: La movilización del “saber-hacer”, los fenómenos de aprendizaje colectivo, los modos o formas de cooperación y de asociación entre los actores y las prácticas de adaptación que se desarrollan en escala local.

El control de territorios y los recursos en él existentes constituye uno de los soportes fundamentales en el ejercicio de poder. Una lectura en perspectiva de las dinámicas de configuración de los territorios en función de la ocupación, uso, explotación y acumulación, podría permitir una comprensión más adecuada de las estrategias de control del espacio de los distintos sujetos sociales que actúan sobre él.

El espacio es pues, una instancia producida socialmente en función de la reproducción física y social, la apropiación, explotación, intercambio y manejo (control) de un territorio (Ospina 2003: iv); y por ello, es también campo de disputa. Esta definición supone, como hemos señalado, una relación con el territorio, los sujetos sociales y el poder.

En tanto producto social, el espacio está sujeto a la construcción de lo que Agudo (2000) denomina “representaciones sociales” como formas particulares de construcción social, que contribuyen a promover y orientar las acciones de los actores sociales (sus posiciones y relaciones). Este ámbito subjetivo que dota de historicidad al territorio y contribuye a la definición de identidades, es el que nos interesa incluir en la comprensión de las relaciones espacio-poder.

Para definir la configuración espacial de Cotopaxi en las dos últimas décadas, es necesario entender las distintas formas sociales de producción constituidas de acuerdo a los requerimientos del desarrollo capitalista. En tal virtud, incluimos una primera forma fundamental de interpretar el poder:

“el poder tiene la función de mantener las relaciones de producción y una dominación de clase que favorece su desarrollo, así como la modalidad específica de la apropiación de la fuerza productiva que lo hacen posible”.

“El intercambio desigual es la forma común que adopta el capital en el tiempo y en el espacio, como una ley del desarrollo que da cuenta de ciertos movimientos y permite explicar por qué las fuerzas productivas operan de forma dispar”¹.

El capital entonces, por sí mismo construye relaciones sociales contradictorias que se expresan en los espacios.

El uso de estas categorías de análisis, sin embargo, no nos permite hacer una lectura detallada de las formas sociales, discursos y relaciones que subyacen el proceso de apropiación y uso del territorio por parte de los distintos actores. Nos interesa indagar cómo se han dado los procesos de expropiación y resistencia, no solamente desde las dinámicas económicas, sino fundamentalmente ideológicas, de constitución de los espacios.

Recurriremos entonces, a algunos elementos centrales de la definición foucaultiana de poder que den cualidad a nuestra primera afirmación. La sujetividad, para Foucault, es una creación del poder, puesto que de distintas formas, convierte a los seres humanos en sujetos. Los sujetos no estamos ni completamente auto-determinados, ni completamente determinados por el poder: los límites que se nos imponen aunque sean represivos, nos brindan la posibilidad de tener una identidad y la capacidad para actuar, incluyendo la de resistir el poder que *nos ha hecho ser lo que*

1 Hector Mario Capraro, “Agricultura y Región” en Cuadernos de Economía Política 2, Universidad de Luján, 1986.

somos. La resistencia y la transgresión son posibles porque en las relaciones de poder no hay estados de completa dominación: el poder es en realidad una red abierta, más o menos coordinada, de relaciones. La resistencia es posible cuando el poder empuja hacia sus límites²

Buscamos identificar a las federaciones comunales (OSG), en su dimensión de sujetos sociales, capaces no solo de generar respuestas ante las imposiciones del poder sino de construir nuevas formas de poder en lo local. La conciencia de su entorno, y de su potencialidad transformadora sobre éste, como un proceso de aprendizaje colectivo de las organizaciones, grupos o comunidades, en términos de construir una visión de conjunto sobre sí mismos, sobre sus intereses y fines, y sobre los medios para alcanzarlos de manera eficaz, los convierte en sujetos sociales con capacidad de proponer (reflexionar, analizar, procesar la realidad) y ejecutar (decidir, transformar la realidad).

Mediante estas herramientas, trataremos de entender cómo las organizaciones de segundo grado van experimentando transformaciones fundamentales en sus estrategias de supervivencia: desde la lucha por el acceso a los medios de producción, pasando por ejecución de proyectos de desarrollo, hasta llegar a la venta de servicios ambientales o a la concertación sobre el manejo de recursos naturales en los escenarios de poder local. Creemos que las estrategias de dominación y los discursos e imaginarios contruidos desde el poder han dado lugar a que las organizaciones modifiquen sus proyectos políticos,

reconfiguren sus estructuras y reorienten sus discursos en torno a la concertación y a la capacitación técnica como herramientas de desarrollo. Esto les permite la negociación de recursos que progresivamente desaparecen del Estado y se distribuyen desde las agencias de desarrollo.

El presente trabajo, desarrollará su análisis, tomando como referencia a tres organizaciones de segundo grado de Cotopaxi: UNOCANC, JATA-RISHUN, UOPICJJ, constituidas en distintos momentos históricos en torno a diferentes ejes movilizadores.

Es en este marco que se producen dos hechos fundamentales para fines del presente trabajo: por un lado, la concreción de una contrarreforma agraria y privatización del agro, aupadas por la reacción terrateniente; y por otro, la emergencia del Movimiento Indígena como sujeto político interpelador del Estado, a raíz del Levantamiento del Inty Raimy.

En el primer caso, asistimos a un golpe letal contra el más importante intento de control territorial y de configuración de una lógica productiva colectiva. Este intento se sostuvo en las zonas en las cuales predominó una vía campesina de desarticulación de la hacienda.

En el otro caso, nos encontramos con la confluencia de múltiples procesos reivindicativos y la conjunción de proyectos contrahegemónicos rurales, afincados en identidades étnicas y campesinas, capaces de enfrentar al estado, ya no en sus formas locales, sino como expresión hegemónica nacional.

2 Dinerstein, Ana, "Subjetividad: Capital y la materialidad abstracta del poder (Foucault y el Marxismo Abierto)", Primeras Jornadas de Teoría y Filosofía Política 21 y 22 de Agosto de 1998, Facultad de Ciencias Sociales, UBA Buenos Aires, versión en línea.

ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL ESPACIO EN EL COTOPAXI ANDINO

(o la misma historia mirada desde Cotopaxi)

Lo local se configura de acuerdo a las pautas que van marcando las dinámicas extractivas imperantes en los distintos momentos históricos y a las posibilidades de articulación a las mismas. En ese sentido, el territorio local (y sus recursos) constituye el primer espacio de extracción en la lógica de acumulación del capital. La intensidad de esa extracción estará entonces, directamente relacionada con el nivel de articulación de los espacios y el modelo imperante en cada momento.

Como parte de una herencia de los siglos anteriores cuyas dinámicas económicas permitieron una articulación directa con mercados regionales a través de la producción textil-obrajera, en el Cotopaxi andino se produjo una cierta especialización orientada a la producción agropecuaria para el consumo interno. La región se caracterizó por una alta concentración de tierras fértiles en pocas manos y la utilización de las tierras altas y páramos como áreas de pastoreo y reserva de leña y agua.

La liberación de fuerza de trabajo sujeta en las haciendas, presiona a las élites terratenientes a desarrollar algunas estrategias determinantes:

- La constitución de alianzas, sobre todo matrimoniales, con las burguesías costeñas, que permiten la articulación financiera a la lógica agroexportadora. Esta estrategia resultaría ventajosa durante la larga crisis de las exportaciones de cacao.

- El inicio de procesos de modernización de las haciendas a través de la reducción del tamaño de las propiedades y la incorporación de nuevas tecnologías para la producción. En Cotopaxi se activa tempranamente una reestructuración de la propiedad de la tierra y un mercado de tierras agrícolas.

La agroexportación bananera como vehículo de articulación al mercado global, consolida definitivamente este proceso modernizador. La tecnificación de las haciendas impulsó fuertemente la producción ganadera en los valles fértiles del callejón interandino, que se fue extendiendo progresivamente a las unidades productivas campesinas; y permitió la instalación de agroindustrias lecheras. Estas dos dinámicas aceleraron la modernización de importantes zonas campesinas bajo su influencia y la reconfiguración de pueblos como Guaytacama o Lasso, cuyos habitantes optaron por articularse como fuerza de trabajo o proveedores de servicios y abastecedores de leche. Los campesinos de los valles, encuentran grandes posibilidades de vinculación directa al mercado, a través del monocultivo de papas, hortalizas o la producción lechera (véase Pachano, 1986).

Las reformas agrarias, ejecutadas a medias durante la segunda mitad del pasado siglo y una predominante estrategia *junker* de modernización agraria, fueron configurando el escenario local como un espacio productivo subsidiario dentro de una economía nacional orientada a la exportación. En ella de productos primarios,

donde el mercado interno se va constituyendo en el foco movilizador de la producción hacendaria

La presión campesina por las tierras crece, la reforma agraria se vuelve un imperativo y da lugar en algunos casos a una vía campesina de recuperación de territorios³, conviviendo con estrategias *junker* de los terratenientes. Se acelera el desplazamiento de la población indígena hacia las tierras altas y zonas de páramo. La modernización trae consigo una mayor segmentación social y económica, una apertura y dinamización del mercado de tierras.

Durante las reformas agrarias, sus efectos desconcentradores de la tierra (particularmente en las zonas altas) incrementan la presencia de pequeñas y medianas posesiones. Continúan y se profundizan las estrategias de modernización de las haciendas. Entre ellas destacan la extensión de las propiedades a través de la compra a pequeños campesinos, la maximización de la productividad mediante la incorporación de maquinaria y tecnología, la priorización de la producción pecuaria, la articulación a procesos agroindustriales y la vinculación estrecha con dinámicas económicas nacionales de agroexportación y mercados financieros. Esta dinámica determinaría la configuración de algunas poblaciones cuya economía y organización social se encuentran estrechamente vinculados a las haciendas.

“Hasta la reforma agraria de 1964, puede caracterizarse a Cotopaxi como una provincia donde predominaba el sistema de hacienda, en el que se había producido un acceso limitado a

la tierra para comunidades y pequeños propietarios”. (Ibarra y Ospina, 27:1994).

De cualquier modo, los campesinos acceden a tierras propias donde se replican, en malas condiciones, los modelos de producción de alimentos para el mercado interno y/o se desarrollan economías campesinas de subsistencia. En esas condiciones, creció paulatinamente la demanda por la tierra, particularmente entre los campesinos indígenas, que ven aparecer y crecer sus formas organizativas, en especial las OSGs, como instancia de intermediación para el acceso a servicios y recursos.

El boom petrolero, trajo la presencia de las agencias del Estado (BNF, ENAC, ENPROVIT, Desarrollo Rural Integral) con un proyecto modernizador para el campo que consolida a Quito como un enorme mercado de alimentos y de fuerza de trabajo, que Cotopaxi puede abastecer.

Por otro lado, los terratenientes, habiendo conservado las tierras fértiles de los valles, se van especializando en la agroindustria –principalmente lechera– y en la producción agroexportadora de flores, frutas y hortalizas. Estas actividades subvaloran la mano de obra campesina circundante, concentran el agua de riego disponible y generan desechos contaminantes en los suelos y los ríos.

En este contexto, los recursos naturales –en tanto recursos productivos– han sido mayoritariamente objeto de sobre explotación. Las actividades agroindustriales y agroexportadoras concentran el 80%⁴ del agua de riego disponible en la provincia, al tiempo

3 Un caso representativo es de las Cooperativas Cotopilaló, Rasuyacu Corazón, Rasuyacu Chiguancto, Mushuc Patria que conformarían la primera base social de la UNOCANC.

que han provocado niveles insostenibles de contaminación del Río Cutuchi principal abastecedor de los sistemas de riego en los Cantones Latacunga, Saquisilí y Salcedo. La inexistencia de mecanismos de monitoreo y regulación de agrotóxicos en las agroempresas, provoca un importante deterioro de los suelos y efectos nocivos para la salud de los/as trabajadores/as (tanto en la región interandina como en el subtrópico).

La retirada del Estado favorece el protagonismo de las ONG's y agencias de cooperación, que concentran sus esfuerzos de modernización en las poblaciones indígenas y en su incorporación al mercado. La influencia de las iglesias, las ONG's y la educación bilingüe, permitiría la emergencia de cuadros indios con fuerte perfil tecnocrático, que asumirían posteriormente el ejercicio de los gobiernos locales.

Las políticas de ajuste estructural, la clausura de la Reforma Agraria y la liberalización de los mercados de tierras comunales, entre otros factores, han incidido en un acelerado avance de la frontera agrícola y una insostenible minifundización. Las áreas de páramo de la cordillera occidental⁵ se encuentran amenazadas, sus fuentes hídricas presentan una franca disminución. Existen cantones, como Saquisilí, que atraviesan por una ver-

dadera crisis ecológica, con procesos erosivos acelerados. Las áreas protegidas por el Estado, en particular la Reserva Ecológica de Los Ilinizas, sufren una intensa presión tanto en la zona interandina como en las estribaciones de la cordillera⁶.

Resulta interesante mirar este proceso desde la perspectiva comunal. Desde la perspectiva del poder, los campesinos empobrecidos por el ajuste, se convierten en los principales agentes de la destrucción ecológica. Sin embargo, a pesar de las políticas y discursos hegemónicos direccionadas a debilitar la lucha por los medios de producción, el proceso de acumulación de fuerzas del campesinado indígena ha mantenido la disputa por el acceso al riego y el empleo adecuado del agua. También ha luchado por el control sobre los ecosistemas y bosques, principalmente de altura, que se encuentran en territorios actualmente ocupados por las comunidades indígenas.

Junto con ellos, aunque fue parcialmente abandonado por el movimiento indígena, la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra es todavía una exigencia fundamental de las comunidades para garantizar la seguridad alimentaria de su población.

De ahí la persistencia de una agricultura que se resiste a abandonar un

4 El PPDPC, determina que la provincia cuenta con apenas el 20% del territorio con riego

5 Las lógicas productivas descritas, dan cuenta también de una diferenciación étnica del espacio, caracterizada por el desplazamiento de la población indígena hacia las tierras altas de la cordillera occidental, ejerciendo presión sobre el páramo y la reserva de los Ilinizas. Los valles fértiles de la hoya del Patate han sido ocupados por agroempresas y medianos propietarios, en su mayoría mestizos, plenamente articulados a los circuitos de mercado. La cordillera oriental presenta grandes haciendas (1000 Ha o más según el PPDPC), medianos propietarios mestizos y áreas protegidas (Cotopaxi, Llanganates).

6 Existen esfuerzos desde el gobierno provincial por establecer políticas ambientales que enfrenten esta problemática, que se encuentran en un nivel bastante prístino. Algo parecido sucede en el caso de Saquisilí. Las pocas capacidades institucionales y las características actuales de la participación ciudadana, no presentan de momento, condiciones óptimas para abordar con eficacia el tema. Sin embargo, se encuentran en marcha dinámicas de negociación con el Estado nacional a fin de asumir competencias para la gestión ambiental.

patrón mínimo de autoconsumo y la mediación de recursos del desarrollo por parte de las OSG's, para lograr pequeñas inversiones en conservación de los suelos, manejo de páramos y reforestación.

Tanto las características de las lógicas productivas, como las huellas dejadas por éstas, permiten también aproximarnos al tipo de relaciones predominantes.

Por un lado, la hegemonía de las agroempresas, cuyos propietarios no residen, ni tributan, ni participan en las dinámicas de la provincia, ni tampoco rinden cuentas al gobierno local. Sin embargo, sus economías articuladas a los mercados internacionales o vinculadas a la dinámica nacional, determinan las relaciones económicas y políticas internas.

Por otro lado, las pequeñas unidades campesinas –mayoritariamente indígenas–, que se han visto expresadas políticamente en las OSG's y el MICC, que realizan esfuerzos permanentes por constituir un poder contra hegemónico que les permita combatir su creciente empobrecimiento.

La diferenciación étnica del espacio provocada por el proceso descrito en párrafos anteriores, se expresa en una relación conflictiva entre los espacios de circulación –predominantemente mestizos– y los espacios de producción campesina, mayoritariamente indígenas. Los primeros son el escenario de extracción de la renta local y el control de la capital.

La necesidad de acceso a los medios de producción, fundamentalmente tierra y agua, constituye un factor

de permanentes conflictos intercomunales. Aparentemente, las formas agroempresariales de control de los recursos y la presencia de un discurso del desarrollo, habrían resultado eficaces *distractores* de los campesinos, que no verían en ellas los verdaderos rivales en la disputa por los recursos.

Al mismo tiempo, sin embargo, la resistencia campesina avanza hacia la ocupación de los gobiernos locales como espacios simbólicos de poder. Esto y fortalece la mirada hacia dentro de sus territorios como ejes movilizadores en aras del control (ya no solo acceso) de los recursos.

La base del desarrollo local de Cotopaxi sigue siendo fundamentalmente agropecuaria. El acceso privilegiado de las agroindustrias al mercado financiero centralista facilitan el desarrollo de una producción agroexportadora de flores y hortalizas, que convive con la producción lechera y que articula la mano de obra campesina circundante. En los escenarios locales de Cotopaxi, casi no se generan instancias financieras propias, la mayoría son sucursales de la banca quiteña. Adicionalmente, las agroindustrias y agroexportadoras, tributan en Quito.

En síntesis, el espacio local queda distribuido así: la cordillera occidental, poblada de campesinos indígenas, con insuficiente tierra; los valles bajo el control de agroempresas y las zonas circundantes a los valles, donde se produce un acelerado “amestizamiento” de los campesinos con mejores tierras y buenas oportunidades de articulación al mercado; los terratenientes, ahora agroindustriales, estrechan sus vínculos con Quito (Latacunga) y Ambato (Salcedo).⁷

7 Este Cotopaxi andino, no guarda muchas relaciones con el Cotopaxi subtropical, tributario directo de Quevedo y Guayaquil, contribuyente importante, a través de grandes y medianas propiedades, de banano para la exportación.

CAPÍTULO 2

ESTRUCTURAS Y ARTICULACIONES DE PODER FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: DESDE LA HACIENDA HASTA LOS PODERES LOCALES (o la historia del espacio desde la resistencia).

El rápido recorrido geohistórico hasta ahora realizado, da cuenta de los procesos de acumulación de capital desde los grupos hegemónicos, en donde resulta evidente la subalternidad del campesinado, particularmente del campesinado indígena. Los escenarios descritos expresan espacialmente una larga y tortuosa transición hacia el capitalismo que habría de trazar las reglas de juego y marcar los campos de disputa en los que la resistencia desarrollaría sus propios procesos acumulativos. No expresa, sin embargo, los procesos dialécticos, confusos, que han implicado la construcción permanente de estrategias –viables o no, exitosas o no– y el desarrollo de planteamientos de potencial insurgente frente a la avanzada del capitalismo.

Una mirada campesina indígena de la historia no sigue las mismas pautas delineadas por el proceso hegemónico. Aparecer más bien, como una dinámica de permanentes idas y retornos como sujetos sociales (unas veces esbozados y otras, bien definidos) desde los enclaves locales hasta el Estado. Supondría un largo proceso de identificación, conocimiento y reconocimiento de los dominantes, así como de los objetos y campos de disputa.

Desde esta perspectiva de la historia, la subalternidad juega con su potencialidad de insubordinación, con su pequeña capacidad de competencia económica y simbólica para generar respuestas, y en ocasiones, iniciativas

contrahegemónicas. Éstas configuran un largo y sumamente móvil tejido de avanzada en el cual se fueron imbricando cuidadosamente, acumulados identitarios, pequeños controles espaciales contruidos desde lo simbólico y estrategias productivas.

Tendríamos entonces, en el marco de los hitos de construcción hegemónica, procesos de resistencia signados por eventos subversivos y por la resignificación y funcionalización de las formas de poder. La resistencia tiene un fuerte asidero ideológico y una gran necesidad de sostener sus bases materiales de reproducción aún desde la subalternidad. Para ello recurre a dos elementos claves: la reafirmación de su existencia como colectivo, de su organización comunitaria como fuerza básica y la confluencia entre lo que podríamos llamar la cultura de la intersubjetividad, con la cultura de la otredad (Ceceña, 1998). Planteamos por ello una historia donde los escenarios de acumulación de poder se constituyen en espacios donde los recursos descritos se ejercen en aras de la construcción de contrapoder.

La hacienda, ese espacio nodal de la acumulación terrateniente, ha sido también reducto para la reproducción india. Ahí donde la tríada del poder religioso, civil, y poder económico concretaba el ejercicio de la dominación y la acumulación; la resistencia consolidó mecanismos de sujeción y reciprocidad que por un lado condicionaron el control absoluto de la fuerza

de trabajo, de los recursos disponibles y de los medios de producción; y, por otro, mediante la resignificación permanente del corpus ideológico dominante, impidieron la destrucción de la identidad cultural indígena.

Estudios etnográficos en distintos momentos han permitido acercarnos a la otra cara de la hacienda, aquella que la muestra como un espacio donde los márgenes de movilidad de los sometidos son muy grandes. Desde una lectura foucoltiana, los campesinos indígenas, en tanto no fueron completamente designados, leídos, clasificados, significados, tuvieron la posibilidad de desarrollar y fortalecer una amplia gama de relaciones sociales intrahogar e intercomunitarias (comunidades libres y comunidades sujetas)⁸ que burlaron la aparentemente omnipresente mirada del poder de tres cabezas. De hecho, lo involucraban y ejercían presión sobre él.

Sostenidos en el ámbito de lo simbólico, los campesinos consagraron en los espacios festivos una suerte de “economía moral” que conminaba fuertemente a los dominantes a la práctica permanente de la reciprocidad y la redistribución. El manejo de socorros y suplidos como subsidios dentro de la hacienda; la sistemática recurrencia de hurtos y usos no autorizados de los recursos existentes en el territorio; el uso de la mediación de doble vía ejercida por kipus y regidores, cuya figura en realidad fue constituida para el ejercicio de la coerción y vigilancia, describen de alguna manera a los campesinos

como sujetos que se constituyeron a sí mismos en relación, en conflicto y en presencia de sus dominantes, y a partir de ello construyeron una identidad propia.

La primera y más larga figura de la resistencia al poder, se va construyendo en el escenario de la vida cotidiana normada por la hacienda. Es aquí donde se libran las primeras batallas contra el enemigo inmediato, contra los efectos del poder, de ahí su aparente anarquía (Tiscornia, 2003). Esto explicaría la heterogeneidad de las sucesivas revueltas campesinas al interior de la hacienda, que, en ocasiones afectaron exclusivamente a los terratenientes locales mientras que en otros momentos ponían en cuestión las estructuras mismas de la hegemonía: la legitimidad del poder estatal constituido blanco mestizo, terrateniente, católico, expoliador.⁹

Además de las herramientas étnico-culturales y las sublevaciones violentas, los escenarios locales estuvieron permanentemente atravesados por una búsqueda de nuevos significados para los modelos productivos, y una resistencia a la racionalización de la producción en las haciendas.

Según Thurner (2000), la transición al capitalismo en las haciendas, fue permanentemente condicionada y negociada por parte de los campesinos, lo que puede verse como una lucha histórica de “micropolíticas culturales”. El mismo autor considera que el ejercicio de contrapoder campesino expresado en el permanente asedio a la hacienda, determinó en

8 Véase Turner, 2000

9 La etnografía describe revueltas intra hacienda por maltratos o incumplimiento de los copromisos de reciprocidad, pasando por levantamientos en contra de impuestos, hasta sublevaciones como la de Daquilema que desconocen al Estado Terrateniente de García Moreno y reivindican la legitimidad de un gobierno de indígenas.

gran medida los modelos de modernización capitalista. Ese asedio devino en movilización política que interfirió en muchos procesos Junker de transición, forzando vías campesinas de disolución de la hacienda (Turner, 2000).

Las transformaciones generadas por la revolución liberal, significaron un golpe duro para la gran propiedad como modelo productivo. En su interior y en su entorno, esta circunstancia favoreció la configuración de un campesinado cuyas estrategias étnicas de producción y circulación se mantenían en cierta forma al margen de las exigencias de incorporación a la dinámica del capital. Al mismo tiempo esta estrategia recurría a las regulaciones modernizadoras emanadas desde los escenarios nacionales, para resquebrajar el poder terrateniente local.

De este modo, los campesinos apelaron a la legislación y disputaron en el ámbito formal la aplicación de leyes ganadas con la revolución liberal, como el derecho a conservar tierras comunales y zonas de pastoreo. Es desde una identidad de clase que emergen en movilizaciones violentas durante la crisis del cacao, en el mismo momento en que se producen las primeras luchas obreras y urbanopopulares. Muchas de las estrategias de asedio a las tierras están signadas también por esta identidad. Se establecen formas organizativas como los sindicatos campesinos, se resignifican las comunas, se producen vínculos con la izquierda, que dan lugar a organizaciones políticas como la FEI, y posteriormente la FENOC, o la ECUARUNARI.

Encontramos dos campos simultáneos de la disputa. Por un lado el reducto cultural “precapitalista” que

ha logrado la permanencia de formas colectivas de producción y circulación, que se mantiene desconocido y al margen de la norma y que, desde la resistencia a la modernidad coaccionó las estrategias terratenientes. Por otro lado, tenemos el escenario de lo formal, que encuentra en la normativa del Estado y en las convenciones de la lucha de clases, herramientas para acceder a los medios de producción. Las huelgas campesinas, la demanda por el establecimiento de un régimen legal que regule el trabajo agrícola, la consecución de derechos laborales, la adscripción a los postulados marxistas de las nacientes izquierdas o la búsqueda de encuentros con las luchas obreras, son algunas de las manifestaciones de la configuración de un movimiento campesino que había rebasado las fronteras locales para ser mirado por el poder nacional.

El Estado, por su parte, habría de desarrollar mecanismos para desactivar la disrupción dotando de estatuto jurídico a las comunidades campesinas y estableciendo una “retórica de la legislación como discurso” (Iturralde, 1988). Es decir, buscó congelar los derechos en la norma.

Los períodos circundantes a las reformas agrarias, particularmente la primera, reivindican fuertemente la incidencia de la lucha campesina en la redistribución de la tierra y el agua. No obstante es cierto que la hegemonía impuso en última instancia una distribución desigual, viciada de injusticias e irracionalidades.

La primera reforma agraria ubicó al medio rural como un campo de disputa con tres frentes: el Estado (capitalista), los terratenientes (precapitalistas), los campesinos (anticapitalistas). En el centro de esta disputa, el

control de los medios de producción y la fuerza de trabajo. El saldo de ese enfrentamiento es una mixtura ambigua que obligó a los campesinos a optar por el control de las tierras por sobre sus derechos laborales, a los hacendados a tecnificar su producción por sobre el control de la fuerza de trabajo, y al Estado, a la concesión de derechos a través de la norma ante el fortalecimiento de un movimiento insurgente.

Sin embargo, una ley tan incompleta y excluyente provocó para los años siguientes la agudización de la agitación y la violencia. El acumulado de la lucha campesina subvirtió el régimen jurídico, asumió plenamente el carácter de disputa política, y reivindicó para sí los derechos conculcados más allá de la ley: “entre 1965 y 1970 fueron frecuentes en todo el país las invasiones de tierras, el secuestro de animales e instalaciones, la obstrucción de caminos y cursos de agua y la resistencia al desalojo” (Iturralde, 1988: 65).

Luego de un proceso de fuerte represión y de pequeñas concesiones legales para desactivar la insurgencia, la segunda reforma agraria se presentaría entonces como el recurso más acabado para concluir el asedio campesino a las haciendas e incorporar a los minifundios al desarrollo capitalista mediante una presencia estatal directa expresada en las agencias de desarrollo rural integral.

A pesar de estos condicionamientos, la resistencia logró esbozar formas campesinas de producción que fueron adquiriendo “una mayor autonomía respecto al control del suelo y la utilización de la mano de obra familiar, agudizándose al mismo tiempo su dependencia del mercado, la vinculación con el Estado y la participación

de la cultura nacional hegemónica” (Iturralde, 1988: 51).

Esta situación produce un conglomerado social que no se moderniza para formar pequeñas empresas agrícolas y que se rehúsa a la descampesinización. De hecho, en los momentos de crisis del capital, la unidad productiva campesina se torna un refugio de supervivencia.

La construcción del sujeto político a partir de la emergencia y acumulación de los sujetos colectivos

El “habitus” a partir del cual se va proyectando y acumulando la resistencia hasta adquirir su propia subjetividad, primero como respuesta y después como intento de avanzada frente al capital, incorporó en su lucha dos frentes importantes. Primero, la apropiación del conocimiento construido por el otro, ya sea bajo la figura de educación, formación, o capacitación (tecnocratización) y, segundo la constitución de un movimiento a partir de un sostenido proceso federativo. Proyectados desde una estructura comunal, como núcleo duro de su reproducción material e ideológica, los campesinos indígenas fueron configurando federaciones para articular sus demandas y relacionarse, con el Estado y los terratenientes. Este proceso organizativo también sirvió para encontrarse coyunturalmente con sus “aliados naturales” de clase, y sobre todo, para dar cuerpo a la conformación de movimientos regionales y a la construcción de un movimiento nacional.

De esta manera, los campesinos indígenas, sus formas identitarias y de organización devienen sujetos

colectivos. En efecto, a partir de sus luchas fueron tomando “conciencia de sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, que actúa –en la representación– como elemento productor del cambio generando un comportamiento de sujeto histórico transformador” (Valero, 2000:1).

Los ejercicios de contrapoder surgidos de las prácticas en las haciendas, se trasladaron al espacio de un Estado que hacía de todo, a quien demandaron además, la dotación de servicios básicos y el derecho de acceso a la salud y la educación.

Para fines de los años 1980, cuando la opulencia del petróleo iniciaba su ocaso y cuando la reacción de la burguesía terrateniente arremetía contra cualquier saldo positivo de las reformas agrarias, el encuentro de las organizaciones andinas y amazónicas permite una particular confluencia de las luchas por tierras, territorios y derechos al reconocimiento de las otras identidades que convierten al creciente movimiento indígena en sujeto político nacional. Era potencialmente capaz de liderar y articular las luchas de los otros bloques contrahegemónicos (Bonilla, 2003). Sin embargo, no sería sino hasta 1990 –precisamente cuando la dinámica del capital empezaba a demandar la desestructuración de los estados nacionales en aras de un poder monopólico global– que este sujeto político establecería un quiebre cualitativo fundamental en relación a su proceso histórico.

Con el levantamiento del Inty Raymi, el movimiento indígena se erige como “un sujeto político identitario y con una única voz, la lucha por la pluri-nacionalidad se convierte en la lucha por el reconocimiento a la diversidad,

por el derecho a existir y pervivir en la diferencia fundamental frente al proyecto de la modernidad y frente a la expansión del capitalismo. La pluri-nacionalidad pasa a ser el eje estratégico a partir del cual el movimiento indígena articula su discurso, sus prácticas, y sus organizaciones, frente a la sociedad” (Bonilla, 2003:2).

Sin embargo, este cambio sustancial implicó al mismo tiempo, la inversión de los procesos desde la perspectiva del micropoder. Hasta ese momento, la figura de resistencia expresaba primordialmente una dinámica reivindicativa de respuesta a las estrategias de control hegemónico. A partir del levantamiento de 1990, el movimiento indígena establece una estrategia ofensiva: la hegemonía pasa entonces, a reconocer a su adversario y a codificarlo para desestructurarlo.

La década de inicio del ajuste estructural, se encuentra con un movimiento acrecentado, dispuesto a disputar el control del Estado, decidido a luchar por el poder: “La interpelación al Estado Nacional y la posibilidad de constituirse en un movimiento aglutinador de sectores subalternos inaugura una dimensión nueva en las dinámicas organizativas: el acceso al poder; pero, al mismo tiempo otorga un cariz diferente a la propuesta de crítica radical al Estado, e incluso la crítica radical al proyecto de “democracia” que pretende imponerse desde las élites”. (Bonilla, 2003)

Tras su inserción definitiva en el escenario nacional y lograr el reconocimiento del poder como sujeto de derechos y participación, representando intereses definidos de las clases dominadas, el movimiento indígena se involucra en el campo de la democracia burguesa. El movimiento expande sus frentes de

avanzada, y toma para sí el derecho de colocar representantes en el aparato institucional del Estado. Negocia entonces –y alcanza– su participación directa en espacios de decisión, la creación de instancias de gestión pública en ámbitos de educación, salud, y desarrollo dirigidas a los pueblos y nacionalidades indígenas. Se transforma en sujeto ineludible de consulta para la definición de políticas y finalmente, conforma una estructura partidaria que le permite participar en los escenarios electorales.

El movimiento político, empieza entonces a ocupar espacios de representación en el régimen político, que fueron ocupados históricamente en lo local por los terratenientes. Estas instituciones políticas podían ayudar a ampliar los territorios, captar recursos para la redistribución, tomar decisiones medianamente autónomas, es decir, eran una oportunidad de construir espacios propios de poder local. Todo ello, sin renunciar a los acumulados históricos, a las estrategias subversivas generadas desde el movimiento social en aras del resquebrajamiento hegemónico.

La crisis estructural a comienzos del nuevo siglo, se encuentra con un movimiento aglutinador y expansivo, de múltiples cabezas, copando todos los espacios, extendiendo sus estrategias desde la insurgencia hasta la institucionalidad, arrinconando a las clases hegemónicas en un momento de alianzas debilitadas, interpelando incluso, al nuevo poder global. Estos avances significaron, sin embargo, al mismo tiempo, renunciar al debate y construcción permanente de un proyecto político efectivamente articulador de las otras subalternidades, efectivamente intercultural, conminado a responder coyunturalmente las réplicas de las burguesías; significó también descuidar los núcleos de acumulación en las bases y renunciar a la formación de cuadros de relevo que garanticen la continuidad de la avanzada.

El movimiento indígena, ese tejido gigante armado durante décadas de acumulación, empezaba a mostrar agujeros en su entramado, costuras inconclusas, por donde el poder reconfigurado y con cara de Estado global encuentra posibilidades para la contraofensiva.



CAPÍTULO 3

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESPACIO LOCAL A PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA

El largo recorrido planteado en este trabajo ha tenido la pretensión de visualizar y entender, las respuestas que en Cotopaxi han generado las Organizaciones de Segundo Grado, las estrategias de modificación de sus lógicas internas y sus formas de acceso a los recursos en un escenario marcado por el progresivo desmantelamiento de sus fuentes materiales de reproducción.

Al margen de las particularidades de cada organización de acuerdo a sus contextos específicos históricos y geográficos, en términos generales éstas emergen como fruto de un proceso de acumulación organizativa que se venía gestando en el marco de las transformaciones agrarias en el país. Casi todas las organizaciones de la Sierra formaron sus cuadros y fortalecieron sus procesos y demandas con el soporte de la Iglesia Liberadora y los partidos de izquierda. La clausura de las reformas agrarias y la consolidación de un proyecto neoliberal para el agro –con retirada del Estado incluida–, la derechización de la iglesia y el apareamiento del discurso del desarrollo rural, van provocando transformaciones importantes en las dinámicas organizativas.

A raíz de estos hechos, los estudios campesinos dejan de ser un tema relevante para la intelectualidad. La inexorabilidad de la historia se vuelve una verdad, la injusta distribución de la tierra y los recursos, es decir los temas agrarios, quedan clausurados. La sociedad nacional mira al movimiento

indígena únicamente a partir de sus planteamientos étnicos. El mismo movimiento empieza a mirarse desde ese espejo distorsionado.

Entre tanto, en lo local, las OSG's asumen el desafío de la disputa cotidiana del espacio y la representación. Los terratenientes se “desvanecen” como la figura clara del poder a combatir. En su lugar, el Estado y sus múltiples instituciones establecen los términos de la relación con el campesinado. Las OSG's se verán abocadas a demandar y negociar con éstas el acceso a servicios básicos y la transición a la modernidad, tratando en el intento de defender las conquistas de la vía campesina, la permanencia de su otredad, la pervivencia del sentido comunitario de la vida, tan poco funcional al capital. Finalmente, la cruzada civilizatoria –una vez retirado el Estado– es asumida por las ONG y sus discursos del desarrollo, que introducen nuevos mecanismos de restricción ya no al acceso, sino al control del espacio local y sus recursos. En contra partida, las organizaciones refuncionalizan nuevamente su rol incorporando y resemantizando los nuevos discursos, agregando nuevas herramientas de negociación, fundadas en la tecnocracia.

Para el caso particular de la región interandina de Cotopaxi, hemos seleccionado tres organizaciones (UNOCANC, JATARISHUN y UOPICJ) con las que llevamos algún tiempo trabajando. A partir de esos tres casos trataremos de aproximarnos a

los distintos procesos de configuración espacial después de la reforma agraria.

Las tres organizaciones aglutinan comunidades que ocupan diferentes pisos altitudinales, en donde se desarrollan producciones agrícolas y pecuarias diferenciadas. Las tres disponen de extensiones territoriales significativas, que rebasan las delimitaciones impuestas por la división política nacional, es decir, se extiende más allá de los límites parroquiales, e incluso cantonales de la provincia. Las tres se encuentran ubicadas en la cordillera occidental y ocupan importantes extensiones de páramos, siendo las principales proveedoras de agua para riego y consumo tanto para sus propios cantones como para los colindantes

Estas organizaciones tienen adicionalmente, la particularidad de haberse conformado en diferentes momentos históricos respondiendo a las nuevas dinámicas de acumulación del capital, y a los distintos discursos de desarrollo que sobre ellas, se han venido imponiendo.

Lo andino, la hacienda y el desarrollo local” en la construcción de imaginarios y espacios

Para entender las percepciones del espacio y el territorio, manejadas desde las organizaciones, nos planteamos revisar los elementos ideológicos contruidos a partir de tres temas: a) Las formas ambiguas, desarticuladas, subterráneas, deconcebierelespacio, el territorio y los recursos que persisten, en el mundo andino se reconfiguran y constituyen potenciales de resis-

tencia. b) La hacienda por su parte, ha dejado marcado en el imaginario campesino formas de entender el territorio, la propiedad, el uso de los recursos, los derechos y la posesión sobre los mismos. c) Finalmente, el desarrollo trae sus propias formas de entender estos mismos espacios y construye los discursos de la concertación, el manejo sustentable de los recursos naturales, y configura así nuevos espacios simbólicos.

Estos tres ejes atraviesan transversalmente, tres momentos de construcción espacial a nivel local en la disputa por el control territorial.

Primer momento: El habitus comunal, el campo del modelo hacendatario

Tratando de capturar espacialmente el período entre las reformas agrarias, encontramos encapsulados localmente los principales componentes de la microfísica del poder; es decir, las maneras específicas en que los terratenientes plantearon el control territorial y político, así como las formas de ocupación subalterna (resistencia-avanzada) del campesinado.

En el Corema 1 encontramos el patrón básico de organización espacial hacendatario: un espacio local con territorialidades definidas por los límites de la hacienda, dentro y en torno los cuales, se configuraron territorialidades comunales de menor extensión, pero bastante definidas.

Un modelo fundamentalmente endógeno cuyo conjunto se vuelve tributario y funcional a la formación socioeconómica supra local; pero que hacia adentro establece un conjunto de relaciones jerárquicas fundamentales para su reproducción

y al mismo tiempo, para la acumulación campesina.

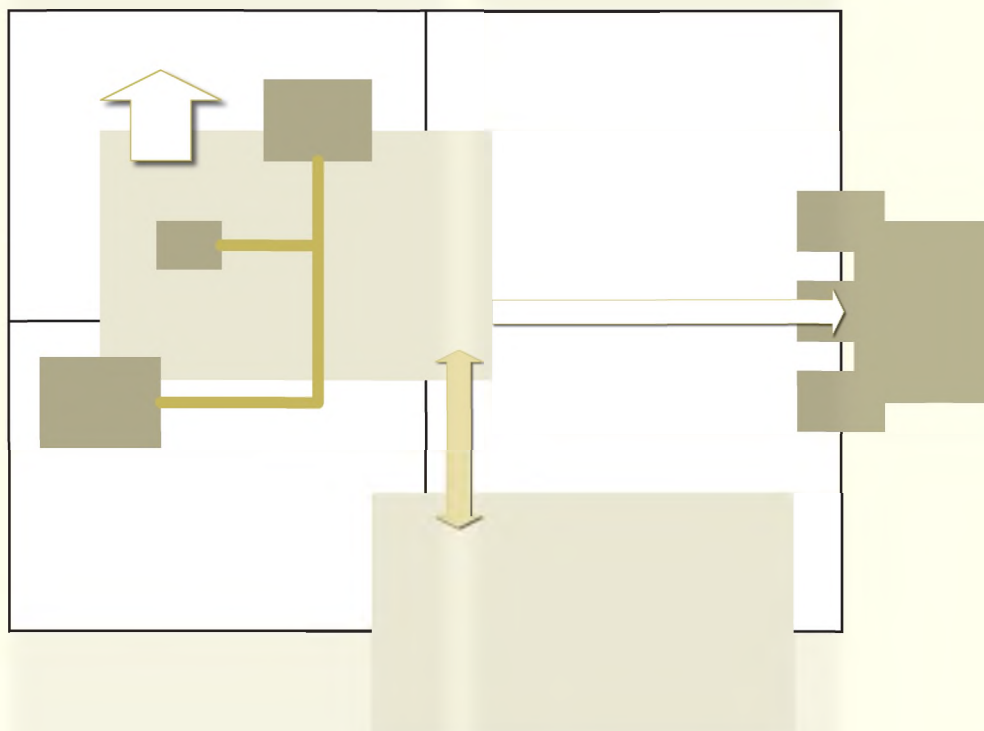
Las haciendas locales establecen vínculos sociales y económicos para garantizar el autoabastecimiento. Hacerlo es estratégico para enfrentar la arremetida modernizadora y las crisis o presiones externas. El espacio nacional, aunque existente, parecería no tener presencia.

Las comunidades campesino-indígenas se relacionan no a un poder estatal centralizado y a sus instituciones, sino a ámbitos económicos y de poder específicos, signados por la presencia de las clases dominantes locales y dominados por el hacendado (Chiriboga, 1993). El régimen político se ubica, se expresa y se ejerce dentro de la localidad, tiene rostro de cura, de teniente político; el presidente del Concejo, tiene nombre de hacendado.

El gráfico también intenta explicar la intensidad de las interacciones comunales intra y extra hacienda, que definen al territorio como espacio de vida, como espacio vivido, ejercido, controlado, negociado. De esta manera, las haciendas y sus territorios se encuentran atados a la dinámica comunal y no solo a la inversa. Desde la subalternidad, los campesinos también manejan territorios y recursos, claramente definidos en los límites comunales y difusamente configurados en su imbricación con el territorio de la hacienda, donde el acceso a recursos atraviesa por una permanente negociación con altas dosis de ritualidad.

Lo andino se expande acumulando en su interior las lógicas productivas y de ocupación territorial de la hacienda. En una dinámica dialéctica, la comunidad reproduce su universo simbólico e ideológico y las unidades campesinas replican las prácticas hacendatarias, llegando incluso a competir con ellas

Corema 1



en el mercado interno. El ámbito de la circulación comunitaria –y en buena parte también hacendataria–, ocurre de espaldas al capital (aunque no de los mercados)¹⁰. El territorio comunal se ordena de manera que resulta una réplica de la hacienda.

En el modelo graficado, la transversalidad y la inmediatez de la resistencia conceptualizada por Foucault, permiten al campesino una enorme movilidad y ampliación de sus espacios al interior de la estructura de poder. Favorecen así no solo la lucha por el acceso a los recursos, sino por el derecho a la diferencia desde una defensa de la colectividad. La vida comunitaria pervive a los intentos de aislamiento (Olmo Brau, 2000).

El modelo se resquebraja por las insostenibles presiones externas procuradas por la transición al capitalismo. Se abre una coyuntura favorable para que, al interior de la estructura de sometimiento, se gesticule un proyecto propio de configuración espacial articulando los recursos existentes. Las interacciones comunales señaladas, permiten la conformación de federaciones locales (OSG's) y las figuras de la mediación de doble vía descritas en el capítulo 4, devienen en agentes de representación y disputa de abajo hacia arriba, frente al estado y a los terratenientes¹¹.

Segundo momento: Un mutilado proyecto de producción no capitalista...

El segundo modelo se ubica en el resultado de las reformas agrarias, donde los patrones definidos en el

marco de las transformaciones del modelo se reproducen más o menos de manera similar en todas partes. La unidad espacial se fragmenta, aunque las interacciones permiten el mantenimiento de territorialidades más o menos definidas.

Los campesinos acceden a la tierra y en cierta forma, a través de la representación federativa (OSG's), mantienen un control territorial a partir de la propiedad comunal. Ese control resulta visible para este momento, y logra establecerse en tanto continúa el ejercicio de relaciones sociales y simbólicas intercomunitarias (aunque mediante canales parcialmente modificados), a las que se incorpora el sentido clasista otorgado a la lucha por la consecución de los medios de producción. Se amplían los espacios de relacionamiento con formas organizativas extra locales.

La hacienda reduce sus territorios, incorpora tecnología y nuevas formas de relación laboral, más acordes con su inserción definitiva al capitalismo. Los terratenientes mantienen el control del régimen político local, y amplían sus espacios de representación y regulación hacia localidades mayores. Las redes de relaciones hacia adentro se debilitan casi por completo, mientras se amplían y diversifican las interacciones y alianzas con el espacio nacional. Paralelamente el poder pasa a ser compartido con la institucionalidad del Estado que irrumpe con su oferta de servicios y tecnología para tratar de dominar un escenario desestructurado, donde los campesinos deben quedar sujetos al capital.

10 Véase Trujillo, Jorge, La Hacienda Serrana 1900-1930, IEE-ABYA YALA, Quito, 1986.

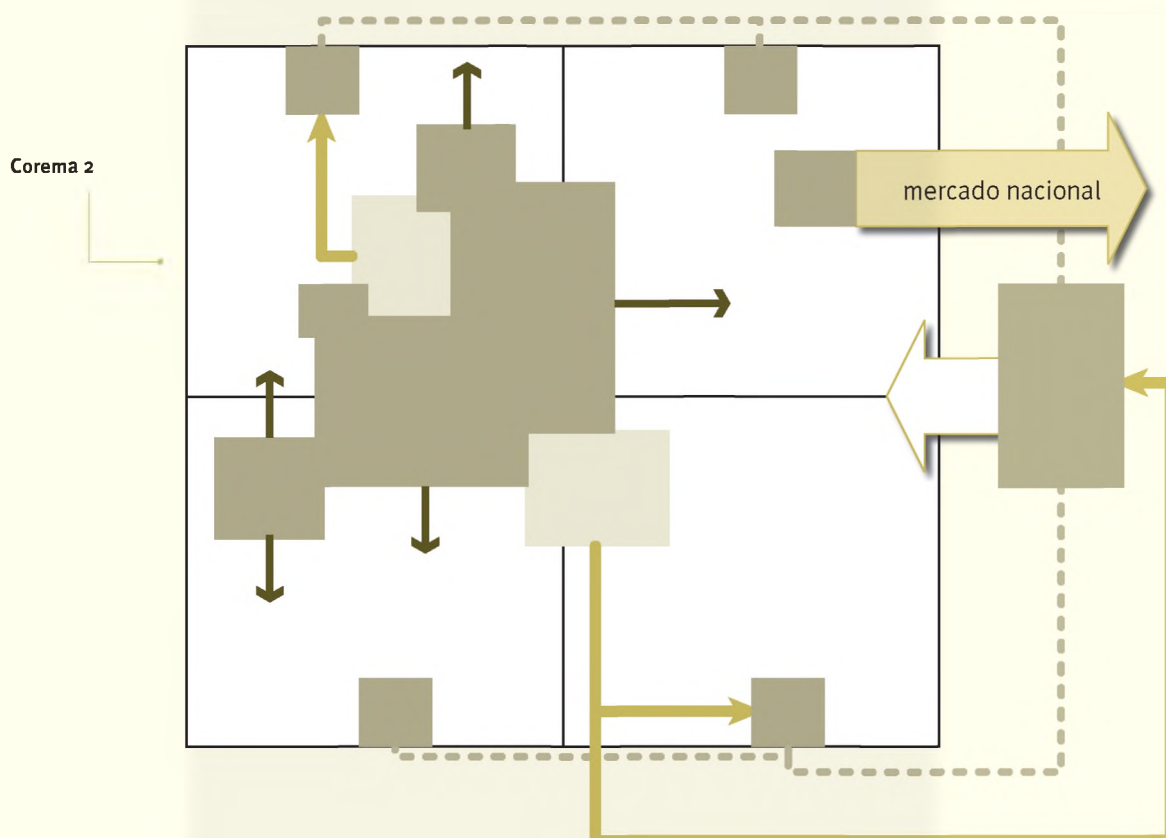
11 En lo simbólico, los roles conductores y de mediación de asignados durante la hacienda a regidores kipus son refuncionalizados, de modo que los primeros –guías espirituales y políticos– devendrían en cabildos, y los segundos –intermediarios letrados– en dirigentes de las OSG.

Las ciudades adquieren una nueva dinámica, nuevas formas de vinculación de la oferta laboral, se refuncionaliza su rol como mercado local, transformándose definitivamente en el espacio de extracción de la renta campesina para la reafirmación como territorio blanco-mestizo.

Los componentes ideológicos andinos y políticos campesinos, permiten por un momento, dibujar un espacio donde las comunas, bajo la representación de las OSG's, definen una organización descentralizada pero articulada por la reciprocidad y redistribución de producciones colectivas y circulación no capitalista. Las tierras, entregadas individualmente a familias y comunas, mantienen unidad territorial puesto que pasan a formar parte de un conglomerado más o menos homogéneo que federa recursos, sistemas productivos, identidades y demandas.

La UNOCANC y su vía campesina, se conforma durante este período. La dinámica federativa parte de una subjetividad de clase recientemente adquirida. Bajo la figura de cooperativas agrarias, las primeras alianzas productivas y territoriales serán capaces de aglutinar inmediatamente a las comunidades circundantes a quienes se apoyó en su proceso de recuperación de la tierra. Los aprendizajes acumulados en la lucha, los cuadros formados como clase, serán una pieza clave para consolidar una alianza colectivista que permita un mayor control espacial para enfrentar el poder que se desplaza.

El imaginario de la hacienda, sin embargo, define la distribución del espacio productivo comunal. Para el caso de la UNOCANC, por ejemplo, las comunidades y cooperativas asumen los nombres de la hacienda o sus sectores, e inician producción



con especializaciones para el mercado y reductos de auto consumo. La hacienda hereda al campesinado su forma de entender el territorio: aún contando con tierras marginales y de mala calidad en algunas comunidades, la producción agrícola se mantendría en las tierras bajas y los páramos continuarían siendo territorio comunal de pastoreo, recolección y área de reserva. Sin embargo, los campesinos mantendrán una agricultura colectiva —y territorios destinados para ello—, hasta sucumbir a las presiones del mercado que los impulsan a la fragmentación interna y a la privatización.

En un momento de construcción de un nuevo espacio, en el que el campesinado disputa el control territorial y la posibilidad de una agricultura autónoma, el poder ubica el escenario de disputa en el “desarrollo rural”.

El Estado inicia una cruzada de sujeción campesina al capital, a través de la oferta de modernidad, presionando a las OSG's a reconfigurar discursos y estructuras que habían nacido para consolidar el control sobre las tierras recientemente adquiridas y para liderar un proceso productivo no capitalista. De esta manera, el Estado explota el rol mediador asumido por estas organizaciones para transformarlas en responsables de la consecución de servicios y asistencia técnica.

La historia de la UNOCANC ilustra claramente este patrón: bajo el lema de “Tierra, justicia y libertad”, esta organización que acompañó las luchas campesinas por el control de los recursos productivos y la construcción de derechos, experimenta una rápida transformación funcional que responde a un proceso de sometimiento al mercado. El acceso a la

educación como nuevo recurso de acumulación y resistencia, produce al mismo tiempo ejecutores de la modernidad. Los cuadros “ilustrados” se convierten en vehículos para la introducción del paquete verde promovido por el capital, el discurso de la producción individual para el mercado y la sustitución de la insurgencia para la obtención de nuevas tierras por la figura mercantil de la compra. El sujeto colectivo es presionado a su formalización/ individualización.

El discurso del desarrollo, se erige en el nuevo poder ubicuo, más amplio, con rostros de mercado, de agencias estatales y de gobiernos locales con nombre terrateniente.

En síntesis, lo que pudo constituirse como un modelo de producción contra hegemónico debió enfrentar la presión de la incorporación al mercado y del discurso de la producción privada y la modernidad (paquete verde, sobreexplotación de recursos, monocultivo, privatización de tierras). La insurgencia cede ante las presiones de negociación y su consagración legal (Ley Agraria de 1994). Los derechos, sin haber sido conseguidos a plenitud, se vuelven un tema dado y por tanto, clausurado.

Sin embargo, las recomposiciones internas de las OSG's les permitieron mantener el acceso a los recursos productivos y continuar la disputa por el control del espacio. La UNOCANC por ejemplo, a pesar de su opción por el fortalecimiento de un discurso tecnológico, mantuvo un discurso político, que fortaleció la interlocución e incidencia de la organización, como ejes fundamentales de cohesión, identidad y movilización. En cierta forma se preservó el discurso, del control del espacio y los recursos.

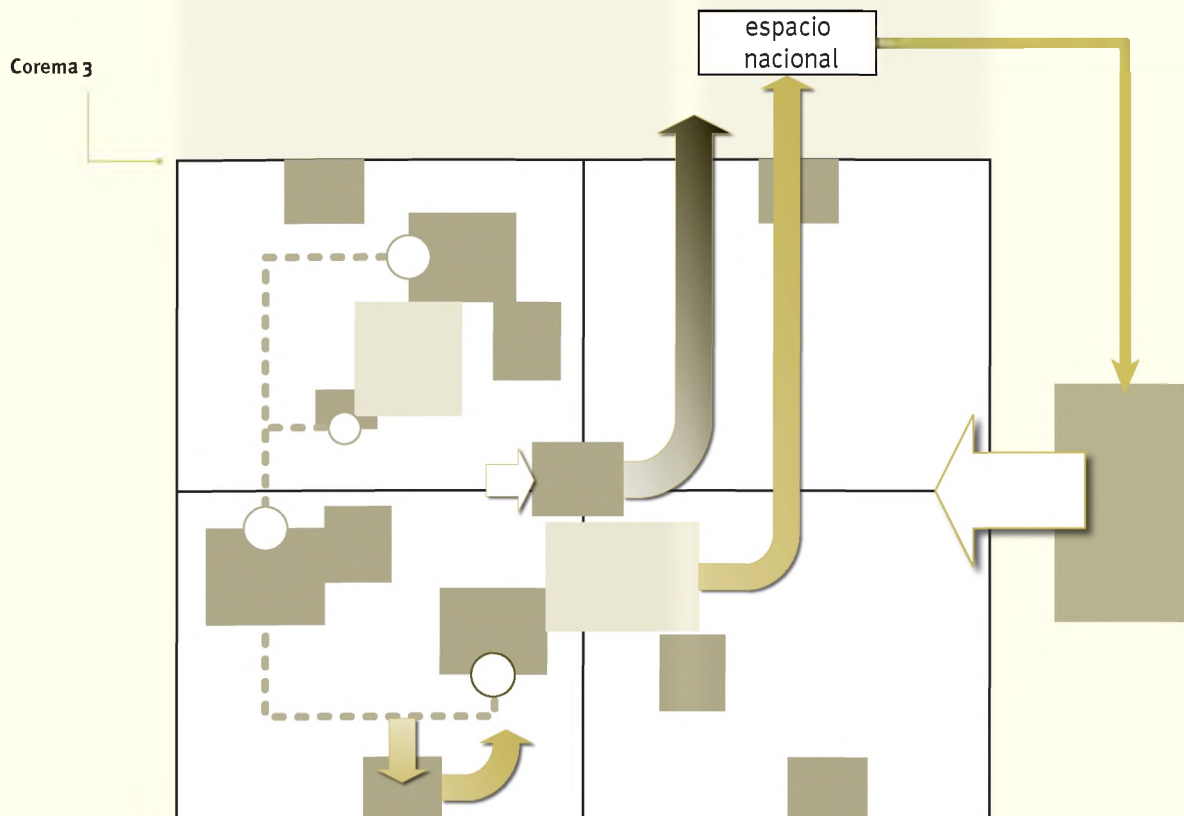
Tercer momento: los múltiples frentes de la subalternidad

El tercer momento describe la expansión del espacio nacional, la contracción del espacio local y la fragmentación del espacio campesino. El poder hegemónico nacional resulta ubicuo, intangible, invisible. Bajo la forma de agencias de desarrollo estatal y no gubernamental, mercado ampliado o gobierno local, el capitalismo avanza y se posiciona en las lógicas productivas campesinas para determinarlas.

Desde la subalternidad, este hecho significó abrir demasiados frentes. Las formas de acumulación espacial del poder se van legitimando y definiendo patrones de respuesta, marcados por la necesidad de reforzar las instancias de representación, mediación y negociación.

El rol mediador adquiere tal especialización, que separa las OSG's como estructura, de la organización territorial. Se vulneran –aunque no destruyen–, los mecanismos internos de decisión y consulta, con lo cual, las tecnologías de disciplinamiento se van introduciendo en la dinámica organizativa. Se sacrifica el control por la gestión del espacio.

El gráfico nos muestra propiedades agrícolas capitalistas vinculándose directamente al mercado nacional. Algo similar se produciría en relación a la representación política: el dominio directo a través del gobierno local ya no es funcional ni necesario. En su lugar, las organizaciones campesinas ocupan el espacio descuidado como un nuevo mecanismo de acceso a recursos, servicios y herramientas de redistribución local.



El mercado incrementa la extracción de renta y la dependencia campesina de la producción externa. Los centros poblados rurales disminuyen su dinámica, la población blanco mestiza se desplaza a urbes mayores, manteniendo el control espacial de las ferias y la oferta de productos externos para el consumo interno.

La primacía de la tierra individual por sobre el territorio colectivo se torna visible y hace imposible un ordenamiento productivo por parte de las organizaciones. La base material de reproducción colectiva, se desestructura, aunque sus bases sociales y simbólicas se mantienen y extienden. El proceso federativo avanza y se consolida en los espacios provinciales y nacionales.

Este es el escenario en el cual emerge la Jatarishun. A diferencia de la UNOCANC, su acumulado histórico no parte de la lucha por la tierra, sino del discurso del desarrollo. Aunque la reivindicación de los derechos a la educación, salud, infraestructura básica y sobre todo, a la otredad, son compartidos. La Jatarishun se constituye en un territorio fragmentado con escasos recursos en acelerado proceso de degradación.

El mismo escenario al que se enfrentan las dos organizaciones, provoca respuestas distintas a partir de sus distintos acumulados históricos.

La UNOCANC fortalece su capacidad de mediación en aras de consolidar un proceso educativo propio como herramienta de resistencia y constitución de nuevas formas de enfrentamiento al poder. Amplía la cobertura de infraestructura básica en las comunidades; pero fundamentalmente, direcciona con éxito sus esfuerzos a la consecución de proyectos

productivos de las organizaciones no gubernamentales.

Aunque ese proceso le significó el sometimiento al discurso del desarrollo y su articulación desventajosa y voluntaria a la dinámica del mercado, también le permitió mantener y fortalecer un discurso político campesino con identidad étnica, a partir del cual ha consolidado su red de relaciones intra e intercomunales y su legitimidad frente a las bases. Con estas herramientas ha podido posicionar su presencia dentro del Movimiento Indígena provincial y nacional. Por otro lado, no ha renunciado del todo a la posibilidad de controlar sus territorios y acceder a las tierras privadas circundantes.

Finalmente, desde la sujeción al discurso tecnocrático, ha mantenido una presencia activa y directa en las comunidades y ha conformado cuadros propios. Todo esto le dota de un mínimo margen de autonomía a los procesos productivos a través de esfuerzos permanentes (no siempre exitosos) de resemantización y politización de ese discurso.

La Jatarishun por su parte, no ha logrado estructurar desde la educación un espacio de generación de cuadros, ni políticos ni tecnocráticos. La gestión del desarrollo que asume, se vuelve por tanto, completamente dependiente de las agencias no gubernamentales. Sin embargo, las redes de relacionamiento andino continúan funcionando y fluyendo de manera paralela, como si la mediación del desarrollo funcionara como una suerte de pantalla protectora.

La historia de la Jatarishun, no registra procesos de lucha por la tierra en la formación de esta OSG¹².

Su constitución más tardía, respondería a condicionantes históricas distintos. Nacida con el impulso y a la luz de las herencias de la iglesia de los pobres, en un escenario para entonces ya dominado por el discurso del desarrollo y sus agencias, la Jatarishun resulta una especie de hermana menor de las OSG's. Expresa en su dinámica interna –y de alguna manera, también en su estructura externa–, las paradojas dejadas por la salida de los discursos reivindicativos clasistas y la entrada de las ONG's. En su interior, los movimientos paralelos, autónomos, funcionan más activa e informalmente que las construcciones de la representación.

Sin embargo, parecería existir una lógica de funcionamiento de comuna (extendida), en donde la directiva del cabildo asume todo el peso del *gestionamiento* hacia fuera y el ordenamiento del trabajo hacia dentro. Lógica que devela el enorme abismo existente entre las capacidades y aprendizajes generados por los procesos históricos comunales y las respuestas dadas a los requerimientos exteriores del “desarrollo” y la “gestión local” en los que la organización se ve inmersa tardíamente.

La legitimidad de su representación no pasa exclusivamente por el modelo de desarrollo y sus condicionamientos. Existe un conjunto de prácticas y “hábitos”¹³ provenientes de las estructuras comunales de interacción, que parecen funcionar de manera subterránea y que se vuelven

visibles en momentos de crisis o tensión.

La Jatarishun vive, al mismo tiempo, la misma efervescencia del desarrollo que vivieron otras organizaciones y su desgaste progresivo, con la mayoría de OSG's esto ha provocado una profunda crisis de orientación y representatividad. Sin embargo, se relaciona con los discursos del desarrollo (género, producción, medio ambiente, ciudadanía) de manera impermeable. No son asumidos, tampoco digeridos y procesados internamente para resignificarlos, aunque en los peores casos devasten sus bases materiales de reproducción social.

El escenario trazado en el corema, grafica con bastante aproximación lo que ocurre en Saquisilí. Con territorios fragmentados y en medio de una crisis ecológica, la organización encuentra en la captación del gobierno local, la posibilidad de expandir su espacio de control y redistribución de recursos.

La ocupación de facto del territorio urbano y de la institucionalidad de gobierno, no significa necesariamente el control del espacio y del poder. La experiencia de la Jatarishun, evidencia una expansión viciada de debilidades previas. Entre ellas destaca la falta de formación ideológica y proyecto político claro que impida la reproducción de los vicios hegemónicos y posicione una propuesta autónoma. La debilita también la no consolidación de un control mínimo

12 Exceptuando Yanahurco, con una temprana vinculación a la FEI en la lucha por la tierra, pero esta comunidad y sus sectores pertenecían hasta hace algunos años a la UNOCANC, y sus dinámicas se corresponden más con las de esta organización.

13 Utilizamos estos términos debido a que, desde los niveles de inserción de Heifer, no se ha podido visualizar un sistema, una lógica en este funcionamiento, es posible que exista pero no se ha logrado una lectura suficiente que de cuenta de éstos, ni de los códigos, canales y redes que los sustenten.

del territorio y los recursos asignados a la organización así como la ruptura de los mecanismos de legitimidad que dan fuerza a la representación de la OSG. A ello se suma la falta de cuadros propios que, han impedido el control del nuevo espacio para consolidar el proceso redistributivo.

Desde la ocupación de la alcaldía por parte de la Jatarishun hace ocho años, el escenario del poder local de Saquisilí deja la impresión de un estado de “tablas” permanente, en la lucha por el acceso pleno a los espacios de decisión. Aparentemente, la Jatarishun no ha sido capaz de levantar una sola propuesta cantonal de desarrollo ni ha respondido con la celeridad, eficiencia o iniciativa suficientes frente a las propuestas de su alcalde.

Si revisamos lecturas de la Jatarishun realizadas en los albores de la gestión india, encontramos señaladas las mismas fortalezas y carencias que podemos distinguir ahora, siete años más tarde:

“No obstante esta gran capacidad de convocatoria y representación, así como su progresiva y ascendente presencia en el escenario político local, la Jatarishun mostraba débiles capacidades de propuesta ante la gestión municipal y una ausencia de iniciativas para dismantelar las estructuras tradicionales existentes”.

“Le queda aquí a la Jatarishun cumplir un papel fundamental: dimensionar su nueva posición dentro de la correlación de fuerzas local y el espacio ganado y ocupado, para llevar adelante más conscientemente, las iniciativas de concertación pendientes en el cantón, así como ani-

mar, desde el Concejo y el CDC las transformaciones estructurales que se demandan.”

Los desafíos siguen siendo los mismos, y fueron señalados como imprescindibles para modificar las estructuras cantonales o cuando menos, sostener la presencia indígena. Mas, como si hubiésemos asistido a un paréntesis temporal, las condiciones continúan siendo, en esencia, similares. Lo curioso en este caso, es que a pesar de que la Jatarishun no ha superado sus carencias ni asumido sus retos¹⁴, aparentemente tampoco habría perdido espacios.

El esquema presentado permite en unos casos, facilita en otros, pero en ninguno impide, que la Jatarishun desarrolle un amplio abanico de relaciones, que le permiten mantener y hasta posicionarse en otros escenarios.

La Jatarishun se las ha arreglado para contar siempre con representantes o delegados en instancias burocráticas atinentes, sobre todo, a los “temas indios” (dirección provincial de EBI, salud indígena, tribunal electoral) y ha peleado exitosamente su representación en el MICC. Esta descripción, no considera la calidad de la representación que, desde una perspectiva convencional, no pasaría ni la más superficial evaluación analítica, menos aún política. Sin embargo, es necesario darle una lectura cuidadosa para explicar la importancia que la organización le otorga a esa representación, el tipo de resultados que le proporciona, y la presencia permanente de la Jatarishun en los escenarios local y provincial. Recalco una

¹⁴ Baste mirar los roles asignados a la Jatarishun para la plena ejecución del plan cantonal de desarrollo, que sin ser ambiciosos, vistos ahora resultan excesivos para lo que puede asumir la organización.

vez más que esa amplitud de representación en los espacios políticos se combina con una falta de cuadros políticos o técnicos, o de capacidades de propuesta. La diferencia con la UNOCANC es patente, puesto que esta última también disponen de una red de relaciones y posiciones hacia fuera de su localidad, pero se esfuerza por explicitar la organicidad política de su adscripción a las mismas.

Vale señalar, que en este mismo escenario planteado por el corema, las redes de relaciones que históricamente las comunidades y organizaciones han ido cultivando, se mantienen aunque se modifican parcialmente en sus sentidos y funcionalidad.

Cuarto momento: la desmembración total de las bases materiales e ideológicas de reproducción y la conciencia crítica como gestor nuevas posibilidades.

El escenario trazado presentaría una avanzada agresiva del capital en su dinámica de acumulación extrema. Un estado desmantelado, el mercado global empujando las puertas campesinas y un movimiento indígena debilitado por la cooptación de la representación política. El poder se desvanece en lo local pero ejerce dominio sobre éste desde lo global. El discurso del desarrollo se erige como la herramienta ideológica fundamental dentro de los procesos de expansión capitalista, cumple un rol desactivador de los acumulados movilizados de los sujetos colectivos, se encarga del ocultamiento de las contradicciones fundamentales que sostienen esa expansión, y amortigua los impactos de la expropiación. Sin embargo, para la resistencia existen posibilidades

de recomposición de fuerzas, dado que las contradicciones fundamentales del capital no han sido tocadas, por el contrario se han agudizado con la reapropiación de tierras, la expropiación del agua y la liberalización de mercados que presiona a una acelerada descampesinización.

En este escenario nace la UOPICJ, despojada de los acumulados históricos de lucha, pero heredera de un fuerte componente identitario. Tratando de gestionar los recursos del desarrollo para utilizarlos en función de constituir ejes movilizados que contribuyan al control territorial de sus bases, convive con las formas remozadas de explotación laboral de las agroempresas asentadas localmente, mientras busca alternativas productivas para emancipar esa fuerza de trabajo.

Utilizando un esquema similar al tutelaje inicial de la Iglesia Católica en la conformación de las organizaciones de segundo grado en los años 1970 e inicios de 1980, aunque imprimiendo un control más riguroso, el PDA¹⁵ promueve a la UOPICJ y consigue con ello, adicionalmente, revestir de “participativos” sus proyectos de desarrollo. Esta organización le permite controlar los procesos de intervención, avalados por figuras de consulta a la población.

La UOPICJ nace en el marco del debilitamiento de la Casa Campesina de Pujilí y de un proyecto desarticulador orquestado por Visión Mundial, para lo cual ha recurrido a la ejecución altamente condicionada de proyectos de salud, educación y marginalmente, de producción. Aunque sus bases cotidianamente enfrentan severos

conflictos en torno al control y acceso a los recursos naturales, principalmente el agua, la UOPICJ –carente de las herencias reivindicativas de su progenitora COJACAP–, no ha sabido o no ha podido levantar un discurso aglutinador como representante de las demandas estratégicas de sus comunidades.

El PDA, agencia financiera de las emergentes actorías evangélicas, encuentra terreno fértil en la necesidad de representación existente en las comunidades del Jatun Juigua (siempre definidas con identidad propia al interior de la COJACAP), para expandir las fuerzas de esta tendencia.

Otorgando todavía a los financiamientos externos el poder de resolver las demandas inmediatas de las comunidades de base y mirando a los proyectos como un fin para la legitimación, la UOPICJ ha establecido vínculos en condiciones subalternas, allanándose a los condicionamientos de estas agencias.

Por otra parte, la escisión de la COJACAP, esta todavía en proceso, sobre todo a nivel del imaginario de algunas comunidades de base y de la estructura dirigencial de la organización. Todavía están presentes vínculos históricos que se conjugan con resentimientos propios de la ruptura. Esto da lugar a una relación de conflictividad pasiva, que se manifiesta en la “indecisión” de algunas comunidades respecto a su filiación organizativa y en la vigilancia permanente de la COJACAP, especialmente en aquellos territorios todavía no definidos o en espacios comunes de intervención. Ejemplos que grafican esta vinculación no resuelta, son la interacción de las comunidades de Cuturiví o San Isidro.

El relacionamiento con otros actores en el escenario cantonal, ha movilizado importantes esfuerzos de la UOPICJ. Progresivamente, la OSG, ha venido tejiendo sus propias redes de interacción con otras OSG, incluyendo la misma COJACAP. Esto le está permitiendo proyectar una imagen autónoma y posicionarse más firmemente en el concierto de organizaciones del cantón e incluso de la provincia.

Existe latente una relación de hecho con terratenientes cuyos predios se encuentran en el territorio de Jatun Juigua que, más allá de las interacciones bilaterales con las comunidades vecinas, está siendo vista por la UOPICJ como un tema que debe ser tratado y resuelto. Existe la aspiración de las comunidades por acceder a la posesión de algunas de estas tierras, al tiempo que circundan ideas de negociación extraídas desarticuladamente del nuevo discurso de “servicios ambientales”. En todo caso, aunque recurrentemente circula el tema, no se define aún con claridad, el enfoque y la posición política que regirá esta relación en el futuro. Tampoco se tiene una lectura sobre la posición de los hacendados que permita vislumbrar el peso que éstos le dan.

Por último, la UOPICJ ha otorgado mucho peso a su vinculación con el MICC. Siguiendo los procedimientos estipulados en sus normativas, la UOPICJ ha presentado su solicitud de pertenecer al MICC.

A pesar de las debilidades políticas de sus cuadros y la gran dependencia respecto al PDA, la UOPICJ cuenta en su espacio con ejes movilizados que no se pueden resolver exclusivamente desde los discursos del desarrollo y que se están convirtiendo en un imperativo a ser asumido. Su desafío central es poder generar

debates en torno a las problemáticas no resueltas de agua, tierra y recursos naturales, que susciten una toma de conciencia política en la organización. La UOPICJ se presenta como un espacio con mucho potencial en la construcción de capacidades críticas y propositivas. Es un sujeto colectivo en potencia.

El territorio que ocupan las comunidades filiales a la UOPICJ expresa todas las presiones materiales e ideológicas que se ejercen para desplazar a los campesinos de su espacio. La extensión de páramo en manos de las comunidades de la organización bordea las 6 mil hectáreas, de donde proviene el agua que abastece a la población urbana de Pujilí y Salcedo, y el agua para riego de todas las agroexportadoras y todos los pequeños agricultores de la zona baja.

Es en este espacio donde vemos la más injusta distribución del agua en la provincia, donde se observan las prácticas más crudas de flexibilización laboral, y donde se ejercen las más inescrupulosas formas de presión sobre la propiedad comunal y el control de recursos. Al mismo tiempo, constituye un escenario donde las prácticas clientelares y de desarticulación comunal provenientes del gobierno y las ONG's han logrado mejores resultados.

El territorio que se disputa la UOPICJ, es el que mejor expresa los impactos ambientales y espaciales del modelo de ajuste estructural, claramente definidos por Larrea:

- a) “Aumento de la presión económica sobre los recursos naturales, e intensificación de actividades extractivas o cultivos de limitada o dudosa sustentabilidad, en

particular en el sector primario-exportador.

- b) “Exclusión social creciente de los campesinos pobres, e intensificación de problemas ambientales resultantes de la elevada presión social sobre la tierra, como el agotamiento de los suelos, la erosión, la desertificación y el sobrepastoreo.
- c) “Aumento de la presión social sobre los ecosistemas naturales remanentes, y en particular sobre los bosques tropicales, los ecosistemas marinos y de las Islas Galápagos, como resultado del incremento de la pobreza, el desempleo y la inequidad social.
- d) “Debilitamiento estructural del Estado y de su rol regulador ante los efectos negativos de las actividades económicas sobre el medio ambiente, como la deforestación de bosques tropicales y manglares, y la construcción de vías y megaproyectos en áreas frágiles por parte de grandes empresas.” (Larrea, 2001).

Conclusiones

El desafío actual para las tres organizaciones, radica en la recomposición de las fuerzas internas, el retorno a la disputa por el control de los recursos, la lectura crítica y resignificación del discurso del desarrollo. Temas recurrentes como la soberanía alimentaria, el manejo de páramos, o la agroecología –por ejemplo–, acuñados en el discurso del desarrollo ponen en valor el trabajo, el saber y la cultura campesinas. Ellos establecen como primera prioridad la propia reproducción, y colocan en el centro

del proceso productivo a la familia productora. Estos son los gérmenes de la conciencia de sí y para sí que debe ser reconstituida en las organizaciones

El manejo del agua, la resolución de conflictos por adjudicación, el fortalecimiento de las organizaciones de regantes, la distribución del riego, son ejemplos de temas que movilizan fuertemente a las organizaciones. Aprender a hacer técnicamente ese manejo proporciona un cierto nivel de poder, pero aprovechar ese proceso de aprendizaje para darle un sentido de apropiación del recurso para la reproducción campesina, para el empoderamiento de la organización y para la defensa de sus medios de producción frente a otros, modifica el sentido de la movilización.

Estos son los temas a politizar, son los espacios reactivadores de una

articulación estrecha entre las dirigencias y las bases, proporcionan el escenario para fortalecer mecanismos permanentes de consulta y participación para la toma de decisiones. Con ellos se revitalizan las bases simbólicas e identitarias que robustecen la conciencia de los sujetos sociales y ponen en juego las capacidades de lectura política de la realidad y gestión social de las organizaciones.

El conocimiento práctico debe convertirse en plataforma para el conocimiento crítico y transformador. El ejercicio concreto de prácticas resignificadas contribuye a la acumulación de poder en los sujetos, en tanto el desarrollo es usado para impulsar alternativas propias, cambios de mentalidades mediante el desmantelamiento de los discursos dominantes, y la elaboración de propuestas de las organizaciones en los procesos locales desde las organizaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Agudo, Ximena **Tiempo, espacio y poder: las claves metadiscursivas del desarrollo sustentable**, disertación preparada para el Encuentro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Miami, marzo, 2000. Versión en línea.
- Bonilla, Angel **“Actores sociales para la gestión de los recursos naturales”. Gestión Social de los Recursos Naturales Módulo 5**, Curso de Desarrollo Local con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, CAMAREN/IEE compiladores, 2003, mimeo.
- Ceceña, Ana Esther **La resistencia como espacio de construcción del nuevo mundo**, versión en línea de un trabajo presentado como ponencia en el seminario *La sociedad mexicana frente al tercer milenio* organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM del 7 al 10 de septiembre de 1998.
- Deler, Jean Paul **Del espacio al Estado nacional**, Biblioteca de Geografía Ecuatoriana, Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, 1987.
- Dinerstein, Ana **Subjetividad: capital y la materialidad abstracta del poder (Foucault y el Marxismo Abierto)**, Primeras Jornadas de Teoría y Filosofía Política, 21 y 22 de Agosto de 1998, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires 1998
- Dinerstein, Ana **El poder de lo irrealizado. El corte de ruta en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización**, documento en línea, publicado en el Observatorio Social de América Latina (CLACSO, Rio de Janeiro), Septiembre 2001.
- Field, Leonard **“Aspectos político-sociales del manejo de los recursos naturales en la Cordillera Occidental de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua”**, en **Estudios Rurales, Antología de Ciencias Sociales**, Luciano Martínez compilador, FLACSO-ILDIS, Quito, 2000.
- H. Consejo Provincial de Cotopaxi **Plan Participativo de desarrollo de Cotopaxi**, HCPC/MICC, 2002.
- Ibarra, Hernán y Pablo Ospina **Cambios Agrarios y Tenencia de la Tierra en Cotopaxi**, Cuadernos de Investigación 3, FEPP, Quito, 1994.
- Iturralde, Diego **“Notas para una historia política del campesinado ecuatoriano”**, en **Nuevas investigaciones antropológicas ecuatorianas**, Lauris Mckee y Silvia Argüello, editoras, Abya Yala, Quito, 1988.
- Larrea, Carlos **Hacia un análisis ecológico de la Historia del Ecuador: hipótesis y propuestas preliminares** Ecociencia, 2001, versión electrónica.
- Luna, Milton **“Estado: Regionalización Política del Ecuador 1800-1860”**, en **Revista Quitumbe**, Dpto de Historia y Geografía PUCE, Quito, 1987

Martínez, Cris	Actorías y Sujetos Colectivos , 1998, documento en línea.
Míres, Fernando	Entre el Estatismo y el Neoliberalismo , página virtual Discutiendo a Pierre Bordieu, documento en línea
MICC	Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi-MICC. Historia y Proceso Organizativo , Lourdes Tiban, Raúl Ilaquiche y Eloy Alfaro R. compiladores, Latacunga, 2003.
Núñez, Ana	Los unos y los otros en la lucha por la apropiación del espacio , Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología, recursos de investigación, congreso virtual 2000, documento en línea.
Núñez, Jorge y Wilson Vega editores	Historia y Espacio en el Ecuador , Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”,1998.
Olmo Brau, Carlos	Michel Foucault: poder, autonomía, rebelión , página virtual: Cuaderno de Materiales Filosofía y Ciencias Humanas, Madrid, 2000, documento en línea.
Ospina, Pablo	“Esquemas para una breve historia del espacio ecuatoriano”, Historia del Espacio Módulo 2 , Curso de Desarrollo Local con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, CAMAREN/IEE compiladores, 2003, mimeo.
Pachano, Simón	Pueblos de la Sierra , PISPAL-IEE, 1986
Quintero, Rafael, edit.	La Cuestión Regional y el Poder , Proyecto FLACSO-CERLAC III, Biblioteca de Ciencias Sociales, Vol. 29, Corporación Editora Nacional, Quito, 1991.
Rainbow, Paul	Naturaleza Humana: Justicia versus poder . Documento en línea, s/f.
Tiscornia, Sofía	“Relaciones de poder y dominación. La microfísica del poder”, en Apuntes de Clases Teóricas, Antropología Sistemática I: Organización Social y Política , 2003, documento en línea.
Thurner, Mark	“Políticas campesinas y haciendas andinas en la transición al capitalismo: una historia etnográfica”, en Etnicidades, Antología de Ciencias Sociales , Andrés Guerrero, compilador, FLACSO-ILDIS, Quito, 2000.
Trujillo, Jorge,	La Hacienda Serrana 1900-1930 , IEE-ABYA YALA, Quito, 1986
Valero, Alfonso	“Sujetos Colectivos” en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales , Madrid, 2000, documento en línea.
Valencia, Hernán,	“Visiones del Desarrollo”, Introducción al Desarrollo Local Sustentable Módulo 1 , Curso de Desarrollo Local con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, CAMAREN/IEE compiladores, 2003, mimeo.

UNIDAD 3

UNIDAD TRES

Procesos de ocupación del espacio y lineamientos de gestión en el páramo del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi

Marjorie Viera C.*

* Documento elaborado originalmente como tesis para el Curso “Desarrollo Local con énfasis en la gestión de los recursos naturales” IEE-Camaren.
Diciembre 2003.

CAPÍTULO 1

EL PÁRAMO

Caracterización general del páramo

Desde el punto de vista ecológico, los páramos son ecosistemas tropicales de altura. Un ecosistema es tropical cuando se halla entre los trópicos de Cáncer en el Norte y Capricornio en el Sur. En el Ecuador, si no hubiera la sierra andina, la Costa se uniría con el Oriente, y todo el territorio nacional sería una planicie caliente. La responsable de la variabilidad es la Cordillera de los Andes, que genera una especie de escalera en la cual cada escalón es un ambiente diferente con condiciones biológicas y climáticas especiales.¹

Luis Cañadas² considera que el 1,81% del país es páramo, en tanto que el Centro de Datos para la Conservación y el Proyecto Ecociencia - TMI piensan que se acerca al 5%. Una cifra parecida ofrece el PRONAREG.

Los páramos ocupan un área de 12.500 km², están habitados por 500.000 personas y 5.000.000 más están relacionadas indirectamente

con ellos. El 40% de la superficie está en comunidades indígenas y campesinas, el 40% es parte de áreas protegidas y el 20% restante forma parte de grandes haciendas³.

La altura típica, pero no fija, a la que empiezan los páramos ecuatorianos es de 3.500 msnm. En el sur del país los páramos empiezan a 3.000 msnm⁴.

Los 10 tipos de páramos existentes a nivel nacional son: Páramo arbustivo de los Andes, Páramo de Frailejones, Páramo de Pajonal, Páramo Herbáceo de Almohadillas, Páramo Herbáceo de Pajonal y Almohadillas, Páramo Pantanoso, Páramo Seco, Páramo sobre Arenales, Super Páramo, Super páramo Azonal⁵.

Para poder considerar una zona como páramo se necesitan dos condiciones básicas: ser tropical y estar en las alturas. Hay páramos en Venezuela, Perú, Costa Rica, Kenia y Nueva Guinea⁶. La situación tropical y elevada del ecosistema determina tres características del páramo: Frío intenso durante varias horas del día, alta

1 AGUILAR Mario, CHONTASI Rodrigo, MEDINA Galo, MENA Patricio. Manejo de páramos y zonas de altura. El Ecosistema páramo y su conservación. Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas IEDECA. CAMAREN, Quito Ecuador 2 000.

2 CANADAS, L, El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. MAG -PRONAREG. Quito Ecuador 1983.

3 HOFSTEDE, Robert. La Geografía, Ecología y Forestación de Sierra Alta del Ecuador

4 Íbid.

5 ECUADOR, Tierra Incógnita. Volumen 2. N° 8. Septiembre del 2000

6 AGUILAR, CHONTASI, MEDINA, MENA, Op. cit.

7 Íbid.

irradiación ultravioleta, baja presión atmosférica⁷.

Frío intenso durante varias horas del día, debido a que la capa atmosférica es menos gruesa que en los ecosistemas bajos, por lo que la energía solar que entra vuelve a salir y no se genera este “efecto invernadero” natural. El páramo es considerado un “desierto fisiológico”, porque aunque contiene mucha agua, ésta no está disponible durante todas las horas del día. Las plantas pueden aprovecharla únicamente a una determinada temperatura, por lo que las plantas han desarrollado características específicas que les permiten sobrevivir, asemejándose a las que se desarrollan en el desierto.

Alta irradiación ultravioleta, debido a que la delgada capa de atmósfera no funciona como un filtro de los rayos ultravioletas que pegan en el páramo con gran intensidad. Las pelusas y color brillante de las plantas permite que los rayos UV se reflejen y causen menos perjuicio a su anatomía. Las plantas deben aprovechar al máximo el poco calor que reciben y evitar el exceso de energía de los rayos solares.

Baja presión atmosférica, por escasez de oxígeno en el aire, la presión de la delgada capa de atmósfera es menor que en las zonas bajas.

Recursos del páramo

Las plantas que crecen en los páramos tienen diversos orígenes. Unas estuvieron allí cuando empezaron a

elevarse los Andes y se adaptaron a las condiciones agroclimáticas. Otras llegaron desde el norte. Algunas vinieron desde las partes bajas del occidente y del oriente, y otras desde el sur⁸.

Estas plantas se clasifican en cinco tipos: Penachos, rosetas gigantes, rosetas sin tallo, almohadillas y arbustos. Estas plantas pertenecen a 110 familias, 480 géneros y 4000 especies de helechos, gimnospermas y plantas con flores. Algunas de ellas son endémicas (un 60%). Se encuentran animales de todos los tipos taxonómicos⁹.

Invertebrados (lombrices e insectos); *Peces* (truchas); *Anfibios* (jambatos, sapos, ranas); *Reptiles* (lagartijas); *Aves* (cóndor andino, curiquingue, guarro, gavián) *Mamíferos* (osos de anteojos, venados, chucuris, lobos de páramo, cuyes, llamas, alpacas, vicuñas, cabras, ovejas, vacas).

Beneficios del páramo

Los beneficios del páramo son múltiples. El páramo es el hogar de familias indígenas, que viven en él. Es el lugar donde se vive su cultura mantenida a través del tiempo. Por otro lado, el páramo es donde se almacena el agua, se han valorado económicamente los recursos hídricos almacenados. Se estima que permiten recuperar 2.223 millones de dólares anuales para la economía del país, que representa el 20% del PIB. El 75% del valor total anotado es el de la producción agrícola¹⁰ (ver cuadro 1).

8 ECUADOR, Tierra incógnita, Op. cit.

9 AGUILAR, et al, Op. cit.

10. ECUADOR, Tierra incógnita, Op. cit.

PRODUCTOS ECONÓMICAMENTE SUSTENTABLES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Productos Económicamente sustentables	Servicios ambientales
Manejo de alpacas	Generación, retención y purificación del agua
Producción de preñadillas y truchas	Fijación y retención de carbono
Centres de investigación aplicada	Control parcial del clima
Producción de chuquiragua	Conservación del suelo
Turismo de montaña	Mantenimiento de la biodiversidad
Producción de flores de páramo	Control natural de plagas
Producción de frailejones	Dispersión de semillas y traslocación de nutrientes
Producción de frutos de páramo	Mitigación de inundaciones
Pajonal	Purificación del aire
Producción de plantas medicinales	Retención de nutrientes
Producción de yagual	Belleza escénica

Fuente: VEGA, E. y D. MARTÍNEZ. 2000. productos Económicamente Sustentables y Servicios Ambientales del Páramo. Páramo 4. GTP/Abya Yala. Quito

El páramo, entre otras funciones, cumple con el rol de regulador del agua. Es una esponja que almacena agua en invierno y la libera paulatinamente. Sus suelos contienen más del 200% de agua en relación al peso seco. La explicación de este fenómeno es geológica, “la tierra forma un gel de aluminio, vidrio y humus que se mantiene a temperaturas bajas, misma que no se descompone rápidamente, por eso la tierra es negra y contiene gran cantidad de carbono en forma de raíces”¹¹. Para este autor, es importante proteger la capa superficial (pajonales, almohadillas, arbus-tos, líquenes), porque cualquier alteración (quemadas, sobrepastoreo) que impida que pase el agua, equivale a la colocación de un plástico.

Las precipitaciones en los páramos provienen del movimiento vertical de la atmósfera, a partir del deslizamiento del aire frío por los declives

del relieve. Esto brinda la ocasión a las masas de aire caliente cargadas de humedad, de ascender hacia regiones atmosféricas más altas en donde se hallan núcleos de condensación. Las lluvias en los páramos se presentan a lo largo de todo el año. Las precipitaciones oscilan desde los 468,2 mm registrados en la estación Pachamama Tixán, provincia de Chimborazo a 3.600 msnm hasta 1.800 msnm en San Marcos, Pichincha a la misma altura. La estación Cotopaxi registra 1.147 mm a 3.560 msnm¹².

El 2,5% del total de agua del planeta es dulce, del cual el 69% se halla en glaciares, hielos subterráneos y nieves perpetuas y el 30% en aguas subterráneas. “En 1950 las reservas mundiales de agua dulce eran de 16.800 m³ por persona año, hoy se reducen a 7.300 m³ y en solo 25 años podría descender a 4.800 m³”¹³.

11 HOFSTEDE, Op. cit.

12 Íbid.

13 Íbid.

CAPÍTULO 2

PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL PÁRAMO

Antecedentes

La serranía ecuatoriana se caracterizó por la presencia de haciendas, que determinaron algunas formas de ocupación del espacio a través de la historia. La hacienda serrana estableció relaciones de producción precapitalistas, que incluyeron profundos atropellos a la dignidad humana. Supuso el ejercicio del poder por un grupo hegemónico poseedor de los medios de producción. La ocupación del espacio y el modelo tecnológico del sistema hacendatario ha provocado problemas ambientales y consecuencias sociales de magnitud que incidieron en el comportamiento de la sociedad local y en el ordenamiento territorial.

El cantón Saquisilí fue un buen ejemplo de esta tendencia general. La zona rural del cantón Saquisilí, estuvo constituida por haciendas, que luego del proceso de Reforma Agraria fueron entregadas a los trabajadores como compensación por toda una vida de trabajo precario. En la actualidad, como resultado del modelo terrateniente, se evidencia un marcado deterioro de los recursos naturales. Aproximadamente el 50% de suelo del cantón está erosionado. Hay escasez y/o ausencia del recurso hídrico, lo que a su vez ha ocasionado una serie de fenómenos sociales como migración y otros como la

disminución progresiva de la fertilidad del suelo. Esto, a su vez, provoca la disminución de la productividad agrícola e intensifica la utilización productiva del páramo.

Las antiguas haciendas, ahora en manos de comunidades, son áreas de producción y vivienda. El páramo comunal solo existe en algunas comunidades que accedieron a él durante la Reforma Agraria.

Desde la Reforma Agraria la ocupación del espacio en el área de estudio dependió de los cambios en el ecosistema, de la demanda del mercado de productos de consumo masivo, de la escasez de medios de producción como tierra, agua y capital. En ese contexto, los ojos se volcaron hacia el páramo como un medio de producción disponible, sin considerar su vulnerabilidad o sus beneficios ecológicos.

Las haciendas serranas a comienzos de la década de 1960

De acuerdo a Costales y Peñaherrera¹⁴ la conformación de la estructura de la sierra ecuatoriana obedece a un complejo y poco estudiado sistema de incorporación de la fuerza de trabajo indígena a los diversos mecanismos creados por los colonizadores en el

14 COSTALES, A y PEÑAHERRERA. Historia Ecuatoriana. Quito Ecuador 1969.

proceso de generación de excedentes. Este proceso desembocó, en el periodo republicano, en la hacienda como eje estructurador de la sociedad agraria. Junto a la misma, y configurando una trama menor, coexistían las comunidades (con origen en las reducciones indígenas) y campesinos independientes.

Según Costales y Peñaherrera, hacia la década de 1930, las propiedades de hasta 10.000 sucres de avalúo se pueden considerar campesinas y representan el 23% del valor total, contra 67% de las haciendas (ver cuadro 2). Puede notarse el peso decisivo de la gran explotación (hacienda) en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo.

Estos datos permiten tener una idea aproximada de la situación hacia 1934 ya que hasta el Censo Agropecuario de 1954, el país careció de estadísti-

cas agropecuarias globales. Para esta última fecha se puede apreciar (ver cuadro 3) la elevada concentración de la tierra, ya que el 0,3% de las explotaciones con más de 500 hectáreas poseía el 48% de la superficie agropecuaria total.

Las familias huasipungueras, según el censo de 1954, llegan a 19.700, constituyendo solo el 7% del total de todos los tipos de familias existentes en la sierra. En realidad, el aporte de la fuerza de trabajo a las haciendas provenía de un conjunto de trabajadores de distinto tipo: yanaperos, peones sueltos, arrimados. Por otra parte, un sector importante de las tierras de la hacienda se explotaba a través del sistema de arriendos y aparcería.

Este conjunto de relaciones precarias de trabajo pueden esquematizarse así:¹⁴

Cuadro 2

PROPIEDADES DE LA SIERRA ECUATORIANA EN ESTRATOS POR MONTOS DEL AVALÚO CATASTRAL 1934											
Provincia	Hasta 10000 sucres		10001 a 100000 sucres		100001 a 350000 sucres		350001 a 500000 sucres		+de 500000 sucres		Total
	Nº,	%	Nº,	%	Nº,	%	Nº,	%	Nº,	%	Nº,
Carchi	4085	5,9	261	5,0	27	4,8	3	3,8	3	3,4	4379
Imbabura	7439	10,8	275	5,3	55	9,7	7	8,9	14	16,1	7790
Pichincha	7535	10,9	903	17,6	293	51,7	55	69,6	54	62,1	8840
Cotopaxi	6429	9,3	438	8,5	64	11,3	6	7,6	7	8,1	6944
Tungurahua	12310	17,9	827	16,1	30	5,3	2	2,5	4	4,7	13173
Chimborazo	4211	6,1	739	14,5	64	11,2	5	6,3	1	1,1	5020
Bolívar	5583	8,1	387	7,6	8	1,4	-	-	-	-	5978
Cañar	4218	6,1	271	5,3	9	1,6	-	-	3	3,4	4501
Azuay	11635	16,9	528	10,3	8	1,4	1	1,3	1	1,1	12173
Loja	5554	8	503	9,8	9	1,6	-	-	-	-	6066
Total	68999	100,0	5132	100,0	597	100,0	79	100,0	87	100,0	74864

Fuente: Cesar Cisneros Cisneros. Demografía y Estadística sobre el indio ecuatoriano, Talleres Gráficos Nacionales, Quito 1948.

14 íbid.

Cuadro 3

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE, EN VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES, POR ESTRATOS DE SUPERFICIE. SIERRA ECUATORIANA, 1954				
Tamaños	Nº. de explotaciones		Superficie Total	
	Número	%	Hectáreas	%
Menos de 1 ha	83.714	32,2	40.400	1,4
De 1 a 5 ha	128.439	49,5	301.300	10,0
De 5 a 10 ha	22.443	8,7	154.700	5,1
De 10 a 20 ha	10.570	4,1	142.000	4,7
De 20 a 50 ha	7.722	2,9	220.000	8,0
De 50 a 100 ha	3.594	1,4	218.700	7,2
De 100 a 500 ha	2.868	0,9	471.100	15,6
De 500 a 1.000 ha	330	0,1	228.300	7,6
Más de 1.000 ha	389	0,2	1.243.900	41,1
Total	259.569	100,0	3.020.400	100,0

Fuente: COSTALES, A. y PENAHERRERA, P. Historia ecuatoriana. Quito (Ecuador), Talleres gráficos Nacionales, 1969.

- Relación con los “huasipungue-ros” o propios
 - Relación con los “yanapas”
 - Relación con peones libres
 - Relación con arrendatarios y par-tidarios
 - Relación con campesinos mini-fundistas
- Junto a este modelo “clásico” de hacienda tradicional, debe recordarse que también existían haciendas sin vinculaciones con las áreas de mini-fundio. Las comunidades indígenas despojadas de sus tierras y sujetas a una creciente presión demográ-fica, con su escasa tierra erosionada

Cuadro 3



Fuente: Censo Agropecuario de 1954
Elaborado por: VILLARROEL Jeanneth. Caracterización de los Sistemas de Producción de la Cooperativa agrícola el Lindero y propuestas de desarrollo. Quito 2000.

y desnuda cayeron inexorablemente en la órbita de la hacienda. Se formó así un mercado marginal de trabajo sin aplicación de otras reglas que las patronales, constituyendo el núcleo central de un peonaje de reserva o de masa de “partidarios”, mendicante de tierras de cultivo¹⁴.

Según Costales y Peñaherrera esta tipología depende de los siguientes criterios:

- Coexistencia de varias empresas en una hacienda y carácter de su desarrollo
- Acceso por los campesinos a los recursos de la hacienda.
- Modalidad de pago a la empresa patronal

La Reforma Agraria

La estructura del agro serrano a finales de la década de 1950 fue funcional a las características de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Afirmar esto remite a un brevísimo análisis de ciertos aspectos del desenvolvimiento de la economía ecuatoriana.

A partir de 1959 empieza un proceso donde algunos terratenientes dan por terminada la relación existente con los huasipungueros, básicamente sobre la base de la entrega de una parcela de tierra que podía ser o no el huasipungo ocupado por los campesinos.

Se pueden agrupar las iniciativas terratenientes de eliminación de las

relaciones precarias en tres clases: a) desalojo de los precaristas en forma coactiva, b) entrega de los huasipungos, y; c) acceso de precaristas a tierras tradicionales en poder de las haciendas.

Según Báez¹⁵, la Ley de Reforma Agraria provocó modificaciones en la estructura del país, pues la intervención significó que 912 mil hectáreas fueran legalizadas para 121 mil propietarios. Mediante la colonización, 6 millones de hectáreas adicionales fueron entregadas a 124 mil propietarios, sin considerar ventas y herencias que también han cambiado la estructura de tenencia.

Por otra parte, los terrenos adjudicados por reforma agraria y colonización han sufrido cambios debido al fraccionamiento. En la mayoría de los casos por ventas o nuevamente por la intervención del Estado al aplicar nuevamente la Ley de Reforma Agraria. La aplicación de la Ley favoreció un cambio de actividad productiva de la agricultura a la ganadería, con el consiguiente aumento de la superficie de pastos aunque no de sus rendimientos.



15 BAEZ, Evaluación de la Reforma Agraria en el periodo 1964 y 1994. Tesis de Grado. Quito Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias Agrícolas.1997.

Cuadro 5

Ubicación del área de influencia dentro del contexto local

La apertura del ferrocarril Guayaquil - Quito en 1890, dinamizó la producción agrícola de la provincia de Cotopaxi, al introducirse pastos artificiales y ganado lechero de raza (Arcos y Marchán 1978). Las haciendas de altura mantuvieron la práctica del pastoreo extensivo de ganado bovino con pastos naturales.

En 1923 se efectuó un censo de población y una estimación del número de haciendas existentes en la provincia de Cotopaxi. Las haciendas se hallaban concentradas no solo en Latacunga sino también en Pujilí y en menor medida en Salcedo y Saquisilí, como se aprecia en el cuadro 5.

Las tierras baldías eran utilizadas para el pastoreo de ovinos y bovinos, lo que empezaba a afectar el suelo. La escasez de los recursos naturales provocaba conflictos por tierra entre comunidades (ver cuadro 6).

COTOPAXI: POBLACIÓN POR CANTONES Y NÚMERO DE HACIENDAS EN 1923

Cantones	Población	%	Número de haciendas	%
Latacunga	64000	49,5	71	30,5
Pangua	4500	3,5	-	-
Pujilí	28000	21,6	92	39,5
Salcedo	23000	17,7	65	27,9
Saquisilí	1(KH)000	7,7	5	2,1
Total	129400	100,0	233	100,0

Fuente: Informe del Ministerio de Guerra, 1923

Cuadro 7

HACIENDAS DEL CANTÓN SAQUISILÍ HASTA 1960

Comunidades / sectores	Haciendas
Yanahurco Grande	Hda. Yanahurco
Tusualó	Hda. Provincia
Chilla Grande	Hda. Chilla
Salamalag Grande	Hda. Salamalag Grande
Chilla Pata Calera	Hda. Chalgua

Fuente: Información primaria. Organización Jatarishun 2003

Cuadro 6

TIPOLOGÍA AGROECONÓMICA DE TIERRAS ALTAS EN COTOPAXI EN LA ÉPOCA DE HACIENDA

Tipo de tierras	Ubicación	Características básicas
Tierras comunales	3 000 - 3 800 msnm Sector oriental de Latacunga, Cantones Salcedo; Saquisilí; Pujilí y Sigchos	• Predominantemente páramos con pastos naturales • Cambios de zonas de pastoreo a tierras de cultivo • Pastoreo predominante de ovinos y secundariamente bovinos • Presiones para fragmentación y privatización de áreas comunales • Avance de procesos erosivos eólicos e hídricos • Conflictos intercomunales por delimitación y acceso a páramos • Conflictos intracomunales por manejo y uso del suelo • Antigua fragmentación de tierras de uso agrícola • Presión demográfica variable

Fuente: Tomado de Cambios Agrarios y tenencia de la tierra en Cotopaxi. Ibarra y Ospina 1994.

CAPÍTULO 3

EL PÁRAMO EN LA ÉPOCA DE HACIENDA

El agro latinoamericano vivió una época de monopolización de los medios de producción por parte de la clase terrateniente, lo que a su vez provocó una escasez de los mismos en el resto de la población.

El modo de explotación del medio en el sistema hacendatario, se basaba en la ocupación de los valles entre los 2.800 y 3.300 msnm para la producción agrícola especialmente de papa, haba y cebada, en tanto que las zonas altas entre los 3.300 y 3.600 msnm eran utilizados para el pastoreo de grandes hatos de ovinos, bovinos y equinos.

Una forma de reposición de la fertilidad de los suelos con orientación agrícola fue a través del abono de los animales. Estos eran trasladados diariamente a las áreas de pastoreo ubicadas en el páramo y regresaban en las tardes a los lotes que serían utilizados para cultivos. Se permitía así el mantenimiento de los niveles de nutrientes necesarios para la producción sin el requerimiento de fertilizaciones complementarias.

En Saquisilí las haciendas locales manejaron su territorio de manera integral. Cada piso climático tenía su vocación productiva y su asignación de personal de campo. Así los terratenientes utilizaron dos tipos

de mano de obra: una a través de los huasipungueros y otra a través de los denominados arrendatarios. Los *huasipungueros* disponían de cantidades de terreno de diferentes proporciones de acuerdo a las relaciones que se establecían entre estos y el hacendado; así existen rangos que van entre 1 y 30 hectáreas de terreno y hatos entre 20 y 700 borregos. Algo similar ocurría con el grupo denominado *arrendatarios*. Como renta por utilización del espacio de la hacienda, estos grupos sociales debían entregar anualmente al menos el 20% de su hato¹⁶.

En cuanto al trabajo, se conoce que un miembro de cada familia de huasipunguero o arrendatario debía trabajar para la hacienda de lunes a viernes y los fines de semana en las denominadas “faenas” que eran ciclos de seis horas, desde las 6h00 hasta las 12h00. No se ha determinado con claridad si existía diferenciación en las jornadas de trabajo entre los dos grupos, como ocurría en haciendas del norte de la provincia, donde los arrendatarios o apegados a la hacienda (yanaperos) realizaban el 75% del trabajo y los huasipungueros solo el 25%¹⁷.

Las funciones que desempeñaba cada trabajador también eran diferenciadas. El primer grupo realizaba

16 Tomado de entrevista al señor Manuel Alomoto, comunero y concejal del cantón Saquisilí

17 MARTÍNEZ Luciano. De campesinos a proletarios cambios en la mano de obra rural en la Sierra Central del Ecuador Quito. Editorial El Conejo, 1984.

labores de servicio doméstico tales como limpieza y regadío, en tanto que los arrendatarios se dedicaban al cuidado de borregos y bovinos¹⁸. La iglesia también recibía réditos económicos de este sistema precapitalista, puesto que tomaba de cada parcela (huasipungo) un surco de cultivo para su consumo particular¹⁹.

Alrededor de las haciendas, habitaban familias consideradas como “indios libres” que mantenían relaciones de producción con el terrateniente, caracterizadas por la utilización del espacio a cambio de la entrega de parte de su producción agrícola y del trabajo doméstico en labores agrícolas y pecuarias.

Las poblaciones libres²⁰ eran consideradas “arrendatarios”. Mantenían sus parcelas familiares para la producción de alimentos y su hato de ovinos destinadas al consumo interno y comercialización local. Los ovinos eran trasladados diariamente por las mujeres y/o niños hacia las zonas de pastoreo en el páramo, y devueltos en horas de la tarde a las chakras.

Esta actividad permitía la reposición de la fertilidad del suelo, puesto que los lotes abonados in situ por los grandes o pequeños hatos de ovinos eran utilizados para la producción de cultivos. Los ciclos se iniciaban con papa, luego haba, cebada y un ciclo de barbecho. Posteriormente se resatablece los nutrientes del suelo y se reiniciaba la producción agrícola²¹.

Los productores andinos buscaban siempre conservar la armonía con el entorno y para lograrlo organizaban la producción, el pastoreo y dejaban zonas de chaparro para la recolección de leña²². Parecería que el itinerario técnico citado, también era utilizado por la hacienda, en diferentes volúmenes y espacios, puesto que el modelo terrateniente se ajustaba en cierto modo a las lógicas andinas. Esto permitió mantener las relaciones sociales necesarias para su reproducción en el tiempo.

El sistema de agricultura en la zona baja y ganadería extensiva en el páramo, con permanente reposición de la fertilidad del suelo a través del abonamiento in situ, permitió el mantenimiento de la calidad del suelo, la capacidad de reproducción del ecosistema, el mantenimiento de los recursos y la biodiversidad original del páramo.

Con el proceso de modernización del agro, impulsado por el Estado ecuatoriano, se produjo la introducción de maquinaria agrícola y todo el paquete de agroquímicos planteado por la revolución verde. La modernización de la agricultura buscaba la especialización de la producción, convirtiendo a las haciendas en productoras de leche, cambiando la lógica andina donde predominaba el ciclo “cultivo - reposición de fertilidad con animales - barbecho - cultivos” por un modelo tecnológico totalmente productivista y extractivo. Bajo esta tendencia, los

18 ALOMOTO, entrevista citada.

19 Íbid.

20 RAMON Galo, Visiones, usos e intervenciones en los páramos del Ecuador. En Páramos y Cultura. Serie Páramo 12. GTP/Abya Ayala. Quito. 2002

21 Tomado de entrevista al Dr. Miguel Viera

22 Íbid.

tractores fueron los pioneros en apoyar la ampliación de la frontera agrícola hacia el páramo, cambiando el sistema de abonamiento in situ por la presencia de cultivos intensivos y pastizales.

Entonces se produce una ruptura del equilibrio mantenido ancestralmente en el ecosistema andino, de donde nace la actual crisis de fertilidad.



EL PÁRAMO A PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA

El Ecuador y Latinoamérica se vieron influenciados por procesos sociales internacionales como la revolución cubana y la formación de células políticas que amenazaban con la eliminación radical del sistema hacendatario.

En este contexto, el Estado ecuatoriano promovió la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización en 1964. Desde entonces se procedió a la entrega de tierras, aunque, en ciertas ocasiones, también se produjeron entregas anticipadas de huasipungos²³, obedeciendo a lógicas internas provocadas por la presencia de tecnologías modernizantes como el tractor que limitaba la necesidad de mano de obra. La presencia de huasipungueros era innecesaria.

En el cantón Saquisilí se ubicaron las haciendas Salamalag, Chilla y Yanahurco, de propiedad de Alejandro Gallo Almeida, terrateniente que también era propietario de las haciendas Tiobamba, Provincia, Guangaje y Patacocho²⁴. El 30 de mayo de 1930, Gallo Almeida transfiere el dominio de sus propiedades a la Universidad Central del Ecuador, que a su vez entrega

la administración a un arrendatario de apellido Tamayo²⁵. Se reprodujo entonces el modelo hacendatario tradicional de la serranía ecuatoriana.

El tamaño de la propiedad y el número de animales variaba de acuerdo a diversos factores como por ejemplo los acuerdos con el terrateniente por la existencia de concubinatos y/o la presencia de descendientes ilegítimos, lo que provocaba, que en muchas ocasiones, se produjeran “arreglos” puntuales a cambio de favores mutuos²⁶. Otro factor que determinaba la disponibilidad de recursos era la voluntad de trabajo de cada familia, puesto que no había límite para el uso de la tierra. En Yanahurco cada núcleo familiar decidía sobre su capacidad de trabajo y de mantenimiento de hatos ovinos²⁷. Estas lógicas provocaron una notable asimetría en el acceso a los medios de producción. Es muy difícil conocer la tenencia real de tierra de cada individuo en particular, puesto que se definía en función de acuerdos concretos que podían ser temporales y dependientes de las buenas o malas relaciones e intereses entre las partes²⁸.

23 GUERRERO, Andrés. Haciendas, capital y lucha de clases andina. Quito 1964

24 Tomado de entrevista a José Manuel Toapanta Vargas líder histórico del proceso de lucha por la tierra en el cantón Saquisilí, comunero de Yanahurco.

25 RAMÓN, Op. cit.

26 VIERA, entrevista citada.

27 TOAPANTA, entrevista citada.

28 VIERA, entrevista citada.

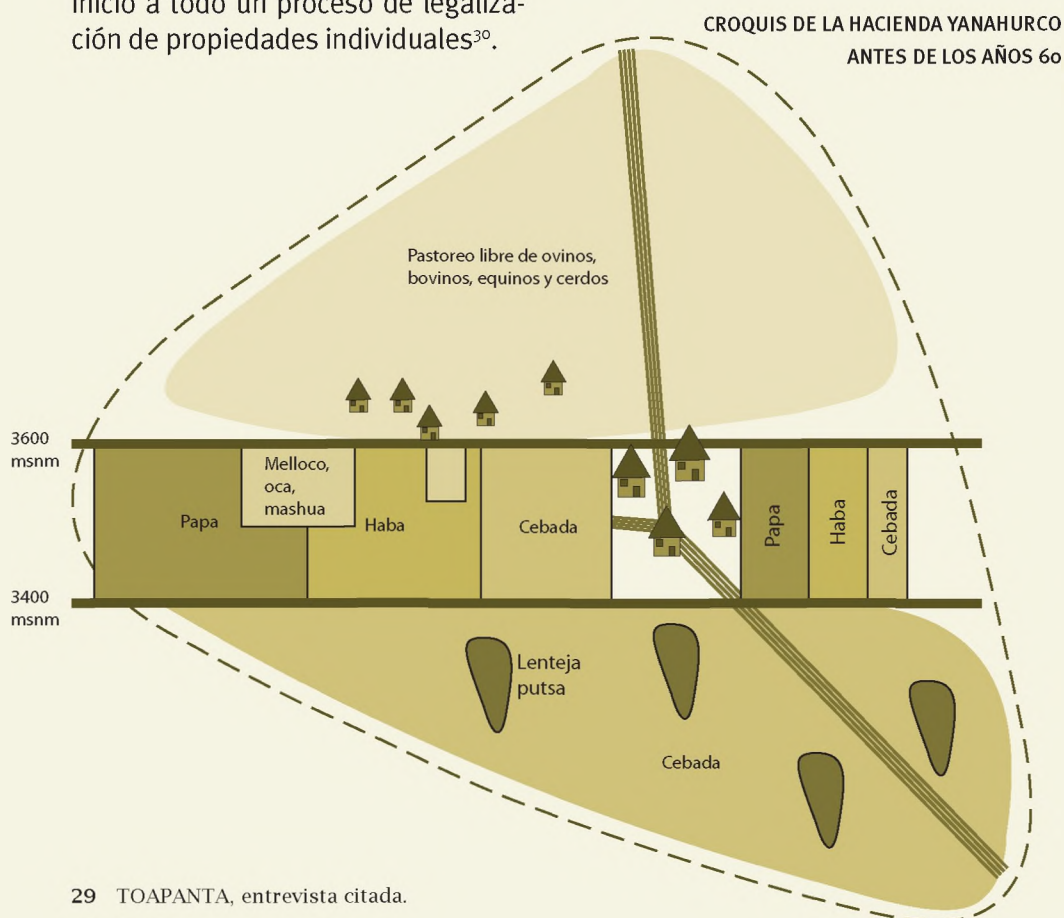
En cuanto a la distribución espacial del territorio se cita el caso concreto de la hacienda Yanahurco: bajo la cota de los 3.400 msnm se sembraba cebada y lenteja putza, entre los 3.400 y 3.600 msnm se priorizó el cultivo de papa, haba, cebada, haba, melloco, oca, mashua y pastos artificiales. Sobre los 3.600 msnm se ubicaron hatos de ovinos, bovinos, equinos y cerdos³⁰, como se visualiza en el grafico 1.

El proceso de entrega de tierras, hacia las comunidades se facilitó al tratarse de haciendas de una entidad estatal progresista³¹.

La lucha por la tierra se inició en 1965. Los trabajadores de las haciendas citadas, se unieron para pelear contra los opresores, hasta que en 1972 se logró acceder a las escrituras³². Desde entonces se inició una época diferente, pues el derecho de propiedad permitió el acceso y control del territorio.

Paralelamente a este hecho, la Federación Ecuatoriana de Indios FEI, entidad de tendencia izquierdista, formó células políticas especialmente en poblaciones relacionadas con las haciendas Provincia y Yanahurco.

Gráfico 1



29 TOAPANTA, entrevista citada.

30 Íbid

31 VIERA, entrevista citada.

32 ALOMOTO, entrevista citada.

Fuente: Tomado de entrevista a José Manuel Toapanta Vargas líder histórico del proceso de lucha por la tierra en el cantón Saquisilí, comunero de Yanahurco.

Se destacaron líderes como Francisco Valente y Manuel Toapanta, quienes resaltan por su permanente lucha por la tierra³³.

El proceso también tuvo el importante apoyo de mestizos de la parroquia Toacazo, quienes se empeñaron en terminar con el sistema hacendatario desigual e inequitativo. Esto significó persecuciones y encarcelamientos usados para mitigar el proceso inevitable de entrega de tierras³⁴.

Hay que señalar que la comunidad Yanahurco tuvo mucha relación con los trabajadores de la hacienda Razuyacu, donde se formaron las Cooperativas Razuyacu, Cotopilaló y Vicente León que actualmente son filiales de la Unión de Organizaciones del Norte de Cotopaxi, UNOCANC en la parroquia Toacazo, cantón Latacunga. Yanahurco, al momento, pertenece a la organización Jatarishun ya que de acuerdo a la ubicación jurídico política pertenece al cantón Saquisilí. Esta separación se dio en 1996. Sin embargo, se debe señalar que el proceso histórico vivido por estos dos sectores fue emprendido bajo perspectivas similares y bajo la misma influencia política del momento.

Al momento de la distribución de las tierras, los huasipungueros y arrendatarios fueron ubicados en las zonas altas con parcelas más pequeñas, rompiéndose la forma de producción acostumbrada ya que se debió reubicar las áreas de cultivo y pastoreo hacia pisos más altos y más frágiles³⁵.

La estrategia de entrega de la tierra, en Yanahurco en 1972 fue diferente. El terrateniente no impuso la lógica de huasipungos y cada familia tenía acceso a la cantidad de tierra que pudiera trabajar y al hato ovino que pudiera mantener, siempre y cuando trabajara de lunes a domingo en las actividades colectivas de la hacienda y pagara anualmente un borrego por cada diez unidades para el uso de pastizales. Entonces, con la Ley de Reforma Agraria, las diez familias de indios libres trabajadores de la hacienda Yanahurco, se dividen en treinta y seis huasipungueros y reciben las escrituras según la cantidad de tierra labrada o utilizada en beneficio familiar. De este modo algunos recibieron 1, otros 5, 10, 20 y 30 hectáreas de terreno³⁶.

Hay que señalar que no toda la hacienda Yanahurco fue asignada a los trabajadores. Las tierras ubicadas al noroccidente, que se hallan sobre los 3.600 msnm, fueron vendidas a Amador Miño, con quien se produjo un conflicto en la década de 1980³⁷.

Aparentemente, algunos indios libres y huasipungueros recibieron menos tierra que la manejada durante el período hacendatario. Esta disminución en el acceso a la tierra debe ser motivo de profundo análisis, puesto que de acuerdo a criterios de terceros, la actual disponibilidad de recursos es más limitada que en aquellos tiempos³⁸.

33 VIERA, entrevista citada.

34 Íbid

35 Íbid

36 TOAPANTA, entrevista citada.

37 íbid.

38 VIERA, entrevista citada.

EL PÁRAMO, DE LA COMUNIDAD A LA GESTIÓN LOCAL

Para acceder a las tierras de propiedad de la hacienda, se constituyeron las comunidades siguiendo las reglas del Estado. De acuerdo a la Ley de comunas, debían disponer de tierra de propiedad colectiva. Éstas se ubicaron en el área de páramo y fueron utilizadas como en la época anterior especialmente para el pastoreo de ovinos. No obstante hay que reconocer que la comunidad como estructura social existió ancestralmente, se mantuvo en la época de hacienda y se reconoce como tal en la actualidad paralelamente a la institucionalidad legitimada por los organismos competentes. Los comuneros, en este período, iniciaron una nueva forma de ocupación del espacio, ubicaron nuevas áreas de producción, de vivienda y en algunos casos de conservación.

Los nuevos comuneros consolidaron su ocupación del territorio, constituyeron los espacios comunales y las áreas de producción colectiva. Eso obligó a discutir intereses particulares dentro de un colectivo y una visión común. Todo ello resultó ser una forma de recuperar su identidad.

Posteriormente o paralelamente al surgimiento de las comunidades, se presentó la necesidad de constituir una forma organizativa mayor como parte de la institucionalidad local. Para ello aglutinaron sectores homogéneos entre sí, con un origen común, intereses similares y una propuesta política orientada a mejorar las condiciones de vida de la población. En 1981 surge la organización

de segundo grado Jatarishun, en cuya formación también tuvo su aporte la iglesia progresista.

La iglesia católica, en efecto, trabajó de manera intensa en Saquisilí y formó la Pastoral Indígena, reclutando jóvenes líderes con potencialidades y desarrollando su capacidad de análisis a partir de la “Teología de la Liberación”.

Crisis de fertilidad, parcelación de la tierra

A partir de la década de los sesenta se promovió el incremento de la productividad. Esta línea de intervención fue impulsada por las universidades, ONGs y el Estado. Durante esos años se difundió la denominada “Revolución Verde”. A partir de entonces, se dio un cambio drástico en la forma de ocupación del espacio y los modos de explotación del mismo. De acuerdo a esta propuesta, se cambió el abono in situ por la fertilización química y los policultivos por el monocultivo.

Aunque este modelo tecnológico tuvo su auge, prontamente los resultados fueron nefastos, puesto que se aplicó a suelos cansados y utilizados intensivamente en la época de la hacienda. Al poco tiempo, pues, los nuevos comuneros se encontraron totalmente dependientes del mercado de transnacionales productoras de insumos agrícolas, y requirieron dinero en efectivo para producir. Además, sus

suelos ya no producían como antes y la escasez de agua de riego agudizaba la crisis ambiental.

Los productores, poseedores de saberes ancestrales, sabían que lo único que les ofrecía fertilidad para la producción era el páramo y recurrieron a él como única forma de sobrevivencia. Es así que en 1987, las comunidades del cantón Saquisilí dividen el páramo de propiedad comunal e inician un proceso que resulta inverso al planteado en la “tragedia de los comunes”. Las parcelas individuales fueron incorporadas inmediatamente a la producción de papa, haba, cebada, cebolla, pastos artificiales, rompiendo el equilibrio natural, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y desecamiento de vertientes. Esto no ocurrió allí donde no se había dividido el páramo.

La evidencia de esta crisis, está en el sector de Chalgua, de donde proviene el agua de consumo de la zona urbana del cantón Saquisilí. Lo mismo ocurre en Toldohurco, puesto que se han ubicado cultivos y pastizales junto a las vertientes, sin ningún criterio conservacionista.

Los frágiles suelos de páramo, que tienen buenos índices de fertilidad en los dos o tres primeros ciclos de cultivo requieren un período de descanso de al menos siete años para reponer su capacidad de producción. Esto no ha podido asegurarse al no existir espacio suficiente para el barbecho. El resultado es el aumento de áreas erosionadas o de potencial erosión.

Esta situación no ocurrió en Yanahurco. El área ubicada sobre la cota de los 3.600 msnm ha sido

conservada debido a algunos factores externos que favorecieron un manejo más sostenible del páramo.

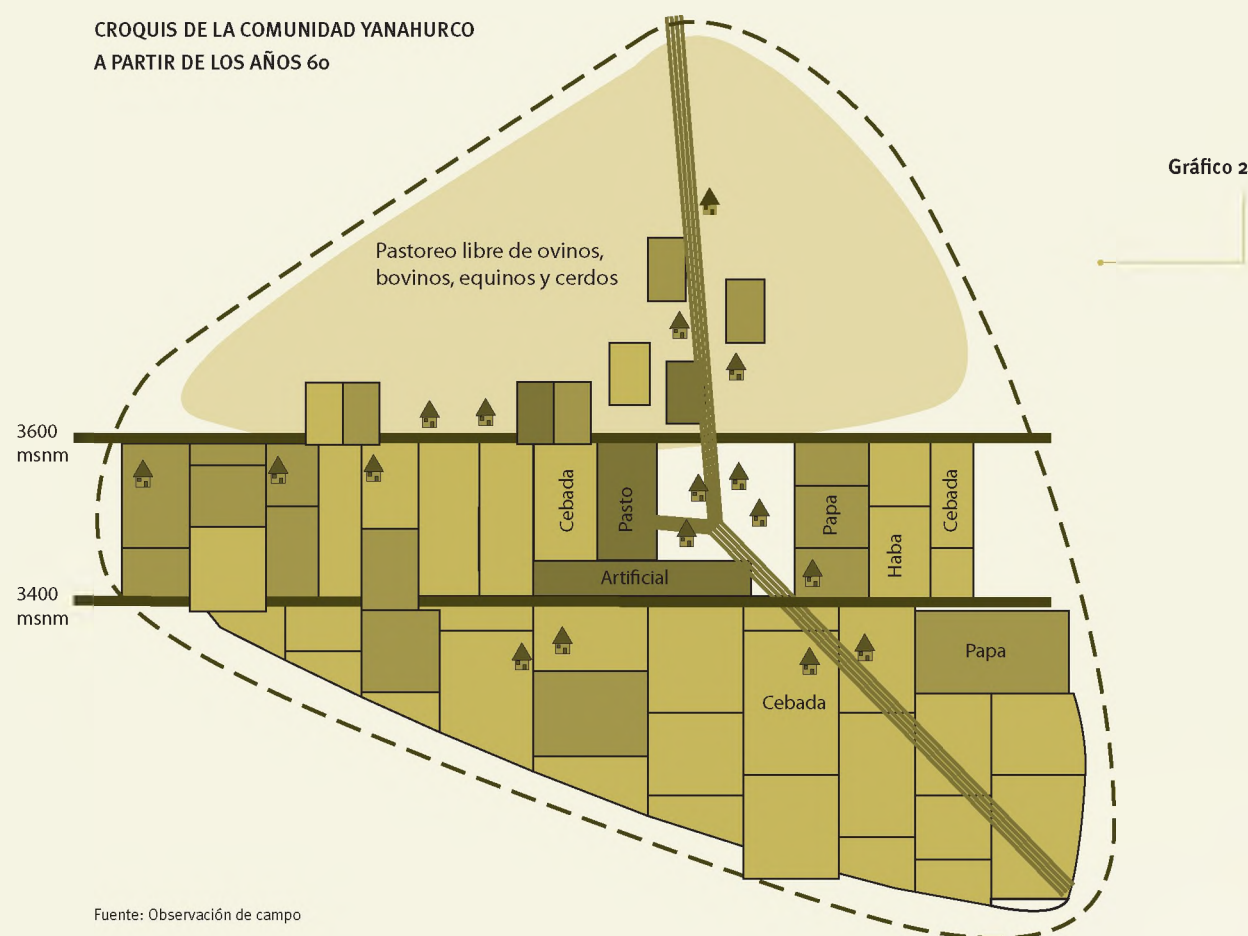
Los trabajadores de la hacienda Yanahurco no fueron reubicados y mantuvieron la distribución espacial del territorio de acuerdo a la lógica hacendaria ubicando los cultivos bajo los 3.600 y los animales en el páramo. Se produjo una disminución del hato de ovinos de propiedad individual por influencia de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA. Lograron mejorar la calidad genética de los animales e incorporaron pastizales mejorados bajo la cota citada para el mantenimiento de los animales.

La diferencia clave entre la época hacendaria y la época de surgimiento y mantenimiento de la comunidad es la parcelación de la tierra, aunque la distribución espacial de los cultivos sea la misma.

Los comuneros de Yanahurco se sintieron agredidos ante la posibilidad de perder un recurso considerado común e históricamente asumido como de su propiedad: el páramo; y se movilizaron en contra de Amador Miño, con el apoyo de la organización UNOCANC, cuando era presidente Leonidas Iza, luego presidente de la CONAIE. Se produjo una pequeña guerra civil. Hubo agresiones por parte de militares, policías y hasta mercenarios contratados. Finalmente Miño cedió y vendió el páramo de Tusualó a la comunidad de Yanahurco³⁹, mismo que en la actualidad es de propiedad de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Tusualó, que a su vez son comuneros de Yanahurco.

39 Entrevista a Eduardo Iza. Miembro de PAFOREST, Equipo Técnico Local de la Organización UNOCANC.

CROQUIS DE LA COMUNIDAD YANAHURCO
A PARTIR DE LOS AÑOS 60



Fuente: Observación de campo

Porotrolado, en la década del setenta, etapa final de legalización de tierras en Yanahurco, surgió la necesidad de hacer un control efectivo de la natalidad bajo el argumento de que si continuaba el incremento poblacional, las futuras generaciones no podrían acceder a la tierra obtenida por sus ancestros. Se logró el objetivo de disminuir el número de hijos por familia, lo que a su vez ha permitido que la comunidad disponga de la suficiente cantidad de tierra para el mantenimiento de las unidades domésticas, puesto que la migración es mínima. Además ha permitido la conservación de vastas áreas de páramo de propiedad comunal.

Este argumento merece ser considerado y estudiado, ya que en este caso, parecería que la disminución

de la densidad poblacional ha permitido un ordenamiento adecuado del territorio y un manejo sostenible de los medios de producción. En este caso puntual, el control de la natalidad es una estrategia de mantenimiento de los recursos del páramo. Para lograrlo también fue necesario garantizar el acceso a los medios de producción, el control del territorio y evitar la concentración de la tierra en pocas manos.

Nueva noción del hábitat

A partir de la entrega de tierras cada comuna ha ubicado un centro comunal, la escuela, canchas deportivas, viviendas, servicios de riego, luz eléctrica y agua potable. Estos servicios

se constituyeron en emblemas de lucha. Los dirigentes orientaron sus acciones a obtenerlos de cualquier fuente, sea el Estado u otras entidades de servicio social. El espacio comunal ya no solo era el lugar de la producción y la convivencia con el entorno, sino un espacio público que debía contar con servicios.

También se construyeron iglesias católicas y evangélicas, cabinas de radio, casas de capacitación, viveros, centros de poscosecha, corrales (llamawasy). Cada uno de ellos se constituía en un espacio de poder, por lo que cada comunidad “beneficiaria” de proyectos entraba en disputa por el acceso a estos servicios.

Además de ello, durante las décadas de 1980 y 1990 creció una lucha reivindicativa por agua y tierra desde su cosmovisión (convivencia) y a la vez como el espacio que les permite sobrevivir (producción). Esto exigía luchar también por créditos, semillas, y otros servicios que fueron obtenidos a través de la presencia de proyectos públicos como el DRI Tanicuchí-

Toacazo-Pastocalle (TTP) e instituciones privadas como ONGs. El DRI-TTP incluyó programas de producción, mejoramiento de la calidad genética de los animales y reforestación (desgraciadamente con especies exóticas como el pino), silos verdeadores para el mejoramiento de la calidad de la semilla de papa, entre otros.

Este proceso de reconstrucción del poder local conoció una nueva etapa cuando el movimiento indígena nacional creaba espacios y luchaba por reivindicaciones sociales y consideraba necesaria su presencia dentro de la institucionalidad del Estado a través de su participación electoral.

En este contexto, la organización indígena de segundo grado de Saquisilí, Jatarishun, elige un joven dirigente –miembro de la comunidad Chilla Grande– como su representante para los comicios, y resulta elegido democráticamente como alcalde, rompiendo el poder hegemónico de la derecha y el poderío de los mestizos locales.

CAPÍTULO 7

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL PÁRAMO

En ese marco, el páramo fue considerado como un medio de producción funcional a intereses particulares, pero sin descuidar el espacio colectivo. Así, en 1999, por gestión del propio presidente de la organización, luego de la elaboración participativa del Plan de Desarrollo Local de la Jatarishun, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, PRODEPINE financió la adquisición de un tractor con el que se intensifica la incorporación del páramo al uso agrícola y pecuario sembrando pastizales artificiales.

La organización justificó la acción con el argumento de que se trataba de una estrategia de sobrevivencia que incorporaba más rápidamente áreas de páramo, intensificaba el uso del suelo e incrementaba los ingresos familiares. Con ello aspiraban alcanzar el objetivo social básico de disminuir la migración.

La crisis de fertilidad ocasionada por el cambio tecnológico creció en la década pasada y en ésta, salvo en el caso de algunas experiencias de manejo sostenible de los recursos a través de una propuesta de manejo agroecológico de ecosistemas y agroecosistemas. En ellas se han recuperado prácticas ancestrales de conservación de suelos, diversificación de cultivos, forestería, abono in situ, entre otras. Estas experiencias, sin embargo, estuvieron confinadas a la actividad de organizaciones no gubernamentales que solo pudieron afectar positivamente a una

parte de la población del cantón, sin influenciar en las decisiones políticas del poder local, nacional o global.

Por tanto, la ausencia de políticas para el manejo sostenible de los recursos naturales, en la Jatarishun y/o en el municipio contribuyen al mantenimiento de la problemática ambiental del cantón.

A pesar de estas limitaciones, el proceso de participación ciudadana promovido por la Ilustre Municipalidad del cantón, ha considerado el tema del manejo de recursos a través de proyectos de forestación tomando en consideración la futura escasez de agua de consumo humano. Sin embargo todavía no se enfoca el problema como asunto de interés público y prioridad local.

La problemática ambiental y las posibles soluciones del cantón han sido traducidas en el Plan Participativo de Desarrollo y de manera específica en el área estratégica de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su implementación paulatina. Para ello se creó el Comité Interinstitucional de Medio Ambiente en el 2002, donde asisten actores del cantón, destacándose algunas ONGs y entidades estatales como el Ministerio del Ambiente. El Comité se propuso impulsar iniciativas sostenibles a través de la elaboración de proyectos con financiamiento externo, puesto que el Municipio no cuenta con presupuesto suficiente.

Uso actual del páramo

La comunidad Chilla Grande ha logrado mantener 50 hectáreas de páramo comunal como espacio de conservación, en donde se aplican reglas internas de control social, lo que a su vez han evitado su uso productivo y garantizan su sostenibilidad. Desafortunadamente, el páramo de Chilla Grande ha sido artificializado por la presencia de pinos, especies exóticas que han cambiado el equilibrio natural del ecosistema.

Otro caso a señalar es la situación del páramo de la comunidad Yanahurco y el sector Tusualó que limita con el cantón Sigchos. Estos territorios fueron parte de las haciendas Yanahurco y Provincia, propiedad de la Universidad Central. Como dijimos, el Partido Comunista formó células políticas de la FEI, y promovió un plan de ordenamiento territorial que permitió la utilización adecuada de áreas, observándose hasta ahora, un centro comunal, áreas de cultivo, pastizales artificiales, áreas de pastizales

colectivos, áreas de reforestación y áreas de conservación. En este caso no se ha producido una parcelación total del páramo comunal lo que ha permitido su conservación.

Ambos sectores han logrado, a diferencia del resto del cantón Saquisilí, conservar los recursos del páramo, sus vertientes de agua, su vegetación arbustiva y arbórea, y hasta su fauna nativa.

No obstante, se han producido brotes de utilización insostenible del páramo, como quemados de pajonal, tala para extracción de madera, pastoreo de ovinos, bovinos y burros. No se trata de cambios bruscos del paisaje que perjudiquen irreversiblemente el entorno natural. Sin embargo, el proceso de deterioro de los recursos ha generado preocupación en los comuneros, observándose actitudes que promueven un cambio individual y colectivo.

Como se observa en el cuadro 8, existe una artificialización del páramo

Cuadro 8

PÁRAMO DE SAQUISILÍ. USO ACTUAL		
Comunidades y sectores	Extensión aproximada (ha)	Utilización
Yanahurco Grande	1500	Pastoreo de bovinos (120), ovinos (800) y equinos (60), reforestación con plantas exóticas (pino), quemados de pajonal, tala de árboles para leña y áreas de conservación con pajonal y relictos de bosque andino
Tusualo	800	Pastoreo de bovinos, ovinos y equinos, quemados de pajonal y tala de árboles para leña.
Chilla Grande	50	Reforestación con plantas exóticas (bosque de pino de 9 años) y pajonal de protección. Implementación de un Plan de manejo.
Salamalag Grande	25	Reforestación con plantas nativas y exóticas (yagual, quishuar y pino), ovinos en pastoreo y quemados de pajonal
Chilla Pata Calera. Sector Tiluncocha	80	Pastoreo excesivo de ovinos, reforestación con plantas nativas (yagual) y producción de patos en ciénegas
Total	2450	

Fuente: Información primaria. Organización Jatarishun 2003

utilizándolo como área de pastoreo comunal. Se puede afirmar que existe un sobrepastoreo, que excede la capacidad de carga del recurso.

En efecto, la organización Jatarishun contaba en 1993 con 7.944 bovinos, en 583,9 hectáreas de pastizales, existiendo un déficit forrajero de al menos 7.360,1 hectáreas de pastos mejorados. Para este cálculo suponemos que la cantidad óptima de forraje es 1 hectárea de pastizal por animal por año, sin considerar los 7.679 ovinos existentes. El exceso de animales ha provocado que los páramos sean utilizados para el pastoreo, sufran compactación por pisoteo, sobrepastoreo y pérdida de vegetación natural.

Entre la información proporcionada por el Censo Agropecuario del MIC (1993) y el diagnóstico participativo de la Jatarishun (1998), observamos una disminución del 50% de la población de bovinos, en tanto que los ovinos se han incrementado en un 655%. Esto ocurrió por la intervención de proyectos de desarrollo que han ejecutado grandes programas de mejoramiento genético de especies adaptadas a las condiciones climáticas andinas.

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA. JATARISHUN 2000		
	Bovinos	Ovinos
	#	#
1993	7.944	7.679
1998	3.707	50.312

Fuente: Censo Agropecuario del MIC (1993) y el Diagnóstico Participativo Jatarishun (1998).

Estrategias de manejo sostenible del páramo

Coordinación y concertación entre actores y/o sujetos sociales

Una de las estrategias de manejo sostenible del páramo del cantón Saquisilí es una coordinación política y operativa entre el Municipio, la organización Jatarishun y todas sus filiales. El Municipio debe tener una participación descentralizada a través del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable. La Jatarishun debe concentrar la voluntad política de las comunidades que disponen de páramo en el cantón y construir de manera participativa una propuesta concertada que permita un ordenamiento territorial de los recursos del páramo.

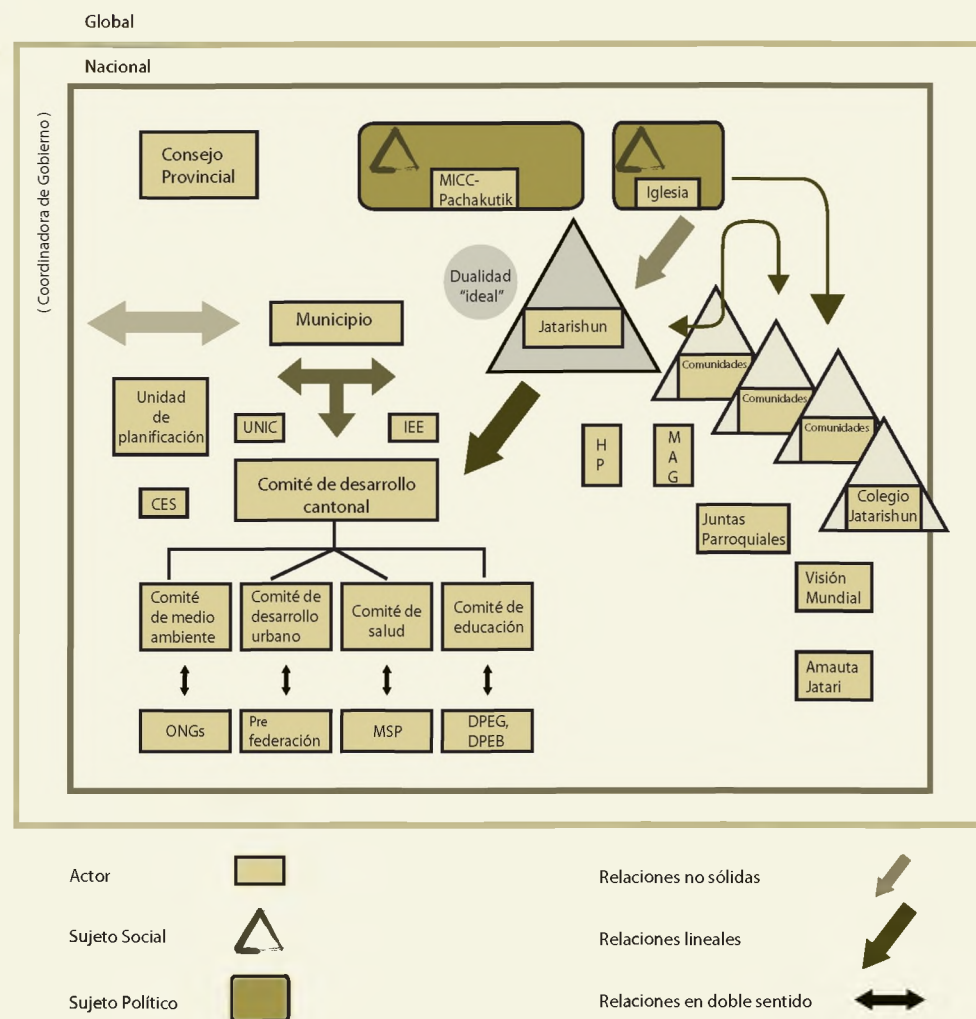
Esto implica identificar áreas de producción (truchas, alpacas), de amortiguamiento, de conservación de los recursos, de desarrollo del ecoturismo. Por otro lado, se debe concertar una propuesta común con otros actores territoriales como la población urbana del cantón. Ellos son los consumidores del agua que viene del páramo de la Jatarishun, especialmente de las comunidades Chalgua y 23 Manchadazo. Sería posible un acuerdo entre actores para que las comunidades se comprometan a conservar el agua y los consumidores se responsabilicen por desarrollar un sistema de incentivos o compensaciones por el servicio prestado.

Cuadro 9

En caso de que no existiese la voluntad de los actores territoriales urbanos, la institucionalidad municipal y la capacidad coercitiva de la Jatarishun pueden presionar y hacer cumplir el plan de manejo elaborado de manera participativa.

Gráfico 3

MAPA DE ACTORES DEL CANTÓN SAQUISILÍ



Fuente: Actores del cantón Saquisilí. Marjorie Viera. Trabajo del Módulo Gestión Social de los Recursos Naturales. IEE CAMAREN. 2003

Para visualizar el entorno del cantón Saquisilí se presenta el mapa de actores en el gráfico 3.

Para garantizar la interacción adecuada entre actores, la información generada como parte del proceso de negociación entre actores y sujetos sociales debe ser trasladada a los diferentes niveles. De este modo se asegura una participación razonada de cada uno durante el proceso.

Se debe optar por formas alternativas de comunicación más accesibles

para las comunidades. También se debe buscar la manera de que todos puedan dar a conocer sus intereses y preocupaciones respecto al proceso.

Para la exitosa realización de acciones, se debe tomar en cuenta a otros actores territoriales del cantón. Estos actores se agrupan en el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, por tanto su participación está garantizada. No obstante, la organización debe trabajar una apuesta política propia para la gestión de los recursos naturales.

Elaboración de propuestas

Esta propuesta debe verse como un “manejo integral del territorio”, donde busca un equilibrio entre los requerimientos de la población para su repro-

ducción y las necesidades de conservación de los recursos del páramo.

Las principales fases de diseño y construcción de esta propuesta son las siguientes:

Etapa preliminar

Zonificación de áreas de acuerdo a su uso potencial

En este punto se busca conocer las potencialidades de la zona de acuerdo a criterios técnicos como una herramienta para la toma de decisiones. Este trabajo debe realizarse con la participación de miembros/as de las comunidades con disponibilidad del páramo y representantes de la Jatarishun.

Sensibilización a nivel de comunidades respecto al manejo sostenible del páramo

Este proceso debe ser paralelo al anterior. La sensibilización debe orientarse a miembros de la comunidad tomando en cuenta la diversidad de género y generacional así como los distintos intereses y necesidades individuales que forman parte del colectivo. El proceso debe, además poner énfasis en trabajar con niños y jóvenes, para lo cual se debe coordinar con las entidades educativas locales a través del Comité de Educación.

Elaboración participativa de planes de ordenamiento territorial

Finalmente el plan debe reflejar las opiniones técnicas y los requerimientos poblacionales para el sostenimiento a largo plazo de los recursos del páramo. Para esto se requiere un proceso de negociación y concertación entre actores territoriales (urbanos y rurales), así como las voluntades políticas de los poderes locales, especialmente la Jatarishun y el Municipio.

Etapa de arranque

Institucionalización de la propuesta de manejo sostenible del páramo

El proceso de negociación debe institucionalizarse como política de la organización Jatarishun. También debe tomar la forma de una ordenanza municipal, a fin de garantizar su permanencia en el tiempo.

Etapas de implementación

Implementación de iniciativas productivas rentables amigables con el ecosistema, como la piscicultura y el manejo de alpacas

Esta propuesta se realizará en áreas específicas, apropiadas de acuerdo a su vocación. La implementación de proyectos productivos permite la conservación de los recursos del páramo y la generación de ingresos para las familias campesinas dependientes del ecosistema.

Ubicación de áreas de atractivo turístico como espacios espirituales y de recuperación de leyendas y tradiciones locales

Se pretende elevar la riqueza cultural de la zona y aprovecharla como parte de una propuesta de turismo ecológico que no afecte los recursos y permita obtener ingresos.

Realización de senderos ecológicos en áreas de atractivo turístico

Del mismo modo, la ubicación de áreas turísticas contempladas en el plan original puede contribuir a asegurar la conservación del ecosistema.

Recuperación y defensa de la agrobiodiversidad a través de la reproducción de especies nativas locales

Se pretende recuperar las semillas locales utilizadas de manera ancestral que están desapareciendo por influencia del sistema de producción occidental.

Etapas complementarias

Promoción y difusión de la riqueza cultural andina y la biodiversidad local

Este aspecto debe ser abordado como una forma de dar a conocer las potencialidades locales dentro y fuera del cantón, para lo cual deben concentrar acciones los actores y sujetos sociales territoriales.

UNIDAD 4

Los páramos occidentales de Cotopaxi: dinámicas sociales, historia agraria y conservación

Eloy Alfaro Reyes*

* Este artículo está basado en los resultados del proyecto de investigación “Sistematización de la Convención Ambiental de Cotopaxi”, “Cotopaxi en Minga”, IEE - Fondo MInk’a de Chorlavi
Marzo 2005

INTRODUCCIÓN

Este documento condensa procesos y experiencias de trabajo del autor, en temas ambientales en relación con Organizaciones de Segundo Grado (OSGs) filiales al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), específicamente en el tema de páramo. Esto siendo parte de equipos de trabajo en el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y en el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE). Pero sobre todo este documento es parte del interés investigativo del autor en temas relacionados al entorno natural, población, cultura y política.

La provincia de Cotopaxi se ubica en el centro del Ecuador. Es una provincia netamente andina, aunque territorialmente se encuentra en tres regiones: Costa, Sierra, Amazonía. De Norte a sur se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes, que al igual que en todo el país, tiene dos ramales: el occidental y el oriental. La cordillera occidental se diferencia de la Oriental por ser menos húmeda, (lo cual hace que exista un determinado tipo de páramo), por tener una amplia población –principalmente indígena– que la habita, por la propiedad de la tierra, que es básicamente minifundio.

Este documento busca, a partir de recoger experiencias anteriores, poner en conocimiento la situación socio ambiental y agraria actual de una de las zonas andinas del Ecuador, más afectadas por las condiciones de desigualdad social y económica, pero además, zona de fuentes importantes de recursos hídricos que

son la base para desarrollar procesos agroindustriales a los dos lados de la cordillera. En este trabajo nos proponemos entender las dinámicas agrarias de los últimos 60 años que han determinado que esta área se encuentre en las actuales circunstancias. Para lograr este objetivo, se han realizado talleres, grupos focales, entrevistas, revisión bibliográfica y recorridos a fin de completar la información existente.

A través de este esfuerzo se busca plantear elementos que sirvan para entender aquello que desde la “historia oficial” no lo podemos ver. Es decir, las relaciones que se mantienen por debajo de lo evidente y que están asociados con procesos de resistencia simbólica y cultural, que en la actualidad se concretan en el control de territorios, y en ciertos niveles de autonomía, especialmente en la zona occidental de los páramos de Cotopaxi. Para entender mejor las implicaciones que tiene la ocupación del páramo en la consolidación del espacio en Cotopaxi, especialmente en ámbitos locales, creemos importante recurrir a la etnohistoria. Esta es un instrumento (no el único, no por separado) que provee elementos ocultos o vedados desde la historia oficial, que recurre a entender todo (incluso las transformaciones locales del espacio y la cultura) solo a partir de la lógica del capital, en desmedro de la lógica y la historia local, que no siempre está dominada o no gira en torno a la dinámica del mercado o del capital y que en algunos momentos recurre a la resistencia cultural para sobrevivir y desarrollarse. La información revisada

que hace referencia a Cotopaxi y su relación con el ámbito nacional, mira las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales producto de la ocupación del espacio, principalmente a partir del papel que juega la hacienda serrana, su vinculación con los procesos de agro exportación de la costa y mira también el papel de los grupos subalternos sin ninguna especificidad. Se asume de entrada que fueron incorporados o que la lógica de mercado también les afecta directamente.

De toda la información revisada, a parte de la Historia del proceso de constitución del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC; 2003), no existe o no se conoce de análisis o estudios de los actores desde los actores. Es decir, la mayoría de autores consultados, trabajan a partir de lo que otros dicen o a partir de las cifras nacionales y locales. Por ello creemos que hace falta completar la visión y el conocimiento de Cotopaxi, desde un proceso de reconstrucción etnohistórica. Algunos elementos que debería tener este acercamiento etnohistórico, podrían incluir los aportes de Ramón al hacer un acercamiento a las fuentes, relatos y análisis de los cronistas de los primeros siglos de conquista (Ramón 2004) o de las pautas que plantea Dávalos (2004) cuando reconoce los libros de hacienda y las rayas como formas de poder y de resignificación de espacios y cultura. También es importante hacer una lectura más cultural, como lo que plantera Vallejo (2003) en su estudio sobre algunas OSGs de Cotopaxi, pero sobre todo hacer un recuento más pormenorizado tal como lo hace el MICC con sus antiguos dirigentes que dan valor a la oralidad como forma de transmisión de conocimientos (MICC; 2002). Estos pueden ser algunos elementos y aspectos a ser tomados en cuenta

para trabajar lo que podría ser una reconstrucción étnica de la historia de la provincia.

Planteamos que para entender el proceso de ocupación de Cotopaxi, es necesario acercarse a la realidad de las zonas de altura y específicamente a lo que se conoce como páramos que son el espacio o territorio cultural desde el cual se construye, refuncionaliza y otorga sentido a toda la identidad y cultura indias. Es desde el páramo que baja la cultura a hacerse presente en los centros poblados. Esto es claro en los levantamientos y acciones de protesta que se realizan desde el inicio de la colonia. En el páramo se conserva la cultura, desde el páramo se resiste (comunidades libres). Es desde el páramo que se mira y se accede a los espacios de poder local. El páramo es el espacio de vida de la mayoría de dirigentes y líderes del movimiento indígena. Es un espacio de múltiples significados.

Debido a la amplitud geográfica, social y cultural del tema, este trabajo gira en torno a los saberes “ancestrales”, entendiendo por tales todos aquellos conocimientos sobre la naturaleza que han permitido a través de la historia consolidar espacios de vida a las poblaciones que habitan las zonas de altura de Cotopaxi, principalmente el páramo. La forma como se accede a estos conocimientos o saberes es a través de las percepciones, los modos de entender la relación de los seres humanos con naturaleza, que nos remiten necesariamente a la cultura. Este trabajo es una síntesis del conjunto de imaginarios (percepciones) que los habitantes del páramo de Cotopaxi han construido históricamente.

“Este pensamiento se concreta en una visión complementaria de la vida

y de los aspectos que la conforman, donde lo económico, social, político, cultural, de género, son parte de un todo organizado, dinámico y articulado. La complementariedad de este pensamiento se refleja en las concepciones que estos pueblos han desarrollado y conservan sobre la naturaleza. Una característica para entender este pensamiento es que la forma como se concibe el equilibrio ambiental de las especies que en él habitan, no tiene relación con la cantidad de especies animales y vegetales que viven en un ecosistema solamente, sino con los efectos que los desequilibrios del ecosistema refleja en las sociedades que viven o habitan en él. Un ejemplo concreto de esto es la relación directa de la desaparición de un anfibio como el jambato, especie andina que ya no se encuentra en las montañas del Ecuador, con la disminución de las lluvias y los caudales de agua". (Toapanta et al, 2004)

Definiciones previas

Entendemos las zonas de altura o "alturas" en Cotopaxi, como aquella parte de la naturaleza y montaña sobre los 2.700 msnm. Esto puede incluir zonas de bosque, matorrales,

valles interandinos y páramos. Esta definición es importante por que ayuda a entender dónde empieza el páramo. Desde la visión técnica/científica se plantea que el páramo, es un ecosistema que empieza a los 3.500 msnm (IEE/EcoCiencia; 2003). Según los habitantes de Cotopaxi, el páramo empieza donde termina la frontera agrícola, es decir se proyecta al infinito, pues la frontera agrícola cada vez se encuentra más arriba, incluso en las cimas de las montañas. En este caso el páramo ya no existiría, aunque desde los técnicos, esto se llamaría páramo intervenido. Una de las características del páramo es la presencia de paja y de un clima característico (mucho viento, frío, humedad, etc.). Un elemento a tomar en cuenta en Cotopaxi es que la mayoría de comunidades indígenas se encuentra asentada por sobre los 3.000 msnm, lo cual configura a las alturas como un espacio cultural y de vida muy importante. Entendemos como páramo, todo aquello que está por sobre la frontera agrícola (independientemente de la altura a la que ésta llegue), por tanto entender la vida en los páramos, no podrá referirse a la vida de los seres humanos en el páramo, pues el ser humano se



encuentra en áreas agrícolas. Todo lo que se cultiva y está por debajo de esta área es humano. Nos referimos por tanto a la parte no humana (sí social) del ecosistema y las diferentes relaciones que tienen las personas con este espacio.

Por qué estudiar los páramos y la cultura en tiempos de globalización

El páramo, desde que se enfatizó su función retenedora de agua, se ha convertido en un ecosistema estratégico para el desarrollo económico de las poblaciones que se encuentran aguas abajo. Entonces es el agua lo que le da su importancia y es el principio y el final de cualquier acción de desarrollo que se realice en él. Si en este ecosistema no se encontraran las vertientes del líquido vital, su interés no resultaría estratégico. Así, los páramos se convierten en objeto indispensable para el desarrollo local y nacional. Pero, ¿qué implicaciones sociales, culturales y económicas, tiene esta visión?

La idea de escasez, construida desde el poder, se convierte en argumento válido, para las poblaciones afectadas, para defender, exigir y preocuparse por este ecosistema, la mayoría sin ser partícipes de él, sin vivir en él, sin conocer sus particularidades, no por ello libres de responsabilidad. Este argumento construido desde una visión hídrica, tiene una serie de implicaciones para las poblaciones que viven o dependen directamente de él. Comprender esas implicaciones resulta primordial en tiempos de globalización. En términos de Desarrollo la visión hídrica se concreta en una serie de aspectos técnicos, amplios como manejo de cuencas, Servicios ambientales, compensación, etc. O más específicos como planes de

manejo, introducción de mejoras agropecuarias, forestación, entre otros. Todos estos aspectos responden a una visión de este ecosistema que parte por valorarlo a partir del agua. Sin embargo como dicen los habitantes de las alturas, el páramo es mucho más, es un espacio de vida...

“El páramo para nosotros es la vida, no ve que de ahí sacamos para comer, ahí crecen nuestros animales, ahí mismo vivimos, el aire es limpio, no hay ruido, nadie nos molesta y ahí mismo está lo que les vamos a dejar a nuestros hijos” (dirigente UOPICJ – 2004).

Se requiere entonces mirar a este ecosistema y todos sus componentes –la biodiversidad, las sociedades que en él habitan– con otros ojos, menos hídricos, menos desde la lógica del recurso y más desde la lógica del territorio/cultura, crucial en Cotopaxi. Podemos decir que la combinación entre la urgencia de conservar el ecosistema páramo y la visión hídrica que “pretende” hacerlo, llevan a la funcionalización del discurso del capital en torno al control, conservación, uso y acceso a un área de vida. Al hacerlo se pone en riesgo no solo la estabilidad misma del ecosistema, sino su entorno, pues está comprobado que el mercado no es un regulador “natural” y por eso mismo está sujeto a otras leyes/intereses, que es desde donde funciona y opera.

Como hipótesis general de este estudio partimos de que la cordillera occidental de Cotopaxi se encuentra en un proceso silencioso de cooptación, de control territorial, por parte de las organizaciones indígenas que la habitan. Es decir, un proyecto político histórico que resiste, que se va construyendo a través de imaginarios colectivos, con paciencia y con el tiempo.

Entonces en tiempos de globalización resulta pertinente estudiar la cultura de los grupos subalternos, mucho más si a través de ésta se pueden encontrar mecanismos para frenar la arremetida del mercado.

Corolario

Este documento consta de tres partes: en la primera, se hace un acercamiento a los páramos occidentales de Cotopaxi, su conformación social y ambiental, a partir de su realidad social, a fin de ubicar bien el área de estudio.

La segunda parte hace un recuento etno histórico de los procesos de ocupación de los páramos de Cotopaxi, a través de épocas definidas. El centro

del debate es cuestionar el papel histórico de la hacienda en el deterioro actual del páramo y el papel de las organizaciones indígenas en la configuración de lo que hoy conocemos como MICC.

La tercera parte hace un acercamiento a la visión ambiental y de conservación de las poblaciones que habitan este espacio y la relación que tienen estos conocimientos “ancestrales” con una tradición cultural –anterior a la colonia– que ha resistido a través del tiempo. La pregunta que subyace en esta parte del estudio es hasta qué punto lo que conocemos como MICC, es en realidad el MICC o es el resultado de históricos procesos de cooptación de territorios que se mantienen hasta la actualidad y que se consolidan con el pasar del tiempo.

CAPÍTULO 1

CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE PRODUCTIVO Y DEL ENTORNO NATURAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

“Nos encontramos frente a una región donde la ausencia de condiciones para el cambio y los limitados cambios que pueden tener en ella, gran parte de la población ha buscado, en el cambio geográfico y espacial la única posibilidad de cambiar. En este sentido la migración se ha convertido en algo más que la búsqueda de trabajo y en nuevas oportunidades económicas: es una estrategia desesperada de cambio” (Sánchez-Parga; 2002: 13)

Los páramos occidentales de Cotopaxi

El área en cuestión abarca las zonas altas de la cordillera occidental de Cotopaxi (provincia central de los Andes del Ecuador con una fuerte presencia de población indígena). De norte a sur, desde el límite provincial con Pichincha hasta el límite con Tungurahua (ver gráfico 1), todo lo que está desde y hasta los 3.000 msnm iniciando en el valle del río Cutuchi, hasta las estribaciones que dan a la costa, en el bosque húmedo tropical. Políticamente incluye los cantones de Latacunga, Saquisilí, Sigchos, Pujilí, Salcedo y parte de Pangua.

La zona presenta una fuerte erosión natural producto de la agricultura intensiva. *“El impacto de las erupciones cuaternarias del volcán Quilotoa se demuestra en la presencia de suelos con aceptables y aún altos contenidos de nutrientes minerales, pero con una formación estructural extremadamente frágil. En aquellas partes de estas tierras que están bajo agricultura encontramos graves problemas de erosión”* (Field 2000, 276).

Históricamente esta zona presentó procesos de erosión natural muy grandes; algunos cronistas del siglo XVII describen la geografía de la zona como un desierto (Ramón 2004). Field (2000), señala que la superficie afectada por procesos erosivos es de 500 km². El mismo autor señala que según estudios de la ex ORSTOM, se deben considerar tasas de pérdida del suelo, cercanas a 100 toneladas métricas por hectárea por año, en la zona de Guanguaje, Tigua y Zumbahua. Obviamente esto genera un rápido abandono de la agricultura en las zonas afectadas. En medio de este paisaje desalentador encontramos espacios de vida muy importantes, donde los procesos erosivos, no se han consolidado. Por ejemplo, en los páramos al sur de Pujilí, que cubren una extensa área, entre Cusubamba, Cuturibí, Apahua y Angamarca. Esta es la zona donde se encuentra la mayor cantidad de páramos de la provincia.

La característica de esta zona es que es un ecosistema cuyas modificaciones dependen ahora de la intervención directa de los seres humanos incluso para su conservación. Cualquier proceso de recuperación o

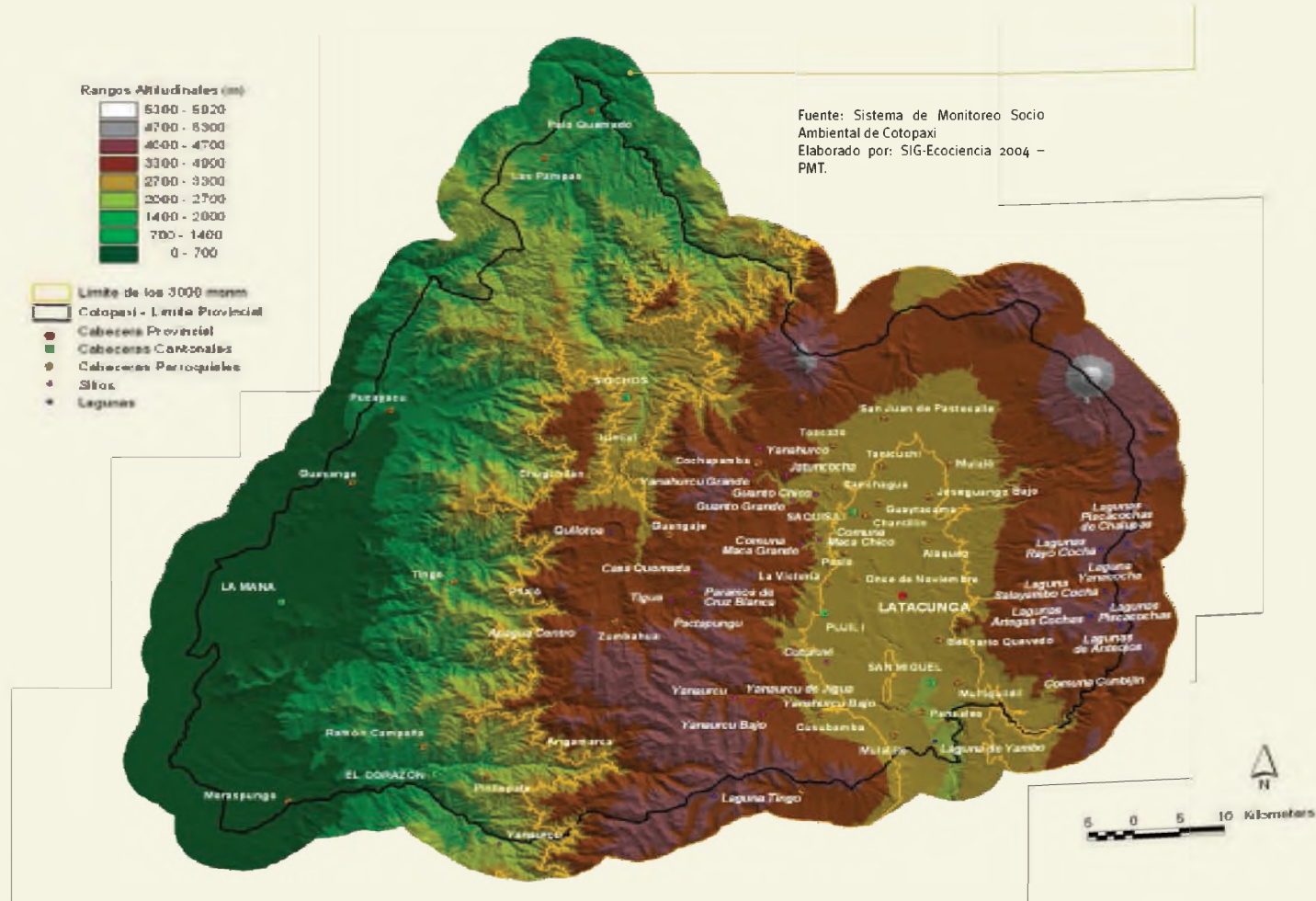
conservación es imposible si se desconoce la gran cantidad de saberes que se encuentran en la zona, que son genéricamente transmitidos, por ejemplo los mitos y la distribución de semillas en el páramo. El principal cambio percibido en el paisaje reciente, se ha dado a partir de la construcción, en los años 70, de la carretera Latacunga - La Maná, que le dio otra dinámica a la zona. Esta vía es el acceso principal y la conexión de la zona andina con la costa de Cotopaxi. Sin desconocer la importancia de este factor, no se conocen estudios sobre los impactos y cambios ocasionados en la zona a partir de la construcción de la carretera.

Dinámica socio territorial

En esta zona de los Andes del Ecuador, al igual que en otras, los problemas de distribución de la tierra aún persisten, existiendo diferencias en la tenencia en la zona norte, sur y centro. La tenencia depende del proceso histórico particular, pero varía de 2 a 3 ha. en promedio, hasta un marcado minifundio de pocos metros por familia. Sin embargo, hay haciendas pequeñas, no muy representativas y persisten formas de gamonalismo. Los efectos de las Reformas Agrarias se dieron diferenciadamente y aún persisten dificultades en la consolidación de este espacio. El efecto más

ZONAS DE ALTURA Y POBLADOS EN COTOPAXI, SOBRE LOS 3.000 m.

Gráfico 1



perverso se dio con el desigual acceso a la tierra: diferentes cantidades para poblaciones con iguales características, lo cual da cuenta que no hubo un proceso de repartición de tierras concebido socialmente, sino que se actuó de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la fuerza que tenía cada actor al momento de solicitar la adjudicación.

El gráfico 1 muestra la ubicación en amarillo de las zonas que se encuentran sobre los 3.000 msnm. En Cotopaxi, esto además permite ver la compleja orografía de la provincia y también tener una idea de la población respecto al recurso.

Tres zonas de estudio

Esta extensa área de estudio, por razones de acceso a la información y por las particularidades geográficas, ambientales e históricas, fue segmentada en tres zonas:

La primera que incluye Zumbahua, Pilaló, Angamarca y Guangaje, conserva dinámicas propias que le confieren características especiales. Es una zona de ocupación muy antigua, donde las prácticas culturales son la norma, así como son parte de una forma particular de administrar y ocupar el espacio. Es una de las zonas de la provincia con mayor población quichua. Las cinco parroquias más pobres del país se encuentran ahí. Corresponden a poblaciones indígenas y no sobrepasan los 21.000 habitantes (Sánchez-Parga, 2002). Field (2000; 276) describe así el paisaje de esta zona de los Andes...

“Las laderas que suben a la cordillera desde los 2.800 msnm son en su gran mayoría secas, con una población rural predominantemente

indígena y con altas tasas de migración temporal. Por el grado de erosión y escurrimiento de las aguas y por que muchas partes de esta zona reciben pocas precipitaciones (por debajo de los 500 mm/año) se trata de una zona con productividad agropecuaria extremadamente baja, salvo en los lugares en los cuales hay agua de riego, y de muy pocas opciones productivas”.

Es la parte de la provincia donde se encuentra la mayor minifundización y donde la frontera agrícola llega a las cumbres de las montañas. Encontramos comunidades como Apahua que se ubican en las cimas de la cordillera, siendo la más alta de toda la provincia (4.100 msnm). Es la zona de la provincia que más ovejas tiene, manejadas generalmente de manera comunal o familiar. En la zona el riego es aún una ilusión que no se cumple. Uno de los principales problemas es la falta de tierra. Parte de la zona de estudio ocupa áreas de amortiguamiento o se encuentra dentro de la Reserva Ecológica de los Iliniza. Para entender mejor la relación espacial y social de la zona, hacemos un acercamiento a partir de la información recogida en el 2001, por miembros del MICC, a propósito de la realización del Plan de Desarrollo de la provincia.





Recuadro 1 ZUMBAHUA, CARACTERIZACION

Está ubicado en la cordillera occidental a 66 km de distancia de la ciudad de Latacunga. En el territorio parroquial habitan el 100% de indígenas, la principal actividad económica es la agricultura y cría de animales mayores y menores. Tiene 21 organizaciones de base entre comunidades y barrios, están agrupados en una OSG. La tenencia de la tierra está marcada por el minifundio en las comunidades cercanas a la Parroquia, mientras tanto en las comunidades de la zona alta cuenta con tierras comunales que sirven para el pastoreo del ganado bravo. El principal centro de comercialización es la feria local de los días sábados en la cabecera parroquial. En la parroquia no existen sistemas de riego por la situación geográfica, y el escaso recurso hídrico disponible. La producción se base en el cultivo de tubérculos y cereales, dependiente de la época invernal. Es la parroquia en donde inició la propuesta de educación bilingüe en Cotopaxi, y posteriormente en el ámbito nacional, cuenta en el momento con un sistema de educación completa que va desde el pre-primario hasta la universidad. En la provincia es la única zona indígena que dispone de un hospital privado de prestigio, auspiciado por la cooperación MATOGROSSO, que cubre con sus servicios no solo a los habitantes de la zona sino también llegan de otros sectores de la provincia. Están iniciando la propuesta de manejo del ecoturismo en la laguna de Quilotoa, para mejorar sus servicios deben capacitarse en el manejo de la actividad turística y promover la dotación de los servicios básicos como luz, agua potable, vías de comunicación.

Elaboración: EAR/2005.
Fuente: informe de campo equipo PPDP/2001/EE-MICC

Recuadro 2 GUANGAJE: CARACTERIZACION

Está ubicada en la cordillera occidental, a 55 km aproximadamente de la capital de la provincia, tiene 33 comunidades, entre jurídicas y sectores. Las comunidades, por la dispersión y la ubicación geográfica están agrupadas en dos OSGs. Tigua y Guangaje. El 100% de la población es indígena bilingüe (castellano–Quichua). La mayor parte de la población vive de la agricultura en forma precaria, complementan sus ingresos económicos con la migración temporal a las ciudades de Quito, Latacunga, y otras, la zona de Tigua es conocida nacional e internacionalmente por la pintura indígena. Las tierras tienen una escasa capa arable, son de origen volcánico, además, el minifundio está bien marcada. Están en proceso de erosión hídrica y eólica, principalmente, por la presencia de fuertes vientos en la mayor parte del año y carencia de un manejo adecuado de los recursos naturales. Tienen dos únicas vías de acceso a la parroquia, los mismos que están en malas condiciones.

Elaboración: EAR/2005.
Fuente: informe de campo equipo PPDP/2001/EE-MICC



La migración en el cantón y en toda la parroquia es un problema que se visualiza fácilmente en la actualidad. Es un problema para el “desarrollo” de la misma, pues en lugar de favorecer el aumento de la producción,



ha significado importantes procesos de empobrecimiento convirtiéndose en un círculo vicioso: pobreza, migración, deterioro del entorno, migración, más pobreza.

“La población cantonal pasa de representar el 26,9% de toda la provincia en 1974 al 21,7% en 1982 y llega al 18,6% en 1990, mientras que el descenso de la población en los otros cantones apenas se altera. Entre 1982-1990, mientras la población urbana crece, la población de las parroquias de Pujilí disminuye del 88,8% al 84,3%, en el mismo período. Paralelamente las tendencias en Pujilí indican un crecimiento del número de patrones y una disminución de trabajadores por cuenta propia” (Sánchez-Parga; 2002, 19).

La segunda zona de estudio se encuentra en el cantón Salcedo e involucra las parroquias de Mulalillo y Cusubamba, ambas con una dinámica de ocupación muy ligada al mercado nacional. Se encuentran muy cerca de dos cabeceras cantonales (Salcedo y Latacunga) y tienen mucha relación con Ambato en la provincia de Tungurahua. Su característica principal es que tienen canales de riego, lo que



Recuadro 3 CARACTERIZACIÓN Mulalillo

La parroquia compone de 17 comunidades a acepción del centro, de las cuales 8 son jurídicas. Culturalmente, la población de la zona alta se identifica como indígenas, mientras en la zona baja están en proceso fuerte de aculturización. Siete pequeñas haciendas localizadas en la parte sur baja (10- 20 has) representan el latifundio, dedicado a la ganadería, agricultura y floricultura. El minifundio representa el 90% del territorio parroquial con promedio de (1-2 has.) por familia. La zona baja con sistema de riego se caracteriza con cultivos de papas, maíz, arveja, fréjol, zapallos, pastos de alfalfa y plantas frutales. En cambio la zona alta tiene escasos caudales de agua para riego, dedicándose al cultivo de papas, cebada y forrajes de poca calidad. La población vive de la crianza de animales mayores y menores (bovinos, porcinos, aves, cuyes y conejos). Las dos floricultoras que se encuentra en la zona ocupan la mano de obra de la población joven y otro porcentaje migran a la ciudad de Ambato. Los principales lugares de comercialización son Salcedo y Ambato.

Elaboración: EAR/2005.

Fuente: informe de campo equipo PPDPC/2001/IEE-MICC

les permite maximizar la producción. Muchas familias tienen ganado de leche y acceden al páramo de forma comunal. Existen todavía algunas haciendas y medianas propiedades. La mayoría de la población vive en las fronteras interétnicas, con muchos conflictos por esta misma razón. El quichua no es hablado por la mayoría.

La tercera zona está al norte de la provincia. Es parte del cantón Latacunga, se encuentra en una zona estratégica, en el límite entre Cotopaxi y Pichincha y se destaca la presencia de la Reserva Ecológica los Iliniza bajo la administración del Estado a través del Ministerio del Ambiente. Tiene presencia de muchas haciendas, de mediana y gran extensión, así como propiedades de campesinos que tienen extensiones entre 5 y 10 hectáreas y otros que se encuentran en procesos de minifundización. La mayoría de la población, aunque son indígena no habla quichua. La ubicación estratégica en la que se encuentran, les permite dinamizar su economía a través de la ganadería de vacunos, animales menores y la agricultura. Están muy ligados a la plaza de mercado de Saquisilí y Latacunga. Poseen riego y

grandes extensiones de páramo que está sometido a manejo para conservar y desarrollar el ecosistema.

A diferencia de la primera zona, las dos últimas tienen altos niveles de tecnificación productiva, que se expresa en capacitación, crédito y comercialización de diferentes fuentes, especialmente de ONGs. La primera zona por el contrario habiendo recibido una serie de intervenciones, refleja la imposibilidad del sistema de desarrollar áreas donde la inyección de recursos no es suficiente para modificar sus condiciones de desigualdad estructural. Es por ello que existen altos índices de migración, deterioro del suelo y pauperización de la población. Como producto de la inequidad del sistema se observa la afectación directa al ecosistema, principalmente el páramo y ahora también el bosque. El conjunto pone en riesgo la provisión de agua para las zonas del “bajío”. Como veremos, a pesar de esta realidad, en esta zona se ha desarrollado una de las más importantes organizaciones indígenas del Ecuador, el Movimiento Indígena de Cotopaxi, que hoy por hoy es la principal fuerza política de la provincia con el 40% de la aprobación de la población (Ulloa; 2004).

CAPÍTULO 2

DETERMINACIONES SOCIALES EN EL PAISAJE DE LAS ZONAS DE ALTURA DE COTOPAXI

"Nosotros somos enseñados desde nuestros abuelos a vivir aquí, hemos nacido aquí. No queremos perder nuestra cultura. Somos como planta nativa. Porque la tierra además es propia. Somos propios y aquí vivimos más tranquilos, más sanos, en el campo. Aquí se puede mantener a los guaguas. También nos sentimos libres y no estamos encerrados. La naturaleza ha sido ponderada de nuestro abuelos, y nos han encargando que la cuidemos para dejar a nuestros hijos. Tenemos propios animales y propias vertientes de agua. Y aunque no tenemos plata, comemos"

(COMUNERO JATARISHUN; IEE-EcoCIENCIA 2002)

Elementos para una discusión: etapas de ocupación de las zonas de altura de Cotopaxi

En círculos ambientalistas y de estudiosos de la relación seres humanos naturaleza, así como sectores interesados en la problemática agraria, la sociología y antropología, se discute el origen del deterioro de los páramos del Ecuador, si éste se da como producto de la presión demográfica reciente o si es la evidencia de un proceso anterior de presión que no fue visible hasta ahora. Esto implica también tener claro si la ocupación humana de los páramos es actual o reciente. La pregunta es pertinente para entender diversos procesos que han generado una determinada forma de uso, acceso y control de las zonas de altura. Pero para estar claros en lo que se quiere conseguir, vale iniciar planteándose las preguntas ¿desde qué época se debe considerar reciente? o ¿reciente respecto a qué? Al respecto algunas reflexiones.

Dado que no se dispone de suficiente información sobre los procesos de ocupación de los páramos, más allá de los estudios a partir y desde la hacienda, podemos empezar tratando de entender esta forma de ocupación. El proceso de consolidación colonial español en el país, se dio imponiendo la hacienda como forma de control del espacio y de los medios de producción, incluida la mano de obra indígena que era explotada y esclavizada, además la hacienda buscaba también demostrar su poder hacia los indios con formas violentas de control. Todo esto implicó que se dieran procesos de resistencia de algunos grupos indios. Cuando la resistencia era individual, ésta consistió en la huída a lugares donde no se los pueda encontrar. Muchos de estos lugares se ubicaban en los páramos. Estos grupos de indios rebeldes se llamaron indios libres, es decir no sujetos a una hacienda. Estos grupos también fueron alimentados por indios desterrados de las haciendas, para que no sean mal ejemplo.

“A la par que se iba consolidando la propiedad hacendaria, se volvió necesario generar mecanismos para sujetar la mano de obra. Al respecto se afirma que, para la época, habían dos situaciones límite por las cuales queda fijada la mano de obra en la hacienda: la una, claramente compulsiva, a través del endeudamiento, descrito por Jorge Juan y Antonio de Ulloa para el norte de Quito; y la otra, cuando el concierto gana cierto poder de negociación para equilibrar su producción o incluso, ampliar su acceso a recursos, a través del usufructo adicional de un lote de tierra. En cualquier caso, terminan estableciéndose economías campesinas dentro de las haciendas. (FAO, 1995)

Es decir, desde la llegada de los españoles se observa la necesidad de conservar a los indios en el territorio de la hacienda, para que no huyan a lugares a donde no aporten a la economía. De la información revisada podemos decir que conforme se avanza hacia el sur desde lo que hoy es Cotopaxi, se aprecia un aumento de comunidades e indios libres, especialmente en Guaranda. Esta es una característica de la sierra sur, es decir que un importante elemento a tomar en cuenta en la dinámica social, cultural, ambiental, política y ecológica de la zona de estudio es precisamente la presencia de población india “libre”. Aunque se requieren estudios complementarios, podemos afirmar que la ocupación de los páramos tuvo también un sentido político de resistencia, pues ahí se ocultaron sectores poblacionales que desarrollaron y conservaron su cultura.

“Cabe señalar que si bien el campesinado no huasipunguero, organizado en comunidades, tenía acceso a la tierra, en cambio en la mayoría de casos se trataba de zonas ecológicas de páramos, poco aptas para la agricultura, a donde fueron arrinconados durante el proceso de consolidación

hacendaria. El despojo de tierras comunales durante el siglo XIX y principios del XX, agudizó esta situación de arrinconamiento, concibiéndose el páramo, como “zonas refugio” indígenas. Sin embargo ya entrado el siglo XX, estas “zonas refugio” se constituyeron en sectores de producción campesina donde se vivían procesos puntuales de modernización. La producción de este sector se volcaba hacia el mercado interno a través de ejes de comercialización locales” (FAO; 1995).

Los páramos de Cotopaxi ya tenían un poblamiento a la llegada de los conquistadores (Landázuri, 1995). En efecto, había indios de poblaciones como Sigchos, que viajaban por motivos de comercio hasta Pasto (actual Colombia). Un asentamiento tradicional, incluso anterior a la conquista, es Angamarca la vieja, que es una “ciudad”, al igual que Sigchos, asentada sobre los 3.000 msnm, que existe hasta ahora. Es decir, el poblamiento ya estaba ahí, por lo que se requería que a través de mecanismos de conquista se consolide el control de la población a fin de que sea útil para los intereses productivos de la Corona. Con esta afirmación quedaría en entredicho que los páramos tengan una ocupación “reciente” desde mediados del siglo XX o a partir de las reformas agrarias, como sostienen algunos técnicos con poco acercamiento a la dinámica social de los pueblos en resistencia. Pero además, con la información anterior, queda claro que el interés de la hacienda era controlar el territorio paramero pues ahí se encontraban sectores de la población, compuesta como acabamos de ver, por indios y comunidades “libres”. Como parte de esta discusión, desarrollamos a continuación una propuesta de las etapas de ocupación de los páramos occidentales de la provincia de Cotopaxi.

Etapas de ocupación en los páramos de Cotopaxi

Hacemos una breve descripción de las etapas de copamiento de los páramos de Cotopaxi, a partir de información etno histórica, recogida por diversidad de autores y entrevistas personales.

a. Sal y zonas de altura: los Cacicazgos, los Incas y la Colonia

La importancia de la sal se debe mirar no solo por los aportes a la dieta y la salud de los seres que la consumen, sino también en los aportes que ésta provee para el desarrollo de las sociedades que la necesitan y la usan. En lo que respecta a la salud, la sal se convierte en un elemento indispensable para el desarrollo de nuestro organismo... *“es conocido que la gente de las sociedades agrícolas necesita añadir sal a su dieta diaria. El sodio y el cloruro que son esenciales para el normal funcionamiento del cuerpo, no se encuentran en la mayoría de alimentos vegetales”* (Pomeroy; 1986, 35). Cuanto más vegetariana es una dieta, más sal necesita el cuerpo. Dado que las cantidades de sal requeridas por el cuerpo varían de acuerdo al clima, el nivel de esfuerzo y la alimentación, se puede afirmar, siguiendo a Pomeroy, que el nivel de sal requerido es una variable cultural, más que fisiológica.

En el Ecuador, la sal marina se presenta como elemento determinante en los procesos sociales solo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Surge industrializada y relacionada a sectores de las oligarquías costeñas. Pero en comparación a la sal mineral, tiene muchas desventajas: no contiene yodo y es perjudicial para la salud. Además su refinamiento

requiere de un proceso industrial tecnificado, lo cual implica costos altos, mientras la sal mineral no requiere de procesos complejos. En el Ecuador la sal mineral se procesaba, desde tiempos precolombinos y hasta la actualidad, en dos lugares principalmente: Salinas de Imbabura y Salinas de Bolívar (existían otros lugares a lo largo de la sierra, pero no son muy relevantes). Salinas de Bolívar es particularmente importante para lo que hoy es Cotopaxi, por la cercanía a la que se encuentra, pero además porque a través de sus cordilleras, fue levantada una importante ruta comercial, que se dirigía hacia la costa, la amazonía y el centro y norte de la serranía.

Cuando se habla de la sal de Salinas de Bolívar se requiere entender el contexto de la época. Cotopaxi y principalmente Angamarca, ocuparon un lugar importante en relación a la economía de la sal. Este tema es vital para entender la consolidación del espacio local y la dinámica que toma en diferentes épocas. La sal en Cotopaxi fluía (no se conoce si aún lo hace) a la orilla de un río de agua dulce, el río Patoa, y era recogida en recipientes, para luego ser cocida en la casa o en mezcla con agua dulce para luego cocer directamente los alimentos. Básicamente se usa este producto para el ganado.

Para entender mejor la ocupación del espacio en Cotopaxi, es pertinente señalar la ruta que tomaba el comercio de la sal. Aunque no conocemos bien toda la ruta, sí sabemos porque se usó el Inga Ñan para ello. Una porción de la ruta de sal, es aquella que saliendo desde Cusubamba, actual parroquia del cantón Salcedo, cruzaba a través de Cuturiví y Yanahurco, hasta llegar a las estribaciones de la cordillera y desde ahí hasta Angamarca. Esta ruta era especialmente

usada por la gente que comerciaba en las actuales Ambato y Baños. Los habitantes de esta parte del páramo de Cotopaxi mencionan que en esta zona hay un accidente geográfico que funcionaba como divisoria de caminos: aquel que iba a Cusubamba y aquel que iba a Simiatug. Este es un gran pantano, en el cual destaca un geiser, *“que levanta el agua hasta 2 m de altura, pero nunca sale dos veces el agua del mismo lugar”* (José Toapanta 2004). Esta parte del páramo es conocida como muy agreste y húmeda, por tanto, inhabitable. Quizá por eso en esta zona se conserva una gran cantidad de páramos por comparación con toda la provincia.

La disponibilidad y cercanía de las fuentes de sal tuvo también implicaciones en la ocupación del espacio por parte de las poblaciones de la provincia. Por ello la zona occidental de Cotopaxi ha sido ocupada la zona occidental desde épocas pre-Incas (huellas Incas son los Pucarás que se encuentran en esta zona). Por el contrario, la zona oriental tiene una ocupación más contemporánea. Sobre esto creemos importante tomar en cuenta lo que manifiesta Ramón (2004), pues no es sólo la humedad (muchos pantanos - humedales) o los riesgos volcánicos, los que condicionan negativamente la ocupación territorial de la provincia. No fueron esos factores lo único que determinó que casi no haya poblamiento registrado en los valles bajos como el valle del río Cutuchi, sino también la disponibilidad de los recursos y especialmente la sal. Sobre esto hay que señalar que este valle es el valle interandino más largo del país. En sus planicies se podría cultivar, como hasta ahora, gran cantidad de productos. Es también el valle más angosto, pues tiene una distancia de 130 km entre la cima de una y otra

cordillera. Esto le da a este valle un carácter estratégico en términos de control territorial, pues es la ruta más corta para llegar a la amazonía y a la costa, ahorrando tiempo. Cualquier tipo de autoridad que se desarrolle en la zona vería a este valle como fundamental para consolidar poder.

Según Reichel-Dolmatoff (citado por Salomón 1980; 59), algunas de las razones para que no se haya dado una ocupación de territorios de valles interandinos años antes de la llegada incaica al Ecuador, era la permanente guerra entre cacicazgos,

“la principal razón de ello sería la lucha por el control de las zonas agrícolas que varían desde tipos similares hasta tipos especializados de páramo; el comercio de ciertas mercaderías privilegiadas como: oro, tejidos de algodón y sal”.

Según estos autores,

“las zonas de valles sufrieron un ciclo vicioso de presión poblacional y de guerras locales, que hicieron difícil el surgimiento de centros de poder más o menos seguros y estables. Esto reforzó el carácter regional de los pequeños cacicazgos, cuyo eje político estaba bajo constante amenaza. El despliegue a las montañas, fue también seguido por la descentralización, aislamiento cultural y regionalismo”.

Es decir que en algunos valles interandinos como el del río Cutuchi, no pesaron solamente los problemas causados por desastres naturales, sino también los conflictos, pues sabemos que, no había un Estado que controle todo. Este momento histórico coincide con la llegada de los invasores cuzqueños que controlan fácilmente la geografía de la sierra ecuatoriana. Pocos años después fueron reemplazadas por la corona española.

Por otro lado, las zonas de altura no fueron sólo el origen de la sal, sino también su ruta de transporte. Las comunidades indígenas reconocen que

“por donde mejor se camina en el páramo es por las cuchillas, así no se da tanta vuelta, se camina mejor y siempre se ve el horizonte, para no perderse” (Julián Tucumbi, 2004).

En términos políticos, más importante que el control de las minas de sal, es el control del comercio de este producto, en especial si era muy distante pues la distribución también estaba en manos de sectores pudientes y nobles. Para concentrar riqueza en cambio se requería controlar las fuentes,

“por consiguiente, control y monopolios tienen repercusiones diametralmente contrarias a la explotación multiétnica, es decir diferenciación en vez de integración” (Worrle 1999; 69).

Sin embargo el control siempre fue difícil, pues para esto se requería de estructuras sociales fuertes como Estados y estructuras políticas consolidadas. Lo que se veía en el caso de los salares de la provincia de Bolívar, es que había pequeños sectores organizados en cada región, los mismos que tenían sus propias formas de control. Angamarca era uno de esos lugares, por ser paso obligado a quienes iban por la sal de Bolívar, desde y hacia la costa, desde y hacia el norte de la sierra. Meneses (1985 citado por Worrle, 1999) señala que hasta la década del 70 a la provincia de Bolívar llegaban gentes de *“Ibarra y Otavalo, Quito, Tulcán, Pasto y traían a cambio de la sal, carne, maíz, papas, legumbres, leche y hasta ropa y zapatos”*. Lo mismo ocurría hacia la vertiente occidental, desde donde

se traían productos como plátanos, plantas medicinales, camotes y otros. La producción de Salinas de Bolívar en el siglo XVI, según Pomeroy, *“no rebasaba de 300 a 500 toneladas anuales”*. Estamos hablando entonces de que los páramos fueron rutas importantes donde no solamente llegaba gente del sur y el norte (incluso Colombia), sino también para que los pobladores locales se trasladaran a otros lugares, como a Pimampiro, especialmente en busca de coca, (Landázuri 1995; 92), que era intercambiada por la sal traída desde Bolívar. Era sal de buena calidad en comparación a la de Salinas de Imbabura, más amarga: *“a Pimampiro acudían indios de Carangue, Otavalo, Latacunga, Sigchos, como también indios pastos”*. Las zonas donde se comerciaba o circulaba sal, eran escenario de intercambios interétnicos muy importantes, y de una gran movilidad de indios (a través de las zonas altas). ¿Qué clase de indios eran estos que andaban libres, sin el control de una autoridad, sabiendo que en esa época todos pertenecían a algún tipo de forma de apropiación del trabajo? Es claro que eran indios libres.

Este comercio que se mantenía aún en el siglo XX, era más dinámico antes y durante los primeros años de conquista. Ramón (2004) señala que el Inga Ñan (camino del Inca) pasa a lo largo de Cotopaxi de norte a sur y tiene dos ramales, uno hacia el occidente y otro al oriente. Aunque no tenemos la ubicación precisa de la ruta, podemos ver sus huellas en Angamarca, a través de construcciones monumentales, talladas en las cimas de las montañas (páramo) llamadas Pucará, que son fortificaciones militares y a la vez espacios rituales, desde donde hay una amplia visibilidad. Estos se ubicaban en lugares que requerían protección especial...

“hay dos churos aquí arriba y uno que ya está en la provincia de Bolívar, desde ahí han sabido comunicarse, para hacer guerra, no ve que por aquí pasaba de todo, entonces se han sabido cuidar así” (Vichicela, entrevista personal).

Aún hoy existen comunidades que desarrollan actividades en torno a estos espacios descritos, estas son Chine y Churo Losan. Al parecer hay indicios que señalan que el control del Inga Ñan era estratégico para las comunidades o grupos que se encontraban cerca. Caillavet (1982), citando las crónicas de Cieza de León, señala que se conocen indios que *“asaltaban a los viajeros que transitaban por el camino real”*, y que para controlar estas rutas. La ocupación española se hizo formando ciudades cercanas, que permitían el control de estos territorios. Como habíamos señalado, las rutas del Inga Ñan estaban en las zonas de altura y los asaltos que se realizaban dan cuenta que había un control de indios que cobraban “impuestos” a quienes circulaban por ahí, especialmente si eran comerciantes o personas con recursos. Pero otro elemento que se puede recuperar y que sirve para entender la dinámica de ocupación del espacio, es que para controlar a los grupos “alzados” se fundaron ciudades españolas desde donde se podía proteger las principales rutas. Latacunga era una de éstas.

b. La Hacienda

“En 1639, la hacienda de Zumbahua es adquirida por compra por la orden de los Agustinos que mantendrán la propiedad por varios siglos, convirtiéndose en proveedor de lana para el obraje de la orden religiosa cerca de Latacunga. Esta hacienda apenas manejaba efectivo. Los campesinos trabajaban a cambio de acceso a

tierra por medio del sistema de concertaje y más tarde huasipungo. La hacienda de Zumbahua incluía tierras en el subtrópico donde se cultivaba caña de azúcar que se procesaba y comercializaba en un ingenio propiedad de la hacienda. Los mayordomos trasladaban a los trabajadores desde Zumbahua al subtrópico a cultivar, moler y transportar la caña. Estos viajes al subtrópico aún se recuerdan como una de las experiencias más duras de la época de la hacienda ya que los trabajadores eran vulnerables a accidentes y enfermedades” (Martínez, 2004).

Tempranamente se veía que había dos tipos de hacienda, la una de la iglesia-Estado y la otra, particular o privada. Cada una tenía una forma diferente de acceder a los recursos. Cuando las órdenes religiosas no podían explotarlas “eficientemente” o tenían tierras no usadas, desarrollaron mecanismos mercantiles, como el arrendamiento, para aprovecharlas. Los arrendadores a su vez buscaban la maximización de los suelos (durante el tiempo que duraba el contrato). Por ello, en algunos casos

“usurparon parte del páramo y por lo menos en dos ocasiones (1883 y 1927) trataron de extender la frontera agrícola en el páramo comunal, porque las tierras vírgenes darían varios años de rendimientos altos. En las dos ocasiones las comunas defendieron el uso tradicional de la tierra” (Forster; 2000, 78).

Lo que deja ver esta cita es que había una presión por el páramo por ser un espacio que generaba rentabilidad inmediata, pero que a la vez se deterioraba al poco tiempo. Lo interesante es que la mayoría de haciendas de la zona occidental de Cotopaxi pertenecían a la Curia y su aprovechamiento se basaba en el arrendamiento.

Esta presión por acceder al páramo de las comunidades libres, por parte de los arrendatarios de haciendas de Estado, tiene varias lecturas. La primera, que las tierras bajas se encontraban con producciones poco rentables o que su vinculación al mercado nacional o global, demandaba mayores niveles de producción, a fin de estar acorde con la dinámica económica del momento. La segunda, tiene que ver con la búsqueda de mano de obra y para ello se establecen acciones coercitivas y culturales como compadrazgos y otras como beneficios de acceso a ciertos recursos ubicados dentro del territorio hacendario. Esto dejaría en entredicho que el deterioro del páramo sea una cuestión reciente. Detrás de esta afirmación se esconde la idea que “sólo” los indígenas (dado el crecimiento demográfico), por haber recibido tierras altas en la Reforma Agraria, son responsables del deterioro de este ecosistema, de la disminución de caudales de agua, y de la erosión. La hipótesis aquí es que la hacienda con su lógica de maximización de capital –sumado a esto el uso permanente durante varios siglos, a través de diferentes mecanismos (ganadería, agricultura, etc.)– de las zonas de altura, es también responsable de la situación actual de los páramos. Es decir que lo que conocemos hoy, como páramos, es el resultado histórico de diferentes formas de actividades humanas y naturales.

El deterioro del ecosistema existe y avanza aceleradamente. Sobre este tema sería pertinente pensar los efectos de la migración no sólo actual (internacional), sino aquella que se viene dando al interior del país, desde inicios del siglo XX. La disminución de la tasa de crecimiento poblacional en Cotopaxi es evidente, por lo que se debe tomar ésta como

variable importante para esclarecer la presión que existe sobre este recurso. Otro aspecto a tomar en cuenta es la disminución de la presión sobre el páramo de Cotopaxi, a partir de los procesos de colonización impulsados por el Estado en la segunda reforma agraria. Esto afectó principalmente en las áreas de ceja de montaña de Sigchos, Angamarca y Zumbahua. Con todo esto podemos afirmar que la fuente de deterioro de los páramos y las zonas de altura de Cotopaxi, es múltiple, y que ésta es el resultado de diferentes procesos sociales, políticos y económicos, locales, nacionales y globales, donde el uso que tuvo la hacienda de esta parte de los Andes, por varios siglos, es importante.

Cuando la hacienda cambia su propuesta productiva hacia la leche, empieza a necesitar grandes cantidades de sal para los animales, por lo que la economía salera se dinamiza, se especializa, y entran nuevos actores a presionar por el control y uso de este recurso. La sal que se obtenía en Cotopaxi provenía de fuentes cuya producción era mínima comparada a Salinas de Bolívar. Sin embargo, cumplían un papel importante, al estar ubicadas en zonas de páramo, con poca influencia de la hacienda. Esto posibilitaba que haya algunos niveles de autonomía, respecto a quienes controlaban este sector. Tempranamente, tener la posibilidad de acceder a fuentes de sal, debió significar un gran aporte a las economías de las comunidades libres que la controlaban. Una dificultad de esta sal es su poca concentración, por lo que requiere de un necesario proceso de cocción para que se cristalice.

Las alturas por las que pasa la ruta de la sal, dan un aspecto de encierro por los pequeños y escasos valles que se asientan entre altos farallones.

El actual pueblo de Angamarca ubicado en uno de esos valles, se encuentra casi escondido. Este hecho facilitó que se convierta en lugar de refugio de perseguidos de todas las regiones. Ahí es donde se desarrolló desde el siglo XVII uno de los peores ejemplos de gamonalismo en el Ecuador. Una particularidad de este lugar es que su origen blanco se relaciona con familias de vascos exiliadas de la España de la Inquisición, acusados de brujería (Alfaro; 2004 b).

Para tener más claridad sobre la situación, examinaremos el papel que jugaron las comunidades libres dentro del complejo hacendario y en la consolidación y control de territorios y espacios que existen en la provincia. Estas comunidades libres se conformaban de muchas maneras, entre éstas, por indios que huían de la opresión, por tener derechos históricos que les permitían estar fuera de un espacio hacendario. Indios desterrados o forasteros que se ubicaban en las zonas aledañas. Pero esta definición de libres, por no estar dentro del espacio hacendario, no es la más adecuada, pues estas comunidades tenían altos niveles de dependencia económica con la hacienda. En ocasiones vendían su fuerza de trabajo a cambio de acceder a los beneficios de la misma o tenían niveles de dependencia simbólica con el patrón. En otros casos tenían una relación de conflicto abierto con la hacienda.

Las comunidades de hacienda, por su parte, vivían dispersas, no tenían una organización o un sentido de pertenencia a una entidad formal reconocida. Por ello la hacienda se convertía en el centro alrededor del cual se organizaba el entorno natural y espacial. Muchos relatos dan cuenta de que para entender al geógrafo de un lugar o para dar cuenta de una

ubicación específica se relacionaba la hacienda como centro en torno al cual se mencionaban los puntos cardinales. La hacienda era también desde donde se consolidaba el espacio de vivienda. La hacienda significó también un espacio para entender el entorno natural. A su alrededor se construían todos los imaginarios. En otro sentido *“era el espacio de hacienda el que confería un sentido de unidad e identidad. La hacienda era la comunidad y el patio de la hacienda era el lugar de la comunidad”* (Cicero 2004). El patio de la hacienda y la hacienda en sí, era el lugar desde donde se impartían órdenes, se intercambiaba, se santificaba la fiesta, se bautizaba, se adoctrinaba, pero también se castigaba, se violaba a mujeres como mecanismo de sanción, con el fin de impartir “justicia”.

Es decir, para las comunidades huasipungueras, la hacienda era el espacio para ejercer poder, pues pertenecer a la hacienda dependía de una asignación individual que hacía el patrón. En la hacienda se perdían los derechos antiguos y las formas de ejercer poder se reducían al ámbito doméstico.

En cambio las comunidades libres fueron más dinámicas, pero además a través de Cédulas Reales y otro tipo de instrumentos legales, lograron mantener niveles de autoridad basados en cacicazgos u otro tipo de autoridad ancestral que se mantuvieron en algunos casos hasta mediados del siglo XX. Estas formas de ejercer poder por parte de las comunidades libres, según Ibarra (2004), terminaron con la puesta en vigencia de la ley de comunas, que permitía, a los espacios con algún nivel de autonomía, ser reconocidos por el Estado.

De estas comunidades libres hay varias en la provincia de Cotopaxi.

Destacan algunas muy antiguas como “Pilacumbi” que menciona Ramón (2004, 20), o Apahua en las partes más agrestes de la geografía cotopaxense y con un clima no muy amistoso. Pero todas estas comunidades “libres” estuvieron ubicadas en zonas de páramo, por lo general consideradas “inaccesibles” y por ello se convertían en zonas de refugio para los indios que huían de la hacienda. Algunas de estas estuvieron ligadas al comercio de la sal, que como ya se dijo era un eje de control y poder. Entre estas destacan las comunidades de Pujilí como Cachi Alto y Bajo, que llevan ese nombre (cachi = sal) por estar junto al río Patoa. Lo interesante de esto es que estas comunidades eran libres y además eran espacio de recepción de indios que huían de otras zonas de la provincia, especialmente de la zona de Tigua, Zumbahua y Guangaje. Un elemento a tener en cuenta es que desde la comunidad de Cachi Alto, surge el proceso de lucha por la tierra en Cotopaxi, en los años 70, encabezada por Juan Rivera, primer presidente y gestor de lo que ahora se conoce como el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

En la zona de Angamarca, en la ruta de la sal, de comercio, de abigeos y de acercamiento intercultural, se encuentran dos comunidades que son reconocidas por la población blanco-mestiza, como comunidades que “se han hecho respetar” a fuerza de acciones de hecho que han causado muertos, juicios, expropiaciones y otras formas de conflicto. Churo y Chine, son comunidades que de acuerdo a la historia oral, han protagonizado acciones de resistencia al gamonalismo, hasta entrados los noventa. Cuando los procesos de reforma agraria habían “terminado” en todo el país, seguían las acciones

de violencia de lado y lado, en la lucha por la tierra y por lo que ellos llaman, “la dignidad” pues *“los gamonales querían tener a todos dominados y a nosotros también, por eso nos trataban como a los peones de la hacienda, queriendo que entremos a la iglesia sin sombrero y sin alpargatas, o sea querían que nos humillemos ante lo que ellos querían”*. (Vichicela, entrevista personal 2004)

El miedo al destierro que era una forma de control usada por el comportamiento gamonal de estos hacendados, hizo que la mayoría de comunidades se mantuvieran atados a la tierra, unos con resignación, otros resistiendo, ante las atrocidades que se cometían. Se violaba mujeres de las familias “rebeldes” los domingos después de misa, a plena luz del día y en medio de la plaza pública, en la más absoluta impunidad. Esto era posible sólo controlando todo el poder local (junta parroquial, teniente político, comisario, cura, registrador de propiedad, etc.) a través de relaciones de parentesco. En esta zona son conocidas las familias Montúfar, Sánchez, Flores, Dávila que controlaban todo, pues están hasta hoy emparentados.

Estas comunidades desarrollaron permanentes acciones de resistencia ante la opresión, que a la larga implicó tener niveles de autogestión y organización. Ahora, ellos dicen, *“después de muchos años y tanto hacer, se logró vencerles a los gamonales”*. En 1992 se ganó un juicio de tierras a la familia Montúfar. Lo interesante de Chine y Churo es que se encuentran en las zonas altas de Angamarca, por donde cruza la antigua ruta de la sal, y espacialmente controlan varios pisos ecológicos en zonas altas, medias y bajas. Esto les permitía tener acceso a productos de distintos pisos ecológicos

llevados por comerciantes que desde la costa o la sierra subían o bajaban, para intercambiar con otros de la sierra y amazonía. El control de esta ruta permitió a estas comunidades que haya cierto nivel de autonomía frente al centro parroquial, que era el lugar de los gamonales. Y esto también permitió tener efectivos niveles de resistencia.

c. La República

A mediados del siglo XX, los páramos occidentales de Cotopaxi se convierten en una de las zonas pioneras en el país donde se dieron procesos distributivos de tierra. Fue el caso de

“la hacienda Tigua en 1945, que fue vendida y entregada a los indios, aquí hubo un intento de organización tipo cooperativa que fracasó. La hacienda se encontraba en las zonas altas y ya existía un proceso de ocupación de esta zona, posteriormente las otras haciendas como la de la asistencia social se entregó en 1965 y la otra, la de la universidad central en 1982” (UNORIG 1999).

Martínez (2004) describe así el conflicto que se presentaba en esa época...

“el proceso de reparto fue caótico y dio lugar a desigualdades económicas y de poder. Estas desigualdades reproducían relaciones de poder entre los peones y los mayordomos y entre familias de peones más o menos poderosas que venían de la época de la hacienda”.

En todas las adjudicaciones, no se entregó tierra a ningún indio arriado o perteneciente a comunidades libres. Esto hizo que en tiempos posteriores, a mediados de los años 1960, se presione por los páramos ya entregados y en control de las comunidades, produciéndose un hecho

recogido sólo en la memoria colectiva de los habitantes del sector. Se produjo *la guerra por el páramo* entre las comunidades que ahora se ubican en Tigua, Guangaje, Poaló, siendo estas mismas poblaciones las que intervinieron en un hecho de confrontación que duró varias semanas, donde se produjeron varios muertos y heridos. En este caso, la lucha se dio porque los procesos de reforma agraria estaban por producirse y la falta de delimitación exacta de terrenos de la hacienda Tigua (entregada décadas atrás) sumada a la necesidad de tierra de parte de las comunidades libres atizó el conflicto intra étnico, que supuestamente se solucionaría con la entrega de tierras por parte del IERAC, pero no fue así. El conflicto y la presión por la tierra se mantuvieron. Según la observación de campo, el conflicto se solucionó con estrategias matrimoniales entre los beligerantes.

“en Tigua en los años cuarenta. Las tomas de haciendas a menudo eran organizadas por partidos marxistas (tanto por el Partido Comunista del Ecuador, PCE, como por el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, PCMLE, que trabajaron con intensidad en la zona). En algunos casos, como en Salamalac Chico, se toma una hacienda y se reparte entre los campesinos sin que medie negociación y compra, debido a la influencia del PCMLE, que recomendaba a los trabajadores tomar las haciendas y desconocer el proceso de reforma agraria. Una consecuencia de esta estrategia es que la posesión de estas tierras quedó sin legalizar hasta muchos años después” (Martínez; 2004)

Durante el primer siglo republicano, el acceso a los páramos y a las poblaciones que se encuentran habitándolo, quedaron bajo responsabilidad de las haciendas. Siguiendo a

Guerrero (2000; 9), cuando el Estado ecuatoriano a mediados del siglo XIX, entregó a través de varias leyes, la administración, primero en forma explícita y luego implícita, de grandes poblaciones indígenas que vivían dentro de las tierras de hacienda, las implicaciones sociales, étnicas, políticas, económicas y ambientales que tuvo esa acción fueron inmensas. Essto le daba al patrón un estatus político y de poder mayor por el cual este se convertía en el intermediario entre los indios y el Estado. Guerrero llama “administración de poblaciones” a este sistema. Es decir, el Estado se desentiende de grandes segmentos de población cuyas demandas pasan a través del filtro hacendario o en muchos casos blanco mestizo. Con ello, la administración del espacio, concretamente el páramo, pasa por el mismo trámite, por lo que la responsabilidad sobre lo que pasa en el territorio de la hacienda (deterioro o conservación) es responsabilidad privada.

El hecho de que el Estado se desvincule del control del espacio andino, dio pie a que se desarrollen procesos de asedio al territorio comunal durante la segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo a Ibarra (2004) el asedio consistió en deslegitimar el control comunal del espacio. Hasta esa época, se mantenían privilegios a las comunidades que tenían formas de autoridad étnica (caciques, regidores, protectores de indígenas, etc). Mediante algunas leyes se quiso eliminar este “privilegio”, pues el hecho de que exista, impedía que accedan a la tierra otras personas. Otro mecanismo fue considerar a las tierras de los páramos como “baldías” y con ello se dieron procesos de usurpación violenta de las tierras comunales. Otro mecanismo fue el remate de las tierras de comunidades. Todo esto

a partir de 1857. En Cotopaxi este tipo de conflictos se presenta principalmente en la zona de Angamarca, donde las comunidades de Chine y Churo, junto con otras menos combativas, protagonizaron eventos de resistencia muy importantes. Una de las formas de lucha de estas comunidades fue demostrar que tenían un tipo de control comunal y autoridades étnicas. El demostrar que se pertenece a un ancestro étnico, contrario a lo que sucedía en tiempo de la colonia, fue un instrumento de defensa de los territorios comunales.

Esta parte de la historia requiere también una lectura ecológica, pues de lo visto en Angamarca, quedan dudas sobre si el tipo de explotación que generaba la hacienda se veía solamente en la violencia usada o si ésta también se expresaba en el uso/abuso del páramo “que pertenecía” a las comunidades libres, con el fin de aprovechar al máximo las tierras que no le pertenecían y así proteger o guardar las propias. Este es un punto a ser investigado y una historia ecológica de la zona aportaría muchísimo en este sentido.

d. La Reforma Agraria

A mediados de siglo XX el modelo hacendario tradicional (precapitalista) entra en cuestión. Junto a la presión social por la tierra, dio paso a la reforma agraria. Las grandes haciendas entregan las tierras principalmente de altura a los antiguos huasipungueros, quienes pasan a administrar este espacio donde estuvieron habitando por siglos. Sin embargo, el Estado no recupera la administración que fue entregada a la hacienda en el siglo anterior, quedándose este espacio, en el caso de Cotopaxi, bajo la administración comunal étnica y así se ha mantenido hasta la

actualidad. Es decir el Estado ha sido incapaz históricamente de tener una administración directa y real de estos territorios de altura. Por eso no es tan errado lo que dicen los blanco-mestizos de Cotopaxi: el páramo es de los indios, en él viven los indios.

“Hay que establecer dos cortes que son claves para entender la intensificación del mercado de tierras. Lo primero, la diferenciación de lo que fueron haciendas de iglesia y haciendas del sector público (asistencia social y universidades, colegios). Estas haciendas eran arrendadas a familias terratenientes y pese a que su organización se asentaba también en el trabajo de huasipungueros y arrimados, la presencia temporal de los arrendatarios permitió un creciente control indígena campesino, con la creación de nuevos huasipungos quienes exigirían más tarde la entrega de las unidades parceladas en buena parte a través de ventas a organizaciones cooperativas. El segundo corte se refiere a establecer una diferencia a través de las estrategias de producción. Así desde comienzos de este siglo en varias haciendas ganaderas de la sierra centro-norte se establecieron algunas innovaciones tecnológicas, lo que llevó a una nueva reorganización espacial de las unidades. Para ello se unificó las tierras explotadas por las haciendas, en tanto que los huasipungueros fueron trasladados a las tierras más altas y erosionadas, es decir se convirtieron en propietarios de tierras que no entraban en la lógica de producción hacendaria. Dicha estrategia se hizo presente antes que las políticas estatales de Reforma Agraria” (FAO; 1995).

En cierta medida a estas comunidades se les “aisló” del capitalismo, del Estado, de la nación, de la misma manera que se lo había hecho desde la colonia. A propósito de esto hay que mencionar que las comunidades

libres acceden a la tierra en la segunda reforma agraria, pues esta tiene una intención de incorporar a otros sectores sociales que no eran parte de la hacienda. Sin embargo, la inequitativa distribución de tierras, dinamizó la presión de comuneros libres por tierra y así muchos conflictos se agudizaron. Estas comunidades siempre fueron más abiertas a la modernización y de hecho se incorporaron al desarrollo capitalista de manera más eficiente. En este sentido, Thurner (2000) plantea que las haciendas facilitaban la reproducción de las prácticas culturales que parecían tradicionales, por comparación con las comunidades campesinas libres. Según el autor, esto permitiría a los grupos terratenientes, mantener la mano de obra campesina en un universo cada vez más aislado del país. Esto explicaría por qué en las haciendas donde se conservaba de la manera más absolutamente precaria el trabajo y la producción, fue donde menos asedio se dio a la tierra del patrón, tanto de las comunidades libres como de hacienda.

“La concesión de suplidos constituía un instrumento para garantizar a la hacienda la disponibilidad gratuita de fuerza de trabajo. Por otro lado, cumplir con las prestaciones de trabajo para pagar la deuda no servía simplemente para “liberar” al campesino de la deuda contraída, sino que constituía la condición para endeudarse otra vez, es decir para pedir y recibir suplidos, junto con la garantía de continuar con el uso de los recursos de la hacienda”. (Cicero; 2003: 183)

Se debería estudiar el futuro de las comunidades (libres o no) que asediaron grandes haciendas de propiedad privada, una vez que se inició el proceso de reforma agraria y principalmente la colonización, que se

constituyó en la válvula de escape de las grandes presiones que existían. Pues lo que sí queda claro es que las haciendas latifundistas en Cotopaxi de propiedad privada, lejos de disminuir, siguen en vigencia dando cuenta de un proceso que buscó consolidar el capitalismo.

En este sentido es necesario también entender y estudiar a profundidad, cómo se dio la relación de estas comunidades libres que tenían una diferente concepción del espacio y la identidad, basado en criterios más colectivos que los que tenían las comunidades de hacienda. Este encuentro entre diferentes visiones de poder, entorno ambiental, cultura, etc, ¿cómo se conjugó en el tiempo y el espacio para ir consolidando lo que ahora conocemos como el movimiento indígena ecuatoriano y en particular de Cotopaxi? ¿Qué papel jugó el entorno paramero en la consolidación de esta propuesta? Estas son algunas preguntas para profundizar en el futuro.

e. Levantamientos indios y ajustes estructurales.

A mediados de los ochenta, las organizaciones indígenas y campesinas, a través de la coordinadora nacional de tierras (que fue configurando lo que en 1986, se conocería como CONAIE), protagoniza una serie de tomas y movilizaciones por la tierra. Cotopaxi no fue la excepción y hubo conflictos en varios cantones y parroquias de la provincia, como Toacaso, con la actual Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC), o en Salcedo, con la organización ligada a la casa campesina. Estas luchas tenían la particularidad de buscar la afectación de predios de grandes haciendas privadas...

“Se hace colonización pero no se afecta la gran propiedad. Las adjudicaciones por reforma agraria hasta 1973 llegaron a representar sólo el 2,8% de la superficie agrícola. El total entre curia y haciendas del Estado que fueron expropiadas era de 258. Este total benefició a 30.247 propietarios. Las comunidades que estuvieron en la periferia de las haciendas (libres y o mestizas), efectuaron su propia reforma agraria, al buscar sus propias alternativas productivas como la compra de tierras de las haciendas, roturación de tierras de páramo y recuperación de tierras consideradas de ceja de montaña. (FAO; 1995)

Asistimos a un proceso que en los noventa se caracterizó por constantes levantamientos indígenas como expresión de la oposición a las políticas de ajuste estructural que buscaban consolidar el modelo neoliberal, donde la propiedad privada tiene mayor valor que el acceso y control comunal de la tierra y los recursos. En Cotopaxi este proceso se caracterizó por un acentuado proceso de parcelación de tierras. En algunos casos eso ha significado la concentración de tierras en pequeños y medianos propietarios a través de la compra de tierras, así como la culminación de procesos comunales de administración del espacio. En este sentido es necesario estudiar más de cerca los efectos de la crisis, los efectos del modelo y sus repercusiones en las zonas de altura. Es en esta época que la gente del páramo tiene un protagonismo nacional, pero el ecosistema al que representan continúa un proceso de creciente deterioro. Este proceso que da cuenta la cita anterior se concretó en la ley de desarrollo agrario de 1994 que surge de la Cámara de Agricultura de la primera zona e IDEA. Con esta ley se crea el INDA, se le asigna la responsabilidad de la adjudicación de tierras, la solución de conflictos

con respecto a la tenencia y autoriza al Estado a vender tierras públicas. Se establece que las concesiones de uso de agua estarían necesariamente ligadas a la propiedad de la tierra.

“En esta ley se limitaron los causales para expropiación de tierras a: mantenimiento de tierras ociosas por más de 3 años, utilización de formas precarias de explotación; presión demográfica en áreas adyacentes y uso de prácticas que deterioren el ambiente. Con todo esto se logró que los niveles de apropiación se bajen significativamente y que la expropiación deba ser pagada en efectivo. Este nuevo cuerpo legal establece que haya desalojo a quienes participan en invasiones de tierras. Esta ley promueve la parcelación de predios, la venta de tierras y la disolución de comunas y cooperativas de producción que han demostrado ser “ineficientes”. El espíritu de la ley es el de garantizar la propiedad privada de la tierra. Pero la ley por sí sola no constituye una reforma integral como la que se necesita para el uso y manejo eficiente de la riqueza ambiental”. (FAO, 2002)

Lo que demuestra la cita es que el crecimiento poblacional de las zonas de altura no es lo único que explica el deterioro ambiental. La ley

agraria significó la posibilidad de terminar con el estatuto comunal de administración de los páramos, convirtiéndolo en privado, lo que en sí explicaría el por qué de su vertiginoso deterioro. Es decir, no es solamente la numerosa presencia de población en los páramos, sino la posibilidad de privatizar el acceso y manejo lo que los deteriora. (El Estado no ejerce control ni es deliberante, ni legítimo, sino sólo en las áreas protegidas). Con el debilitamiento de la comuna, se cultiva y deteriora sin control. Recordemos que en esta zona ya había poblamiento anterior y que incluso en las últimas décadas la población de la provincia (especialmente la rural) no ha crecido como el resto del país. Sobre esto sería interesante conocer cuál es la situación de los páramos comunales en la actualidad después de una década de vigencia de la ley agraria. El gráfico 2 muestra las poblaciones de la provincia que se encuentran sobre los 3.000 msnm. Y se hace una relación de los páramos que al año 2000 todavía se encontraban como vegetación natural. Este gráfico permite ver la relación de los principales asentamientos y la importancia de esta zona en relación con el ecosistema.

Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POBLADOS EN LOS PÁRAMOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

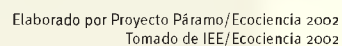
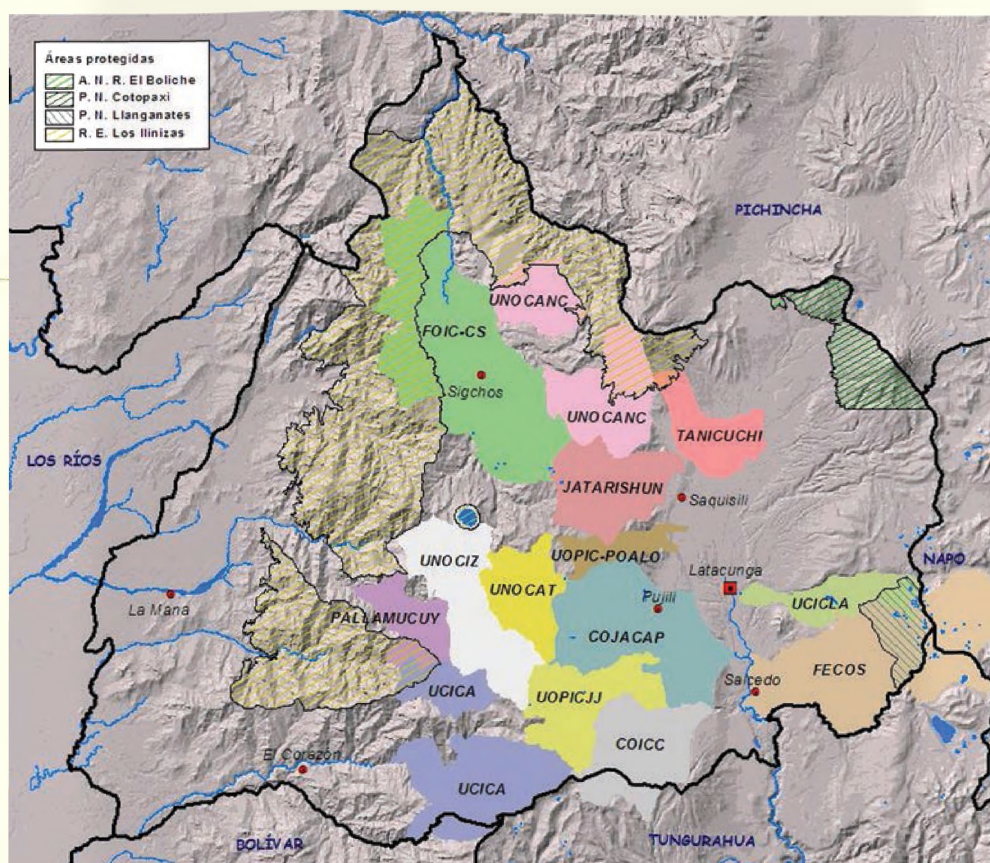


Gráfico 3



Fuente: Sistema de Monitoreo Socio Ambiental de Cotopaxi
Elaborado por: SIG-Ecociencia 2004 – PMT.

CAPÍTULO 3

EL PÁRAMO UN ESPACIO SOCIO-AMBIENTAL DE VIDA

En esta parte del documento intentamos una radiografía del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y para ello nos basamos en información de campo, observaciones, recorridos y diálogos mantenidos con diversos dirigentes durante los últimos años. Reconociendo su historia, es la de un movimiento con alto nivel de cohesión y desarrollo organizativo, podemos decir que todavía es una organización en proceso de construcción y consolidación (social, económica, política, territorial). Si se mira con detenimiento las provincias con mayor población indígena, se evidencia una forma de ocupación del espacio basada en territorios étnicos, donde existe una forma de organización y decisión del espacio propia, con poca dependencia del Estado central en temas administrativos.

En Cotopaxi, las Organizaciones de Segundo Grado (OSGs) filiales del MICC ocupan el espacio sobre los 3.000 msnm a los dos lados de la cordillera occidental y se distribuyen de manera que cubren una extensa zona de la provincia, que en los actuales momentos es estratégica, porque allí nace el agua para las zonas bajas. Nos referimos al ecosistema páramo. Lo que conocemos es suficiente para afirmar que estamos ante lo que podríamos llamar “corredores étnicos”. Se trata de espacios sociales donde la administración, gestión, ocupación y visión del espacio corresponden a una forma cultural diferente a la que se encuentra en otros espacios geográficos. Estos corredores no

tienen relación ni se limitan por divisiones administrativas, y su característica es la complementariedad, no sólo territorial, sino también por el intercambio de productos de diferentes ecosistemas.

El gráfico 3 muestra cómo se encuentran distribuidas las OSGs filiales del MICC que tienen páramos, que son 17, y cuyo carácter es territorial. Por lo general una OSG es una parroquia. Esta coincidencia no es fortuita, sino que tiene que ver con una perspectiva del MICC de ocupar espacios locales primero y desde ahí proyectarse a construir gobiernos alternativos provinciales y nacionales, después. Por ello es que las OSGs coinciden con las parroquias. En estos casos, la administración es compartida con obvias tensiones y diferencias entre autoridades electas por la democracia partidista y los dirigentes. En Cotopaxi hay 43 parroquias urbanas y rurales y el MICC tiene 27 OSGs. Cada dos años se reúne el Congreso del Movimiento y se eligen autoridades y se aceptan nuevas organizaciones, como ocurrió en el Congreso realizado en la ciudad de La Maná en mayo del 2003, donde se aceptaron tres organizaciones nuevas, correspondientes a parroquias periurbanas. Desde el año 2000, el criterio territorial prima sobre el criterio gremial al momento de aceptar a una OSG. Dentro del MICC se encuentra la Asociación de Profesores Bilingües de Cotopaxi, el único caso de este tipo. Es decir que para ser miembro del MICC se requiere de alguna manera

controlar un territorio específico, no importa si en él existen diferencias religiosas o de tendencia. Si se lo controla, se puede ser parte. Es por ello que sectores de comerciantes, mercaderes, federaciones de barrios y otros no son parte de esta organización indígena. Cuando hacemos referencia a que el movimiento se encuentra aún en proceso de consolidación, nos referimos a este hecho de la ocupación de territorios que tienen como expresión concreta la conformación de una OSG.

Desde que el movimiento indígena a nivel nacional, en el año 1996 ingresa a la política electoral, en Cotopaxi se incrementa el número de OSGs, de las 15 existentes hasta entonces, ahora tenemos 27. El MICC en los espacios donde se encuentra ha desarrollado una estrategia de administración y manejo del territorio, con criterios étnicos, lo que llamaremos “cooptación”. Cuando hablamos de “cooptación de territorios” en Cotopaxi, hacemos referencia a una forma de administración real y concreta del espacio desde, por y para los indios, que se encuentra desde los 3.000 msnm a los dos lados de la cordillera. La cooptación parte del criterio de que: “quien mejor sabe lo que se necesita para nuestro desarrollo somos nosotros mismos, por eso buscamos que el espacio donde estamos sea lo más vivible. Nosotros lo hacemos posible”. La cooptación tiene una raíz histórica que se pierde en el origen de los tiempos, que pareció perdida en la colonia y la República, hasta que se empieza a cuajar a partir de la segunda reforma agraria que permite el acceso a la tierra de las comunidades libres. Esta estrategia de cooptación no es explícita, no se encuentra planteada como una de las líneas de trabajo del Consejo de Gobierno o como parte de las decisiones de algún congreso de la

Organización. Pero es evidente en el imaginario colectivo de los dirigentes consultados y en la historia del movimiento (MICC, 2003). Dávalos (2004) y Vallejo (2003), hacen referencia a una forma de pensar y construir presente en el mundo indígena, que se lo vive y se lo expresa semánticamente y que sólo se lo ve en el transcurso del tiempo, se convierte en material algo inmaterial. Podríamos decir que son estrategias de control, a través de la resistencia, que se van mostrando de a poco con la ocupación efectiva de un lugar y esto les da un carácter legítimo y permanente en el tiempo y el espacio.

“El territorio se muestra como un complejo espacial que articula múltiples relaciones sociales de distinto nivel activadas por intereses particulares, de gobiernos locales que administran los recursos para la provisión de servicios, y diversidad de entidades privadas que tienen fines económicos... en definitiva el territorio rural es un escenario multi actores cruzado por intereses particulares y colectivos” (Torres; 2004, 3).

El actual movimiento es parte de un engranaje que se construye históricamente y que busca la cooptación de territorios para llegar a una administración y control autónomo del espacio, sin que esto signifique desconocer el Estado Nación, ni la Democracia como forma de administración social y política. Para que esta estrategia de cooptación sea efectivamente posible se requieren algunas cosas, entre estas crear las condiciones sociales, políticas, organizativas y de poder a fin de llegar a niveles de control y decisión sobre el espacio de forma autónoma. El MICC persiste en la idea de controlar todos los espacios locales donde hay una OSG y no parará hasta conseguirlo.

La administración del páramo en Cotopaxi está en las comunidades indígenas. Son ellas quienes deciden lo que se hace en esas tierras y se basan en sus necesidades de sobrevivencia. El cabildo de cada comunidad resuelve sobre el uso de las tierras comunales, la parcelación, la designación de los espacios para el pastoreo y el reparto del agua. Regularn también las queas y otras actividades de producción que, como parte de su propia gestión y a través de ONGs, han llegado a tener. Es importante anotar que el Estado no tiene ingerencia en estos espacios. En las actuales circunstancias, los actores sociales (organizaciones) han rebasado a las autoridades estatales responsables de los temas ambientales en la provincia, en lo que hace referencia a las decisiones sobre el manejo y aprovechamiento del espacio. En concreto las organizaciones indígenas y campesinas, especialmente de la zona occidental, tienen un control de la zona, que se expresa en niveles autónomos de decisión efectiva y real, donde muchas de las autoridades locales no toman parte. Por tanto pensando en el MICC y sus áreas de influencia, los tomadores de decisión no son sólo los que la ley considera como tales, sino que hay otras dinámicas de control del territorio (Alfaro; 2004, 32).

Sobre este tema hay que señalar que la reforma agraria terminó con la posibilidad de acceder a distintos pisos ecológicos que era parte de la dinámica andina de control del territorio. Ahora existe un control efectivo, intensivo y que resulta contraproducente para el ecosistema, de un piso ecológico, el páramo y las zonas de altura, donde se maximiza el uso del suelo, hasta deteriorarlo. En definitiva lo que podemos afirmar partiendo de la experiencia de Angamarca, es que la administración y control de las tierras

de zonas altas, medias y bajas (bosques) limita el deterioro del páramo, pues al tener acceso a otros pisos ecológicos y recursos, disminuye la presión sobre él.

Páramos: Mitos, Biodiversidad e Historia

Partimos del planteamiento que los páramos y las zonas de altura de Cotopaxi, son un espacio socialmente construido y que, como tal, responde a un tipo de control/cooptación histórico de territorios a fin de consolidar un poder. Pero la cooptación del territorio, no es sólo el control social-político efectivo del espacio –como el que tienen las organizaciones filiales del MICC en la zona occidental de Cotopaxi– sino que se conforma complementariamente, con una forma particular de ver el mundo. Hacemos referencia a la cosmovisión andina y sus diferentes formas de expresión en Cotopaxi. Es cierto que este es un tema que generará muchas polémicas y que además levanta polvareda. Pero también es cierto que a partir de las evidencias encontradas y de las fuentes revisadas, podemos afirmar que en la zona occidental de Cotopaxi, se conserva una particular concepción del mundo que se refleja en diferentes formas de entender, interpretar y acercarse al entorno natural.

Los cuentos, historias o mitos más comunes en el mundo andino de Cotopaxi, como los del lobo, la lagartija, el zorro y el cóndor y la joven (el cóndor enamorado, muy popular en Tigua), son los mismos que se encuentran en otras regiones del continente. Estos fueron ya recogidos y descritos en los Andes peruanos y bolivianos por diversos cronistas en los siglos XVII y XVIII, que señalaban

que estas creencias eran muy comunes entre los indios de esta parte del mundo (Arnold y Yapila; 1992). Lo interesante es que se menciona a los mismos personajes míticos y a los mismos animales con modificaciones en la trama, en lugares muy alejados unos de otros. Una lectura rápida de esto nos lleva a pensar:

primero: que hay un pensamiento o imaginario común en los países mencionados que se ha mantenido hasta ahora, Cotopaxi no está fuera de esto.

segundo: la importancia y el peso de la oralidad en este tipo de construcciones sociales, que tiene una fuerza suficiente como para perpetuar y sostener espacios de vida concretos;

tercero: el valor que debe tener la palabra en las intervenciones en este tipo de sociedades. Aunque esto se reconoce, no ha sido totalmente valorado y asumido en las estrategias de intervención;

cuarto: que la sola presencia de este tipo de expresiones culturales (mitos, cuentos, visiones, sueños, iconografía) son una evidencia de una estructura social compleja que alberga este pensamiento, lo refuncionaliza, le da sentido y le otorga futuro.

quinto: La forma de ver y entender el espacio está condicionada por esta particular forma de concebir el espacio.

En definitiva en Cotopaxi, los cuentos mitos u otras formas de transmisión oral, son también una forma de encontrarse con las experiencias y concepciones del mundo que se han transmitido a través del tiempo y que permiten, como dice el autor, mantener y perpetuar un orden andino de las cosas. Pero no es solo la oralidad lo que permite poner en evidencia este tipo de estructuras mentales, sino también los sueños,

“a partir del sueño el ser humano puede obtener mayor sabiduría sobre su mundo social; en el mundo andino se consideran como buenos, que avisan, que ayudan a saber lo que nos va a pasar en lo posterior” (Vokral; 1993, 206).

Como ejemplo se analiza en Riobamba, provincia de Chimborazo un sueño –común– entre tres mujeres, que relacionan los mismos animales antes mencionados con una serie de hechos en sus vidas. Al final los animales son avisos o prevenciones para cada una. Este puede ser un buen ejemplo de la presencia de una estructura mental en las sociedades andinas del Ecuador y también un indicador de que hay saberes y experiencias sobre la naturaleza, que nos pueden dar pistas sobre los caminos a seguir para los diferentes tipos de intervención, especialmente en lo que a conservación se refiere. También pone en evidencia que hay una estructura social que se mantiene, en silencio, resistiendo y consolidándose, pero que se complementa con un control efectivo del espacio con perspectiva de controlar poderes locales y regionales.

¿Qué hay más allá de los mitos y las formas de entender la relación social entre la biodiversidad y las sociedades que las rodean? Lo que hay, es una forma de ver el mundo desde las sociedades que habitan un ecosistema, un mundo con sistemas clasificatorios y con construcciones sociales y espaciales muy complejas. En Cotopaxi queda aún por analizar en detalle este mundo, que de alguna manera en este documento queda esbozado con elementos básicos. Lo ideal habría sido llegar a definir una clasificación de los animales y plantas desde la lógica cultural de las alturas de Cotopaxi, lo que los biólogos conocen como taxonomía. Esto implicaría

un necesario esfuerzo por “reconstruir” ese sistema complejo” desde la estructura mental de la sociedad indígena actual de Cotopaxi, finalmente podríamos llegar a tener algo como lo hecho en Bolivia...

“El sistema taxonómico revela una distinción primaria entre las amplias categorías genéricas de las formas de vida: de las aves y las bestias. Se distingue luego entre el sub género de aves grandes y pequeñas, antes de clasificarlas sobre su lugar de origen, como aves acuáticas y de climas cálidos, lo mismo para las bestias”. (Arnold y Yapila; 1992, 179).

Este tema queda como un desafío para el futuro.

Muratorio (2000; 57) hace un acercamiento interesante a otra evidencia que da cuenta de formas de entender el pasado que se expresan en el Cotopaxi de hoy. Las pinturas de Tigua, serían, según la autora, etnografías e historias visuales que los grupos subalternos usan para reafirmar su identidad. Es decir, el lenguaje visual tendría igual valor que el discurso oral y escrito y la misma profundidad semántica. Haciendo una lectura más detenida de las imágenes de Tigua, esto implicaría que existe una historia que se cuenta a través de la iconografía y que sirve para conservar la identidad y perpetuarla. En casos como los de Cotopaxi, la revisión de las distintas formas, por las que se puede conocer una visión particular sobre el entorno (mitos, sueños, iconografía y otros más) son el mecanismo idóneo para cooptar el espacio y controlarlo, pues a través de estas formas de ver el mundo se perpetúa la identidad y la cultura.

Animales domésticos, propiedad y ocupación del espacio de páramo

Es importante señalar el papel que

tienen los animales domésticos (vacas, borregos, caballos) en la colonización de áreas de páramo en Cotopaxi. Estos son usados como pioneros. Después de varios años de uso de un área como zona de pastoreo comunal, se incorpora como área de cultivo y o vivienda. Aquí el tiempo es importante pues los animales mientras pastan, también devuelven materia orgánica al suelo, es decir la están abonando para cuando se convierta en área de cultivo. El pastoreo sirve para identificar las mejores zonas de asentamiento, así por ejemplo, el pastor mira la dirección del viento, las zonas más frías y aquellas donde llega el sol con mayor intensidad, cercanía de agua, etc. Estos factores son determinantes para construir viviendas. Esta información climática, también es útil para decidir qué tipo de cultivos se debe hacer. Esto significa también que un área colonizada por los animales, no necesariamente deba incorporarse como área de cultivo o vivienda, “*se quedan como áreas comunales*” (José Toapanta, 2004).

Según la ley de comunas, las áreas que son manejadas con criterios comunitarios, no pueden ser de propiedad privada, por tanto que haya un proceso de parcelación en el páramo no necesariamente significa que el páramo pase a propiedad individual, sino que la comuna ha respondido a la necesidad de tierra de las familias, concediendo porciones cuyo uso y acceso es comunal. Es decir, responde a una presión por el crecimiento demográfico, pero no significa que estas tierras dejan de estar en administración comunal, hasta que la comuna decida lo contrario. En el espacio concedido por la comuna a una familia, el manejo es privado. La comuna no decide, pero la propiedad del espacio es comunal. El cabildo

de la comunidad decide sobre si se entrega o no a una familia un espacio de tierra. Por lo general, lo que se ha visto en Cotopaxi es que el espacio es escogido por una familia y la decisión de entrega o no es del cabildo. Esta petición se presenta después de que la porción que tenía una familia ya no es suficiente para desarrollar la vida. Entonces la forma de acceder al páramo es a través de la petición al cabildo, el cabildo dependiendo de la disponibilidad, hace la entrega. En comunidades de Pujilí se entrega 1-2 hectáreas en promedio, en Salcedo 3-4 hectáreas. En la tierra, ésta se va fraccionando por la herencia que entregan las familias a sus hijos o nietos. Cuando esta ya no es suficiente, se acude a demandar más tierra comunal del cabildo. Este tiempo entre la petición de tierra y una nueva petición, en Cotopaxi está en promedio de 10 a 15 años.

Otro tema de discusión en Cotopaxi tiene que ver con la manera como las comunas de páramo entienden la propiedad. La propiedad se asienta en la cultura, es decir, es percibida como todo lo que involucra un ecosistema determinado socialmente (físico, biológico, social, político, económico). La propiedad es vista como todo sobre lo que ellos y ellas colectivamente pueden y tienen control efectivo, que no tiene que ver solamente con el espacio físico y aquello que se encuentra en él, sino incluso lo que está relacionado, con el bienestar comunal/social/familiar. Esto lleva por ejemplo a que se tomen decisiones como el que ningún comunero pueda vender la tierra o que ninguna persona busque solucionar los problemas en otro espacio que no sea la comuna. Esto se logra sólo cuando la comuna tiene una estructura social fuerte que permite que se desarrolle y mantenga con unidad de cuerpo. También depende de que se

maneje y conserve este ecosistema con unidad entre lo social y lo biológico y que la comuna haya desarrollado un cuerpo conceptual que posibilite dar respuestas a los problemas que van surgiendo en lo cotidiano. Dentro del páramo pudimos constatar que el título de propiedad es sólo un instrumento que legitima el acceso comunal a la tierra frente al Estado, para lo cual las comunas lo usan sólo para defenderse de pretensiones de otras comunas o extraños y a la vez posibilitar que ONGs vayan a trabajar en estos espacios. Por lo demás, este instrumento queda, contrariamente a lo que la visión capitalista pudiera suponer, en mero documento. Ahí entra la propiedad en el ámbito de la cultura.

La distribución y entrega del páramo se basa en reglamentos comunales y no en reglamentos específicos de páramo. De lo revisado, hay muy pocos casos donde esto se da en términos de ecosistema, pues la comuna mira todo el espacio dentro de una forma de entender el mundo. En la mayoría de casos el fraccionamiento del páramo es resultado de una decisión de toda la comuna. En la comunidad de Tigua Timbauccho, los comuneros decidieron parcelar una porción del páramo, donde la repartición era igual para todos, ponía en riesgo el ecosistema y especialmente las fuentes de agua. Esto significó un debate en el cual se planteaba la futura escasez de tierra y agua. Para entender este caso apropiadamente, es importante conocer cómo se empieza el cultivo y cómo se distribuye la tierra para la familia, en la parcela designada. A lo largo de la cordillera se puede observar que las porciones de tierra a las que se accede tienen una forma rectangular (vertical y no horizontal). Esto tiene una razón de ser, pues lo que se busca

es que con el alargamiento del terreno se pueda acceder a varios puntos geográficos, al camino y al río, a la cumbre de la montaña y al bosque, etc. Con ello pueden controlar varios micro climas o al menos disminuir los impactos de una helada. El terreno alargado también posibilita acceder a varios niveles de humedad en un mismo espacio. Los animales de pastura por lo general se ubican en la parte alta del terreno, pero con frecuentes cambios para aprovechar el abono. Se debe mencionar que en el terreno hay varios tipos de cultivo, acrecentando así la agrobiodiversidad.

Todas las áreas de páramo de Cotopaxi se destinan para la producción agropecuaria, no hay espacios que sean solamente agrícolas, siempre están en combinación con la ganadería. Lo que sí diferencia a unas áreas de otras es el tipo de ganadería que se practica: borregos, ganado de leche, o ganado bravo. Mientras haya ganadería existirá una forma de manejo muy cuestionada y muy perjudicial para el ecosistema. La quema es el mecanismo de las comunidades de altura para tener pasto fresco y tierno para los animales. Por tanto, ganado y fuego son dos elementos que caracterizan a la colonización cultural de zonas de altura. El problema de la quema es que no es selectiva, que no hay manera de controlarla, a menos que se produzcan lluvias. Las quemas son periódicas, alrededor de una vez cada dos o tres años, cuando se inicia el intiraymi. El fuego destruye todo y después de un tiempo es poco probable que la biodiversidad del páramo se restituya. Por eso mismo no hay una forma cultural de manejo del fuego, pero sí una forma de entenderlo, incluso una funcionalidad del mismo dentro de las percepciones de los habitantes del páramo. La quema no es solo para que haya pasto para

los animales; se da también para que animales identificados como peligrosos o considerados “negativos” desaparezcan y así reducir los peligros.

Este aspecto negativo del páramo responde a una visión muy ligada a una construcción espacio/cultural de género. Todo en la naturaleza está genéricamente diferenciado. En algunos sectores de Cotopaxi, especialmente aquellos ligados a históricos procesos de hacienda de ganado bravo (Pujilí –UOIPICJ–, Salcedo –FECOS–, Angamarca), se considera que las tareas de las mujeres están más especializadas a las zonas medias o bajas. En estas zonas los mitos respecto a los peligros que corren las mujeres al acercarse a este ecosistema son mayores. Esto hace que las tareas de las mujeres estén menos relacionadas con este ecosistema que en otras zonas de la provincia. Es decir, culturalmente se le confiere un carácter masculino a este ecosistema. Pero ¿qué tareas realizan unos y otras?

Independientemente de en qué área de Cotopaxi nos encontremos, se ha podido observar el importante papel de las mujeres en la conservación y esparcimiento de semillas, especialmente de plantas medicinales muy útiles cuando se tiene familia que cuidar. Mientras se dedican al pastoreo, esparcen la semilla. Pero no es solamente el papel en la etnomedicina, sino también en la conservación de especies que incluso han desaparecido en la naturaleza por quemas, erosión, por actividad del ganado. En Angamarca, por ejemplo, la asociación de parteras y curanderas reproducen las plantas “para tener con qué curar”. El cómo hacerlo es transmitido familiarmente. Ellas han logrado mantenerlas en pequeños huertos que son ahora pequeños bancos en donde se pueden

recuperar semillas. En ciertos lugares donde las mujeres están encargadas del ganado menor, también se ha visto que se cuidan las plantas que sirven de remedio para los mismos animales. El cuidado y pastoreo del ganado bravo es una tarea de hombres y niños, así como la roturación del suelo para el cultivo. En algunos casos, los hombres mayores se encargan del cuidado de las ovejas y llamas. La mayoría de tareas de recolección en el páramo es realizada por niños y niñas así como por mujeres. Tanto hombres como mujeres conocen los aspectos clave del clima en las alturas, el frío (del cual pueden diferenciar varios tipos, de lluvia, de helada, o seco), lo mismo ocurre con la neblina, las nubes o los colores en el cielo. Estos conocimientos resultan esenciales al momento de las siembras, las cosechas o labores de labranza, cuidado de animales u otros.

El mito como forma de conservación y control del páramo.

“Los cuentos no solamente son relatos durante o con referencia a distintos contextos sociales y rituales. Los actores están conscientes que cada cuento o canción que ellos relatan o cantan son parte de secuencias y ciclos más largos; rapsodias de versos hilvanados entre sí”. Arnold y Yapila; 1992, 178.

El mundo andino diferencia por género a los productos de la naturaleza y en especial a los accidentes geográficos como las montañas. En el Ecuador, la Mama (madre) Tungurahua o el Taita (padre) Imbabura. De igual manera, se diferencia por género a la noche, el día, a los factores del clima como calor, frío, neblina, etc. En los espacios locales se da la misma diferenciación a los puntos relevantes de una región o micro región, hay montañas, lagunas,

fuentes, quebradas que tienen la particularidad de ser machos o hembras. También hay lugares sagrados.

Entre las características que hacen a un lugar ser sagrado se encuentra su ubicación en un lugar geográficamente central en relación a las comunidades. Además, debe ser de alguna manera agreste: lluvia frecuente, viento fuerte, mucho frío, etc. Otra característica es que haya reportes de haber detectado “cosas extrañas” como la pérdida de animales, la transmisión de enfermedades relacionadas al susto, mal viento o incluso abusos de mujeres y en menor medida de hombres. Las lagunas y lugares sagrados son vistas como lugares masculinos donde sólo acceden los vaqueros y los shamanes. En Cotopaxi muchos mitos hacen referencia a los peligros que existen en ciertas lagunas donde aparecen seres en forma de toro (Pujilí) o como duendes (Saquisilí) que se roban a las mujeres o las embarazan. El páramo y otros lugares agrestes, se consideran masculinos. Las montañas también son vistas de la misma manera y en algunas al parecer el cóndor se lleva a las mujeres (Tigua), en otras la tierra se traga a la gente y a animales domésticos que pasan o pastan en su entorno (Angamarca). Entonces, en ciertos lugares con valores o reconocimiento de género, se privilegia el acceso de hombres o mujeres al ecosistema.

¿Cuál es la importancia de esto en para los páramos y su conservación? El mito condiciona el acceso a un ecosistema o porción de él, por ejemplo en Cotopaxi en los lugares sagrados no hay quemadas, el pastoreo es restringido y en definitiva es un lugar que se conserva en mejores condiciones que otros. Es también un lugar donde se puede encontrar especies de plantas y animales que en otros lugares ya no

hay. En la provincia de Cotopaxi, los principales mitos y leyendas están relacionados con animales y montañas, entre los cuales destacan los Llanganates, Ilinizas y el Cotopaxi. Una serie de pequeños cerros son importantes para cada comunidad: el Calquín, Yana Urco, el Padre Rumi en Saquisilí, pero también lagunas como Quilotoa en Sigchos.

En Cotopaxi algunos reptiles y anfibios del páramo son asociados con seres malignos que se encuentran en la mitología andina. Destacan dos tipos de lagartijas con las mismas características “maléficas” para la gente del páramo. Se dice que a algunas lagartijas les salen alas y pueden saltar varios metros sobre el suelo. Otros dicen haber visto a lagartijas con dos cabezas, con dos colas u otras deformaciones. Se tiene miedo a las lagartijas por cuanto estos animales, cuando encuentran mujeres con falda, se suben por las piernas y algunas pueden llegar muy arriba. La mayoría de estos mitos o encuentros fantásticos con animales deformes, fueron relatados por hombres. En cuanto a los anfibios resultan

importantes pues son ellos los que atraen la lluvia, anuncian su llegada y a través del croar, se anuncia la época de siembras o preparación del suelo. De estos anfibios destaca el extinto “jambato” que para los shamanes era importante, pues cuando escaseaban las lluvias se recurría a él para, con leves golpecitos de dedo en el lomo, obligar a que emita sonidos y así venga la lluvia. Para los ancianos que habitan el páramo, la desaparición de este animal es la causa del cambio del régimen de lluvias y de otras consecuencias climáticas.

Respecto a los mamíferos, se conoce que en Pujilí los lobos tienen la capacidad de engañar a los humanos para robarles los animales que cuidan, especialmente las ovejas. Se dice que los excrementos de estos animales enfermos son peligrosos para los cultivos. Muchas historias tienen como personajes principales al conejo, que es “vivísimo”, y a su tío, el lobo, que dejan distintas enseñanzas. Estos personajes son recurrentes en Saquisilí, mientras que en la zona de Pujilí, las historias están relacionadas a las lagunas. El chucuri es visto como un

MITOS Y RITOS RELACIONADOS AL PÁRAMO DE ACUERDO A CADA ZONA

Mito y actividades rituales	Objetivo para el que se hace	Lugar: comuna, parroquia, cantón,
Huacas	Ofrendas para asegurar buena suerte en la cacería.	Pujilí
Limosnita al cerro	Para tener buena casa y cosechas	Apahua
Cerro Santo Cristo	Cerro sagrado	Cumbijín/Salcedo
Luna llena	No se castra a los animales	Pujilí
Encontrar bolas de oro	Inmortalidad y riqueza	Pujilí
Truenos	Los cerros se están comunicando. Hay dos pucarás (construcciones incas) Chine y Churo, que se encuentran uno frente al otro.	Angamarca
Ofrendas a la Cruz del camino Atocha	Era una cruz que orientaba a los Incas Aumenta la producción	Pujilí
Misa de rogativos	Para pedir que vengan las lluvias	Saquisilí y Tigua

Elaboración: Eloy Alfaro

Fuente: grupos focales y entrevistas en varios momentos. 2002, 2003, 2004

Cuadro 1

animal negativo pues se come los huevos de las aves de corral y también el cerebro de los cuyes. Pero el peligro no radica en la capacidad de comerse o no a otros animales, sino en que cuando entra a una vivienda para comerse los huevos de las gallinas o los cuyes es señal de que alguien en la familia va a morir en los próximos días. Para que eso no ocurra, la única solución es matar al animal cuando se encuentra en la vivienda, pero si eso no es posible, la última opción es abandonar la casa prendiéndole fuego. El abandono inmediato de la casa y el terreno, implica una serie de consecuencias sociales, económicas y culturales para la familia, por lo que para evitar todo esto es mejor prenderle fuego a los lugares donde vive este animal y así evitarse toda clase de problemas. Ahí se encuentra otra relación social respecto al fuego y su función en la sociedad andina.

Respecto a las plantas, se conoce que algunas de ellas son usadas para ahuyentar a animales como el lobo, felinos o el chucuri. También se diferencia la utilidad de algunas por la oferta de madera o ser nido de aves que se pueden consumir. Respecto a los bosques no hay claridad y esto quizá se deba a que la cultura andina no es una cultura forestal.

En este punto es pertinente la observación de Field (2000), quien al analizar los aspectos políticos sociales del manejo de la cordillera occidental de Tungurahua y Cotopaxi afirma que *“no existe un reconocimiento de que la destrucción de la capa vegetal podrá causar la desaparición de fuentes de agua, simplemente porque en la experiencia local esto no ocurre”*. Esto también se percibe con el suelo y la avifauna, pues, en la observación de campo, no se ha encontrado el criterio de extinción en las sociedades ni en los vocablos nativos. Lo que si se nota en la semántica es algo parecido a la migración para referirse a la extinción, lo que significa que algún momento el animal o la planta que ahora no está regresará, que habrá un retorno.

Finalmente cabe señalar a manera de conclusión, que del territorio de las 14 OSGs que ocupan los páramos occidentales, surgen 78 ríos y 320 vertientes de agua, la mayoría de estas concesionados para uso en las zonas bajas. Los números dan cuenta de un potencial de control de territorios y recursos importante, que no se debe menospreciar a la hora de las decisiones y más aún si se encuentra en un proceso de consolidación territorial.

Cuadro 2

ANIMALES Y SIGNIFICADO SOCIAL EN COTOPAXI		
Animal	Significado	Ubicación
lobo	Aullido de lobo, anuncio de muerte. Verlo, el día va a ser malo para cazar.	Salcedo, Pujilí
chucuri	Alguien va a morir	Pujilí, Poaló
cóndor	Se lleva a las mujeres jóvenes y las embarazadas, se roba a los terneros y otras crías de animales.	Salcedo, Pujilí
tres curiquingues	Anuncio de muerte	Angamarca, Tigua, Guangaje, Saquisiló
jambato	Buena suerte	Pujilí
lagartijas o culebras	Mal augurio, embarazo no deseado	Toda la provincia

Elaboración: Eloy Alfaro
Fuente: grupos focales y entrevistas en varios momentos. 2002, 2003, 2004

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

ALFARO; Eloy: 2004 (a) Quién pone el cascabel al gato: sistematización de la convención ambiental “Cotopaxi en Minga” IEE/MINKA.

2004 (b) La Sal, el Rucu Vaquero y la Resistencia: el Mito y la historia en la ocupación de zonas de altura de Cotopaxi. Hacer y entender la historia desde los protagonistas. IEE/MINKA (documento borrador)

ARNOLD; D y Yapita: 1992 Sallqa. Dirigirse a las bestias en los andes meridionales. En: Hacia un orden andino de las cosas. Hisbol. Bolivia

CAILLAVET; Chantal: Los grupos étnicos pre hispánicos del sur del Ecuador según las fuentes Etnohistóricas. En: Antropología del Ecuador. Memorias del primer Simposio Europeo sobre Antropología del Ecuador. S. Moreno compilador. Abya-yala.

CICERO,Tiziana; 2003 Los “intermediarios buenos”: ideales teóricos, sobrevivencia y mercados. En: Ecuador Debate. N° 360. Quito: CAAP. Diciembre.

DÁVALOS, Pablo: 2004 Movimiento Indígena ecuatoriano: Construcción política y epistémica.

ECOCIENCIA: 1998 Encuentros: Relatos mágicos de la comunidad de Playa de Oro. Esmeraldas – Ecuador.

FAO: 1995 MERCADO DE TIERRAS EN EL ECUADOR: Estudio Integrado Regiones Litoral y Sierra. Roma

2002 Regularización de la tenencia de tierras: evolución, costos, beneficios y lecciones. El caso de Ecuador. Dino Frnacescutti.. Departamento de cooperación técnica.

FIELD; Leonard: 2000 Aspectos políticos – sociales del manejo de los recursos naturales en la cordillera occidental de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. En: Estudios Rurales. Antología de Ciencias Sociales. FLACSO - Ecuador

FORSTER; Nancy: 2000 La adquisición de tierras por dos generaciones de comuneros en la comunidad minifundista Santa Lucía Arriba, Tungurahua. En: Antología de estudios rurales: FLACSO, Ecuador

GUERRERO Andrés, El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquia y transescritura. En: Etnología, Ciencias de Sociales Antología. FLACSO – ECUADOR. Andrés Guerrero compilador.

IBARRA, Hernán: 2004 La comunidad campesino indígena como sujeto socio territorial Ecuador Debate N° 63. Quito. CAAP

IEE – ECOCIENCIA: Diagnóstico Socio Ambiental de los Páramos de Cotopaxi 2002

LANDÁZURI; Cristóbal: Los Curacazgos Pastos Prehispánicos: Agricultura y Comercio, Siglo XVI. IOA 1995

MARTINEZ, Carmen: Los misioneros Salesianos y el Movimiento Indígena de Cotopaxi, 1970 – 2004. Ecuador Debate n° 63. 2004. Quito. CAAP 2004

MICC: 2003 Historia y proceso organizativo, Quito. IEE/MICC.

2002 VI CONGRESO DEL MICC, Sigchos 2001, Plan de trabajo del MICC 2001 – 2005

MURATORIO. Blanca: Etnografía e Historia visual de una etnicidad emergente: El caso de las pinturas de Tigua. En: Desarrollo cultural y gestión en centros históricos. FLACSO-Ecuador. 2000

POMEROY; Cheryl: La Sal en las Culturas Andinas. Edit. Mundo andino 1986

RAMÓN; Galo: 2004 Estado y localidades en el siglo XIX. En: El desarrollo local en el Ecuador, historia y métodos. Quito. COMUNIDEC.

SALOMÓN; Frank: 1980 Los señoríos étnicos de Quito en la época de los Incas. colección Pendoneros. IOA.

SÁNCHEZ-PARGA. J: Crisis en torno al Quilotoa: Mujer, cultura y comunidad. CAAP. 2002

THURNER; Mark: 2000 Políticas campesinas y haciendas andinas en la transición al capitalismo: Una historia etnográfica. Edi. FLACSO

TOAPANTA J. Alfaro E. “yo vivo aquí” la experiencia del Movimiento Indígena de Cotopaxi en el manejo de Páramo y zonas altura. En: Iniciativas para el manejo de RR.NN de Cotopaxi N° 1. Quito. Ecociencia 2004

TORRES, Víctor Hugo: Gobernabilidad territorial y movimientos sociales rurales en la subregión andina. RIMISP 2004

ULLOA; Hernán: Una mirada a los últimos comicios electorales en Cotopaxi. En boletín: Cotopaxi en Minga N°8. HCPC-IEE- EcoCiencia. 2004

UNORIG: 1999 Plan de Desarrollo Local: Unión de Organizaciones Indígenas Rumiñahui - UNORIG.

VALLEJO; María 2003 Ver artículo en esta publicación.

VOKRAL; Edita: 1997 Entre el vampiro y la lagartija: Temores nocturnos femeninos contemporáneos y el orden andino. En: Ideología, cosmovisión y etnicidad a través del pensamiento indígena en las américas. Biblioteca Abya-Yala, N° 44

WORRLE; Bernhard: De la cocina a la brujería. La sal entre indígenas y mestizos en América latina. Edit. Abya Yala. 1999

UNIDAD CINCO

UNIDAD 5

LOS DESAFÍOS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN COTOPAXI

Ana María Larrea Maldonado*

* Documento elaborado originalmente para el Curso de Especialización Superior en Desarrollo y Gestión Local
de la Universidad Andina Simón Bolívar
Febrero 2004

INTRODUCCIÓN

En los últimos años en el Ecuador, como en otros países latinoamericanos, el tema de la construcción de un nuevo tipo de democracia en el marco de procesos de desarrollo local ha tomado especial relevancia.

Frente a las políticas de ajuste estructural que han traído como consecuencia la reducción del tamaño del Estado, la privatización de los servicios públicos y el consiguiente desentendimiento del Estado para generar e implementar políticas públicas, una diversidad de actorías sociales han experimentado un proceso creciente de dinamización en su camino por constituirse en sujetos sociales con voz propia.

En este marco, el rol jugado por el movimiento indígena en el Ecuador ha sido fundamental. Su irrupción en el escenario político nacional con la propuesta de construcción de un Estado plurinacional y multiétnico, ha aportado significativamente en los planteamientos para la construcción de un nuevo tipo de democracia y de Estado, que recoge una serie de prácticas ancestrales muy presentes en la vida de los pueblos indígenas.

Para las organizaciones indígenas los escenarios locales constituyen un espacio privilegiado para avanzar hacia la democratización de la sociedad y para la construcción de propuestas de desarrollo local sustentable basadas en la participación directa de las organizaciones sociales (Cfr. CONAIE-RIAD-IULA, 1996).

Es así, como en los últimos años en el Ecuador encontramos un conjunto de experiencias innovadoras de participación ciudadana tendientes a la democratización de los gobiernos locales, a la generación de cambios en las estructuras de poder local (tradicionalmente discriminatorias en relación a aspectos de clase, género y etnicidad) y a la participación e involucramiento de sectores diversos en la gestión del desarrollo local.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar una de estas experiencias: el proceso participativo impulsado en la provincia de Cotopaxi bajo el liderazgo de un dirigente indígena. “Se trata de examinar la forma en que la participación democrática de actores sociales colectivos y de ciudadanos individuales, contribuye a cambiar las relaciones de poder que imperan en las localidades del país y de esa manera a imprimir un contenido nuevo al proceso de desarrollo económico y social local” (Bonilla y otros, 2004: 3-4).

En las elecciones del año 2.000, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, accede a la prefectura de la provincia planteando la necesidad de construir un nuevo gobierno provincial basado en la democratización, la generación de propuestas de desarrollo local y la construcción de una nueva institucionalidad pública. Esta propuesta tiene como antecedente principal la participación del movimiento indígena en los gobiernos municipales en varios cantones del país y de la provincia, desde 1996.

Han transcurrido tres años en el proceso de gestión local alternativa en la provincia de Cotopaxi, tiempo que permite realizar un primer balance. Para realizarlo se tomará como referencia los cuatro principales desafíos de la participación ciudadana propuestos por Gret y Sintomer (2002) al sistematizar el proceso de presupuestación participativa de Porto Alegre, que son: la escala, la participación, la institucionalización y la eficacia.

El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera se realiza una reflexión en torno a la democracia, como marco general que permite entender de mejor manera los planteamientos para impulsar una democracia de nuevo tipo a escala local. Algunas de las preguntas que intento responder en la primera sección son: ¿Qué tipo de democracia hemos construido en el Ecuador? ¿Cuáles son sus principales límites? ¿Qué plantean las corrientes alternativas para la construcción de una nueva democracia? ¿Bajo qué condiciones es posible la construcción de un nuevo tipo de democracia? ¿Cuáles son los límites y potencialidades de la escala local para construir procesos de democracia más directa?

En la segunda sección realizo una contextualización breve sobre la provincia de Cotopaxi, sus características socio-económicas, su dinámica poblacional y sobre todo su proceso organizativo.

En la tercera sección hago un esbozo de las principales premisas planteadas por el Movimiento Indígena y

Campesino de Cotopaxi para la gestión local, pues estos planteamientos son la base para realizar el balance que propongo.

Finalmente, la cuarta sección persigue dar algunos elementos para comprender mejor el proceso vivido en Cotopaxi a partir de los cuatro desafíos planteados: la escala, la participación, la institucionalidad y la eficiencia.

Si bien el antecedente inmediato de la propuesta de gestión alternativa de Cotopaxi, son las experiencias de los gobiernos municipales indígenas impulsadas desde 1996, la gestión provincial plantea el desafío de la escala, como fundamental en el proceso de democratización. El análisis de este desafío permitirá establecer hasta qué punto es posible llevar adelante un efectivo proceso de democratización en un territorio de casi seis mil kilómetros cuadrados, marcado por la diversidad étnica, geográfica, ambiental, socio-cultural y política.

Las experiencias exitosas de democratización en el país se han caracterizado por abarcar territorios más pequeños, con poblaciones que oscilan entre 7.000 y 50.000 habitantes. Si bien muchos de los cantones que han planteado una gestión local alternativa han debido enfrentar el tema de la diversidad y la heterogeneidad cultural, geográfica y ambiental; en Cotopaxi estos temas adquieren dimensiones mucho mayores. De ahí la importancia de reflexionar sobre el desafío de la escala. Cabe preguntarse

entonces, sobre los mecanismos y las modalidades necesarios para implementar una gestión participativa en escalas mayores. Así también los resultados que estas modalidades y mecanismos han arrojado.

Para analizar el desafío de la participación se partirá de un análisis sobre las concepciones de la misma en el proceso. ¿Qué tipo de participación se plantea impulsar? ¿Por qué es necesaria la participación en el proceso? ¿Qué mecanismos e instancias se han generado para impulsar la participación? ¿Cuáles son los resultados del proceso participativo? El tema de la participación además está muy vinculado al tema de las actorías del proceso. De ahí la necesidad de caracterizar estas actorías y analizar los roles que cada una de ellas han jugado en la iniciativa. ¿Cuáles han sido las relaciones entre estos actores? ¿Qué conflictos se han presentado y cómo se han manejado los conflictos?

La gestión alternativa en Cotopaxi ha generado una serie de instancias participativas que están en proceso de institucionalización. Es necesario entonces, realizar un análisis de las tendencias presentes en las iniciativas de institucionalización: ¿Hacia dónde apuntan estas tendencias?, ¿Con qué obstáculos se enfrentan?, ¿Qué potencialidades tienen a futuro? Los procesos de institucionalización están vinculados con el tema de la sostenibilidad del proceso, es fundamental entonces, plantearse

¿Cuáles son las posibilidades de continuidad del proceso en caso de que cambie la correlación de fuerzas políticas en la provincia?

Al analizar las motivaciones de las poblaciones locales para involucrarse en procesos participativos, una de las constataciones que se evidencian es la necesidad de que estos procesos produzcan resultados concretos que repercutan en el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos. De ahí la necesidad de analizar la eficacia del proceso participativo en la provincia. ¿Hasta qué punto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos? ¿Qué prioridades se han establecido y quién las ha establecido? ¿Qué cambios se han dado en relación a una administración tradicional? ¿Qué rol ha jugado el Honorable Consejo Provincial en el desarrollo local? En definitiva, se trata de analizar cuáles han sido los resultados del proceso en su conjunto en los ámbitos institucionales y sociales.

Este trabajo se inserta en una experiencia que tanto por su escala como por la fuerza de sus propios planteamientos puede aportar a la construcción de propuestas de cambio social desde una perspectiva democratizadora, retroalimentando a las actorías sociales involucradas en el mismo y espera contribuir desde la reflexión y el pensamiento académico a un proceso social vivo y en marcha.

CAPÍTULO 1

DEMOCRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL¹

En las dos últimas décadas América Latina se ha visto hundida en la peor crisis del último siglo, viviendo una polarización social sin precedentes, una movilidad en descenso y la caída de los estándares de vida de millones de personas. Todo esto ha ido acompañado, paradójicamente, con el crecimiento de grandes fortunas en la región y con el advenimiento de los regímenes democráticos (Cfr., Petras, 1998: 13).

Aunque el sistema democrático no es el responsable de las profundas desigualdades que enfrenta la región, estas desigualdades sí dan cuenta que algo en nuestras democracias está fallando. Se trata de un círculo vicioso, de un lado, la inequidad social obstaculiza el desarrollo y una vida democrática plena, y de otro lado, las democracias actuales como están configuradas profundizan estas condiciones de desigualdad.

Quizá uno de los temas que más llama la atención al analizar la democracia actual, es el de la representatividad. La sociedad de mercado ha conducido a mercantilizar casi todos los aspectos de la vida. La democracia se degrada en el supermercado político y los/as ciudadanos/as somos reducidos/as al papel de electores/as. Los partidos políticos cada vez representan menos a la sociedad y se convierten en maquinarias electorales que

imponen a la sociedad en su conjunto dos o tres aspirantes al poder. El voto deja de ser la canalización de una voluntad y adquiere características de rechazo, castigo o censura.

En el Ecuador es evidente la crisis de representatividad de los partidos políticos y la necesidad de los/as ciudadanos/as de buscar nuevos referentes. Sin embargo, la crisis de los partidos no da cuenta de la crisis de la democracia en su totalidad. Esta conlleva una serie de aspectos adicionales, de los que los partidos políticos constituyen tan solo una de sus aristas.

Se habla de que los gobernantes electos democráticamente representan el interés de la sociedad en su conjunto. En realidad, en toda sociedad coexisten una serie de intereses contrapuestos y signados por el conflicto. Es justamente el papel de la democracia dar cuenta de estos distintos conflictos e intereses, generando debate, discusión y posibilitando una toma de decisiones en la que las distintas voces puedan expresarse.

En el Ecuador, la lucha democrática rara vez tiene estas características. Las decisiones se toman sobre la base del clientelismo, el pago de favores políticos y las presiones que ejercen los grupos de poder. La democracia ha pasado a ser un rehén del poder

1 En esta sección se recogen algunas de las ideas plantadas por la autora en el documento "Democracia, participación y nuevas institucionalidades para el desarrollo local", del Módulo Gestión Social de los Recursos Naturales, Quito, CAMAREN - IEE: 6-24.

económico y político para la canalización de sus propios intereses.

Para Adrián Bonilla (s/f: 7), el déficit crónico de representación del régimen político ecuatoriano se caracteriza por:

1. La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
2. La falta de rendición de cuentas y la impunidad.
3. La crisis de ciudadanía. La política está signada por el clientelismo, el patrimonialismo y las coaliciones nacionales basadas en los lazos entre los partidos de Quito y Guayaquil y caudillos locales en las provincias.

Todos estos problemas ¿dan cuenta de una crisis de la democracia como sistema político? O ¿se trata de una crisis en los sistemas democráticos latinoamericanos?

Para Gabriel Cohn (2001 citado por Amadeo y Morresi, 2003: 96) nos encontramos en un umbral civilizatorio. El actual modelo civilizatorio propuesto por el capitalismo se ha agotado y está atravesando su fase de barbarie que se expresa en la “indiferencia estructural” por parte de los agentes centrales de la producción capitalista, que se manifiesta como la falta de responsabilidad respecto a los efectos sociales de su accionar. Las empresas tienen todos los derechos, sin obligaciones. Son el centro para la toma de decisiones fundamentales de la vida económica y social. La vida política se reduce a la lucha de los intereses privados. La práctica política se ha privatizado, viéndose reducida a un espacio de consumo de “mercancías políticas”. El ciudadano se ha transformado en

un consumidor. El efecto fundamental de este proceso es la despolitización de la vida social.

Un ejercicio puramente institucional de la democracia puede llevar a encubrir el reino del mercado y el crecimiento de las desigualdades sociales.

“La concepción liberal de la democracia se limita a garantizar la libre elección de los gobernantes, sin preocuparse por el contenido de la acción de éstos” (Touraine, 2000: 71) Las instituciones públicas y los procedimientos jurídicos se convierten, de esta manera, en medios para asegurar la dominación y el poder oligárquico (Cfr., *Ibíd.*: 50.)

La democracia entendida como un conjunto de normas y procedimientos, hace relación a la libertad de elecciones, la libertad de expresión, un adecuado funcionamiento institucional que garantice la voluntad popular, etc. “La debilidad de esta concepción reside en que el respeto a las reglas del juego no impide que las posibilidades de los jugadores sean desiguales si algunos de ellos disponen de recursos superiores o si el juego está reservado para las oligarquías” (*Ibíd.*: 169.) De ahí que pocos demócratas encuentren satisfactoria una concepción puramente procesal de la democracia. En el caso de la democracia ecuatoriana, el panorama es aún más dramático, pues ni siquiera ha logrado garantizar el conjunto de normas y procedimientos mínimos para el funcionamiento democrático. Los derechos, libertades y garantías son violadas permanentemente.

Se espera que en la democracia se tomen decisiones de acuerdo a los intereses de la mayoría o de la sociedad en su conjunto. Pero ¿quién juzga estos intereses? El voto está

determinado por la situación de los electores, la gran mayoría de veces existe una inercia en el sufragio. Se vota por un partido por fidelidad o tradición. Los cambios en las opciones políticas no se basan en una visión del interés general. El voto rechazo en muchas ocasiones prima sobre el voto positivo, las elecciones se conviertan en la expresión de una sanción, antes que la expresión de una preferencia (Cfr., Ibíd.: 169 - 170).

Quienes hicieron triunfar la idea democrática y el sufragio universal esperaban algo más: que se afirmara la igualdad de derechos sobre la desigualdad de recursos. Mientras la sociedad civil está dominada por la desigualdad y los conflictos de interés; la sociedad política debe ser el lugar de la igualdad. “La democracia, entonces, tiene como meta principal asegurar la igualdad no solo de derechos sino también de posibilidades, y limitar lo más posible la desigualdad de los recursos” (Ibíd.: 170).

La concepción liberal de la democracia enfatiza la limitación de poder del Estado y sacrifica las otras dos dimensiones de la democracia (representatividad y ciudadanía). Para ello separa el orden de la razón impersonal que corresponde a la vida pública, del orden de las creencias que se ubica en el plano de la vida privada. “No cree en la existencia de actores sociales definidos a la vez por unos valores y unas relaciones sociales. Cree en los intereses y en las preferencias privadas y procura dejarles el mayor espacio posible, sin atentar contra los intereses y las preferencias de los demás” (Ibíd.: 70). Se basa en el principio de dar a cada cual el mayor espacio posible para su realización, siempre y cuando no interfiera en la realización de los otros. Esta concepción excluye la idea misma del poder,

pues deja de lado las creencias y los conflictos. La sociedad es vista como un gran mercado, regulado por la ley (Cfr., Ibíd.: 70 - 71).

Esta concepción descansa en el racionalismo. La representatividad de la elite dirigente está dada por la preocupación por el bien público, desconociendo los intereses y los conflictos que dinamizan la vida social. De este modo, la concepción liberal separa lo político de lo económico, dando prioridad al tema de la gobernabilidad frente al de la representatividad. Un sistema democrático reconoce la existencia de conflictos de valores insuperables y el pluralismo cultural. Una sociedad culturalmente homogénea es antidemocrática por definición (Cfr., Ibíd.: 71-73, 175).

“Así como la libertad de los antiguos se basaba en la igualdad de los ciudadanos, ... la libertad de los modernos está fundada en la diversidad social y cultural de los miembros de la sociedad nacional o local. La democracia es hoy en día el medio político de salvaguardar esta diversidad, de hacer vivir juntos a individuos o grupos cada vez más diferentes los unos de los otros en una sociedad que debe también funcionar como una unidad” (Ibíd.: 176).

“El espacio de la democracia no es calmo y razonable; está atravesado de tensiones y conflictos, de movilizaciones y luchas internas, porque está constantemente amenazado de uno u otro de los poderes que penden sobre él” (Ibíd.: 177).

“La democracia no es una meta en sí misma; es la condición institucional indispensable para la creación del mundo por parte de unos actores particulares, diferentes entre sí pero que producen el discurso nunca completado, nunca unificado, de la humanidad” (Ibíd.: 192).

De este modo, la democracia “antes que ser un conjunto de procedimientos, es una crítica a los poderes establecidos y una esperanza de libertad personal y colectiva” (Ibíd.: 194). Si no es consciente de este papel de servicio a los sujetos sociales, la democracia se pone al servicio de los más poderosos, a través de una serie de arreglos institucionales y legales, para imponer su poder a una sociedad que no hace nada para contrarrestarlo (Cfr., Ibíd: 192).

Las democracias latinoamericanas

¿Qué factores han conducido a la crisis de legitimidad de las democracias latinoamericanas? ¿Se puede hablar de la existencia de una “democracia liberal” en nuestras sociedades? ¿Los principios de la democracia liberal alguna vez hicieron parte de la vida democrática en nuestros países?

Las condiciones históricas que dan lugar al nacimiento de los Estados latinoamericanos marcan las diferencias en el establecimiento de los sistemas democráticos en el continente, en comparación con las democracias europeas. Los estados nacionales latinoamericanos se fundan en su lucha contra el orden colonial. No se trataba de fundar la república contra el régimen monárquico, sino de obtener la independencia de las Coronas Española y Portuguesa. De este modo, en el nacimiento de los pueblos latinoamericanos se enfatizó el aspecto unitario más que los conflictos internos de las nuevas naciones (Cfr, Ramón, 2003: 22).

En América Latina, la formación de una base de ciudadanos requerida para la consolidación de la república fue un

proceso impulsado desde arriba por las elites ilustradas del siglo XIX, y en muchos casos resistido o tomado con indiferencia por la población. Existió un divorcio entre los ideales republicanos y el funcionamiento real de un sistema político que arrastraba elementos coloniales (Cfr., Villavicencio, 2003: 85).

En el Ecuador, las diversidades fueron consideradas como un obstáculo para el “progreso” y por consiguiente, las elites impulsaron un proceso de homogenización de los sectores subalternos, caracterizados como carentes de potencial político para plantear o constituir una alternativa para pensar el país. De este modo, el nacimiento de la república ecuatoriana está signado por la exclusión de las mayorías en la construcción nacional (Cfr., Ramón, 2003: 23 - 24).

La idea de emancipación del pueblo, con la que se rompió los lazos coloniales, chocó con los hábitos políticos coloniales profundamente arraigados en las sociedades latinoamericanas. Emancipar empieza a adquirir el significado de “civilizar” al pueblo de su atraso y anarquía (Villavicencio, 2003: 86).

En Sudamérica el hiato histórico entre soberanía de la razón y soberanía del pueblo explica en alguna medida los diagnósticos actuales de “déficit de ciudadanía”. En el siglo XIX imperaba la idea de que el pueblo no estaba preparado para regirse por un sistema republicano superior a su capacidad. De ahí el intento de fundar la república “desde arriba” (Cfr., Ibíd.: 81 - 82).

Actualmente en América Latina, la república se propone de modo negativo, no solamente por la presencia sistemática de dictaduras que la

han quebrado, sino también porque cuando existe el derecho, no existe de hecho (Cfr., Ibíd.: 82).

¿Otra democracia ...es posible?

"La democracia sería una palabra muy pobre si no fuera definida por los campos de batalla en los que tantos hombres y mujeres combatieron por ella"

(TOURAINE 2000: 19).

Frente a los límites de la democracia liberal, surgen una serie de planteamientos y experiencias que recuperan algunos principios de la democracia republicana y subrayan el carácter emancipador de la democracia y de la política. Aparecen así nuevos adjetivos para la democracia: democracia participativa, democracia deliberativa, democracia radical. Más que un nuevo modelo de democracia, se trata de un conjunto de ideas en proceso de construcción, nutridas por diversas corrientes de pensamiento. Estos planteamientos miran a la democracia como un proyecto siempre inacabado de democratización, caracterizado por el pluralismo y el conflicto permanente. La política es precisamente el campo de los antagonismos, la convergencia de luchas para articular diferencias. De ahí que la democracia sea la forma más radical de la política, por las posibilidades que ofrece para generar mecanismos para que las diferencias sean expresadas, negociadas, reconocidas y debatidas.

La profundización de la democracia, pasa por la revalorización de la política como lugar desde donde pensar la emancipación. "...fortalecer el

espacio público y la acción política para poder repensar una relación entre economía y política, donde la primera esté subordinada a la segunda, o sea, a las decisiones del sujeto colectivo" (Amadeo y Morresi, 2003: 97).

"En el debate actual de la filosofía y la teoría política, el republicanismo representa la afirmación de una actitud ética en política, una voluntad de defensa del interés público frente al dominio de los intereses económicos que hoy forman un verdadero 'cosmopolitismo del dinero', o bien, la necesidad de fortalecer el Estado de derecho frente al arrasamiento de los derechos más elementales de los individuos, la defensa de la dimensión institucional y del contrapeso de poderes frente a la usurpación del espacio público de la república y a las nuevas formas de despotismo de facciones que dominan el mundo de la política. Pero, asimismo, la apelación al republicanismo retoma la reflexión sobre las condiciones de formación de una sociedad civil cívica, del dominio del interés general frente a los intereses particulares y del retorno de un sujeto democrático participativo" (Villavicencio, 2003: 88).

El aporte actual del republicanismo "son los elementos filosóficos que dan base a la autonomía del sujeto, a su capacidad de juicio y de acción política y que muestran ... el vínculo indivisible de los derechos civiles, políticos y sociales para enfrentar el problema de la democracia" (Ibíd.: 89). El segundo aporte tiene relación con la confianza en el ciudadano para la defensa del interés público. Reaparece la idea del ciudadano virtuoso capaz de sacrificar su interés individual por el bien común (Cfr., Ibíd.: 89 - 90).

De este modo, la idea de ciudadanía ha vuelto a ser colocada en el centro

del debate. Frente a la concepción liberal de ciudadanía, que supone un conjunto de derechos vividos en forma pasiva, se plantea una responsabilidad con lo público asumida activamente (Cfr., Ibíd.: 88 - 89).

Toda democracia es representativa. Para que exista representatividad, son necesarias dos condiciones. La primera, que exista una agregación de la gran diversidad de demandas provenientes de actores sociales muy heterogéneos. El conflicto entre actores es la base más sólida de la democracia. La segunda condición se refiere a la necesidad de organización autónoma de los grupos sociales. Solo en el momento en que la acción social define intereses sociales se puede hablar de movimientos sociales (Cfr., Touraine, 2000: 79 - 81, 88.)

Touraine propone rebasar la democracia deliberativa y la democracia participativa para construir una democracia basada en la libertad del sujeto, es decir, en la resistencia a la dominación. La democracia es vista de esta manera como el ejercicio de una libertad positiva, dada por la lucha de unos sujetos contra la lógica dominadora de unos sistemas y no meramente como una libertad negativa es decir como un conjunto de garantías institucionales:

“En contra de esta pérdida de sentido, es preciso recurrir a una concepción que defina la acción democrática por la liberación de los individuos y de los grupos dominados por la lógica de un poder, es decir sometidos al control ejercido por los dueños y los gerentes de sistemas para los cuales aquellos no son más que recursos” (Touraine, 2000: 19).

“Es entre la democracia procesal, que carece de pasión, y la democracia participativa, que carece de sabiduría, donde se extiende la acción democrática cuya meta principal es liberar a los individuos y a los grupos de las coacciones que pesan sobre ellos” (Ibíd.: 21).

Dentro de esta concepción, el sujeto es entendido como “el esfuerzo de transformación de una situación vivida en acción libre, introduce libertad en lo que en principio se manifestaba como unas determinantes sociales y una herencia cultural” (Ibíd.: 22). La libertad se expresa “por la resistencia a la dominación creciente del poder social sobre la personalidad y la cultura” (Ibíd.). “La democracia es el reconocimiento del derecho de los individuos y las colectividades a ser actores de su historia y no solamente a ser liberados de sus cadenas” (Ibíd.: 33). De esta manera, la democracia está al servicio de los sujetos, como seres creadores de su vida individual y colectiva (Cfr., Ibíd.).

Mientras que la idea republicana de democracia procura la unidad; la cultura democrática protege la diversidad. La democracia republicana identifica libertad con ciudadanía, reduciendo en la práctica, al ciudadano a un consumidor político. La cultura democrática en cambio, se centra en el sujeto y su capacidad de ejercer una práctica transformadora, identificando libertad con liberación. Dentro de esta concepción “el poder del pueblo” adquiere una nueva connotación, pues no significa que el pueblo se siente en el trono del príncipe, sino que ya no haya trono (Cfr., Ibíd.: 23 - 26). De este modo, la democracia no se basa únicamente en leyes, sino sobre todo en una cultura política.

Verdesoto (2000: 86), define cultura política como “la interacción entre individuos y grupos que genera sistemas de valores y creencias acerca de las relaciones de poder, incorporados como sentido de la acción de los ciudadanos”. Es un espacio de “conflicto por el sentido de los comportamientos dentro de coyunturas y procesos determinados. Los actores generan formas y contenidos culturales en la política y en la acción social a partir de la interacción”.

El formalismo jurídico institucional usa los sistemas democráticos *oligárquicamente*, cerrando el paso del poder político a las demandas sociales por poner en peligro el poder de los grupos dirigentes. Mientras que el espíritu democrático es la fuerza social y política que intenta transformar el Estado, de manera que corresponda a los intereses de los dominados. El Estado democrático reconoce el derecho de sus ciudadanos / as menos favorecidos / as a actuar en el marco de la ley, contra un orden desigual del que el mismo Estado forma parte. De esta manera el Estado democrático auto - limita su propio poder y la democracia se convierte en el control ejercido por los actores sociales sobre el poder político (Touraine, 2000: 25 - 41).

“La democracia no reduce al ser humano a ser únicamente un ciudadano; lo reconoce como un individuo libre pero perteneciente también a colectividades económicas o culturales” (Ibíd.: 28), en un esfuerzo de combinar unidad y diversidad, libertad e integración (Cfr., Ibíd.: 27). En síntesis, Touraine parte del reconocimiento de una realidad en la que imperan las desigualdades y construye una propuesta de democracia en el marco de una sociedad inequitativa, rebasando el principio

de igualdad política (cada ciudadano, un voto), para proponer la política del sujeto, como la acción transformadora de un orden desigual.

Para entender la limitación del poder del Estado es necesario distinguir Estado, de sociedad política y de sociedad civil. Cuando el Estado se confunde con la sociedad política, se subordinan los intereses sociales a la acción unificadora del Estado. Cuando se confunden sociedad política y sociedad civil puede crearse un orden político - jurídico que reproduce los intereses económicos dominantes. Por otro lado, esta confusión, lleva a que el Estado sea el único responsable de asegurar la gestión de la sociedad. En ambos casos, la democracia no tiene lugar. La lucha democrática se ubica en una sociedad política autónoma, cuyo papel es la mediación entre el Estado y la sociedad civil, de modo que en última instancia es la sociedad civil la que legitima al Estado (Cfr., Ibíd.: 64 - 65).

La democracia es entonces, la construcción de un poder y una representación de abajo hacia arriba (de la sociedad civil, al sistema político; y del sistema político al Estado), sin restar autonomía a ninguna de las tres esferas. En este sentido se habla de poder del pueblo (Cfr., Ibíd.: 65).

Es necesario, además, distinguir la esfera del Estado de la esfera de *lo público*. Se entiende lo público como lo que

“es de todos y para todos se opone tanto a lo privado, que está volcado para el lucro o para el consumo, como a lo corporativo, que está orientado a la defensa política de intereses sectoriales o grupales ... dentro de lo público puede distinguirse entre lo estatal y lo público no estatal ... El interés público no existe de forma

absoluta. Existe, en cambio, de forma relativa, a través del consenso que se va formando sobre lo que constituye una moral común” (Cunill y Bresser, 1998: 31-35; citado por Verdesoto, 2000: 83).

En este sentido, el campo de disputa para la orientación de la sociedad, con miras a construir lo que Cunill y Bresser denominan “la moral común” tiene lugar en el sistema político, que es además el espacio de construcción de lo que se ha dado en llamar *lo público no estatal*. Mientras que el campo donde se generan los conflictos, las contradicciones, los intereses y lo corporativo, es en la sociedad civil.

Se entiende lo público no estatal en su doble dimensión, como control social y como forma de propiedad. La primera acepción facilita la democratización del Estado y la sociedad. La segunda acepción se refiere a las posibilidades de producción de bienes y servicios colectivos por entes que no se ubican ni en el Estado, ni en el mercado, con miras al fortalecimiento de los derechos sociales y de los procesos organizativos (Cfr., Verdesoto, 2000: 81 - 82).

La necesidad social de construcción democrática ha llevado a una reapropiación de lo público por parte de los sujetos sociales, con miras a ser protagonistas de la dotación de sentido histórico de sus acciones. De esta manera, los sujetos sociales ingresan en los espacios de disputa de sentidos y orientaciones en la esfera del sistema político; contribuyendo de este modo a una redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Es así como esferas que tradicionalmente eran reservadas al dominio privado han pasado a constituirse en esferas públicas; y por otro lado,

existe una tendencia de “*publicación*” de la acción social (lo público pasa a ser pertinente a la sociedad) (Cfr., Ibíd.: 82 - 84).

El ejercicio de la ciudadanía es una condición básica para la existencia de la democracia. No puede hablarse de democracia sin la conciencia de pertenencia a una colectividad política. Si los / as ciudadanos / as no se sienten responsables de sus gobiernos, no puede haber ni libre elección, ni representatividad (Cfr., Touraine, 2000: 99.) “La idea de ciudadanía da a la de democracia un sentido concreto: la construcción de un espacio propiamente político, ni estatal ni mercantil” (Ibíd.: 108).

La categoría de ciudadano pretende rectificar la desigualdad económica en la igualdad política (un ciudadano, un voto), desde una perspectiva de homogenización. Al no reconocer las identidades diversas existentes en una sociedad, esta concepción acentúa las desigualdades bajo una supuesta homogeneidad (Cfr., Ortiz, 1998: 28; Verdesoto 2000: 87 - 88). Por consiguiente, para la construcción de un nuevo tipo de democracia es fundamental trabajar una nueva concepción de ciudadanía que reconozca la diversidad social existente y las múltiples identidades de los sujetos sociales.

Desde esta perspectiva, Santiago Ortiz plantea una definición de ciudadanía, basada por un lado en el reconocimiento de la diversidad y por otro lado, en la doble articulación entre derechos fundamentales, derechos específicos, individuales y colectivos, y responsabilidades. De este modo, el autor define a la ciudadanía como:

“la comunidad de individuos diversos e interrelacionados con capacidad

de autodeterminación, participación y representación de intereses y demandas y en pleno ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos individuales y colectivos, garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad de la cual forman parte” (Ortiz, 1998: 35).

Ciudadanía y participación

El origen de la noción de ciudadanía esta íntimamente ligado al de participación. En Grecia, donde nace la categoría de ciudadanía, los / as ciudadanos / as eran las personas que tenían la responsabilidad de decidir y guiar los destinos de la ciudad. Los / as ciudadanos / as eran los propietarios, que además tenían la palabra pública. Con la constitución de los estados nacionales, surge la *delegación de poder* como elemento de la democracia representativa, que acarrió una despolitización de la condición de ciudadano, delegando a través del sufragio, la toma de decisiones sobre lo público (Cfr., Ortiz, 1998: 19).

La ciudadanía funda el derecho de participar directa o indirectamente en la gestión de la sociedad (Cfr., Touraine, 2000: 104). La participación pasa a ser una de las condiciones básicas para la construcción de la ciudadanía. Los / as ciudadanos / as existen en cuanto se autodeterminan, en cuanto son titulares de poder. Por consiguiente, la participación supone relaciones de poder entre diversos actores, lo que necesariamente implica conflictos, a partir del reconocimiento de intereses distintos (Cfr., Ortiz, 1998: 36-38). De ahí que la generación de un nuevo tipo de democracia, necesariamente descansa en el fortalecimiento de la participación como fundamento esencial para la construcción de ciudadanía.

“La participación es un aspecto esencial de la ciudadanía por cuanto afirma la autonomía de los actores ciudadanos en tanto titulares de poder y en tanto mantienen responsabilidad con la comunidad social y política de la que forman parte. La participación es el sentido originario de la democracia y es un elemento central para revitalizarla” (Ortiz, 1998: 32).

Dado que en una sociedad conviven intereses contrapuestos y a veces antagónicos, los procesos participativos pueden implicar una tendencia liberadora y apuntar a procesos de cambio social, o bien pueden convertirse en un puntal para sostener el orden establecido. Las corrientes más liberales, enfatizan el consenso para mejorar el sistema existente desde una visión de preservación del poder, que intenta ocultar los conflictos sociales existentes, dotando al sistema político de estabilidad. En este sentido, Verdesoto (2000: 22) señala que “una política de Estado de Participación Social es una fuente inagotable de certezas, que desestructuran los conflictos desestabilizadores de la democracia”. Desde esta perspectiva, la participación se orienta a mejorar la eficacia de la democracia o de los procesos de desarrollo social (Cfr., Ortiz, 1998: 23). Los ámbitos y temas de esta visión instrumental de la participación son aquellos que podrían calificarse como “menores” es decir, aquellas decisiones que no suponen una modificación en la correlación de fuerzas para construir propuestas de cambios profundos. Los temas fundamentales del mantenimiento del modelo de desarrollo vigente, por sus propias implicaciones, no pueden ser discutidos dentro de esta perspectiva.

Bajo una perspectiva de cambio social, la participación se encamina a lograr el reconocimiento de los

más débiles por parte del Estado, promueve procesos de cambio en la cultura política, genera la construcción de sujetos sociales autónomos e implica una reforma del sistema político. El sentido último de la participación democrática es garantizar una mayor equidad en la distribución de los recursos económicos y de poder. En este sentido, los procesos participativos son decisivos para impulsar un nuevo modelo de desarrollo (Ortiz 1998: 30; Verdesoto 2000: 11 - 12).

“El poder económico contradice el discurso democrático” (Jelin, 1995: 3 -5, citado por Ortiz, 1998: 25), pues por un lado es evidente una exclusión económica y por otro lado, se promueve la participación política. En efecto, en sociedades marcadas por la inequidad, la exclusión y la discriminación, los procesos participativos adquieren características muy complejas, pues se observa la desigualdad económica y de poder de quienes intervienen. En los últimos años, se está impulsando la generación de una cultura del diálogo basada en la participación como mecanismo para el manejo de conflictos de diversa índole. Sin embargo, si el objetivo último de los procesos participativos es la liberación, para la generación de procesos de diálogo es indispensable un paso previo que supone el fortalecimiento de los actores sociales más débiles –en términos económicos y políticos- involucradas en el conflicto, de manera de paliar en alguna medida las disparidades entre actores y asegurar que el diálogo se desenvuelva en condiciones de mayor equidad.

No obstante, es también necesario tener en cuenta que no todo conflicto puede ser manejado a través del diálogo, pues existen conflictos estructurales cuyo carácter antagónico los hace irresolubles. En estos casos, la

construcción de sujetos sociales por la vía de la resistencia es fundamental, con el fin de lograr cambios profundos en las sociedades en las que se insertan.

En este debate es clave la relación entre Estado y sujetos sociales. Cuando la participación es una iniciativa del Estado, se corre el riesgo de cooptación de los sujetos sociales y de instrumentalizar el proceso participativo para alcanzar “la estabilidad” democrática, ocultando las contradicciones sociales, económicas y políticas existentes. Si la iniciativa proviene desde abajo se preserva la autonomía de los sujetos sociales y se pueden generar importantes procesos de fortalecimiento social y de incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas (Cfr., Ortiz, 1998: 24).

Si realizamos un inventario de los procesos participativos de gestión local en el Ecuador, podemos ver, que en los casos más representativos, la participación ha sido impulsada por los gobiernos locales. En los casos de los gobiernos locales presididos por indígenas, si bien las autoridades han promovido la participación, ésta ha sido una práctica de larga data en las organizaciones sociales que llevaron al poder a las propias autoridades. Pese a que los gobiernos locales han sido los convocantes a los procesos de participación ciudadana, la relación con las instancias participativas se ha caracterizado por una constante tensión en la búsqueda de mayor poder y autonomía de estos espacios. Sin duda, uno de los elementos más problemáticos para conseguir esta autonomía es el tema de la sostenibilidad económica y la dependencia que estas instancias de participación ciudadana tienen frente a los recursos públicos.

Cabe preguntarse ¿por qué en ciertas localidades los procesos participativos han logrado consolidarse y en otras no? ¿Qué es lo que asegura el éxito de las iniciativas de participación ciudadana? Si bien la voluntad política de las autoridades locales ha sido una condición inicial fundamental para el impulso de los procesos democratizadores a escala local en el Ecuador, no es suficiente. En las localidades donde no ha existido una trayectoria participativa previa, fruto de las luchas de unos sujetos sociales concretos, los procesos participativos no han logrado cuajar, pese a la “buena voluntad” de sus líderes. De ahí que la existencia de un tejido social fuerte y autónomo es una de las condiciones básicas para la generación de procesos significativos de participación ciudadana.

La participación ciudadana es, pues, un proceso de doble vía en el que por un lado se genera y se alimenta la construcción de sujetos sociales y en el que por el otro, la calidad y el sentido de la participación supone la existencia de un tejido social sobre el que se asienta y al que retroalimenta.

Democracia y ámbitos locales

En el Ecuador, como en muchos países de América Latina, lo local ha sido el espacio privilegiado para la construcción de nuevas propuestas de democracia, ya que la relación entre autoridades y pobladores/as en la escala local es mucho mayor. Lo local ofrece entonces, un espacio cercano de concreción de las nuevas propuestas de democratización de las sociedades, que debidamente articulado a escalas mayores puede ser el ámbito

de gestación de formas de construcción de una nueva democracia.

No obstante, es fundamental la articulación entre estas propuestas de democratización local y la construcción de un proyecto contrahegemónico de mayor escala, pues existe el riesgo de que la democratización a escala local cubra la falta de una democracia real en el concierto nacional.

Las propuestas de democratización en el Ecuador han tenido un puntal fundamental en la emergencia de nuevas actorías sociales y políticas. Para el caso que analizaremos (la provincia de Cotopaxi), la irrupción del movimiento indígena en el escenario político nacional, como un sujeto social emergente con capacidad propositiva, organizativa y movilizadora, ha sido esencial (Cfr., Larrea y Larrea, 1999: 130).

Los planteamientos del movimiento indígena en las últimas décadas han interpelado a la sociedad ecuatoriana, evidenciando los procesos de exclusión, su falta de reconocimiento a la diversidad, y el irrespeto más brutal a las culturas de pueblos que han sido relegados durante siglos. La propuesta de construcción de un estado plurinacional y multiétnico y el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas profundizan los contenidos de un nuevo tipo de democracia, en donde la pluralidad y la interculturalidad son elementos motores. Efectivamente, impulsar una democracia radical implica poner al descubierto los profundos conflictos que implica para una sociedad la convivencia de culturas diferentes y generar propuestas en las que los valores diferenciados puedan encontrarse y construir un proyecto político liberador, que reconozca, respete y potencie las diferencias culturales.

En el año 1995, el movimiento indígena ecuatoriano decide incursionar orgánicamente en la disputa electoral, considerando al espacio local como estratégico en la perspectiva de construir desde abajo una nueva forma de Estado Plurinacional. Se plantea entonces poner en práctica una democracia radical y participativa, que tiene como objetivo fundamental la generación de cambios en las estructuras de poder local, tradicionalmente excluyentes en términos étnicos, de clase, generacionales y de género, a través de procesos

participativos para la toma de decisiones sobre el desarrollo local (Cfr., Larrea y otros, 2000: 3 – 4; Larrea y Larrea, 1999: 129).

La construcción de una nueva democracia pasa a ser entonces una forma más por parte del movimiento indígena de disputar un sentido en la construcción de un nuevo país, a través de la generación de nuevos espacios públicos deliberantes que promuevan el debate, la reflexión y la construcción de sujetos sociales.

CAPÍTULO 2

LA PROVINCIA DE COTOPAXI

La provincia de Cotopaxi, ubicada en la región sierra centro del Ecuador, cuenta con 7 cantones y una alta diversidad geográfica, ambiental étnica y cultural. De los 7 cantones, 4 se ubican en la Sierra (Latacunga, Pujilí, Saquisilí y Salcedo), Sigchos comparte territorios entre la región serrana y la ceja de montaña de la cordillera occidental y 2 cantones (La Maná y Pangua), ubicados en la zona occidental de la provincia, pertenecen a la zona subtropical y están articulados a la región Costa. Existen 45 parroquias, 33 rurales y 12 urbanas.

Cotopaxi es una provincia mayoritariamente rural, con un 73% de población rural frente a un 27% de población urbana. La población indígena representa el 29% según los datos del SISSE (3,0) y el 36% según las estimaciones locales (Cfr., HCPC, 2002: 31). Los indígenas se ubican principalmente en Pujilí, Salcedo y Saquisilí rebasando el 50% de la población total de estos cantones. En Sigchos representan el 41% y en La Maná y Pangua el SISSE (3,0) no registra población indígena.

Los índices de pobreza en Cotopaxi, la ubican entre las provincias más pobres del país, después de Bolívar y Loja. De los 350.450 habitantes de Cotopaxi, el 83% son pobres y de éstos el 44% son indigentes (Cfr., SISSE 3,0). De este modo, Cotopaxi se ubica muy por encima de la media de pobreza en el país que es del 58%.

Las zonas rurales son las de mayor pobreza. Así, el 87% de la población rural y el 79% de la población urbana vive en condiciones de pobreza. Las parroquias rurales de población indígena son las mayormente afectadas por la pobreza, tales es el caso de Guangaje (100%), Zumbahua (100%) y Chugchilán (96%), Canchagua e Isinliví (95%); en 3 de estas parroquias (Guangaje, Zumbahua e Isinliví) la población indígena es del 100% (Cfr., SISSE 3,0).

A nivel organizativo, en Cotopaxi se encuentra una de las organizaciones de tercer grado más fuertes del país, filial de la ECUARUNARI y de la CONAIE. Se trata del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). El MICC ha jugado un papel muy importante en el proceso organizativo nacional, en los últimos levantamientos indígenas y en la estrategia electoral del Movimiento. Dirigentes del MICC ocupan actualmente la Presidencia de la CONAIE y la Vicepresidencia de la ECUARUNARI. En los últimos levantamientos indígenas, la población mayoritaria que llegó a Quito fue de Cotopaxi. Frente al tema electoral, el MICC ha mantenido una de las estrategias más exitosas de toda la sierra, constituyéndose a través de su brazo político (Pachakutik) en la primera fuerza electoral en Cotopaxi. En 1996 logra acceder a la Alcaldía de Saquisilí; en 1997 un representante del Movimiento es elegido para participar en la Asamblea Nacional Constituyente; en el año 2000, el MICC consigue una nueva Alcaldía en el

Municipio de Sigchos y accede a la Prefectura Provincial. Durante todas las elecciones del período logra mantener una de las tres diputaciones asignadas a la provincia. Actualmente el Movimiento cuenta con 15 Concejales Municipales, 2 Consejeros Provinciales y el 30% de las representaciones en las Juntas Parroquiales.

El poder adquirido por el movimiento indígena en Cotopaxi ha provocado algunas adhesiones por parte de la población mestiza. De hecho, la votación que lleva a César Umajinga a la prefectura, en un alto porcentaje proviene de la población mestiza asentada en Latacunga. La población mestiza que dio su voto por el líder indígena sembró sus expectativas en una nueva forma de gobierno provincial, pues en varios cantones del país, entre 1996 y el año 2000 se llevaron adelante gestiones alternativas que pasaron a ser un referente también para los mestizos.

Pese a ello, Cotopaxi continúa siendo una provincia signada por el conflicto interétnico. De ahí que el reto para el movimiento indígena de asumir por primera vez en la historia del país una gestión provincial era enorme. Significaba no solo implementar una propuesta que en otras localidades había sido exitosa, sino además romper una serie de prejuicios raciales que sin beneficio de inventario censuraban al prefecto por el solo hecho de ser indígena. Se dudaba de su capacidad para llevar adelante una gestión provincial eficiente, se cuestionaba su manejo del idioma castellano e incluso se hablaba de sentir “vergüenza” porque un indígena represente a la provincia ante la sociedad nacional. En varias ocasiones, el Prefecto tuvo que mostrar sus credenciales en reuniones nacionales, pues las autoridades nacionales tampoco podían dar

crédito a que un indígena ocupe tan alto cargo de elección popular.

Al acceder al gobierno provincial el MICC se plantea “la generación de un nuevo modelo de gestión para el desarrollo provincial que tiene como objetivo crear las condiciones para pasar de una administración provincial tradicional hacia la construcción de un gobierno provincial, basado en la transparencia, la democratización y la gestión para el desarrollo de Cotopaxi” (HCPC, 2002: 12). Este planteamiento supone un cambio profundo en las prácticas tradicionales de gestión. Sin embargo, el peso de estas prácticas, la cultura política del país en la que impera el clientelismo y los altos grados de discriminación étnica en Cotopaxi hacen que la necesidad de legitimización del poder y la autoridad, sean una constante dentro de la gestión provincial. Más aún si se considera que la gestión se desenvuelve en una cancha ajena para los pueblos indígenas y sus prácticas. Es frecuente entonces observar cómo las autoridades recurren “a las viejas reglas del juego para enfrentar la oposición, asumiendo estrategias de innovación y repliegue acorde con los contextos específicos que se ven avocadas a enfrentar” (Larrea y Larrea, 1999: 130 – 131).

A inicios de la gestión, el MICC lideró un interesante proceso de articulación de iniciativas y propuestas tendientes a generar espacios de mayor participación de la sociedad civil cotopaxense en la toma de decisiones sobre el futuro de la provincia, de reflexión sobre los contenidos del desarrollo provincial y de asesoramiento técnico – político a la nueva autoridad provincial.

Uno de los primeros pasos que se dio en este sentido fue la conformación

de un equipo de apoyo externo a la Prefectura, conformado por representantes del MICC y personal de algunas ONGs de Cotopaxi, que han estado acompañando permanentemente los procesos políticos en el ámbito provincial. Este equipo fue avalado por el Prefecto antes de su posesión. Se definió que los roles fundamentales de este equipo serían:

1. Asesorar técnica y políticamente la gestión provincial
2. Apoyar la formulación de una propuesta de planificación participativa para la provincia y asegurar los mecanismos para su implementación
3. Establecer adecuados mecanismos de comunicación y coordinación entre el HCPC, el MICC, las ONGs y otros actores sociales de la provincia

Las primeras acciones del Equipo de Apoyo Externo se centraron en la generación de acuerdos para promover el proceso de gestión alternativa de la provincia. Para lo cual, a través de distintas reuniones entre el MICC, el HCPC y las ONGs, se discutieron los principales contenidos de la gestión alternativa y se establecieron algunos mecanismos para garantizarla.

Con estos antecedentes, se diseñó colectivamente una propuesta para elaborar el Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi (PPDC). Esta propuesta es presentada a distintas ONGs y al Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRO-DEPINE), quienes ratifican su compromiso de aportar económica y técnicamente para su implementación. De esta manera se da un primer logro significativo, pues el solo hecho de que ONGs con distintas identidades,

dinámicas y prácticas institucionales conjuguen sus experticias, capacidades y recursos económicos frente a una propuesta conjunta, implica un cambio en las lógicas tradicionales del desarrollo, rebasando el ámbito de acción parcelado hacia dinámicas de gestión más integrales. Más aún si se considera que la propuesta de Cotopaxi constituye la primera experiencia de esta naturaleza en el país.

La apuesta al proceso participativo de Cotopaxi por parte de las ONGs constituyó un respaldo estratégico para la aprobación del proyecto en el seno del Consejo Provincial (HCPC), quien a su vez dio un aval político y comprometió recursos humanos y económicos para la iniciativa.

La negociación permitió adicionalmente cambios de actitud en el seno del HCPC, donde en un inicio se presentaron resistencias a la participación del MICC en el proceso. Si bien estas resistencias siguen estando presentes, se ha logrado un reconocimiento a las capacidades de negociación y gestión del MICC, así como a su indiscutible peso político en la provincia.

El PPDC fue diseñado durante el 2001, con la participación de cuatro mil personas y en Abril de 2002 es presentado a la provincia, iniciándose entonces, el complejo proceso de implementación del Plan bajo el liderazgo del HCPC y del MICC. Se prioriza el tema ambiental y se inicia un trabajo para la generación de políticas públicas concertadas. En Abril del 2003 se instaura la Convención Ambiental de Cotopaxi, que es “un espacio de diálogo, de consensos y definiciones que convoca a organizaciones campesinas y populares, organizaciones gremiales y empresariales ONGs, instituciones gubernamentales, universidades,

gobiernos locales y regionales y a todos/as quienes quieren aportar al análisis de la situación de los recursos naturales y a formular propuestas para mejorar su manejo” (HCPC, 2003: 2). En la Convención se discuten una serie de propuestas de trabajo formuladas durante el año 2002 y se firma una carta de acuerdos que contempla 43 puntos (18 políticas ambientales, 18 estrategias de acción y 7 acciones específicas) en los temas: Legislación Ambiental, Recursos Naturales (Agua, Suelos y Páramos) y Calidad Ambiental. Actualmente se está trabajando en el seguimiento a los acuerdos de la Convención Ambiental a través de una estrategia de amplia participación social.

Fruto del proceso de gestión local alternativa en Cotopaxi, se han generado nuevas institucionalidades para el desarrollo local. En el año 2000, se crea el Comité de Gestión con el

fin de orientar el proceso, fijando las políticas generales para su implementación. El Comité de Gestión está presidido por el Prefecto y cuenta con 3 delegados del HCPC (2 Consejeros y el Director de Planificación), 3 delegados del MICC, un representante de los Municipios, 2 delegados de las Juntas Parroquiales y 2 delegadas de las ONGs. En el año 2001, se crea el equipo técnico de apoyo al proceso. En el año 2003, se crea un Comité de Seguimiento a los acuerdos de la Convención Ambiental y las mesas de trabajo temáticas.

En el siguiente acápite se recogen los planteamientos iniciales sobre los cuales se construye el proceso de gestión local alternativa en Cotopaxi. Del análisis de estos planteamientos, se intentará realizar un balance del proceso y abordar los principales desafíos del mismo.

CAPÍTULO 3 LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN EN COTOPAXI²

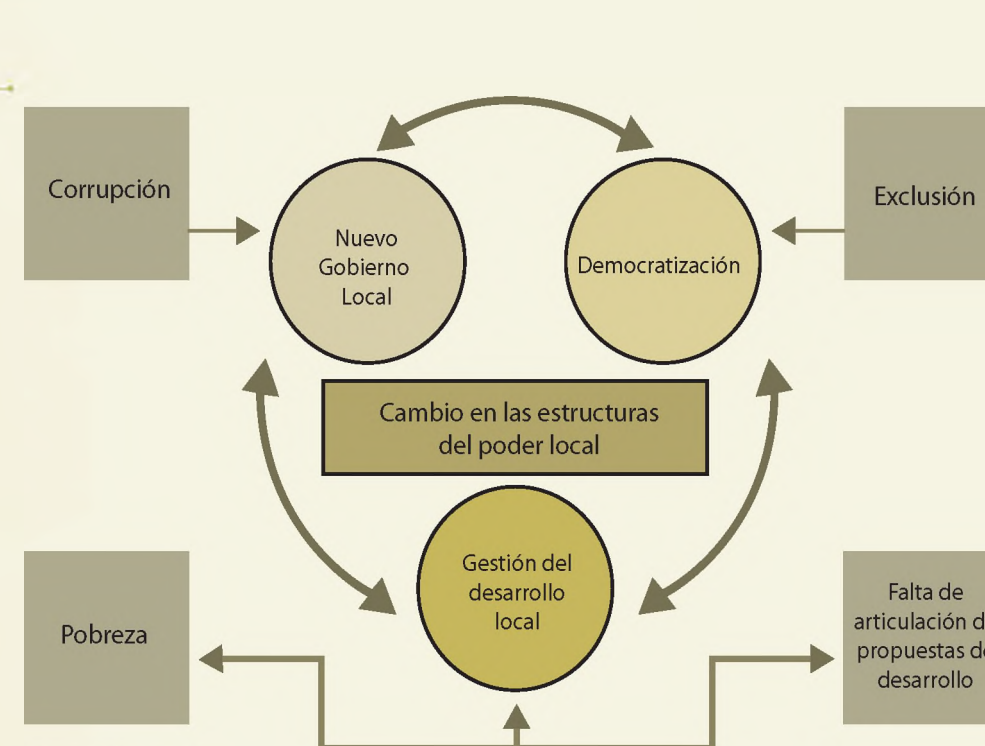
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, al participar con candidato propio para la Prefectura en el proceso electoral del año 2000, establece un programa de campaña y de gobierno basado en las experiencias anteriores de gestión local del movimiento indígena, principalmente de aquellos cantones en los se había trabajado una propuesta alternativa de gobierno local. Las experiencias vividas por los líderes indígenas en Cotacachi, Guamote y Saquisilí entre

1996 y el año 2000, sientan las bases para elaborar la propuesta de gestión a escala provincial.

Es así como se plantea la generación de procesos de cambio social basados en la construcción de un nuevo gobierno provincial, la democratización, y la gestión del desarrollo local, con el fin de enfrentar la corrupción, la exclusión y la falta de propuestas articuladas de desarrollo local que permitan erradicar la pobreza.

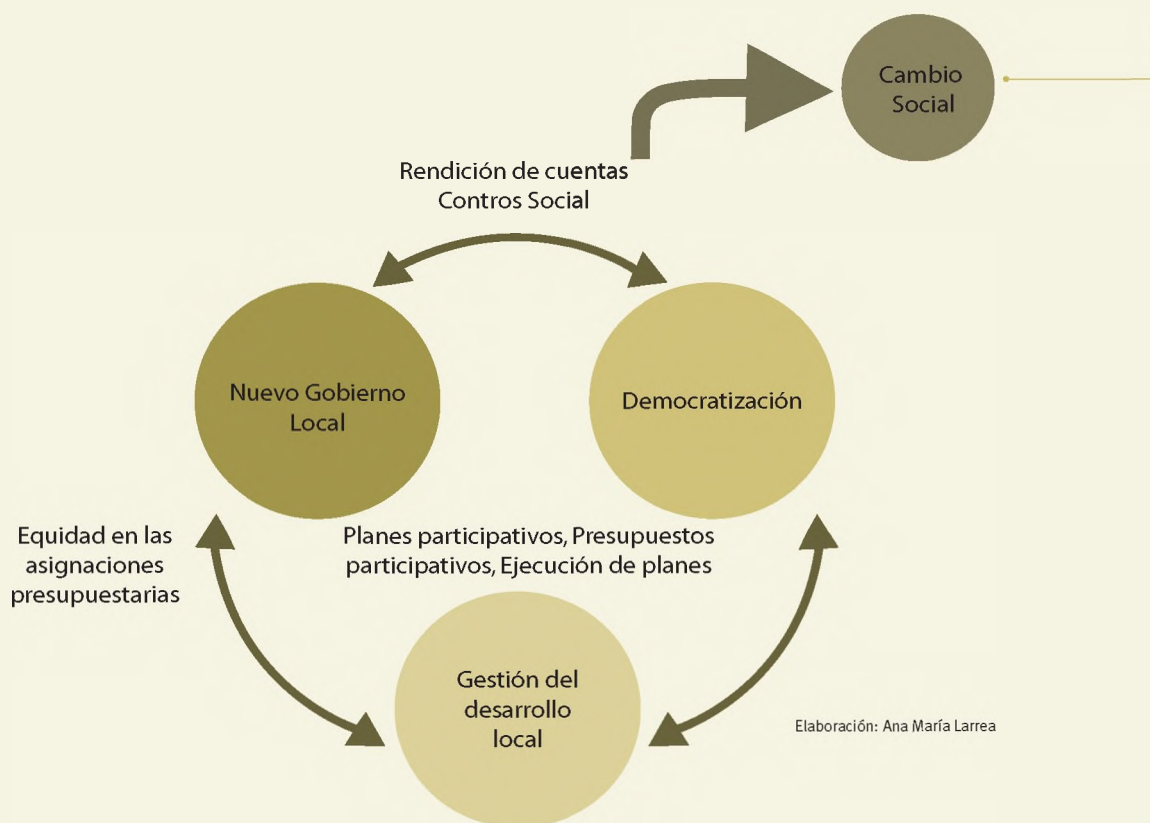
Gráfico 1

NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL



Elaboración: Ana María Larrea

² Las ideas presentadas en este acápite recogen los planteamientos de la autora en: “Democracia, participación y nuevas institucionalidades para el desarrollo local”, del Módulo Gestión Social de los Recursos Naturales, Quito, CAMAREN – IEE: 24 - 35 y “Gestión local alternativa en el Ecuador: Algunos elementos para un balance necesario”, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, Memorias el Primer Congreso, Baños, 2001, Latacunga, 2002: 11 - 18.



Estos planteamientos se operativizan en una serie de acciones o procesos como la rendición de cuentas, el ejercicio del control social, una distribución equitativa de los recursos, una gestión basada en la planificación y la priorización colectiva de obras, la organización de la demanda, el fortalecimiento de las capacidades propositivas de las organizaciones y la elaboración de presupuestos participativos.

La construcción de un nuevo gobierno local

Las administraciones seccionales en el Ecuador se han caracterizado por ser proveedoras de servicios, abrir muy poco margen a la participación ciudadana, basar su accionar en la creación de redes clientelares, estar

signadas por una fuerte corrupción, ser poco planificadoras y centradas casi totalmente en la gestión urbana.

Frente a esta realidad, el gobierno local de Cotopaxi se plantea asumir el rol de articulador del desarrollo local, generando participativamente políticas públicas. Asumir este nuevo rol implica una reestructuración de las instancias del gobierno local, pues la actual estructura del Consejo Provincial no responde a esta nueva lógica de gestión participativa. La constitución del equipo de apoyo externo a la Prefectura fue producto de esta necesidad. Sin embargo, es una instancia transitoria que deberá desaparecer una vez que el Consejo Provincial logre implementar una estructura y una dinámica de trabajo acorde con los procesos que está impulsando. En estos días el Consejo Provincial se ha planteado su reestructuración

interna. Sin embargo, es un proceso inicial que deberá ser evaluado una vez que se lo implemente.

Los principales cambios en la institucionalidad del Consejo Provincial guardan relación con los siguientes aspectos:

1. El sistema de gestión: Implica cambios en el ámbito administrativo y financiero, con la finalidad de contar con información ágil y oportuna que pueda favorecer la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control social.
2. El sistema jurídico: Es necesario realizar un inventario de las distintas ordenanzas y normativas promulgadas por el Consejo Provincial y los Municipios de la provincia. A partir de este inventario será necesario armonizar la legislación en las distintas escalas, actualizar la normatividad existente y generar nuevos cuerpos legales de acuerdo a los desafíos contemporáneos que enfrenta la provincia y al nuevo rol de los gobiernos seccionales. Todo ello con el fin de alcanzar políticas públicas concertadas entre los gobiernos locales y la población de la provincia.
3. La estructura técnica de los gobiernos locales: Debido al rol jugado por las administraciones seccionales tradicionales, su estructura técnica no responde a los planteamientos de un nuevo gobierno local. No se cuenta con departamentos y talentos humanos especializados en la gestión de los recursos naturales, en desarrollo humano, en promoción de la participación ciudadana, en planificación para el desarrollo, etc. La Dirección de planificación

se encarga del diseño de obras y la aprobación de planos, sin realizar análisis sobre la pertinencia e impactos de las obras dentro de una visión más general de lo que implica el desarrollo local y sus múltiples articulaciones. Sin duda, la actual organización del Consejo Provincial no facilita que pueda promover la generación de políticas públicas para el desarrollo local.

4. En el sistema directivo: En el Consejo Provincial de Cotopaxi se ha hecho un esfuerzo significativo por construir una interrelación entre la población, las direcciones departamentales y las instancias de decisión política. Para fortalecer un proceso de toma de decisiones para el desarrollo provincial, es necesario sin embargo, contar con sistemas de información y monitoreo del Plan de Desarrollo que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas.

La Democratización

Frente a una forma de ejercicio del poder excluyente, el Consejo Provincial de Cotopaxi se planteó la democratización y la construcción de ciudadanía como uno de los pilares de su accionar, poniendo en práctica mecanismos de información y consulta permanente a la población sobre algunas decisiones fundamentales. Es en este marco que se genera el proceso de planificación participativa de la provincia y la Convención Ambiental de Cotopaxi.

La propuesta de democratización de Cotopaxi nos remite al modelo de “énfasis en las capacidades endógenas

y en la participación”. En estos casos se expresa una mayor preocupación por la producción hacia la demanda interna, apuestan por una gestión pública inclusiva promoviendo para ello una democracia participativa basada en el respeto a las diversas identidades culturales (Cfr., Dávila y otros, 1993: 34).

La democratización constituye un enorme reto, pues para que efectivamente funcione es necesario contar con organizaciones sociales sólidas, generadoras de propuestas innovadoras de desarrollo local, que participen en la toma de decisiones y que ejerzan un control social permanente. Si bien el MICC cuenta con una serie de dirigentes/as formados/as que directa o indirectamente han apoyado el proceso de democratización de la provincia, no se puede afirmar que en las OSGs y organizaciones de base se ha superado el clientelismo. De hecho, una vez que el Prefecto se posesionó recibió mil ochocientas solicitudes de obras provenientes de las organizaciones comunitarias. Se empezó entonces a trabajar en la organización de la demanda, dando un rol importante a las OSGs y a las Juntas Parroquiales para que discutan colectivamente la pertinencia de las obras que debería impulsar la Prefectura.

Se requiere además una mayor articulación entre los dirigentes y las bases, pues muchas Organizaciones de Segundo Grado (OSG) se han convertido en un sistema de representación hacia fuera de las comunidades, en instituciones especializadas para dialogar con el mundo blanco - mestizo antes que instituciones de consenso del heterogéneo mundo indígena (Cfr., Martínez, 1996: 117 - 122).

En el ámbito de la democratización se ha trabajado fuertemente en el fortalecimiento del MICC; el ejercicio del control social, que en ocasiones ha tomado características dramáticas, como el baño ritual realizado a un Consejero Provincial en el último Congreso del MICC; y en la presupuestación participativa, que aún tiene características incipientes. La apuesta fundamental del proceso de democratización ha sido la construcción de una nueva forma de gestión y de poder basados en la participación. Se trata en definitiva de una nueva forma de gobernar, *obedeciendo* los mandatos del pueblo que ha estado excluido de las decisiones fundamentales durante siglos.

Gestión para el desarrollo local

El tema del desarrollo local participativo surge a raíz de un cambio de enfoques del desarrollo rural, que en un inicio se basaba en una visión sectorial (salud, educación, desarrollo agropecuario), luego pasa a una visión desde los actores, fortaleciendo sus capacidades. Finalmente desemboca en lo que se ha dado por llamar desarrollo local, que no es más que la confluencia entre actores, escenarios y temas. Cuando se habla de desarrollo local, estamos entonces hablando de un enfoque integral del desarrollo, un desarrollo con identidad, un desarrollo equitativo que tiene como centro el ser humano.

La fuerza que ha tomado el tema en los últimos años se debe fundamentalmente a que lo local es el escenario privilegiado para los procesos de descentralización y gestión pública. Puede permitir el desarrollo de una nueva democracia y el tratamiento

del tema étnico (interculturalidad). Es tal vez el espacio más idóneo para un desarrollo más sustentable y equitativo y puede permitir un mayor control social.

Los pueblos indígenas y organizaciones sociales han jugado un papel muy importante en este cambio de visión del desarrollo, por un lado desde sus propias prácticas y concepciones más integrales del desarrollo y por otro lado, debido a su participación política en los ámbitos locales.

La gestión para el desarrollo local implica la construcción colectiva de un proyecto de desarrollo integral para la localidad, tomando en cuenta las cinco dimensiones del desarrollo local:

- Desarrollo económico local
- Desarrollo social
- Dimensión ambiental
- Desarrollo político y socio organizativo
- Dimensión cultural

La gestión para el desarrollo local tiene como objetivos: dinamizar las economías locales, fortalecer las organizaciones sociales a través de la participación ciudadana, favorecer la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, proteger

el medio ambiente, fortalecer la identidad y la interculturalidad.

Para llevar adelante un proceso de esta naturaleza es necesario considerar la dimensión política del desarrollo local, que implica la politización de las demandas y reivindicaciones de la población con miras a construir sujetos sociales. De ahí la articulación entre la gestión del desarrollo local y el proceso de democratización. “De este modo, el desarrollo local no se limita a la configuración de la materialidad del sujeto, sino que además supone evidenciar y visibilizar los conflictos y tensiones, a partir de procesos permanentes de reflexión que posibilitan la concienciación y construcción de ciudadanía. Esta propuesta cuestiona el poder, articulando el debate teórico con la construcción de sentidos, de discursos, de imaginarios concretos, prácticos, experimentales” (Dávila y otros, 1993: 32).

Dentro de esta perspectiva, el nuevo Prefecto de Cotopaxi al iniciar su gestión se plantea impulsar el desarrollo económico local priorizando la inversión en riego, con un claro apoyo a las pequeñas economías campesinas; la vialidad con el fin de facilitar la integración de la provincia y apoyar la comercialización de los productos; y actividades relacionadas con el ambiente, particularmente la forestación como mecanismo para conservar los suelos e incentivar una producción sustentable.

CAPÍTULO 4

LOS DESAFÍOS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

La gestión de los gobiernos locales para las autoridades indígenas y las organizaciones sociales que promovieron su elección, entraña múltiples desafíos. En este trabajo analizaremos aquellos relacionados con el proceso de democratización, tomando como referencia las entradas de análisis planteadas por Gret y Sintomer (2002) para el caso de Porto Alegre: Escala, participación, institucionalización y eficacia.

El desafío de la escala contempla dos riesgos, el primero el confinamiento de las propuestas democratizadoras a la escala local. Es decir, el hecho de que los procesos democratizadores locales sean una forma de encubrir la falta de democracia a escala nacional. El segundo riesgo hace relación a que muchos de los problemas locales requieren para su solución de intervenciones nacionales, lo que puede generar desmotivación de las poblaciones locales para participar en los procesos democratizadores.

El desafío de la participación hace referencia a las posibilidades reales de participación de los grupos excluidos en sociedades marcadas por la iniquidad estructural.

El desafío de la institucionalización está marcado por la relación entre las estructuras del estado, en este caso el gobierno local, y los movimientos sociales. Expresa el problema de las posibilidades reales de incidencia de los movimientos sociales en la ges-

ción pública frente al peligro de ser cooptados institucionalmente por el poder. Guarda relación además con la necesidad de autonomía e institucionalización de los espacios de participación ciudadana.

Finalmente, el desafío de la eficacia permite reflexionar sobre los resultados concretos de los procesos participativos.

El desafío de la escala

En el ámbito intralocal

A escala provincial, el peso de los intereses económicos, de los grupos de poder y los intereses gremiales es mucho más evidente que a escala cantonal. Plantear una propuesta de desarrollo, con una apuesta política clara hacia las poblaciones menos favorecidas de la provincia, significó de hecho enfrentar estas fuerzas, en un contexto de alta discriminación étnica.

Para las élites provinciales el hecho de que un indígena sea la autoridad máxima de la provincia es una vergüenza. Desde los partidos políticos tradicionales existe un claro interés de desprestigiar la gestión del prefecto, como un mecanismo para recuperar los espacios de poder que han ido perdiendo. Gran parte de los medios de comunicación de la provincia han estado tradicionalmente ligados a estos sectores.

De ahí que el desafío de la escala, implicaba para el nuevo Prefecto Provincial en primer lugar mostrar la capacidad suficiente para administrar la provincia, capacidad que era cuestionada de entrada por las élites locales y los partidos políticos tradicionales.

Uno de los puntales para enfrentar este desafío fue el Plan de Desarrollo, pues en las administraciones anteriores se había intentado llevarlo adelante, sin éxito. La capacidad de la nueva administración de plantear una propuesta coherente, técnicamente bien estructurada, negociarla y conseguir el apoyo financiero para implementarla, fue sin duda un elemento gravitante para enfrentar la oposición inicial.

Las tensiones existentes y la necesidad de consolidar una propuesta con amplio apoyo poblacional en la provincia, provocaron que se plantee fuertemente que si bien el Prefecto es indígena y se debe al movimiento, el nuevo gobierno provincial sería un gobierno que defendería los intereses de la provincia, un gobierno para todos y todas. Sin embargo, en los discursos del Prefecto Provincial es recurrente su enlace y articulación con el MICC, a quien considera “el padre” del proceso. De hecho, la relación orgánica del Prefecto con el Movimiento, a diferencia de muchas otras autoridades cantonales y provinciales, ha fortalecido a la Prefectura en su lucha para enfrentar la oposición y negociar firmemente en momentos difíciles, sobre todo por la alta capacidad de convocatoria a las organizaciones indígenas con la que cuenta la autoridad indígena.

Desde las organizaciones indígenas locales, el hecho de contar con uno de sus representantes en la Prefectura,

es visto como la posibilidad de acceso a recursos a los que anteriormente era sumamente difícil recurrir. Como se mencionó anteriormente, durante el primer mes de gestión del Prefecto, llegaron al Consejo Provincial mil ochocientas solicitudes de “obras” desde las Parroquias, Organizaciones de Segundo Grado y distinto tipo de asociaciones, lo que da cuenta por un lado de la gran cantidad de demandas y las altas expectativas de las poblaciones locales frente a la Prefectura y por otro, de que la gestión provincial seguía siendo vista desde una perspectiva clientelar con un rol de proveedor de obras y no como un articulador del desarrollo local. Una de las primeras decisiones que se tomó fue que no se recibirán oficios para obras, si éstos no eran el resultado de una discusión al interior de las Juntas Parroquiales y OSGs, en las que se realizara un proceso de priorización de necesidades. Esta estrategia tenía como objetivos promover el asociativismo, los procesos de reflexión y discusión sobre el desarrollo y organizar la demanda. Desde entonces, se priorizó la escala parroquial para la gestión de la provincia.

El desafío de la escala fue central en el debate para la operativización de la propuesta de planificación participativa y también se decidió partir de la escala parroquial, lo que implicó un trabajo de micro diagnóstico muy pormenorizado. Para el MICC era fundamental esta entrada, que si bien complejizaba y suponía un tiempo mayor en el trabajo de diagnóstico, significaba la posibilidad de multiplicar los niveles para ampliar la participación.

Quizá la principal limitación que se tuvo que enfrentar por partir de la escala parroquial fue la de superar las visiones microlocales existentes en las parroquias y plantear una

reflexión desde lo parroquial con una perspectiva de provincia. Para ello, fue necesario un trabajo de retroalimentación permanente por parte del Equipo Técnico Local en las discusiones parroquiales. Pese a ello, los resultados de los diagnósticos parroquiales muestran una preeminencia de la visión microlocal. Superar la visión parcelaria del desarrollo y asumir una perspectiva de provincia, en la que en ocasiones, se debe postergar la resolución de necesidades a nivel sectorial y formular propuestas más globales e integradoras, ha sido un desafío para las organizaciones de la provincia. De hecho, en el proceso de formulación del Plan Provincial se evidenció la dificultad de reflexionar con las organizaciones más allá de los ámbitos microlocales.

Una vez sistematizados los diagnósticos parroquiales se realizaron talleres cantonales en los que se presentaban los resultados de los diagnósticos parroquiales sintetizados en una matriz cantonal y se trabajó a partir de matrices FODA las líneas estratégicas, las visiones y los valores. Se realizaron paralelamente talleres con especialistas por ejes temáticos, conjugando la entrada territorial con entradas temáticas. Esta estrategia permitió superar en gran medida las visiones microlocales desde las parroquias, generando propuestas cantonales y provinciales.

Otro aspecto importante, que cruza el desafío de la participación y de la escala, hace relación a los niveles de representación en el proceso participativo y la necesidad de identificar actores relevantes con peso provincial, que permitan consolidar un modelo

contrahegemónico de desarrollo. Un puntal importante para enfrentar este desafío fue el tejido social existente en el MICC, la legitimidad de los/as representantes parroquiales, cantonales y provinciales y su compromiso de replicar los planteamientos, apuestas y estrategias hacia niveles micro – locales. Se optó entonces por privilegiar las representaciones existentes en la provincia, aunque ello implicaba una disminución de la participación directa. El principal límite de esta opción fue el trabajo a nivel urbano debido a la poca tradición organizativa de este espacio³, a las resistencias de los sectores urbanos tradicionales de la provincia de involucrarse en una propuesta impulsada desde las esferas y organizaciones rurales e indígenas y el ámbito de acción eminentemente rural de los Consejos Provinciales del país.

En el año 2001, a partir de los resultados del Plan de Desarrollo, se inicia un trabajo para la elaboración del presupuesto participativo y nuevamente, se privilegia la escala parroquial, realizando un primer ejercicio de presupuestación participativa con las Juntas Parroquiales. En el 2002, la entrada parroquial se conjuga con la escala cantonal, tan solo en los cantones que abren posibilidades de participar en la propuesta. Se realiza entonces los presupuestos participativos en los cantones de Saquisilí y Sigchos, en los que se discuten las asignaciones presupuestarias del Consejo Provincial para estos cantones y las asignaciones de los Municipios. Es interesante en este sentido el trabajo articulado hacia el desarrollo local de las esferas cantonales y provinciales. Para el resto de cantones

3 De los 7 cantones de la provincia, tan solo Latacunga cuenta con una federación de barrios, las parroquias urbanas no eligen a sus representantes y no existe organización provincial alguna que aglutine a los pobladores urbanos.

se sigue trabajando directamente con las juntas parroquiales.

Pese a la incorporación de dos cantones en el proceso de presupuestación participativa no se puede hablar aún de una articulación de las propuestas de desarrollo local, ni siquiera en la escala cantonal, pues en los ejercicios de presupuestación participativa sigue imperando la visión micro local. Son las demandas de las parroquias las que imperan y la necesidad del Prefecto y del MICC de afianzar las relaciones con las organizaciones de base. En el caso de la presupuestación participativa a escala cantonal priman además las relaciones de los Alcaldes con sus bases sociales. Las lealtades primordiales pesan más que la necesidad de generar propuestas integrales de desarrollo local. Esto se evidencia en el distributivo de obras para la provincia, donde no existen grandes inversiones, sino más bien una cantidad de pequeñas obras con el afán de satisfacer al mayor número de pobladores/as.

Quizá el intento más significativo de trabajar una propuesta de políticas públicas a escala provincial ha sido el proceso de la Convención Ambiental de Cotopaxi. Aunque el rol de las actorías externas en este proceso fue gravitante, se han dado los primeros pasos para actuar sobre la escala provincial desde una perspectiva de construcción de políticas públicas ambientales y de superar las visiones clientelares del desarrollo local.

El principal desafío en relación al proceso llevado adelante en el marco de la Convención Ambiental es el de generar las alianzas necesarias a nivel de la institucionalidad del gobierno provincial para que los planteamientos generados se conviertan en políticas públicas efectivas.

Lo extralocal: Articulación de la escala provincial con la nacional

“La articulación entre lo local y lo nacional, constituya quizá el mayor reto que deben enfrentar los gobiernos locales que pretenden desarrollar nuevas modalidades de gestión del desarrollo”

(LARREA Y LARREA, 1999: 131).

En todos los momentos del proceso participativo surge el problema de cómo trabajar lo extralocal, pues existen una serie de planteamientos desde las organizaciones sociales que tienen relación con políticas públicas a escala nacional. La participación de la provincia en el G-8 y su relación con el CONCOPE (actualmente el Prefecto Provincial es Vicepresidente del CONCOPE) abren posibilidades interesantes de trabajo en este tema. Sin embargo, no se cuenta aún con una estrategia clara hacia estos espacios. El G8 se ha convertido en un espacio para la discusión de ciertas obras comunes a las 8 provincias, antes que en un espacio de discusión sobre políticas nacionales y Cotopaxi no ha podido incidir para cambiar esta lógica. En cuanto al CONCOPE, uno de los temas fundamentales de discusión en el momento actual es el referido a la descentralización. Ésta es vista como un proceso de transferencia de competencias y se han iniciado las negociaciones para la descentralización ambiental. Sin embargo, las discusiones se han circunscrito al tema administrativo, sin mayor discusión sobre el sentido y las apuestas que un proceso de descentralización supone.

Las dificultades de articulación entre la escala provincial y la nacional dan cuenta de un tipo particular de cultura política presente en la provincia,

que se ha expresado no solamente en las dificultades de superar las visiones microlocales durante el proceso de planificación del desarrollo provincial, sino también en las articulaciones entre el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y los espacios nacionales en los que éste participa. El analizar la realidad local y extralocal considerando únicamente los elementos de la propia provincia es una constante en el MICC. En este sentido cabe recordar los conflictos vividos en el Congreso de Pachakutik nacional en el 2001, en el Congreso de la CONAIE en el mismo año y en la ruptura de la alianza entre Pachakutik y el Partido Sociedad Patriótica en el 2003. La débil articulación entre las escalas provincial y nacional en parte puede ser explicada por la existencia dentro del MICC de una cultura política profundamente autocentrada.

Cotopaxi es la única provincia en el país donde el movimiento político (Pachakutik) no cuenta con una estructura diferenciada del Movimiento Indígena y Campesino, lo que trae constantes problemas en el relacionamiento con otros actores sociales y políticos tanto dentro de la provincia, como en la escala nacional. En varias ocasiones, el Prefecto ha pasado a ser el vocero del MICC en las disputas nacionales, lo que ha dado lugar a una superposición de roles y a mezclar aspectos organizativos con aquellos vinculados a la gestión provincial. El ejemplo más significativo en este sentido fue el juntar las últimas movilizaciones indígenas a raíz del atentado contra el Presidente de la CONAIE, con el Paro Provincial de Cotopaxi. Cada una de estas protestas tenían orígenes y planteamientos muy diferentes. Las movilizaciones indígenas cuestionan al poder constituido con una serie de planteamientos sobre la democracia, la dignidad,

la justicia y la paz. Mientras que el Paro Provincial demandaba el cumplimiento de acuerdos firmados por el Presidente de la República para la construcción de obras significativas en Cotopaxi. La unión de ambos planteamientos les restó fuerza política.

Para los integrantes del MICC no es conveniente separar la esfera organizativa de la política, pues existe el temor de perder la direccionalidad política del Movimiento, corriendo el riesgo de que éste deje de ser un espacio democrático donde las Organizaciones de Segundo Grado tomen las decisiones fundamentales para el movimiento. La participación de personas que no están ligadas al proceso organizativo es vedada dentro del movimiento bajo el argumento de la representación. La palabra de los individuos, por no representar a sectores organizados, pierde valor.

La fuerza con la que cuenta el movimiento en la provincia ha sido gravitante en la decisión de evitar cualquier tipo de alianzas con otros partidos o sectores. De ahí que en todos los procesos electorales, el MICC haya participado solo. Esto nos lleva a preguntarnos en qué nivel de constitución de sujeto social se encuentra el MICC. Mario Unda (2002, citado por Dávila y otros, 2003: 32), propone diferenciar niveles en la constitución de los sujetos:

En un primer nivel, los sujetos remiten su acción a su entorno con una percepción general de los conflictos que giran en torno a su constitución, no visualizan los elementos externos, por tanto es aún innecesaria una estrategia de alianzas.

En un segundo nivel, los sujetos sociales recogen intereses particulares que engloban a determinados

grupos, desde una perspectiva gremial. Ya existe la necesidad de generar encuentros puntuales y alianzas concretas con otros sectores subalternos.

En un tercer nivel, los sujetos se proponen la construcción de un proyecto de mayor escala que promueva la equidad social, en donde las alianzas estratégicas son un elemento fundamental.

En este marco, se podría afirmar que el MICC se encuentra en un proceso de transición entre el primero y el segundo nivel de constitución como sujeto social, ya que si bien recoge una serie de reivindicaciones étnicas y culturales, que en ocasiones tienen características gremiales, aún no está interesado en establecer una estrategia de alianzas que le permitan multiplicar su propuesta hacia otros sectores y nutrirse a la vez de planteamientos para la construcción de una plataforma política más global e inclusiva. La tendencia en el MICC de analizar el conjunto del país partiendo de la fuerza con la que cuenta el movimiento a nivel provincial es muy marcada, sin considerar que la realidad de Cotopaxi, no necesariamente es la del país.

El MICC ha vivido una serie de procesos conflictivos en los ámbitos nacionales debido a su autocentramiento. En el Congreso de Pachacutik del 2001, el MICC lidera la salida de un grupo importante de organizaciones que estaban en minoría, quedando excluidos de la conformación del Ejecutivo Nacional del Pachacutik y dando inicio a un proceso de permanente cuestionamiento y confrontación con las autoridades nacionales.

Esta tendencia se revierte en el Congreso de la CONAIE, en el que el MICC

hace una alianza con las organizaciones amazónicas y logra acceder a la Presidencia de la CONAIE. El acceso a los espacios organizativos nacionales es muy valorado por el movimiento, sin embargo, no existe una propuesta programática desde el conjunto del movimiento provincial para trabajar la escala nacional. Esta falta de propuesta se evidenció en el momento de decidir la participación electoral del Pachacutik con candidato a la Presidencia de la República. Las disputas internas producto de toda esta historia de conflictos dieron lugar a establecer una alianza con el Partido Sociedad Patriótica para la Presidencia de la República, que finalmente triunfó en la contienda electoral.

Una vez que se rompe la alianza entre Sociedad Patriótica y Pachacutik, el MICC decide que mantendrá a sus representantes en los cargos a los que había accedido, mientras que todas las otras provincias del país acatan la resolución del Ejecutivo Nacional de Pachacutik de renunciar a estos puestos. El argumento esgrimido por el Movimiento fue que no era el Presidente de la República quien los había nombrado, sino que eran las propias bases del movimiento quienes eligieron a sus representantes. Ellos ocupaban estos cargos gracias al ejercicio directo de la democracia.

Los planteamientos sobre la democracia directa y la necesidad de consulta permanente a las bases se mezclan constantemente con las necesidades de construcción de la materialidad de los sujetos sociales. En el momento en que la estrategia política electoral del movimiento se subsume a estrategias de generar empleo y promover redes clientelares, los planteamientos de democratización pasan a ser el bello ropaje que contribuye a reproducir la cultura política dominante,

sacrificando las posibilidades de construcción de un proyecto político liberador.

Finalmente, pudo más la presión del movimiento nacional que los planteamientos de Cotopaxi y el MICC pidió a los funcionarios públicos nombrados por sus organizaciones, renunciar a sus cargos.

Sin embargo, la reserva moral con la que cuenta el movimiento es sumamente alta y explosiona a partir del atentado contra el Presidente de la CONAIE, al punto de intentar impedir la entrada del Presidente de la República a la provincia en medio del proceso de negociación del Paro Provincial y de movilizar a más de cinco mil indígenas en las últimas acciones de protesta. Parecería que la tónica del movimiento está marcada por su fuerte capacidad movilizadora y los esfuerzos de parar las lógicas de cop-tación de las que son objeto frente a momentos de reflujo y de adaptación a las dinámicas dominantes.

El desafío de la participación

El proceso de gestión local alternativa en Cotopaxi parte de un énfasis en las capacidades endógenas y en la participación. Se concibe a la participación como un mecanismo para lograr el reconocimiento de los más débiles por parte del gobierno local y construir sujetos sociales autónomos capaces de generar propuestas, interlocutar con su gobierno y ejercer el control social. De ahí que la participación sea un elemento nodal para la reforma del sistema político y el paso de una administración tradicional a un gobierno local, construido desde la propia sociedad. El sentido último

de la participación democrática es garantizar una mayor equidad en la distribución de los recursos económicos y de poder. De este modo, el proceso participativo en Cotopaxi es visto como un medio para impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Lo político entonces, adquiere un carácter central en la propuesta.

Bebbington y Perrault (2001: 74) plantean que en las áreas donde las estructuras sociales son más verticales y están basadas en relaciones autoritarias y los niveles de confianza son bajos, la capacidad ciudadana para la acción colectiva también es baja y el acceso y control sobre el Estado y el mercado son débiles. Inversamente, en aquellas áreas donde las relaciones son horizontales, están basadas en la confianza y los valores compartidos, los niveles de participación en las organizaciones sociales son mucho más altos, existe mayor relación entre el estado, el mercado y la sociedad civil. Cotopaxi se ubicaría en el segundo grupo debido a la presencia del MICC, una de las organizaciones indígenas más poderosas en la sierra ecuatoriana. De hecho, la presencia del MICC en la provincia ha sido un puntal fundamental para llevar adelante el proceso participativo.

No obstante, la relación entre el capital social acumulado por las organizaciones y su incidencia en procesos significativos de cambio social no es una relación directa, mecánica, ni inmediata. Como ya lo observamos en un artículo respecto al proceso de Saquisilí:

“Uno de los desafíos más relevantes radica, sin duda, en lograr el paso desde el discurso reivindicativo de la participación ciudadana hacia el impulso de procesos concretos de

participación y concertación de intereses de los diversos sectores (incluidos los sectores urbanos mestizos) en la planificación y gestión del desarrollo local. En contextos como el de [Cotopaxi], caracterizados por una alta segmentación interétnica, este desafío conlleva la necesidad de articular diferentes lógicas y prácticas de acción que respondan a diversos requerimientos y demandas marcados por culturas políticas también diversas” (Larrea y Larrea, 1999: 130).

Para ello es necesario el fortalecimiento de las capacidades de generación de propuestas, negociación y toma de decisiones, no solo de las federaciones, sino también de las propias comunidades de base, con un énfasis en el fortalecimiento de su rol político. Es necesario que las distintas actividades que realizan las organizaciones se articulen y permitan construir un capital para mejorar su posición y su poder en los escenarios locales e incidir en los espacios de toma de decisiones en las distintas escalas (Cfr., Bebbington y Perreault, 2001: 74).

Como se dijo al analizar el desafío de la escala, la estrategia nodal fue multiplicar los niveles de participación partiendo de la escala parroquial. Frente al desafío de la calidad de la participación, se privilegió la interlocución con actorías representativas de la provincia y con representantes legitimados por estas actorías; construyendo una pirámide participativa, lo más cercana a las parroquias.

Si analizamos la participación por sexos, la existencia del “censo social” es evidente. En el proceso de planificación participativa, el 62% de los participantes son hombres, frente a un 38% de mujeres. De hecho, la estrategia de privilegiar la participación de representantes de las

organizaciones de peso en la provincia, discriminó fuertemente la participación de las mujeres.

Para paliar en alguna medida esta realidad, se optó por realizar un trabajo dirigido a discutir las iniquidades de género en la provincia en todas las fases del proceso y a realizar una serie de reuniones exclusivamente con las organizaciones de mujeres de manera que sus percepciones, problemáticas y demandas puedan estar presentes en el Plan, pese a su participación porcentual minoritaria dentro del proceso.

La participación del MICC en el diseño de la propuesta de planificación, en el Comité de Gestión y en el convenio interinstitucional, no solamente como “proveedor de información” sino como conductor del proceso, suscitó varias reacciones por parte de los Consejeros Provinciales.

Una primera reacción hacía referencia al doble rol del MICC en la provincia: como movimiento político – electoral y como organización social. Los Consejeros Social Cristianos cuestionaron que “un partido político” sea cogestor de la propuesta de planificación participativa, evidenciando una vez más los inconvenientes de la falta de diferenciación entre la estructura organizativa y la estructura político – electoral dentro del movimiento.

El segundo cuestionamiento, relacionado con el anterior, era que el Plan de Desarrollo era visto desde los Consejeros de oposición como un Plan de los indios para los indios, antes que como el documento rector del desarrollo en la provincia. Esta visión fue constantemente rebatida en todos los espacios públicos con el argumento de que el Plan Provincial, no es el Plan para la gestión de

Consejo Provincial, sino que constituye el documento rector para el desarrollo de toda la provincia. En este sentido, el rol del HCPC consiste en coordinar las propuestas generadas desde la población con las distintas instituciones presentes en Cotopaxi, favoreciendo la articulación entre oferta y demanda.

Pese a estos cuestionamientos, la propuesta fue aprobada por unanimidad en el seno del Consejo y se emitió una ordenanza provincial para la creación del Comité de Gestión, como máxima instancia para la conducción del proceso.

La relación entre las autoridades electas desde Pachakutik y el MICC no ha estado libre de tensiones permanentes. Desde el MICC existe un fuerte sentimiento de que sus representantes deben acatar “los mandatos” del Movimiento y cualquier decisión importante debe ser sometida a discusión de las bases. Las autoridades de Pachakutik por su parte reclaman el derecho a tomar decisiones con mayor libertad.

Esta tensión adquiere mayor relevancia y es fuente de conflictos más hondos, frente al pleno del Consejo Provincial, pues el proceso participativo ha generado un mayor poder del Prefecto frente al Consejo, fortaleciendo al ejecutivo local, quien se relaciona directamente con los espacios participativos. Para paliar de alguna manera esta tensión el Prefecto ha invitado a los Consejeros a participar en las reuniones con la población. No obstante, el argumento de que las decisiones deben ser tomadas por el Consejo, como organismo legítimo de representación popular y autoridad máxima de la provincia, reconocida por las leyes ecuatorianas, sigue siendo gravitante.

Por parte del MICC, el argumento para defender su legitimidad en la toma de decisiones de asuntos provinciales reposa en el derecho a la participación y en el cuestionamiento a los mecanismos de representación de la democracia liberal. Bajo este argumento, las autoridades electas por votación universal deben acatar los planteamientos de quienes los han elegido. El MICC se ve a sí mismo como el vocero de estos planteamientos, bajo el cuestionamiento de la distancia existente entre representantes y electores, debido a que es la instancia provincial de mayor organización social y a que constituye la base social de apoyo del Prefecto.

Un caso relevante en el que se expresó esta tensión fue en enero del 2003, cuando una mayoría de oposición al Prefecto logró copar todas las Comisiones del Consejo Provincial, contando para ello con la votación de uno de los Consejeros de Pachakutik. La Asamblea del MICC decidió por una parte “castigar” al Consejero por su actuación, exigiendo la alternatibilidad inmediata y sometiéndolo a un ritual de purificación bajo los preceptos de la justicia indígena; y por otra parte, participar en la siguiente reunión ordinaria del pleno del Consejo, para exigir a los Consejeros rever su decisión. La presión social en la sesión del Consejo obligó a los Consejeros a reestructurar las Comisiones.

El principio de revocabilidad automática de los mandatos por las bases como un mecanismo efectivo de control social ha sido plenamente asumido por el MICC, aunque no por las autoridades electas desde el Movimiento. Pese al castigo ritual ejercido sobre el Consejero de Pachakutik y a todas las presiones para conseguir su renuncia, esta autoridad sigue en

su cargo con el apoyo del propio Prefecto, bajo el argumento de que si se le revoca el mandato, Pachacutik perdería la Vicepresidencia del Consejo y les dejaría en una posición de mayor debilidad para las negociaciones al interior del cuerpo colegiado.

El MICC ha liderado en varias ocasiones procesos importantes de rendición de cuentas y control social a sus autoridades, contando con toda la disposición de éstas últimas de someterse al proceso, aunque no ha logrado hacer efectivas las resoluciones tomadas, demostrando que la “buena voluntad” de las actorías sociales y de las autoridades no es suficiente en el ejercicio del control social. En la práctica lo que ha sucedido es que las autoridades presentan sus informes a las organizaciones, que a su vez, presentan una serie de reclamos que no necesariamente tienen relación al informe de las autoridades, se generan ciertos acuerdos, a los que no se da seguimiento. Es necesario, por consiguiente generar instrumentos específicos para que el proceso de rendición de cuentas y control social pueda ser más efectivo. Esto necesariamente debe ir acompañado de la generación de capacidades locales para conducir los procesos, aplicar los instrumentos y construir nuevas herramientas y metodologías de trabajo, desde las especificidades de cada espacio local.

El optar por una participación basada en el peso y representación de las actorías supuso además abrir un espacio a las instituciones públicas y gremiales de carácter provincial. El desafío mayor frente a esta estrategia fue el de evitar que las lógicas y voces institucionales y los intereses gremiales primen sobre las propuestas de las poblaciones locales. En este sentido se hizo un trabajo desde

el equipo técnico de interpelar a las instituciones con los planteamientos de las organizaciones sociales bajo la necesidad de articular las ofertas institucionales a las demandas poblacionales desde la perspectiva de organización de la demanda.

En el trabajo relacionado con la Convención Ambiental, el mayor desafío tuvo que ver con las posibilidades de las organizaciones sociales de generar propuestas que puedan ser objeto de políticas públicas. Los límites de las organizaciones en este sentido son evidentes. Por otra parte, era necesario construir los argumentos necesarios para defender las propuestas de políticas públicas frente a los grupos económicos y de poder que se verían afectados por la implementación de estas políticas. Para ello, el tema de la democratización de la información fue fundamental. Se partió entonces de la necesidad de fortalecer las actorías sociales más débiles —en términos económicos y políticos— de manera de paliar en alguna medida las disparidades entre actorías y asegurar que el diálogo se desenvuelva en condiciones de mayor equidad.

Para analizar los procesos de flujo y reflujo vividos por el MICC durante los últimos años y particularmente en su articulación con el gobierno provincial, proponemos partir de la inserción de las organizaciones en el campo de juego de la gestión local. Comprender a la gestión local como un “campo”, implica definirla como “una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 64), en la que diversos actores se relacionan, expresan diversos intereses, ocupan posiciones de fuerza, construyen identidades y significados culturales, luchan por la conservación o la transformación de las relaciones de

poder al interior del propio campo y en su articulación con los procesos externos. Como lo señala Eguiguren, mediante el concepto de campo social “se puede entender el proceso de desarrollo como un espacio de conflicto construido socialmente o como un suelo que sustenta una lucha de fuerzas entre los distintos actores que juegan en el campo” (Eguiguren, 1995: 46).

La noción de “campo” no puede ser entendida al margen del concepto de capital que define y delimita las relaciones de los actores en un campo determinado. Para Bourdieu, un capital “es el factor eficiente en un campo dado, como arma y como apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, por tanto existir en un determinado campo” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 65).

En un contexto de segmentación interétnica, las estrategias del movimiento indígena de Cotopaxi, sus dinámicas de flujo y reflujo en tanto instancias de representación o gestión, responden a las condiciones objetivas y a los esfuerzos campesinos por mejorar su posición en el “campo de fuerzas actuales y potenciales” (Ibíd.: 68) que constituye la gestión local. Es en este campo de fuerzas en donde las comunidades y organizaciones indígenas construyen identidades colectivas diferenciadas y replantean las relaciones de poder en los escenarios locales. Independientemente del éxito o fracaso de los proyectos que impulsan, el campo de la gestión local y los discursos generados en él desde los diversos actores, han sido incorporados y utilizados por las comunidades y organizaciones como un capital para mejorar su posición y su poder en los escenarios locales. El tema de la democracia participativa

para el MICC ha sido fundamental en su lucha por consolidar su posición en el escenario provincial, poniendo en marcha estrategias flexibles de acuerdo a los distintos momentos políticos que se ha visto avocado a enfrentar. La producción del discurso de la democracia participativa pasa a ser una las “armas” con las cuales se lucha, se disputan espacios y se construyen representaciones y significados de lo social.

En las prácticas concretas, en las que intervienen actores concretos en escenarios locales concretos, la gestión local constituye también un campo de conflicto y de disputa (Eguiguren, 1995: 30) en el que se negocian contenidos y se generan “discursos de verdad” en función de las propias relaciones de poder. Como lo afirma Foucault, las relaciones de poder implican al mismo tiempo resistencias, las cuales son efectivas precisamente en los puntos en los que el poder se ejerce y al igual que el poder, estas resistencias locales pueden dar lugar a estrategias globales (Foucault, 1979: 171).

En este sentido, las identidades colectivas construidas en la dinámica organizativa del movimiento indígena en los contextos locales y en el campo de juego de la gestión local, se expresan también en la construcción de un discurso de verdad, que recurriendo a elementos simbólicos presentes en la cultura local, contribuyen a generar cierta normatividad en las prácticas sociales, orientadas a legitimar a la organización y a fortalecer el sentido de pertenencia de sus asociados. Las identidades construidas potencian la realización de acciones colectivas y motivan la participación de los asociados en las mismas, lo cual a su vez refuerza estas identidades.

Se trata de un “juego” en el que

“los jugadores pueden jugar para incrementar o conservar su capital, sus fichas, conforme a las reglas tácticas del juego y a las necesidades de reproducción tanto del juego como de las apuestas. Sin embargo, también pueden intentar transformar, en parte o en su totalidad, las reglas inmanentes del juego” (Boudieu y Wacquant, 1995: 66).

En el caso de la construcción del poder local en Cotopaxi se está intentando modificar las reglas del juego, a través del proceso participativo. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario recurrir a las viejas reglas para no perder las apuestas.

El desafío de la institucionalidad

El proceso participativo de Cotopaxi ha venido acompañado de la creación de nuevas institucionalidades: El Comité de Gestión, el Comité de Seguimiento a los acuerdos de la convención ambiental y las mesas de trabajo ambientales. Pese a los esfuerzos realizados por varias instituciones y actores sociales, estos espacios aún no cuentan con un nivel de institucionalización que les permita generar un dinamismo propio.

El Comité de Gestión fue creado a partir del proceso de Planificación participativa y ha tenido distintos niveles de dinamismo de acuerdo a las coyunturas que ha vivido. Al inicio de la gestión era el espacio en el que se tomaban las decisiones fundamentales relacionadas con el nuevo proceso de gestión. Sin embargo, conforme avanzó el proceso de planificación participativa, el equipo externo de la provincia asumió para sí mismo este

rol, convocando a reuniones “ñukan-chikpura” (entre nosotros) cuando se trataba de cuestionar aspectos relacionados con las orientaciones políticas del proceso. Cabe señalar que el equipo de apoyo externo en un inicio estaba conformado por líderes indígenas reconocidos en la provincia y que son parte del MICC. Su fuerte filiación con el movimiento daba lugar a que en momentos difíciles, el equipo de apoyo externo asumiera en coordinación con el MICC un rol político, muy necesario, para orientar la gestión provincial, dejando de lado el rol del Comité de Gestión, que al ser un espacio más plural generaba desconfianza por parte del movimiento. Bajo el lema de “la ropa sucia se lava en casa” el Comité de Gestión fue perdiendo el rol de orientador del proceso.

El equipo de apoyo externo generó resistencias al interior del cuerpo de Consejeros y el Plan de Desarrollo pasó a ser visto como lo que hacen “los indios”.

Una vez concluido el proceso de planificación participativa el equipo externo se desestructuró porque sus integrantes por mandato del movimiento pasaron a ocupar dignidades de gran importancia para la organización (una diputación provincial y la dirección nacional de un proyecto financiado por la Unión Europea).

Se conformó un nuevo equipo de apoyo externo que ha cumplido un rol técnico importante pero no ha sido capaz de dar continuidad al rol político desempeñado por el equipo externo que le precedió. Sin embargo, goza de mayor reconocimiento por parte de la institucionalidad del Consejo Provincial (Consejeros y funcionarios) y ha logrado incorporar institucionalmente al Consejo Provincial en el proceso de difusión e implementación

del Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi.

A partir del segundo momento del proceso (la implementación del Plan) el Comité de Gestión ha jugado un rol operativo y ha logrado reunirse periódicamente. Sin embargo, la participación de los Consejeros de oposición se ha perdido junto con el peso político que tenía inicialmente esta instancia.

Durante el proceso preparatorio de la Convención Ambiental se constituyeron mesas de trabajo por entradas temáticas (legislación ambiental, agua, suelos, páramos y calidad ambiental). La gran mayoría de estas mesas están conformadas primordialmente por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, excepto la mesa de páramos en la que la participación del MICC ha sido decisiva. Los equipos de trabajo se constituyeron con altas expectativas sobre la posibilidad de generar políticas ambientales para la provincia, expectativas que tuvieron su punto máximo en marzo del 2003, cuando se realiza la Convención Ambiental. Pese a los desniveles existentes entre las distintas mesas, en todas las áreas temáticas se generaron acuerdos que es necesario llevarlos a la práctica.

Una vez realizada la convención ambiental se conformó un comité de seguimiento a los acuerdos cuyo nivel de funcionamiento todavía es incipiente. El dinamismo de las mesas de trabajo a futuro dependerá en gran medida del rol que pueda cumplir el Comité de seguimiento a los acuerdos de la Convención Ambiental. El trabajo del Comité en el último año se ha centrado en la promulgación de la ordenanza ambiental de Cotopaxi que recoge los planteamientos de la Convención.

Pese a que el proceso de la Convención fue aprobado por unanimidad en el seno del Consejo Provincial, ha habido dificultades para que el Consejo apruebe la ordenanza ambiental. El principal argumento por parte de los Consejeros es que requieren asesoramiento, pues muchos de los temas planteados por la ordenanza les son ajenos; lo que ha supuesto un fuerte proceso de capacitación al cuerpo colegiado sobre los temas ambientales.

Otra dificultad vivida por el Comité de Seguimiento a los acuerdos de la Convención Ambiental es la diversidad de expectativas y planteamientos de sus miembros. Al interior del Comité existen posiciones que instrumentalizan el proceso, en términos de verlo como un campo para la generación de recursos hacia las instituciones miembros. Estos planteamientos conviven con visiones más procesuales que ven a la Convención como la posibilidad de plasmar el modelo participativo en un área concreta y generalmente olvidada en la gestión de los gobiernos seccionales.

En relación al proceso de reestructuración interna del Consejo Provincial se ha avanzado poco. Se ha logrado realizar un trabajo articulado entre el Equipo de Apoyo Externo, el Prefecto y los funcionarios provinciales. A nivel interno se ha asumido el Plan de Desarrollo y se ha logrado difundirlo. No obstante, a nivel directivo (Consejeros provinciales) todavía existen resistencias para plantear un desarrollo articulado e integral para la provincia. Muestra de ello es la forma de configurar el distributivo de obras, en la que los planteamientos del Plan son secundarios.

En varios momentos se discutió la posibilidad de crear una instancia

amplia y permanente de participación ciudadana a escala provincial. De hecho el Prefecto convocó a una Asamblea Provincial en medio de la coyuntura de posible privatización de las Empresas Eléctricas y la Asamblea se pronunció en contra de la privatización de ELEPCO (Empresa Eléctrica de Cotopaxi). Sin embargo, esta Asamblea no fue pensada como un espacio permanente de participación ciudadana.

Frente a los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados por el Presidente en la Sesión Solemne por el aniversario de la provincialización de Cotopaxi en abril del 2003, el Prefecto provincial convoca a fines del 2003 nuevamente a la Asamblea Provincial. Esta Asamblea está conformada por todas las autoridades actuales y anteriores de la provincia, de acuerdo a la Ley de Régimen Provincial. Se trata de un espacio reivindicativo tradicional. En este espacio el Prefecto logra una gama de alianzas con sectores políticos, empresariales y sociales de lo más diversos. En febrero del 2004 se inicia el Paro de Cotopaxi junto a las movilizaciones indígenas de todo el país que cuestionaban las políticas del gobierno nacional.

Más allá de las reivindicaciones coyunturales y de las exitosas alianzas logradas por el Prefecto, en Cotopaxi no ha sido posible impulsar un espacio permanente de participación ciudadana que oriente la gestión provincial. Desde el MICC existe un recelo muy fuerte a abrir este espacio debido

a los temores que suscitan una posible pérdida de poder del MICC como espacio privilegiado de interlocución con el gobierno provincial.

Frente a la imposibilidad de contar con un espacio más amplio de participación ciudadana, el MICC ha asumido el rol de representación de los sectores sociales de la provincia, generando dificultades semejantes a las vividas por la indiferenciación del espacio político del organizativo. Quizá una de los mayores problemas en este sentido es la pérdida de autonomía del espacio organizativo. De hecho las autoridades electas inciden fuertemente en la toma de decisiones del movimiento e incluso ejercen la vocería del mismo. En el último Congreso del MICC, realizado en Sigchos en mayo del 2003, la injerencia de las autoridades en la conformación del nuevo Consejo de Gobierno fue evidente. Se trataba de conformar un Consejo de Gobierno a la medida de las autoridades, lo que ha debilitado enormemente las relaciones del MICC con las organizaciones nacionales y con sus propias bases. Si a ello se suma la arremetida del gobierno nacional de desarticular a las organizaciones indígenas a través de políticas clientelares, el panorama es desalentador. Sin embargo, el capital acumulado por el movimiento y sus reservas morales y programáticas están haciendo lo suyo para frenar estos intentos, como se ha evidenciado en las movilizaciones indígenas y sociales del mes de febrero de 2003.

El desafío de la eficacia

En 1990, en las elecciones para el Congreso Brasileño, un obrero de Paraná al llegar a la urna, devolvió su papeleta electoral y dijo: "Renuncio a este supuesto derecho que es incapaz de liberarme del hambre"

(CITADO POR PETRAS, 1998: 14, DE MICHAEL STOTT, 1990: 8A).

Al analizar las motivaciones de las poblaciones locales para involucrarse en procesos participativos, una de las constataciones que se evidencian es la necesidad de que estos procesos produzcan resultados concretos que repercutan en el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos. Como lo señaló un compañero del MICC en mayo del 2002, al realizar una evaluación del proceso de planificación participativa en la provincia: *"Todo esto es muy interesante compañeros, pero de la democracia no se come"*.

Sin embargo, es necesario indagar qué implica el mejoramiento de las condiciones de vida. Desde una visión integral, en ello confluyen cambios en las condiciones materiales de existencia con aquellos referidos al plano superestructural. "Desde esta perspectiva, los procesos de radicalización de la democracia, en sí mismos, generan cambios en las condiciones de vida, en el ámbito de la participación política y la construcción de sujetos sociales" (Cfr., Larrea, 2003: 5).

"... la institucionalidad democrática brinda condiciones favorables para facilitar procesos de cambio social y mejoramiento de las condiciones de vida, como lo comprueban Amartya Sen y Jean Dreze (1989) en su estudio sobre el hambre y la acción pública. Ellos hacen un análisis de las

principales hambrunas que ha sufrido la humanidad y llegan a la conclusión de que en ningún país con régimen democrático se ha experimentado hambrunas. De cierta manera y bajo ciertas condiciones, la democracia, al reconocer y estar constituida por el conflicto político, bloquea la posibilidad de que las diferencias de clase se traduzcan en desigualdades en la toma de decisiones, posibilitando una redistribución del poder social. Es necesario analizar cuáles son las características del sistema político que permiten llegar a estos fines y qué tipo de cambios requiere el régimen democrático para posibilitar la construcción de sujetos sociales generadores de cambios sociales significativos" (Larrea, 2003: 5).

En Cotopaxi, el solo hecho de que los indígenas hayan accedido al gobierno local ha supuesto una serie de cambios en las relaciones sociales y de poder dentro de la provincia. Un espacio, como el Consejo Provincial, que anteriormente estaba vedado a las organizaciones, se ha transformado en un "gobierno de puertas abiertas a la población". Esto se refleja también físicamente. Antes del 2000, existía una puerta siempre cerrada, que impedía la entrada de las personas al despacho de los Consejeros y del Prefecto. Lo primero que hizo la nueva autoridad indígena fue eliminar esta puerta. Ahora el Consejo Provincial está siempre lleno de campesinos, indígenas y pobladores. Frente a esta decisión, no faltaron las reacciones de la oposición que argumentaba que el Prefecto está transformando al Consejo Provincial en Casa Campesina.

No obstante, si analizamos el desafío de la eficacia es necesario indagar hasta qué punto la nueva gestión provincial ha propiciado la generación de relaciones de mayor justicia, y equidad. En este sentido es clave preguntarse ¿A quién sirve el nuevo gobierno

local?, ¿Cuáles son sus apuestas fundamentales?, ¿Ha logrado convertirse en un articulador del desarrollo local?

Uno de los instrumentos de política que permite contestar de alguna manera estas preguntas es el distributivo de obras o proforma presupuestaria. La falta de experiencia de las nuevas autoridades en la gestión pública dio como consecuencia que el primer distributivo (para el año 2001) se realizara siguiendo la tradición. Los Consejeros antiguos lideraron el proceso dando poco margen a las nuevas autoridades de incidir en él. La forma tradicional de establecer el presupuesto era en base a “cuotas políticas”, cada Consejero hacía sus “pedidos” que eran plasmados en el distributivo, sin mayor discusión sobre la pertinencia e impacto de las obras planteadas, menos aún sobre la necesidad de apoyar propuestas articuladas de desarrollo provincial, desde una perspectiva estratégica de establecer prioridades y plasmarlas en programas y proyectos.

A fines del año 2001 se impulsa la propuesta de presupuestación participativa para el distributivo del 2002, si bien aún no se puede hablar de la construcción de un programa con prioridades claramente establecidas, existe un intento de generar mayor equidad en las asignaciones presupuestarias partiendo de una perspectiva territorial. Se realiza un cuadro de asignaciones por cantones considerando su población, sus niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. En base a los primeros resultados del Plan de Desarrollo, se decide priorizar obras de vialidad para los cantones de la zona subtropical y obras de riego para los cantones del área andina.

Para el distributivo del 2003 se repite el ejercicio incorporando la presupuestación participativa en dos cantones (Saquisilí y Sigchos). Pese a los esfuerzos de incorporar a la población en las decisiones presupuestarias, los ejercicios realizados son aún incipientes. No se cuenta con las capacidades necesarias para llevar adelante un proceso de reflexión más profundo sobre las prioridades parroquiales y cantonales desde una perspectiva más integral del desarrollo. Existe la tendencia de realizar el mayor número de obras, aunque éstas sean poco significativas para el desarrollo local. El criterio que impera para medir la eficacia es el número de obras, sin considerar su pertinencia, ni su impacto.

Las grandes obras de vialidad y riego han sido objeto de negociación con el gobierno nacional y han quedado postergadas, pese a la fuerte presión ejercida desde la provincia hacia los ámbitos nacionales. De ahí que no se pueda hablar de impactos significativos en términos del mejoramiento de la calidad de vida de la población de Cotopaxi.

A nivel de generación de políticas públicas, los esfuerzos más significativos se han centrado en el tema ambiental, con los límites ya señalados en los acápite anteriores.

Las inversiones realizadas por parte del Consejo Provincial para impulsar los procesos de participación han sido mínimas, gran parte de estos procesos han sido financiados por instituciones externas debido por un lado a los obstáculos jurídicos existentes en el país, (la legislación vigente no contempla este tipo de inversiones) y por otro a la tendencia a desvalorizar los posibles impactos de los procesos participativos bajo el discurso de que

es más importante realizar inversiones en proyectos concretos que dirigirlos hacia procesos en los que no se tiene asegurado un resultado tangible. La tensión entre las necesidades inmediatas y el invertir recursos en procesos de largo plazo se convierte de esta manera en gravitante para la formulación de estrategias democratizadoras de desarrollo local.

De hecho, la participación implica un proceso de largo plazo que supone la construcción de sujetos sociales capaces de generar propuestas que puedan tener significado en el plano de lo concreto y que apunten a la construc-

ción de una base programática y política de construcción de futuro.

En este marco, es necesario plantearse una estrategia de doble entrada, teniendo en cuenta el largo y el corto plazo. Es decir, generar paralelamente respuestas concretas a necesidades específicas, recoger las experiencias emblemáticas para que puedan servir de base para la implementación de políticas públicas de largo aliento, y trabajar con un horizonte de largo plazo que supone la construcción de sujetos sociales y de un proyecto político de carácter liberador.



CONCLUSIONES

1. El proceso de democratización en la provincia de Cotopaxi tiene sus antecedentes en las luchas del movimiento indígena provincial y nacional. No se trata de un proceso que inicia en el 2000, sino que se nutre y es la expresión de la irrupción del movimiento indígena dentro de los escenarios nacional y locales como sujetos sociales que buscan constituirse en sujetos políticos. Las experiencias de gestión local en las prácticas concretas de los distintos procesos locales constituyen una de las vertientes a través de las cuales, el movimiento indígena apuesta a la construcción de planteamientos y estrategias programáticas en su afán de constituirse como sujeto político. Los desafíos, avances y limitaciones del proceso en Cotopaxi deben ser analizados en este marco.

2. El tejido social existente en la provincia, que se expresa en la fuerza del MICC, ha sido el puntal para la generación de una nueva propuesta de gestión provincial. Sin embargo, la relación entre este capital acumulado y los efectos concretos que puede generar hacia procesos de cambio social y mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos no es unidireccional, ni directo.

El mismo proceso de gestión provincial alternativa es un campo de lucha no solo hacia fuera, sino también hacia el interior del propio movimiento. En esta lucha permanente, el movimiento va construyendo sus

propuestas, genera aprendizajes, avanza y retrocede, genera innovaciones y reproduce prácticas tradicionales, promueve alternativas de cambio y se repliega en prácticas que sirven a los intereses dominantes, participa en la institucionalidad pública e impulsa procesos de resistencia en un constante flujo y reflujo.

En el Movimiento Indígena de Cotopaxi se condensan, pues, simultáneamente la estrategia política de ingreso al sistema político y la estrategia opuesta de deslegitimación del mismo régimen. Es necesario recordar que en enero del 2000, el movimiento indígena llamó a desconocer a las autoridades electas y a destituir los tres poderes del estado. Participación electoral y movilización social. Ampliación de los cauces democráticos de la participación electoral y agudización del ataque frontal a un régimen desprestigiado. Crítica radical a la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de las reglas de juego del régimen institucional. Integrarse y contestar son elementos de la misma estrategia y de la misma comprensión de la situación política.

3. Las posibilidades de construcción de sujetos sociales y políticos son sumamente complejas en un contexto marcado por condiciones estructurales adversas como la exacerbada concentración de poder económico y político. La escala local ofrece posibilidades interesantes de construcción

de sujetos y de generación de propuestas históricamente coherentes de cambio social. Sin embargo, también corre el riesgo de confinar a estas actorías emergentes a la propia escala local, reduciendo su campo de acción y limitando sus posibilidades de cambio, de reflexión crítica y autocrítica hacia contextos mayores. En el caso de Cotopaxi este riesgo se agudiza por la preminencia de una visión microlocal y absolutamente autocentrada por parte del MICC. Esta visión ha dificultado la generación de articulaciones coherentes con la escala nacional.

A nivel interno, las dificultades arriba señaladas, no han permitido la construcción de nuevas actorías sociales y políticas en la provincia. El confinamiento de la palabra, la representación y la dinámica provincial por parte del MICC refleja una cultura política particular fruto de un proceso de exclusión de varios siglos. De ahí que las posibilidades de generación de alianzas dentro de la provincia sean muy bajas. El MICC reclama para sí mismo toda representatividad social en la provincia. De hecho es el sujeto social de mayor representación en Cotopaxi, sin embargo, su palabra no necesariamente expresa la voz de otras poblaciones también relegadas y excluidas. Más allá de la adscripción étnica, es necesario trabajar en la construcción de un programa político contrahegemónico aglutinante en el que confluyan los diversos sectores subalternos; plantear una estrategia para incorporar y movilizar a los actores potencialmente afines, superando el temor por parte del movimiento indígena a perder el liderazgo.

Sin embargo, en el momento de acceder al gobierno provincial, el MICC se ve abogado, a través de su Prefecto a impulsar un discurso inclusivo. Es

común escuchar al Prefecto que él gobierna para toda la población de la provincia y no solamente para los indígenas. Esta afirmación está signada por el conflicto étnico de larga data en el país. Cabría preguntarse si un gobierno supuestamente inscrito en el proceso de construcción contrahegemónica puede gobernar para todos/as. El discurso inclusivo no toma en cuenta los conflictos sociales y la lucha de clases, lo que también se refleja en una gestión provincial que no ha logrado invertir las prioridades, afirmando los intereses de las clases populares y poniendo al Estado al servicio de aquellas. El acceso indígena al gobierno provincial da cuenta de un cambio en las relaciones de poder dentro de la provincia, pero aún no se puede hablar de un cambio en las estructuras de poder.

4. Si bien las posibilidades de generar alianzas y construir nuevas actorías sociales en la provincia han sido débiles, para el MICC la participación directa en la toma de decisiones sobre la gestión pública ha permitido configurar un “discurso de verdad” gracias al cual las organizaciones indígenas y campesinas han incursionado en la disputa del poder. El discurso y las prácticas de participación directa pasan a ser de este modo un capital con el que se cuenta en la confrontación política.

En el marco de una concepción de la sociedad como un espacio de confrontación de intereses, y por consiguiente de lucha de poder marcada por el conflicto permanente, la democracia participativa, tiene el mérito de ofrecer posibilidades para la visibilización de estos conflictos y permitir que a través de la deliberación y la confrontación entre contrarios se genere un proceso de toma de decisiones a favor de las grandes mayorías.

El hecho de que representantes del movimiento sean autoridades de toda la provincia, en un contexto de alta discriminación étnica, ha permitido no solo evidenciar la presencia de una población indígena y campesina significativa en la provincia, sino

también su peso político, su capacidad para expresar una voz, otrora no escuchada, unos planteamientos distintos y una cultura también diferente. Cultura que empieza a ser visibilizada hacia muchos sectores que pretendieron desconocerla por siglos.



BIBLIOGRAFÍA

Amadeo, Javier y Morresi, Sergio 2003.

"Republicanism y marxismo", Borón, Atilio (Comp.), Filosofía Política Contemporánea: Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos Aires: CLACSO.

Bebbington, Anthony, y Perrault, Thomas, 2001.

"Vidas rurales y acceso a recursos naturales: El caso de Guamote", en: Bebbington, Anthony y Torres, Víctor Hugo (ed.), Capital social en los Andes, Quito: Abya Yala, Comunidec.

Bonilla, Adrián, s/f.

"Ecuador". En C. Arnson. The crisis of democratic governance in the Andes. Latin American Program.

Bonilla, Ángel y otros, 2003.

Gestión Social de los Recursos Naturales, Módulo 5 del Eje de formación Desarrollo Local con énfasis en la gestión de los recursos Naturales, Quito: CAMAREN - IEE (en imprenta).

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc, 1995.

Respuestas por una Antropología Reflexiva, Editorial Grijalbo, México.

CONAIE-RIAD-IULA, 1995

Descentralización, gobiernos locales y participación de las organizaciones campesinas e indígenas, Quito: RIAD.

Dávila, Mónica y otros, 2003.

"Desarrollo local, democracia y construcción de sujetos sociales", Quito: monografía presentada en el curso de especialización superior Desarrollo y Gestión Local, UASB, Centro de Investigaciones CIUDAD, mimeo.

Eguiguren, Amparo, 1995.

La Teoría de la Práctica Aplicada a la Interpretación del Desarrollo Rural. El Caso de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, FLACSO, Tesis de Maestría, 1995.

Foucault, Michel, 1979.

Microfísica del Poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid.

Gret, Marion e Ives Sintomer, 2002.

Porto Alegre: Los desafíos de la democracia participativa, Quito: Abya Yala, Centro de Investigaciones CIUDAD.

Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi, 2002.

Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi, Cotopaxi, HCPC, MICC, APN, IEE, CONAIE, Cruz Roja Suiza, FÚNDEAL, Heifer Ecuador, Plan Internacional, PRODEPINE, SWISSAID.

Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi, 2003.

Cotopaxi en Minga, Cotopaxi, HCPC, APN, CONCOPE, Heifer

Ecuador, IEE, Instituto Superior Aeronáutico, Ministerio del Ambiente, Plan Internacional, SWISSAID.

Larrea, Ana María y Larrea, Fernando, 1999.

“Participación ciudadana, relaciones interétnicas y construcción del poder local en Saquisilí”, en: Hidalgo, Mauro y otros, Ciudadanías emergentes: Experiencias democráticas de desarrollo local, Quito: GDDL, RIAD, ABYA YALA, COMUNIDEC, TERRANUEVA, IEE, APN.

Larrea, Ana María y otros, 2000.

“Desarrollo local: Experiencias, tendencias y actores”, Quito, mimeo.

Larrea, Ana María, 2002.

“Gestión local alternativa en el Ecuador: Algunos elementos para un balance necesario”, en: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, Memorias del Primer Congreso, Baños, 2001, Latacunga: MUUPP – Cotopaxi, MICC, IEE, APN.

Larrea, Ana María, 2003.

“Democracia, participación y nuevas institucionalidades para el desarrollo local”, en Bonilla, Ángel y otros, Gestión Social de los Recursos Naturales, Módulo 5 del Eje de formación Desarrollo Local con énfasis en la gestión de los recursos Naturales, Quito: CAMAREN – IEE (en imprenta).

Martínez, Luciano, 1996.

“Organizaciones de Segundo Grado, Capital Social y Desarrollo Sostenible”, en ICONOS No. 2, FLACSO, Quito.

Ortiz Crespo, Santiago, 1998.

Participación Ciudadana. Análisis y propuestas para la reforma del Estado, Quito: ACJ / Universidad Andina Simón Bolívar.

Petras, James, 1998.

América Latina: Pobreza de la democracia y democracia de la pobreza, Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Ramón, Galo, 2003.

“Estado, región y localidades en el Ecuador (1808 – 2001)” en Báez, Ospina y Ramón, Historia del Espacio en el Ecuador, Módulo 2 del Eje de formación Desarrollo Local con énfasis en la gestión de los recursos Naturales, Quito: CAMAREN – IEE (en imprenta).

Sen, Amartya y Dreze, Jean, 1989.

Hunger and Public Action, Oxford: Clarendon Press.

Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), Versión 3.0.

Touraine, Alain 2000.

¿Qué es la democracia?, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Verdesoto Custode, Luis, 2000.

El control social de la gestión pública, Quito: CEPLAES, Abya-Yala.

Villavicencio, Susana, 2003.

“La (im) posible república”. En Borón, Atilio (Comp.), Filosofía Política Contemporánea: Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos Aires: CLACSO.



Este libro se imprimió el mes de octubre
de 2007 en los talleres gráficos de
Imprimax, Ecuador.



EL CONSORCIO CAMAREN

Es un sistema de capacitación para el manejo de los recursos naturales renovables, ejecutado a través de un consorcio de entidades públicas y privadas.

LA CAPACITACIÓN

La capacitación CAMAREN se base en un proceso que parte de las experiencias y la práctica, reúne enfoques teóricos, nuevas propuestas metodológicas, tecnológicas y herramientas de gestión. Combina los conocimientos científicos y prácticas tradicionales, profesionales e institucionales y aspira a que las nuevas propuestas se inserten en el espacio institucional, para asegurar la sostenibilidad de la capacitación. Este proceso parte de una construcción colectiva, enriquecida por el proceso metodológico de validación, ejecución y retroalimentación.

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN

El Consorcio se propone contribuir al manejo sostenible y equitativo de los recursos naturales renovables en el país, en términos sociales, económicos, teóricos y ecológicos.

El objetivo central es consolidar un sistema interinstitucional de capacitación incluyen la construcción colectiva, el diálogo de saberes y la búsqueda de equidad.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO CAMAREN

- Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF)
- Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (Cecca)
- Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (Cesa)
- Centro de Reconversión del Austro (Crea)
- Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (Care)
- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (Fepp)
- Fundación para el Desarrollo y la Creación Productiva (Fundes)
- Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)
- Ministerio del Ambiente
- Red Agroforestal Ecuatoriana (Rafe)
- Universidad de Cuenca
- Universidad Nacional de Loja